



Suele decirse que la credibilidad de un emprendimiento editorial reside, a menudo, en la publicación de un segundo número más que en el primero. Son los segundos números que dan prueba, aunque no definitiva, de las posibilidades de la continuidad y seriedad de un proyecto. Es por eso que para nosotros es un motivo de satisfacción presentar esta nueva edición del Observatorio Social de América Latina; como respuesta al desafío que implica iniciar y sostener un proyecto centrado en el estudio y análisis de los movimientos sociales y la conflictividad social, en América Latina y el Caribe.

La entusiasta acogida que tuvo, tanto en el seno de la comunidad académica de CLACSO como de numerosas organizaciones y movimientos sociales, el primer número del Observatorio Social de América Latina (junio 2000) nos alienta en la tarea de consolidación y ampliación de esta experiencia que intenta llenar un llamativo vacío en el campo de las ciencias sociales latinoamericanas. El entusiasmo generado por la creación del OSAL sirvió como estímulo en Argentina para la realización de un taller en el cual participaron equipos de investigación de diversas instituciones dedicados al análisis de la conflictividad laboral y social. Esperamos que esta actividad, organizada en Argentina en el mes de agosto por el OSAL y la Asociación Argentina de Estudios del Trabajo, sirva como estímulo en otros países de la región a fomentar el diálogo y el debate científico entre grupos de investigación y actores sociales involucrados en los conflictos sociales.

Este segundo número que el lector tiene entre sus manos reproduce el ordenamiento temático y las secciones del primero. La sección de cronología de los conflictos se amplía, cubriendo ahora 18 países (contra 10 en el primer número). Esta mayor cobertura regional es posible por un lado gracias a la consolidación y ampliación del equipo que, desde la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, realiza el relevamiento de la conflictividad, y por otro a la entusiasta respuesta de algunos centros miembros de CLACSO que han aceptado el desafío de sumarse a esta tarea que deseamos que sea lo más colectiva posible. La presencia de nuevos países en la cronología permite tener una visión más amplia de los alcances y la profundidad de los antagonismos sociales en la región. En la medida que la posibilidad de diálogo regional supone, entre otras cosas, trascender las barreras idiomáticas el presente número del OSAL sigue el criterio general adoptado por CLACSO de publicar en español y portugués.

La publicación de la totalidad del primer número del OSAL en la página web de CLACSO (<http://www.clacso.org/osal1/home.html>) es un primer paso en la creación de una página web del OSAL que esperamos lanzar el próximo año. En la misma ya pueden consultarse versiones ampliadas de las cronologías del presente período y esperamos poder sumar foros de debate, textos en línea y vínculos con organizaciones sociales, equipos de investigación e instituciones regionales e internacionales. En el marco de la difusión de la temática que nos ocupa y con el objetivo de promover el diálogo entre académicos y representantes de organizaciones y movimientos sociales, el OSAL está participando en la organización del Foro Social Mundial que tendrá lugar en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, entre el 25 y 30 de enero del 2001, en contrapunto al Foro Económico Mundial que se realiza anualmente en Davos, Suiza. Dicho encuentro será una inestimable ocasión para el encuentro de aquellas corrientes y organizaciones sociales que hoy padecen las consecuencias del impacto de la mundialización capitalista y que pugnan por hallar una alternativa a la crisis actual.

Por último no podemos dejar de hacer referencia en esta presentación a dos preocupantes hechos de la coyuntura latinoamericana. El anuncio del lanzamiento del Plan Colombia por un lado y el proceso de dolarización de la economía ecuatoriana, por el otro, ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las democracias latinoamericanas sometidas a una marcha forzada hacia la economía de mercado y a procesos de intervención extranjera en la región que son llevados adelante sin ninguna consulta democrática frente a decisiones que pueden hipotecar en el futuro inmediato la vida política del continente. El caso específico de Colombia y la ayuda económica norteamericana nos alertan sobre el peligro de reeditar en América Latina las nefastas experiencias de intervenciones militares en décadas pasadas. La resolución pacífica del conflicto colombiano requiere de una desmilitarización de la vida política, del juicio a quienes perpetraron las violaciones a los derechos humanos y una ampliación de los espacios democráticos de participación y debate de la sociedad, condición indispensable para revertir el sesgo regresivo que en lo económico-social supone la aplicación del recetario neoliberal.

Estas tareas nos convocan a reforzar las convergencias regionales en la búsqueda de proyectos democratizadores que permitan formular en el terreno del pensamiento y la práctica social una alternativa a esta situación. Esperamos, desde la tarea específica del OSAL, realizar un aporte en esta dirección.

Análisis de casos

Bolivia y Brasil



En este número presentamos la reflexión de diferentes investigadores sociales de Bolivia sobre uno de los conflictos más relevantes acontecidos en la región a lo largo de la primera mitad de este año: la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba. El segundo dossier está consagrado a una reflexión sobre la cuestión agraria y los conflictos rurales que tienen como actor principal en Brasil al Movimiento de los Sin Tierra (MST).

El artículo de Luis Tapia abre el dossier boliviano explorando las raíces de la crisis política de abril así como lo que ésta puso de manifiesto respecto del sistema de representación política y las nuevas formas de organización social. Para el autor la protesta cochabambina pareciera señalar el pasaje a una nueva fase de la conflictividad social en Bolivia, así como un punto de quiebre en la “cadena de derrotas populares” que significó la implementación de las políticas neoliberales en el pasado reciente. A continuación, Humberto Vargas y Tomas Kruse nos presentan una descripción de los elementos y actores involucrados en la “Guerra del Agua” en Cochabamba y una rica crónica de los sucesos desde sus inicios en enero hasta su culminación en las protestas de abril. Sus conclusiones señalan, entre otras cuestiones, que el carácter triunfante de dicho conflicto debe ser leído en relación a la capacidad del movimiento para relegitimar el espacio y la propiedad pública y colectiva frente a las propuestas privatizadoras. Los anteriores diagnósticos contrastan con la visión que nos ofrece Roberto Laserna quien se pregunta sobre el real carácter democratizador de la protesta y pone en duda la amplitud de sus logros, en la medida que, según el autor, la resolución del problema del agua quedó relegada una vez más. Por último Carlos Crespo analiza la experiencia de organización social que significó la aparición de la Coordinadora del Agua, enfatizando los puntos de ruptura y continuidad que dicha experiencia guarda respecto a la tradición insurreccionalista de la “forma COB”.

En el caso de Brasil Angela Mendes de Almeida nos introduce en un análisis histórico estructural de la cuestión agraria en ese país, señalando qué las políticas neoliberales para el agro brasileiro se entroncan con la antigua existencia de la propiedad latifundiaria. A continuación Bernardo Mançano Fernandes centra su reflexión en la historia del MST desde su constitución hacia mediados de la década del ochenta analizando específicamente el sentido, la dimensión y las consecuencias de la política de asentamientos que juega un rol preponderante en la acción de este movimiento. El artículo de Leonilde Medeiros analiza la génesis de los conflictos rurales de las últimas décadas haciendo un contrapunto permanente entre la evolución de la estructura agraria, las políticas públicas para el agro brasileiro y la respuesta y evolución de los actores ligados a esta problemática, en particular el movimiento campesino. Finalmente Attico Inácio Chassot presenta las particularidades de la red educativa que constituye una de las iniciativas más novedosas y renovadoras de la política de asentamientos que promueve el MST y que ha obtenido, como lo señala el autor, un gran reconocimiento a nivel internacional.

Como ya lo hiciéramos en el número anterior incluimos, a continuación de esta sección, una serie de documentos elaborados por la Coordinadora del Agua de Cochabamba que dan cuenta de los principales hitos del conflicto vivido entre enero y abril en dicha ciudad. También presentamos sendos documentos elaborados por el MST, en particular la declaración final del IV Congreso de dicha organización realizado a inicios de agosto del presente año. Lamentablemente, por un problema de espacio, no ha sido posible publicar la totalidad de los documentos que disponemos. Los mismos pueden ser consultados en la página Internet del OSAL (<http://www.clacso.org/osal1/home.html>).

La crisis política de Abril

Por Luis Tapia*

Una crisis política es un momento de condensación y revelación. Es un momento de síntesis negativa de los procesos políticos, que revela, justamente en este momento de fusión problemática, que estos se estaban desarrollando de manera desarticulada. En una crisis se presentan y experimentan con fuerza los problemas que la sociedad estaba viviendo, a la vez que se evidencia el carácter de algunas ilusiones, sobre todo en referencia a los políticos en el gobierno.

En abril el Estado boliviano enfrentó una crisis producida por varios movimientos sociales que le plantearon sus demandas y manifestaron su rechazo a algunas de sus políticas económicas. Estas protestas se produjeron contra los efectos de la implementación de la política económica neoliberal y en dos núcleos territoriales, Cochabamba y el Altiplano, fueron resultado de una acumulación organizativa previa. Revisemos primero la dimensión de los efectos del neoliberalismo y luego la de la organización y recomposición de la sociedad civil.

En abril convergen por un lado la “Guerra del Agua” en Cochabamba, dirigida a expulsar a una empresa transnacional (Aguas del Tunari, un consorcio creado por capitales de EEUU, Italia, España y Bolivia) y por otro los bloqueos de las comunidades campesinas e indígenas en el Altiplano paaceño. Ambas protestas se enfrentan al proyecto de la ley del agua y a ciertos aspectos de la ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) que regula la propiedad y el mercado de tierras. Contra estas protestas el gobierno decretó el estado de sitio y simultáneamente enfrentó una huelga en el seno de la propia policía encargada de garantizarlo.

En el origen de los problemas que generaron la crisis se encontraba el proceso de creciente privatización y mercantilización de los servicios públicos y de las tierras. La privatización de los servicios públicos se ha dado generalmente a través del traspaso de empresas públicas a empresas transnacionales, a través del llamado proceso de “capitali-



zación”. Como consecuencia del mismo el 50% de las empresas públicas privatizadas pasa bajo el control y propiedad de las empresas del consorcio transnacional, mientras que el otro 50% queda como propiedad de los ciudadanos bolivianos representados a través de los Agentes de Fondos de Pensiones (AFPs). Sin embargo la dirección de las empresas privatizadas queda bajo control del capital extranjero ya que éste detenta la mayoría en los consejos directivos porque incluso los “representantes” de los ciudadanos bolivianos son elegidos por las AFPs.

La capitalización o privatización se ha hecho bajo el pretexto o justificativo de reducir los costos de los servicios como consecuencia de la mayor eficiencia e inversión que supone el capital privado y transnacional. La población, sin embargo, comenzó a experimentar una paulatina alza de los precios de los mismos. En ese sentido la población trabajadora sufre los efectos de una doble pauperización. Por un lado, una política de constreñimiento del salario y por otro un aumento de los precios de los servicios básicos de la reproducción social. Resulta un movimiento de pinzas del capital sobre la población asalariada.

En un contexto más general la actual fase de transnacionalización de la economía boliviana se caracteriza sobre todo por el traslado y creación de monopolios de los servicios públicos y de la explotación de los recursos naturales, y no por la inversión en transformación y manufactura.

* Director, Maestría de Ciencias Políticas. CIDES-UMSA. La Paz.

Así, lo que desató la última fase de la protesta organizada en Cochabamba, fue un fuerte aumento del servicio del agua para financiar las inversiones de la empresa, sin que esto significara una mejora del servicio. De esta forma la población era la que estaba capitalizando a la empresa transnacional, y no al revés, como el discurso del modelo decía que debería ser. Si la población es la que capitaliza a la empresa transnacional, bien puede prescindir de ella. Sobre esta situación se despliegan y legitiman entonces las tendencias o propuestas de autogestión que se manifiestan en la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (la Coordinadora).

La capitalización y el proyecto de ley del agua que fue criticado y modificado venía a crear monopolios legales del usufructo mercantil del recurso agua en territorios de economía y cultura agraria donde se producía y vivía la articulación y continuidad de naturaleza y vida social en términos de control colectivo y comunitario de los recursos y de sí mismos. Propiciaba entonces la penetración y quiebre de esas totalidades sociales locales y regionales a través del control del recurso agua por parte de capitales privados, desligados del horizonte de reproducción y desarrollo local.

En este sentido el hecho de que el intento de la explotación del nuevo monopolio del agua persiguió no sólo beneficiarse de la mercantilización de los servicios ya existentes sino también obligar a la población a financiar la nueva inversión hizo despertar en ella la indignación, sus potencialidades de resistencia y sobre todo de autoorganización.

La expansión de la autoorganización es algo que se genera y se hace posible por la existencia de núcleos previos de organización, básicamente los comités de regantes y la federación de fabriles. Los primeros se organizan en reacción a la ley de aguas mientras que la segunda vivía una fase ascendente de reorganización de las fuerzas laborales en las nuevas condiciones de fragmentación y desindustrialización producidas por el neoliberalismo y la desregulación político-estatal del trabajo. Este vínculo de cultura organizativa agraria y obrera ha nucleado la protesta y victoria popular en Cochabamba.

En un primer aspecto la crisis de abril condensa las primeras reacciones masivas a los efectos de la implementación del modelo neoliberal. Durante la década de los ochenta hubo movilizaciones y resistencia contra la implementación de las reformas. Sin embargo estas resistencias fueron

vencidas y las protestas aparecieron cada vez más fragmentadas. En la misma década se declararon varios estados de sitio contra estas resistencias, generalmente organizadas en torno a la COB. Pero ésta es la primera vez en que se dicta un estado de sitio que ya no es para implementar a la fuerza alguna reforma desde el Estado, sino como respuesta a las resistencias, negaciones y protestas contra los efectos de estas reformas ya implementadas. El tiempo entre una fase y otra no ha sido muy largo. El último estado de sitio fue en 1995, declarado contra las protestas en rechazo a la capitalización de YPFB. La implementación de estos últimos bloques de reformas neoliberales avanzaba sobre el desgaste y la desarticulación de la protesta social resultado del debilitamiento de la COB, aunque en lo que se refiere a la ley INRA se generó un movimiento campesino y de pueblos originarios para intentar modificar la propuesta de ley.

En este proceso, después de cinco años del último estado de sitio y a cuatro años de la aprobación de la ley INRA, que formó parte también del último bloque de reformas económicas, las protestas de abril inician el ciclo de las revueltas contra los efectos de estas reformas.

“En este proceso, después de cinco años del último estado de sitio y a cuatro años de la aprobación de la ley INRA, que formó parte también del último bloque de reformas económicas, las protestas de abril inician el ciclo de las revueltas contra los efectos de estas reformas.”

En un segundo aspecto la crisis de abril puso en evidencia la existencia de una crisis del sistema de partidos políticos como mecanismo de representación y mediación. En ese parlamento

-aunque en otro período legislativo- se aprobaron las leyes que ahora cuestionaban la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores del Campo Boliviano) en el Altiplano y la Coordinadora en Cochabamba. Al aprobar el estado de sitio el sistema de partidos estaba reconociendo, sin quererlo, su inutilidad y artificialidad en relación a la representación de la población que participaba en los conflictos. En tanto el legislativo ha venido funcionando de facto como un apéndice de legitimación legal de las medidas promovidas por el Poder Ejecutivo, la representación de la sociedad civil ha estado ausente. Al representar los intereses de las elites y burocracias partidarias -que básicamente compiten por cargos públicos, a partir de los recursos que pueden movilizar e invertir en las campañas- los partidos políticos son satélites del ejecutivo, y no canales de representación de la sociedad civil, salvo de aquellos núcleos minoritarios del poder económico.

Frente a la distancia existente entre los partidos políticos y la sociedad civil, la crisis reveló que mientras tanto se habían desarrollado nuevas formas de asociación en Cochabamba -como los comités de regantes- y además una forma

de articulación general -la Coordinadora- que fueron capaces de producir la fusión de abril. Mientras parecía que la sociedad civil estaba cada vez más atomizada, desarticulada, corporativizada; como consecuencia de las políticas neoliberales y de la descomposición de la COB -que era la anterior articuladora de los movimientos sociales- la crisis de abril puso de manifiesto la existencia de nuevos procesos y dinámicas.

Y en ese sentido en abril se vive una crisis política en el Estado porque también se ha producido un cambio o reforma en el seno de la sociedad civil. Uno de los cambios

cional se han levantado las protestas, las resistencias, incluso alguna alternativa como en Cochabamba, donde no sólo se exigía el retiro de la empresa Aguas del Tunari, sino también se formuló una propuesta autogestionaria para la solución del problema del agua en la región.

Estos cambios ponen de manifiesto el pasaje de la larga fase de las luchas sociales mediadas por el nivel nacional de articulación, agregación y organización, que estaba dado por la COB, a una fase de luchas sociales con dirección y organización local. Esta localización de la política que antes estaba relacionada con los Comités Cívicos regio-



más significativos es que la Central Obrera Boliviana (COB) no fue la organizadora de los hechos y del movimiento. La centralidad de la COB ha sido sustituida por la emergencia de polos regionales de organización y acción política, que por su localismo tienen mayor intensidad y fuerza, aunque eso hace que todavía no estén articulados.

La implantación del modelo neoliberal ha fragmentado la nación, la política y la economía, reconfigurándolas en nuevos monopolios. Desde esos fragmentos de sociedad na-

nales, en estos casos ha adquirido más intensidad y fuerza porque la representación regional se ha desplazado de los grupos de notables a representantes y dirigentes populares.

La política local se ha masificado en esas dos regiones del país y, en consecuencia, el liderazgo regional también se ha visto modificado y desplazado también. En el caso de Cochabamba, este desplazamiento se produce de las elites locales, empezando por el alcalde Manfred Reyes Villa, hacia los organizadores y representantes de la Coordinadora.

Por otra parte en el Altiplano el sindicalismo, que es la estructura formal que aparece como responsable de la movilización, expresa y contiene más lo comunitario indígena y sus redes que lo corporativo campesino; ésta es una de las líneas de desplazamiento de la dirección en el seno de la CSUTCB.

Desde esta perspectiva, en abril se pusieron de manifiesto los profundos cambios ocurridos en la organización de la sociedad civil, particularmente en algunas regiones. Estos cambios no resultaban visibles debido a que el sistema de partidos no representa los intereses de la sociedad y, por lo tanto, no registra ni procesa políticamente dichos cambios.

La crisis también muestra que hoy la política está organizada en dos polos, bajo diferentes principios y formas, que sólo se relacionan en coyunturas de crisis, como consecuencia precisamente de la falta e ineficacia de las mediaciones políticas existentes. Encontramos, por un lado, la po-

sino la Coordinadora la que impuso reformas al modelo de las privatizaciones. Parece ser el inicio de una fase o época de reversiones posibles de las políticas neoliberales, a partir de una recomposición de sectores importantes de la sociedad civil, que desarrollan o reavivan nuevas capacidades de organización.

A nivel general también pareciera ser que estamos pasando de la fase de implementación del modelo neoliberal y sus subsecuentes luchas de resistencia, a una fase de luchas y movilizaciones sociales de quiebre y reformas al modelo desde abajo. Una vez que este modelo ha descompuesto la articulación nacional y los lazos sociales y políticos de la vida cotidiana, la política antiliberal pareciera encaminarse en una acción de reconstrucción y rearticulación nacional, de reproducción y producción de sociedad más allá de la producción ampliada y dislocada de los capitales transnacionales.

La “Guerra del Agua” marca así un quiebre en la cadena de derrotas populares. Es la expresión intensa de un proceso de recomposición y cambio de rumbo; de un tránsito del arrinconamiento regresivo a la reorganización y posible expansión progresiva. Abril es un hito y un ejemplo que señala a otras regiones y sujetos sociales que sólo puede confiarse en las propias fuerzas y que si éstas se organizan y liberan es posible cambiar la realidad.



lítica estatal concentrada en el ejecutivo con un legislativo altamente subordinado y con casi nula capacidad de representación; y, por otro lado, una sociedad civil emergente, diversificada regionalmente, que replantea los problemas locales y nacionales a partir de una fuerte localización de la política. Este proceso regenera formas asociativas y cuestiona al modelo de la políticas neoliberales.

Finalmente la victoria popular es el rasgo que diferencia a esta crisis y a este estado de sitio de los anteriores. Esta vez no fue el gobierno el que impuso una de sus reformas

Las victorias de Abril: una historia que aún no concluye

Por Humberto Vargas* y Thomas Kruse**

■ Un Relato

Una amiga cochabambina y sus dos hijos salieron presurosos de La Paz con dirección a Cochabamba. En Parotani se encontraron con decenas de vehículos que no avanzaban debido a un bloqueo. “Agarrada de mis hijos –me contó– empecé valientemente la caminata hacia nuestra *llajta*, engullendo paso a paso la carretera. Los tres estábamos orgullosos de nuestro sacrificio: no cualquiera improvisa una caminata de cincuenta kilómetros (con algún aventón). Al llegar a la ciudad nos sorprendimos de encontrar las calles pobladas de enfrentamientos en los que muchos cochabambinos se oponían a la policía devolviendo los tubos de gas con las manos y a patadas. Vi con sorpresa que señoras de buen traje y peinado meticuloso alcanzaban botellas, bicarbonato y vinagre a la gente en la calle. Comprendí que no habíamos sido los únicos valientes. Entre gases, llanto y preocupación por mis hijos encontré allí algo que creí perdido: *todos participaban de alguna manera, con unidad y solidaridad...* No comprendía mucho de lo que pasaba. Sólo había entendido que la gente pedía a gritos: ‘¡Fuera Aguas del Tunari!’ en medio de los enfrentamientos. En la casa en que nos cobijaron momentáneamente, una señora nos explicó que en Cochabamba se libraba la “Guerra del Agua”. Entonces, en la televisión, luego de anunciarse noticias sobre la violencia en las calles, vimos a un político que decía: ‘Ninguna empresa querrá invertir nunca más en Cochabamba.’”

El relato de esta amiga refleja con fidelidad lo que la población en general y cada uno de los cochabambinos vivieron durante la “Guerra del Agua” del 4 al 11 de abril: valentías, sorpresas, amenazas, la unión de sectores diversos en solidaridades. En esos días, una serie de movilizaciones y protestas consiguieron la eliminación de un contrato del servicio de agua potable lesivo a los intereses de la población y



lograron la modificación de una Ley que amenazaba esfuerzos colectivos en la construcción y mantenimiento, usos y propiedad consuetudinaria de sistemas de provisión de agua. El presente artículo se refiere al conjunto de elementos que llevaron al desenlace de esta situación. El primer acápite se refiere a las transformaciones que vivió el país desde el retorno de la democracia y la implantación del nuevo modelo económico. El segundo se dedica a los actores inmersos en el proceso desencadenado. El tercero realiza un resumen apretado de los principales acontecimientos. Finalmente se presentan conclusiones a partir de los resultados obtenidos, y se plantea que, a diferencia de otros análisis, hay un saldo altamente positivo de los acontecimientos.

■ El contexto: Bolivia hoy

Los bolivianos a partir de la democratización de la vida política, estamos viviendo en constante cambio. Desde la aplicación del ajuste estructural a través de la Nueva Política Económica de 1985 (con el Decreto Supremo 21.060) y con las posteriores transformaciones iniciadas en 1993, el país no es el mismo. Como veremos, se dieron cambios profundos en las organizaciones de la sociedad civil, las bases productivas y en las dimensiones políticas y culturales tanto de la sociedad nacional como de la local.

Emblemática es la destrucción sistemática que se ha operado en la Central Obrera Boliviana (COB), que duran-

* Director. Centro de Estudios de la Realidad Social y Económica (CERES), Cochabamba.
e-mail: forhum@albatros.cnb.net

** Investigador. Programa de Investigación Estratégica Bolivia (PIEB), Cochabamba.
e-mail: tkruse@albatros.cnb.net

te décadas pasadas tuvo la fuerza capaz de desestabilizar e incluso derrocar a cualquier gobierno. Por admisión de sus autores, esa fue la esencia política del Decreto 21.060.

La creciente informalización del aparato productivo se vive como una precarización del empleo y un aumento del des- y sub-empleo, que produce constantes erosiones y nuevas vulnerabilidades en el mundo del trabajo. Existe una flexibilización laboral de facto, en los 15 años desde el Decreto Supremo (DS) 21.060, 8 de cada 10 “puestos de trabajo” nuevos se han creado en el sector informal.

En el departamento de Cochabamba, escenario de la “Guerra del Agua”, el peso de la lucha antidroga impuesta por EE.UU. y ejecutada por los gobiernos cae sobre los productores campesinos más pobres, produciendo vulnerabilidad económica, desplazamiento de la fuerza laboral y exacerbando la recesión económica.

Los procesos de privatización (llamados “capitalizaciones”) de empresas estratégicas, iniciados en 1993, han significado para la economía nacional un empobrecimiento del Tesoro General de la Nación; no han generado los empleos prometidos y sí una pérdida de soberanía –en especial en el control sobre recursos naturales– y un aumento en el costo de ciertos bienes y servicios básicos. Apesar de la celebrada creatividad del proceso de “capitalización”, en los hechos los bolivianos hemos perdido control de las empresas “capitalizadas”.

A su vez, la privatización exige la creación del ámbito regulatorio facilitador de la inversión directa extranjera en desmedro del control social necesario. Este ámbito se construye por medio de un Congreso que opera como una extensión del Ejecutivo y trunca en vez de fomentar la deliberación sobre temas esenciales como la tierra y el agua. Así los procesos de privatización han sido manejados de maneras muy oscuras, agudizando la crisis de legitimidad. Por ejemplo, en la concesión del agua en Cochabamba, se autorizó por decreto a un Comité la negociación directa con el único consorcio proponente (Aguas del Tunari) mientras a espaldas de la población se amarró un contrato con férreas cláusulas de confidencialidad.

Hemos vivido un sistemático vaciamiento de lo público, tanto en lo económico (recursos destinados al bien común) como en lo político (la posibilidad de deliberar y decidir sobre el bien común). Los espacios como el parlamento y los concejos municipales han sido casi “privatizados” (conver-

tidos en dominio exclusivo) por los partidos políticos, mientras la política se circunscribe a microespacios o escenarios de “deliberación espuria”, vaciados de contenido. La hegemonía de los partidos sobre el proceso político formal ha generado prebendalismos ahora modernizados, corrupción, impunidad y crisis general de legitimidad del sistema político. Se da una creciente imposibilidad de acceder a información de vital importancia; esta información ha sido privatizada bajo una regulación neoliberal que se apoya en la confidencialidad¹.

En resumen, en las últimas décadas vivimos una dramática reorganización de la economía, el estado, la sociedad civil y la vida cotidiana, marcada por la fragmentación,

incertidumbre y vulnerabilidad. En lo económico, se ha comprobado lo dicho por el Dr. Jeffrey Sachs, arquitecto del DS 21.060 al principio del ajuste: “Yo les dije a los bolivianos, desde el principio, que lo que hay allí es una economía miserable y pobre con hiperinflación, [y] si son testarudos, si hacen todo correctamente, terminarán con una economía miserable y pobre con precios estables.” Efectivamente, tuvo razón, y hoy nos enfrentamos a una economía estable en su miseria, hoy en plena recesión. Lo político resulta una tarea ingrata: el *management* (más o menos corrupto) de la austeridad, con periódicos lamentos sobre lo “ingobernables” que resultan los “ciudadanos”.

En este contexto, la privatización del manejo del agua (administración local y programas de inversión) en Cochabamba tenía que haber sido un simple paso más. Estaban armados los nuevos marcos regulatorios, un estado privatizador empeñado en seducir a los inversionistas dizque imprescindibles para “una solución final del agua”, avalado todo por un Alcalde que fue reelegido con casi 52% del voto popular y una “megacoalición” de gobierno aparentemente sólida (de la cual el partido del Alcalde local era parte).

Pero lo que tenía que ser un simple paso más se convirtió en “abril”, ahora es sinónimo del desafío más inesperado, contundente y arrollador al “modelo” en sus 15 años de existencia. Ahora todos en Bolivia estamos en pleno proceso de interpretar y determinar el significado de las “lecciones de abril”.

■ Elementos y actores en el conflicto

Si bien el país había venido sufriendo empobrecimien-

“Hemos vivido un sistemático vaciamiento de lo público, tanto en lo económico (recursos destinados al bien común) como en lo político (la posibilidad de deliberar y decidir sobre el bien común). Los espacios como el parlamento y los concejos municipales han sido casi “privatizados” (convertidos en dominio exclusivo) por los partidos políticos.”

tos, reveses y simples insultos a la inteligencia y dignidad, ¿qué hizo del problema del agua un detonante de un estallido colectivo de proporciones mayores? Sugerimos tres cosas: lo “transversal” del problema del agua, que involucraba al mismo momento a campesinos, pobladores urbanos pobres y de clase media (lo cual hizo de él un punto de “condensación” de demandas); una capacidad organizativa y un accionar político (con p minúscula) “nuevo”, flexible y transparente de las fuerzas populares, que permitía una acumulación y adhesión dinámica; y, finalmente, un gobierno tan escaso de visión y simplemente torpe en su accionar que logró molestar y unificar a todos².

El desencadenamiento del proceso involucra a actores en muchos niveles: las corporaciones transnacionales, el Banco Mundial, gobernantes y elites nacionales y locales, dirigentes regionales, y comunarios y poblaciones locales. En el debate sobre quién provocó una guerra, nosotros responsabilizamos en medidas iguales a tres grupos: las entidades financieras internacionales, que aplican insensiblemente sus recetas e imponen dogmáticamente sus reglas del juego; los gobernantes nacionales, más preocupados por su imagen hacia fuera y por un “clima adecuado para la inversión” que por la situación de la gente; y las elites y gobernantes locales que hipócritamente se posicionan para cosechar jugosos beneficios con sus “socios” internacionales a expensas de los bolsillos de la población. Vayamos por partes.

■ El Banco Mundial

Ismail Serageldin, vicepresidente del Banco Mundial, dijo que las guerras del siglo XXI serían sobre el agua. De hecho en el mundo las fuentes de agua dulce escasean a un ritmo alarmante, engendrando conflictos inevitables. La respuesta del Banco Mundial es ver el agua como un bien escaso (como cualquier otro) y, de acuerdo con su lógica mercantil impecable, promover políticas de *full cost recovery*, es decir, transferir al usuario el costo total de provisión de agua.

En el caso de Cochabamba se aplicaron las recetas fielmente. Desde 1994, los periódicos locales anunciaron una y otra vez que el Banco Mundial exigía la licitación de SEMAPA -la empresa local de agua- como condición de créditos nuevos o renegociados. Por otro lado, el Banco (no sin razón) veía el megaproyecto Misisuni³ -proyecto añorado por generaciones de elites locales- como un elefante blanco cuya ejecución no se justificaba. Con una actitud punitiva y una irresponsabilidad homicida hacia el pueblo cochabambino, utilizó su palanca de *full cost recovery* para evitar que las elites cochabambinas “se equivocaran”. En el resumen ejecutivo de su revisión del gasto público boliviano en 1999, insistió vehementemente: “**Ningún subsidio público debe darse para paliar los costos de incremento de las**

tarifas de agua en Cochabamba, que debe reflejar full cost [costos plenos] la provisión por el proyecto múltiple Misisuni”⁴. Si bien este dictamen no determinó lo que se desencadenó, sí rayó la cancha dentro de la cual se hizo casi inevitable un desastre social del cual el Banco Mundial no puede lavarse las manos.

■ El consorcio Aguas del Tunari

En septiembre de 1999 los cochabambinos fueron presentados con un *fiat accompli* muy irregular. La empresa local de agua SEMAPA⁵ había sido licitada en un proceso totalmente irregular y oscuro y, ahora, los cochabambinos, sin saber los detalles, serían -bajo el consorcio nuevo- los generadores de las riquezas para: (a) ejecutar los sueños-mitos de las elites locales (reducidos a una inversión mínima de 300 millones en 3 a 5 años) plasmados en el proyecto múltiple Misisuni, cuya factibilidad financiera y social sigue sin sustento convincente; y (b) pagar al mismo tiempo las deudas acumuladas (aproximadamente 30 millones de dólares) de anteriores gestiones.

Pero esto, por admisión del mismo gerente de International Water, sólo explica un poco más del 50% del “tarifa-zo”. El otro 50% era necesario para producir un retorno garantizado de por lo menos el 16% anual en la operación del Consorcio⁶. El concesionario era por naturaleza lo que Luis Bredow preceptivamente califica como un “tiburón nervioso”. Tenía que ganar mucho y rápido para lograr su retorno garantizado, mientras simultáneamente creaba enormes *pools* de capital de inversión, antes de cualquier mejora sustantiva en el sistema de agua.

El consorcio Aguas del Tunari, con registro legal en las Islas Caimán, era la cría peculiar de algunos de los jugadores más importantes en el mundo del negocio de agua: International Water Limited (propiedad de Edison SpA de Italia y Bechtel de EE.UU.), con 50%, se juntó con Abengoa, de España (con 25%) y cuatro inversionistas bolivianos (25%), unos ligados al proyecto Misisuni y otros ligados a un partido del Gobierno.

Gregory Palast, especialista británico en temas de regulación y servicios básicos, revisó el caso cochabambino y efectuó el siguiente comentario: “Es un principio básico de la contabilidad que los inversionistas, no los consumidores, financian proyectos de inversión. Los que toman riesgos recuperan su inversión, con ganancias, en cuanto el proyecto produce un producto para la venta. Esto es el corazón, el alma y la justificación del sistema llamado ‘capitalismo’. Esta es la teoría. Pero cuando un operador monopólico tiene en su puño la cañería de una ciudad, puede bombear los fondos para sus proyectos de inversión [...] de los consumidores cautivos en lugar de sus accionistas.” En abril los co-

chabambinos rompieron con su “cautiverio”.

■ Actores nacionales

El Superintendente de Aguas –cargo creado por la Ley de Capitalización– firmó en septiembre de 1999 el contrato de concesión del que sería operador Aguas del Tunari. A pesar de su condición de regulador boliviano, permitió las cláusulas de confidencialidad mencionadas y que las tarifas sean indexadas al dólar y al IPC de Estados Unidos.

La coalición de gobierno negoció el apoyo de la oposición y el Congreso de la República promulgó en octubre la Ley de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley 2.029). Dicha Ley, entre otras cosas, transfiere a concesionarios el control exclusivo de los recursos hídricos de toda el área de concesión, violentando estructuras y prácticas ancestrales locales.

Ministros de estado y parlamentarios ignoraban completamente lo que habían aprobado. En abril, en medio de la “Guerra del Agua”, el Ministro de Comercio Externo –tan preocupado por la imagen de Bolivia– demostró un desconocimiento completo tanto de la Ley como del contrato suscrito.

Sería la combinación del tarifazo y esta apropiación draconiana la que provocó la “Guerra del Agua”. Se hizo patente que las autoridades nacionales, los parlamentarios, recién se enteraron en el conflicto de los contenidos de la Ley 2.029 y los contratos suscritos con Aguas del Tunari. La comisión de ministros que llegó a Cochabamba supuestamente a dialogar para encontrar una salida, también demostró una ignorancia imperdonable de los dos documentos, dejando claro que su objetivo era defender al consorcio y la “imagen de Bolivia” como país viable para la inversión aunque corriera sangre por las calles.

■ Las elites locales

Declarada desierta la primera convocatoria para la concesión por 40 años del servicio de agua y alcantarillado de Cochabamba, se realizó la segunda con participación de las elites locales, el Alcalde, el Presidente del Comité Cívico y del Prefecto departamental. Con su plena aprobación y por decreto se autorizó la negociación directa con el único consorcio proponente, Aguas del Tunari, avalando el tarifazo que detonaría la “Guerra del Agua”.

Al cargarle al nuevo Consorcio todas sus ineficiencias del pasado (la deuda de SEMAPA anterior a la concesión) y sus ambiciones de enriquecimiento futuro (generar el financiamiento del proyecto Misicuni), las elites garantizaron la aplicación del tarifazo explosivo⁷. De este modo llevaron a la población a un callejón sin salida bajo el supuesto de que

dicho proyecto era la fuente única de agua que Cochabamba necesitaba o “quería”, y jugaron feliz y peligrosamente sus proyectos locales y personales, confiando en que los platos rotos de esta fiesta –como tantos otros– los pagaría la gente.

■ Los regantes y la problemática del campo

El sector campesino en Bolivia tiene una larga tradición de lucha por recursos, en especial por la tierra y el agua, que con toda su complejidad está enraizada como la tierra misma. La Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR) emergió de varios años de organización y lucha campesina, potenciándose de la rica tradición asociativa que sustenta la organización andina del campo. Aunque no libres de problemas medioambientales y de equidad en el manejo del agua, los regantes son coherentes, conscientes y tenaces en promover su agenda y lograr sobrevivir en situaciones terriblemente adversas.

La Ley 2.029 y el contrato con Aguas del Tunari monopolizaron el recurso agua en manos del consorcio con imposiciones odiosas e inviables sobre usos autogestionados y tradicionales. Ello representó para los regantes perder el control del recurso y, sobre todo, una pérdida de usos y costumbres (propiedad consuetudinaria). Esta entidad representativa y la gente que la compone (vitales, en el tema del agua) fueron total y deliberadamente marginadas de los procesos de regulación, licitación, contratación y gestión. Luego, desde el campo y con tácticas muy bien ensayadas, demostraron ser capaces de movilizar a una región entera.

■ Los barrios periféricos

La población no conectada al sistema del servicio público local, en cuanto tiene “soluciones” para no depender de aguateros (piperos, cisternas, etc.), lo hace a través de gestión y sacrificio propios o con ayuda de ONGs, iglesias, etc. Se estima que existen más de 200 sistemas locales, administrados y gestionados por pobladores.

En estos sistemas hay deficiencias medioambientales, de gestión y de equidad. No obstante, son producto de enormes esfuerzos, de creatividad y sacrificio. Con la privatización y la Ley 2.029, de golpe Aguas del Tunari se apoderó de todos ellos, creando un futuro muy incierto y preocupante para los pobladores y desdeñando su sacrificio y derecho a decidir sobre el destino de los sistemas comunitarios. Al igual que los regantes, estas poblaciones fueron marginadas de los procesos de regulación, licitación, contratación y gestión del sistema concesionado. En la “Guerra” estas poblaciones desarticulaban la ciudad del resto del país, cortando entradas y salidas; y desde sus barrios salieron centena-

res de jóvenes “guerreros del agua”.

■ Los consumidores de la ciudad

Durante muchos años los pobladores de la ciudad, donde existen 56.000 conexiones al sistema de agua, han sido objeto de manipulación en la gestión del sistema público de agua potable, y movilizados por las elites locales detrás de sus proyectos personales y/o políticos. Al igual que los otros actores, fueron efectivamente marginados de los procesos de regulación, gestión y decisión sobre el sistema de agua.

Aunque los partidos de la oposición anunciaron el tarifazo en la campaña electoral de 1999, igual llegó de golpe y por sorpresa a estos usuarios. Mientras el consorcio Aguas del Tunari e International Water insisten con que las alzas no pasaban de un 35%, en enero de 2000 empiezan a presentarse varios cientos de ciudadanos con las facturas de cobranza a la Federación de Fabriles, receptor general de denuncias en la ciudad y de facto sede de la Coordinadora de Defensa del Agua. Una revisión detallada de más de 200 historiales de pago presentados demuestra que las alzas eran de hasta un 200% y más. Por ejemplo:

- La familia de Julio Hinojosa, con un aumento de 30% de consumo tuvo entre diciembre y enero un incremento de 220%, de Bs. 143 a 314.
- La familia de Bertha Rojas, con un aumento de 15% de consumo tuvo un incremento de 82%, de Bs. 51 a 93,7.
- La familia de Ana María Sejas, con un aumento de 56% de consumo tuvo un incremento de 285%, de Bs. 235 a 670 (más de 100.00 us\$).
- La familia de Esteban Huayllani, sin ningún aumento en consumo, tuvo un incremento de 258%, de Bs. 11 a 28,4.

Adelantándonos a las conclusiones, la “Guerra del Agua” puso un fin inmediato a esta sangría feroz de los bolsillos de las familias cochabambinas. El periodista español J. L. Padilla escribió: “La adjudicación del contrato para el abastecimiento de agua potable en Cochabamba [...] iba a aportar unos ingresos anuales al consorcio de 63,1 millones de euros [...] durante cuarenta años, un total de 2.524,2 millones de euros”⁸. Haciendo un cálculo simple y rápido (usando como base 600.000 habitantes), esto equivale a aproximadamente 35 dólares americanos por familia por mes, en una ciudad donde el salario básico está alrededor de los 60 dólares.

■ “La Coordinadora”

Con los elementos expuestos arriba se explican en buena medida los elementos y actores que contribuyeron al estallido. Pero sin referencia a la Coordinadora –en buena medida también producto de la guerra– no se puede entender el trayecto de los eventos.

La “Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida” sur-

gió ante un descontento popular generalizado y principalmente causado por la Ley 2.029, la percepción de una injusticia social en la concesión del agua y la necesidad de aglutinar distintos sectores que demandaban una respuesta socialmente organizada de repudio a los atropellos.

La demanda provino de y aglutinó inicialmente al Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, conformado por un grupo de ambientalistas y profesionales (que después sería el brazo técnico de la Coordinadora), los Regantes, la Federación de Fabriles, los maestros urbanos y rurales, universitarios y otros. Los dos primeros fueron los que inicialmente analizaron las implicaciones de la concesión y la Ley. A partir de noviembre, la Coordinadora lideró las acciones, sumándose las Federaciones de Colonizadores del Chapare, y luego contó con el apoyo importante de la Federación del Transporte Interdepartamental.

Sobre la Coordinadora recalcaremos aquí simplemente que fue excepcional en su capacidad de absorber y dar roles, espacio y protagonismo a todos los sectores que se iban sumando a la lucha (profesionales, campesinos, fabriles, comerciantes). Además, su práctica asambleísta, de ratificación popular y transparencia fue comprendida y apreciada inmediatamente por la gente. Luego de años de engaños por parte de la clase política, la Coordinadora proporcionó una lección importante en cuanto a otras formas distintas de protagonismo público.

Retrospectivamente queda claro que fue la forma idónea para ir sumando fuerzas: abierta, sencilla, consecuente en su accionar, y permanentemente en las calles, entre la gente. Queda por verse su capacidad de ganar ahora la paz, es decir, de contribuir a la resolución del problema del agua, o por lo menos ejercer un control social transparente sobre los gestores de “soluciones”.

■ Los días de Abril⁹

Para entender la contundencia de los días de abril, es necesario un breve recuento del proceso. En enero se dieron los primeros enfrentamientos por el problema del agua. En su “Manifiesto a Cochabamba”, la Coordinadora anunció: “Los derechos no se mendigan. Los derechos se conquistan. Nadie va a luchar por lo nuestro. O luchamos juntos por lo justo o toleramos la humillación de los malos gobernantes.” De acuerdo con la decisión de la asamblea, los días 11 al 13 de enero se bloqueó completamente la ciudad de Cochabamba. El resultado de las negociaciones que pusieron fin a los bloques fue más una tregua que una solución.

Hasta principios de febrero, cuando de nuevo estallarían los enfrentamientos en las calles, inexorablemente se irían desgastando los espacios de negociación. Por un lado, es

cierto que la flamante Coordinadora –con la excepción de los regantes y su equipo de análisis y apoyo– estaba poco preparada para renegociar y proponer modelos alternativos. Por otro lado, la mala fe del gobierno y su defensa a ultranza de la inversión extranjera y un contrato “amarrado” convenció rápidamente a los dirigentes de la Coordinadora de la inutilidad de negociar. Los sucesos ratificarían esta conclusión.

Con las negociaciones estancadas, la Coordinadora llamó a una “toma pacífica” de la ciudad para el día viernes 4 de febrero. Debía ser una marcha pacífica a la plaza de armas –centro simbólico del poder en la ciudad– seguida por unos discursos. Ese día la ciudad amaneció cercada. Y con refuerzo de tropas trasladadas desde La Paz, el gobierno reprimió violentamente a los manifestantes, declarando que no los dejarían ingresar a la plaza. La violencia y soberbia estatal sólo animaba la tenacidad de los marchistas, que no descansarían hasta realizar la toma. En un acto de extraordinaria necedad, durante los días 4 y 5 de febrero el gobierno “defendió” férreamente un área simbólica de 4 cuadras alrededor de la plaza, mientras el pueblo controlaba el resto de la ciudad, y la región en paro. El cerco era insostenible: la gente tomó la plaza a las 11:30 de la noche del sábado 5.

Las partes –por un lado, el gobierno; por el otro, una alianza precaria entre la Coordinadora y el Comité Cívico– de nuevo firmaron una tregua insatisfactoria para todos, mientras se quiso transferir el conflicto a varias mesas de negociación: sobre la Ley 2.029, principal reclamo de los regantes, y sobre los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del contrato con Aguas del Tunari. Nuevamente se hizo evidente la dificultad de convertir un movimiento social en una estrategia negociadora. Y una vez más los hechos confirmaron la confianza ingenua que Aguas del Tunari depositaba en su protector, el Estado boliviano, y la ciega insistencia de este último de proteger su imagen de país viable para la inversión extranjera.

En marzo, la Coordinadora se salió del proceso de negociación, mientras el gobierno siguió negociando con un Comité Cívico cada vez más precario (al cabo de abril quedaría completamente desvirtuado e inoperante). A su vez, la Coordinadora se lanzó a un ejercicio extraordinario: una “Consulta Popular”, que movilizó a miles de activistas, parroquias, juntas vecinales y otros. En cientos de puntos de la ciudad se colocaron ánforas, donde más de 50.000 personas depositaron sus respuestas a tres preguntas sobre las tarifas, el contrato, y fuentes de agua. El proceso fue calificado como un *show* por parte de la clase política y los enemi-

gos de la Coordinadora. No obstante, sugerimos que ha sido un ejercicio importante. Organizada y llevada a cabo en menos de 10 días, logró la participación de más del 31% de los votos emitidos en la elección municipal de diciembre de

1999. Por otra parte, la Coordinadora estaba dando a la sociedad civil y la clase política lecciones prácticas y colectivas de las características de la democracia que quiere y demanda: correspondencia entre voto popular, políticas públicas y resultados concretos.

“A su vez, la Coordinadora se lanzó a un ejercicio extraordinario: una “Consulta Popular”, que movilizó a miles de activistas, parroquias, juntas vecinales y otros. En cientos de puntos de la ciudad se colocaron ánforas, donde más de 50.000 personas depositaron sus respuestas a tres preguntas sobre las tarifas, el contrato, y fuentes de agua.”

Y así llegamos a abril. El día 4 de abril la Coordinadora convocó a iniciar la “batalla final” por sacar a Aguas del Tunari y reformar la Ley 2.029, y los primeros dos días se realizaron la toma de la sede del Comité Cívico y la toma (todavía) simbólica de las instalaciones de Aguas del Tunari; bloqueos feroces en el campo; en la ciudad, bloqueos efectivos pero no férreos; y concentraciones y marchas que tendían a desgastarse. El jueves 6 en la tarde fue el punto más bajo para el movimiento. Los dirigentes de la Coordinadora, el presidente del Comité Cívico, empresarios privados y autoridades locales y centrales se reunían en la Prefectura, mientras a las puertas del edificio un grupo de más de 1.000 personas impedían la salida de quienes negociaban, hasta que se obtuviera una resolución aceptable. Comentó el Ministro de Educación, miembro de la delegación del gobierno y cochabambino, que era imposible negociar “bajo presión” con “salvajes en la puerta.”

Con instrucciones de La Paz, la policía apresó a todos los que negociaban por parte de la Coordinadora, dando la razón a la desconfianza popular y un motivo para continuar luchando a la gente que se encontraba en las calles. A partir del viernes, Cochabamba era de la Coordinadora. En las calles se peleaba cuadra por cuadra para llegar nuevamente a la plaza; los medios de comunicación se inundaban con las voces de los vecinos de la ciudad. No sólo eran espacios de denuncia; eran directamente medios de movilización de gente, alimentos, equipos médicos y apoyo moral a los que se hallaban en la calle. Se estima que en la tarde unas 60.000 personas activamente controlaban la ciudad.

Los sucesos del viernes se conocen popularmente en Cochabamba como “el engaño”. En la tarde, el Prefecto –máximo representante del poder central en el departamento– llamó a una conferencia de prensa y al lado del Arzobispo anunció que el contrato había sido revocado, agregando que prefería “un cochabambino sucio” (sin agua) frente a un “cochabambino muerto”. Entonces el júbilo se apoderó de la multitud.

Mientras el Arzobispo celebraba una misa en la Catedral por la paz, el gobierno ya estaba tendiendo la trampa en que caerían algunos miembros de la Coordinadora, quienes fueron detenidos en allanamientos violentos de sus domicilios y deportados como parte de un Estado de Sitio que recién se declararía al día siguiente. Varios otros ingresaron a la clandestinidad.

En el fragor del sábado y de este engaño, nacieron los autodenominados “guerreros del agua”. La actitud de incompreensión y burla del gobierno enardeció más a la gente, que reaccionó, incrementando la violencia al retomar las calles, en las cuales esta vez había presencia adicional de fuerzas militares. Ese día, el principal periódico de Cochabamba puso en su primera plana, en letras gigantes, un titular simple y verídico: “GOBIERNO MIENTE YREPRIME”. Con sus dirigentes en la clandestinidad, la gente tomó las calles con una furia que sorprendió a todos, sin importar el estado de sitio declarado.

Las cosas habían cambiado. Ahora había también militares con balas de guerra. Fue una mañana de mayores enfrentamientos: cayó una víctima a manos de un francotirador y hubo varias decenas de heridos de bala. Durante los próximos dos días y medio, los “guerreros del agua” harían suya la Plaza, organizando puntos de control, sistemas de vigilancia desde la torre de la catedral y mecanismos para la distribución de comida y primeros auxilios. Símbolo del poder central, la Plaza estaba bajo el control de esos guerreros; las calles en manos de la gente, habiéndose replegado las fuerzas represivas a sus cuarteles y a ciertos bolsones estratégicos.

Aunque el gobierno central insistía en forma vehementemente en que no negociaría con la Coordinadora –arguyendo que legalmente no existía– empezaron las negociaciones en secreto el lunes en la mañana. En la tarde ya hubo una “solución”: efectivamente el gobierno concedió todo lo que pedía la Coordinadora, menos el levantamiento del estado de sitio. El acuerdo incluyó el retiro de Aguas del Tunari, la liberación de los detenidos, la atención de los heridos y la reformulación inmediata de la Ley 2.029. Para ello una delegación de la Coordinadora partió a La Paz, y tras prolongadas sesiones en el Congreso, se aprobó en horas una ley modificatoria que en otras circunstancias habría demorado meses. Con autodisciplina, un uso mesurado de violencia, con una unidad y solidaridad práctica asombrosa, el pueblo de Cochabamba había ganado una batalla decisiva.

■ A manera de conclusiones

¿Por qué decimos victorias? Planteamos que la “Guerra del Agua” dio a la población cochabambina victorias en varios niveles. Algunas son inmediatas y tangibles, como la reducción de las tarifas de agua. Otras son más de mediano y largo plazo, y en verdad sólo serán victorias si logramos con-

vertir las potencialidades de hoy en resultados de mañana.

En primer lugar, decimos victoria porque se evitó un desastre económico de proporciones mayores. De haberse consolidado, la concesión a Aguas del Tunari habría sido en el corto y mediano plazo una operación de sangría de recursos injustificable. Aunque la gente en las calles no entendiera a fondo los detalles del contrato, sí captó los orígenes y lógicas perversas de la concesión y el hecho simple de que iba a ser esquilada económicamente para financiar proyectos y procesos que no la beneficiarían. Y no se equivocó.

En segundo lugar, decimos victoria porque en lo político se establecieron precedentes urgentes para nuestro tiempo. Fueron reveladas las lógicas perversas y prácticas corruptas en todos los niveles de gobierno y de las instituciones financieras internacionales. Lejos de ser un debilitamiento de la democracia, estas revelaciones abren la posibilidad de su reconstrucción real. Es el “no” necesario que antecede a un “sí”, y contiene la semilla para su construcción. Esto tiene implicaciones políticas y prácticas concretas. Por ejemplo, “abril” dejó en claro que los agentes del gobierno, así como los empresarios, consideraron que el agua es un bien cuya monopolización comercial les brindaría beneficios privados sobre sacrificios sociales. Por el otro lado, “abril” demostró que mucha gente considera que el agua, por ser un bien escaso, debe ser tratado como un bien común, y bajo esta premisa, luchó para eliminar la amenaza de un contrato y una ley retrógrada y atentatoria y para afirmar el carácter social del agua. Debe señalarse también que se dieron varias rupturas fructíferas de la institucionalidad existente en el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los partidos, el Comité Cívico y las organizaciones sindicales, entre otras. Estas rupturas constituyen una alerta y a la vez una enseñanza para el fortalecimiento de la democracia.

Además, el espacio público construido era por excelencia lo que los teóricos de la democracia actual tan ansiadamente buscan y proponen: un espacio de deliberación y reflexión. Como nunca todo era decible y dicho, todos (casi) eran actores y analistas. Y ahora en la “pos-guerra” se requiere de actores responsables y coherentes, y en este sentido “abril” también propició lecciones. Es importante señalar que en este momento de posibilidades dramáticamente abiertas, no se produjeron saqueos ni destrucciones mayores. “Abril” no es comparable con lo ocurrido, por ejemplo, en Los Angeles en 1992. En Cochabamba, sobre la marcha emergió una moral pública con un grado extraordinario de autocontrol y responsabilidad.

No sólo hubo una responsabilidad importante en el accionar social. Hay –percibimos– una notable responsabilidad en asumir la búsqueda de soluciones que rompen con el binomio espurio de “estado versus mercado.” Sosteniendo esta búsqueda hay dos nuevos factores que antes no existían: la presencia de “nuevas” fuerzas y una capacidad propositiva de

las mismas, ante los problemas que tanto agobian a la gente.

Los regantes demostraron que un movimiento social puede también tener una extraordinaria capacidad en cuanto a producir propuestas viables. En esto se destaca que varias fundaciones y ONGs cumplieron un papel muy importante de apoyo y acompañamiento, sobre todo en la formulación de cambios legislativos. La situación de la empresa local de agua es más precaria. Hoy por hoy no existe el apoyo técnico del que gozaron los actores rurales, mientras la actitud de las elites locales es la de esperar del “fracaso inevitable” de la Coordinadora, o el sabotaje abierto.

No obstante, la Coordinadora sentó pautas importantes al respecto. Se inició un proceso constante de interacción entre la nueva empresa municipal *ad hoc* de agua y los barrios de la ciudad; se fomenta una discusión abierta, pública y participativa sobre el problema del agua, con la participación de organizaciones barriales, ecologistas, regantes y comunidades rurales, empresarios y grupos autogestionarios, con diversas propuestas que apuntan a cumplir el objetivo de tener una empresa eficiente, con transparencia y con equidad social.

Queda por verse si la Coordinadora puede concertar y operacionalizar lo necesario para abastecer de agua a más gente sin perder el nuevo sentido común articulado en abril. La ventaja es que hoy, después de la “Guerra”, la gente piensa y habla como nunca del problema del agua y de sus posibles soluciones, en una especie de politización altamente positiva, a diferencia del pasado reciente, cuando el problema permanecía bajo una neblina gruesa de manipulaciones y mentiras.

En otros niveles –por cierto más intangibles y de largo aliento– insistimos en que se dieron otras victorias. La “Guerra del Agua” hizo añicos el vocabulario y sentido común que implantó el neoliberalismo, que cerraban acceso a los materiales del pasado y presentaban el presente como algo inevitable. Sólo había que echar una mirada a las calles para desnudar las mentiras oficiales. El titular que decía: “Gobierno miente y reprime” fue un momento, tal vez sin precedentes, de lucidez y honestidad en el periodismo *mainstream* boliviano, y emblemático de esta ruptura semántica. En fin, el orden simbólico del ejercicio del poder estatal sufrió –por un momento, al menos– un dramático reajuste.

Otra victoria más intangible en la “Guerra del Agua” fue cierta recuperación de la memoria histórica. Entre las cosas que más se escuchaban por la radio, en contacto permanente con la gente en las calles, están frases como: “Así era antes ... me acuerdo de 1971 (1979 ó 1980)” y, más específicamente: “Este señor Bánzer no ha cambiado nada.” Muchos jóvenes recalcan cómo sus padres, por primera vez, hacían referencia a la violencia institucional de los gobiernos de facto. Muchos padres de familia, aunque no sin temores lógicos, alentaban, con sus historias personales y experiencias prácticas, el enfrenta-

miento de sus hijos en las calles con la violencia institucional de hoy. En fin, abril nos demostró que la amnesia no es una condición permanente, que la acción colectiva es posible y eficaz, y en Cochabamba estamos lejos del final de la historia.

■ Notas

1 El caso de Aguas del Tunari es instructivo. Bajo las cláusulas de confidencialidad el conocimiento público sobre un tema determinante de la vida económica y política de una región estuvo legal y sistemáticamente negado. En el contrato se lee: “24.3 Confidencialidad -- 24.3.1 Ninguna de las partes divulgará a terceros información alguna cuyo carácter confidencial haya sido especificado por la otra parte o de la cual conozca, se entere o tome conocimiento directo en virtud de su participación en este Contrato y en las negociaciones que llevaron a la celebración del mismo. Dicha obligación de mantener la confidencialidad se extiende a todo el personal al servicio de las Partes por lo que las mismas deben adoptar las medidas que sean necesarias para que dicho personal cumpla con las normas de confidencialidad aquí establecidas. Ambas partes deberán cumplir con esta cláusula a menos que cuenten con la autorización de la otra parte, con orden judicial o requerimiento de autoridades nacionales o municipales competentes. Para los efectos de esta cláusula, los Accionistas y los Accionistas Últimos del Concesionario, así como el operador de Aguas no serán considerados como terceros. --24.3.2 Para fines del párrafo anterior, se considerará como información confidencial toda aquella información obtenida en la sala de datos como parte del proceso de licitación y negociación, incluyendo entrevistas con personal autorizado y visitas de inspección a las instalaciones de SEMAPA. Igualmente, toda aquella información presentada por el Concesionario con relación al proceso de licitación y negociación o por los Accionistas en relación con su oferta de suscribir el presente Contrato se considerará como confidencial. -- 24.3.3 La obligación de guardar la confidencialidad que cada parte asume según lo dispuesto en la Cláusula 24.3.1 subsistirá por un plazo de cinco (5) años desde la terminación del presente Contrato por cualquier causa.”

2 Hace poco Oscar Olivera, un portavoz de la Coordinadora de Agua en Cochabamba, tuvo la oportunidad de encontrarse con el sudafricano Trevor Ngwane, cuya lucha contra la privatización de agua en Johannesburgo provocó su expulsión del Congreso Nacional Africano. Ngwane le preguntó a Olivera cómo había logrado unificar a toda la gente; respondió Olivera con humildad, “olvidándose” de las labores febriles de organización de los meses anteriores: “Ah; esto lo hizo el gobierno.”

3 El proyecto propone trasvasar aguas de la cordillera al valle, con un costo superior a los 400 millones de dólares (presa de 120 metros de altura, túnel de 19 km de longitud y caída forzada para electricidad).

4 Negrilla en el original; ver *Bolivia Public Expenditure Review*, Report No. 19232-BO, 14 junio 1999, Resumen Ejecutivo.

5 Es la Empresa pública del servicio de agua potable y alcantarillado local. Desde 1970 dependía del Ministerio del ramo, con autonomía administrativa y con el Alcalde como Presidente nato de su Directorio.

6 En el contrato se lee: “4.2 Aplicación de la tasa de retorno. La tasa Mínima de Retorno será del 15%. La Tasa Máxima de Retorno será del 17%.”

7 Cuando ya había reventado la guerra, Didier Quint, Gerente General de International Water LLC, confirmó lo mismo, queriendo –ingenuamente, por cierto– hacerse pasar como una pobre víctima de las voraces y corruptas elites locales. En una carta dirigida al periodista Jim Shultz, escribió: “En el curso de las negociaciones, no pudimos lograr enmiendas del estado o la alcaldía que hubieran permitido un incremento menor de las tarifas. Por ejemplo, la alcaldía quería que nosotros pagáramos la deuda anteriormente acumulada de SEMAPAY que se incorporara ese costo a la estructura tarifaria. Del mismo modo, la alcaldía insistió que firmáramos y ejecutáramos el contrato de construcción de una planta de tratamiento con OTV (una subsidiaria de Vivendi), que nosotros creíamos era innecesaria y de precio excesivo. Además, el estado decidió que Agua del Tunari pagaría por usar el túnel en construcción y la alcaldía decidió cobrar a Aguas del Tunari por los activos existentes de SEMAPA. En resumen, tuvimos que reflejar en el incremento de tarifas todos los incrementos que nunca antes habían sido implementados. Si se suman estos requisitos a la construcción apresurada del proyecto Misicuni, estimamos que explican más del 50% del aumento de tarifas. Ninguno de ellos era necesario y fue realizado en contra de nuestra opinión.”

8 *Empresas*, 12 de abril de 2000, “El grupo Abengoa se atraganta con el agua de Bolivia”.

9 Queremos reconocer el aporte en el relato de acontecimientos de Luis Tapia,

Cochabamba: la Guerra contra el Agua

Por Roberto Laserna*

Un periodista extranjero de escaso castellano llamó un día para preguntar sobre la “guerra contra el agua”. Pensé de inmediato en corregirlo pero me di cuenta de que su error de lenguaje era, más bien, analíticamente certero. Los cochabambinos habíamos sido conducidos a una victoria contra el agua. Empezaron esa guerra los que quisieron aprovecharse de las necesidades y aspiraciones de la gente para montar un proyecto insostenible, y la culminaron quienes lograron aprovecharse de la bronca y la protesta para recuperar o ganar posiciones de poder, o conservar pequeños privilegios.

En el complejo y todavía inconcluso entrevero cochabambino convergieron varios procesos y se superpusieron muchas tensiones. La cuestión del agua fue central pero también sirvió como pretexto para ensayar otras batallas. En esa amalgama se produjo una de las movilizaciones más participativas y espontáneas de los últimos tiempos, guiada por un discurso popular revolucionario, pero orientada por objetivos profundamente conservadores y reaccionarios en la práctica, generando resultados opuestos a los que ilusionaron a los participantes. Al final, fueron los excluidos quienes pusieron el mayor coraje en esta lucha, y son ellos los que hoy asumen los costos de una guerra con pocos vencedores y muchos vencidos.

En este artículo concentramos nuestra atención en el conflicto del agua aún sabiendo que en los disturbios de abril se pusieron de manifiesto también otras causas y razones de protesta y descontento social. El análisis permite observar de qué manera esas otras razones también aprovecharon la temática del agua y la concesión del servicio para expresarse aunque en un espacio que de alguna manera terminó imponiéndoles un lenguaje que impidió que se expresaran de una manera más explícita. En cierto sentido, el agua fue también una bandera que, aunque terminó desgarrada en el conflicto, atrapó en sus pliegues a los que la enarbolaron con otras intenciones.

* Investigador de CERES y ex-miembro del Comité Directivo de CLACSO.



Policía en línea 08-04-2000 - Foto Thomas Kruse

■ El problema del agua en Cochabamba

El servicio de agua potable y alcantarillado en Cochabamba es probablemente uno de los peores que una ciudad de más de 500 mil habitantes puede tener en la actualidad. La cobertura del sistema público apenas alcanza a la mitad de la población y con abastecimiento irregular y racionado. De la otra mitad, los que cuentan con recursos se han visto obligados a crear sus propios sistemas, habitualmente basados en pozos de propiedad colectiva o privados. Y los que carecen de recursos no tienen más remedio que recurrir a los proveedores itinerantes, comprando ya sea el sistema entero (los hay desde 6 hasta 12 metros cúbicos) o por barriles de 200 litros. En esta escala, la peor calidad y el precio más alto corresponden a los barriles, de donde resulta que la población más pobre es la que consume la peor agua, pagando por ella los precios más altos, no solamente en términos económicos sino, lo que es aún más grave, en salud y en mortalidad infantil. La tasa de mortalidad en las zonas sin servicio público de agua es más de tres veces superior al resto.

Tal situación no es el resultado de unos pocos años de mala administración, sino de muchos años en que faltó voluntad política y capacidad de gestión para enfrentar el problema. Faltas que no pueden ser solamente atribuidas a las autoridades sino también a los propios cochabambinos, que poco a poco nos habituamos a lo que los expertos llaman “equilibrio de bajo nivel”. Resignados a la escasez, terminamos aceptando el

mal servicio como una fatalidad. Llegamos a creer en todas las explicaciones tecnocráticas dado que quienes estaban a cargo de la alcaldía eludieron sistemáticamente tratar el tema desde que se libraron de esa responsabilidad con la creación de una empresa descentralizada como SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado).

■ “Verde es Misicuni”

La resignación se renovaba periódicamente con una esperanza luminosa que no solamente prometía agua en abundancia sino también energía para las industrias y riego para la agricultura: el Proyecto Múltiple Misicuni. Este proyecto ha encabezado todas las demandas regionales en Cochabamba desde los años ‘70, y ha sido el principal aglutinante del Comité Cívico, la organización que articula el sentimiento y la movilización regionales.

Misicuni es un río formado con los deshielos de la cordillera y que vuelca sus aguas hacia la cuenca amazónica. Está situado en el lado noreste de la cordillera del Tunari formando un pequeño valle a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Construyendo una pequeña cañada con una represa de 120 metros de altura se piensa crear una laguna artificial de la cual se obtendría un flujo regular y abundante de agua. Más que la represa, el gran desafío ha sido siempre el traslado del agua hacia la parte sur de la cordillera que es donde se encuentran el valle central y la conurbación de Cochabamba (700 mil habitantes aproximadamente).

La solución técnica y punto crítico del proyecto consiste en la perforación de un túnel de 19,5 kilómetros y poco más de dos metros de diámetro, que atravesará montañas que en algún momento alcanzan un kilómetro de roca por encima del túnel. Y sólo esto ya absorbe cuando menos 70 millones de dólares.

Con la represa y con el túnel se contaría con agua suficiente para generar energía eléctrica aprovechando la caída hacia el valle, y la abundancia haría también viable la expansión de la red de agua y la dotación de riego a las tierras del valle central. Y en el futuro un par de túneles más podrían aumentar los volúmenes de embalse con las aguas de los ríos Putucuni y Viscachas, lo cual aumentaría la oferta de agua a Cochabamba.

Para hacer realidad este sueño solamente hace falta dinero, porque además del túnel, que es lo único que hoy

cuenta con algún financiamiento, la inversión requerida para la fase inicial alcanza a otros 70 millones de dólares... descontando los generadores de energía que con la tecnología y los precios actuales de gas, en vez de mejorar la rentabilidad del proyecto, le representarían cuantiosas pérdidas. Y esa inversión solamente tiene sentido si se garantiza, además, que se invertirán otros 200 millones de dólares para hacer potables esas aguas, distribuir las a toda la población mediante red domiciliar y tratar las aguas servidas.

Por lo tanto, la inversión y su rentabilidad no son pequeños detalles.

■ Está verde Misicuni

Luego de 12 millones de dólares invertidos en estudios y de treinta años de movilizaciones regionales, el proyecto Misicuni logró capturar la imaginación de los cochabambinos pero no sus bolsillos ni el interés de los inversionistas. La última gran movilización a favor de Misicuni se realizó en pleno proceso electoral de 1997, cuando el Comité Cívico y la

Alcaldía lograron desarticular la propuesta alternativa del gobierno de Sánchez de Lozada, que giraba en torno a las aguas ya embalsadas de Corani (al noroeste de la cordillera), comprometiendo el apoyo a Misicuni de todos los candidatos no oficialistas.

“¡El acto estrella de la campaña del 2002 sería la entrega del túnel de Misicuni! (...) Enceguecidos por el entusiasmo se dejaron caer en la tentación todos los que poco después formarían la mayor coalición gubernamental de nuestra historia democrática.”

Para entonces, reuniendo todos los recursos captados hasta ese momento en una cuenta especial, se había logrado convocar a licitación para la construcción del túnel, con la ilusión de que una vez concluido facilitaría el financiamiento de las obras siguientes. Pero a los pocos meses de iniciada la perforación, el consorcio Condotte-Asapi rescindió el contrato. Probablemente se dio cuenta de que los riesgos de la obra no justificaban el presupuesto. Y saltó a escena el segundo proponente, Ice-Astaldi, ofreciendo ejecutar la perforación ajustada al cronograma electoral. ¡El acto estrella de la campaña del 2002 sería la entrega del túnel de Misicuni! Era muy atractivo. Más aún si se lograba avanzar en la construcción de la represa. Enceguecidos por el entusiasmo se dejaron caer en la tentación todos los que poco después formarían la mayor coalición gubernamental de nuestra historia democrática.

Derrotado, el Presidente Sánchez de Lozada recurrió a la ironía mordaz al preguntarse si los cochabambinos querían agua o Misicuni. Tenía razones para sentirse frustrado. Dos años de intensas negociaciones con la capitalizada em-

presa Corani fueron echados al canasto en julio de 1997. Para atraer inversionistas que pudieran ampliar la red de agua en Cochabamba, el gobierno había pensado incluir entre los documentos de concesión una detallada propuesta de la Empresa Corani ofreciendo proporcionar casi la misma cantidad de agua que la proyectada en la fase inicial de Misicuni pero a un costo mucho más bajo, con menos riesgos y menor incertidumbre. A diferencia de Misicuni, esta opción permitía conocer con anticipación el costo del agua y también se habían acordado los mecanismos de revisión de dichos costos en los 40 años siguientes. Era el inversionista privado quien asumiría los riesgos de la perforación de un túnel -también necesario para traer las aguas de Corani hacia el valle- y se haría cargo del financiamiento, en parte ya garantizado en su contrato de capitalización.

Nada de eso sirvió para dismantelar la dimensión ya mítica de Misicuni.

■ The Tunari Waters coalition

Alentados por su victoria, el Alcalde Reyes Villa, el Comité Cívico y el nuevo gobierno nacional ADN-NFR-MIR-UCS licitaron la concesión de SEMAPA. Pero en vez de adjudicarla según la mejor propuesta de cobertura, calidad y tarifas del agua, lo hicieron según la posibilidad que ofrecieran los proponentes de hacer realidad el mito de Misicuni. De las quince empresas que compraron el pliego de licitación, la mayoría se desanimó y las otras -Bechtel vía International Waters, Edison y compañías bolivianas- se unieron para formar juntas un consorcio: Aguas del Tunari. En vez de declarar desierta la licitación, el gobierno autorizó mediante decreto la negociación directa, asegurándose de involucrar en la misma no sólo a sus representantes sino también a los de la Alcaldía, el Comité Cívico y SEMAPA. Para continuar impulsando un proyecto tan riesgoso y de tan dudosa rentabilidad se requería mantener intacto el principal capital con que cuenta el proyecto Misicuni: el apoyo político.

Es seguro que Aguas del Tunari tomó también en cuenta ese capital. De otro modo es difícil explicarse que firmara un contrato que implicaba empezar su gestión aumentando tarifas congeladas desde hace varios años, sin demostrar siquiera si podía mejorar el servicio. Y que se comprometiera a desarrollar Misicuni como fuente principal de agua existiendo alternativas más viables y baratas. Si el pueblo de Cochabamba había mostrado de manera tan persistente su apoyo a Misicuni y había respaldado tan masivamente a su Alcalde, podía suponerse que estaba dispuesto a un pequeño sacrificio para realizar su anhelo. Y si por otro lado el Gobierno Nacional respaldaba el proyecto, y ese gobierno representaba más del 70% de la votación popular, podía también suponerse que nada se opondría a la concesión, si ésta permitía realizar Misicuni.

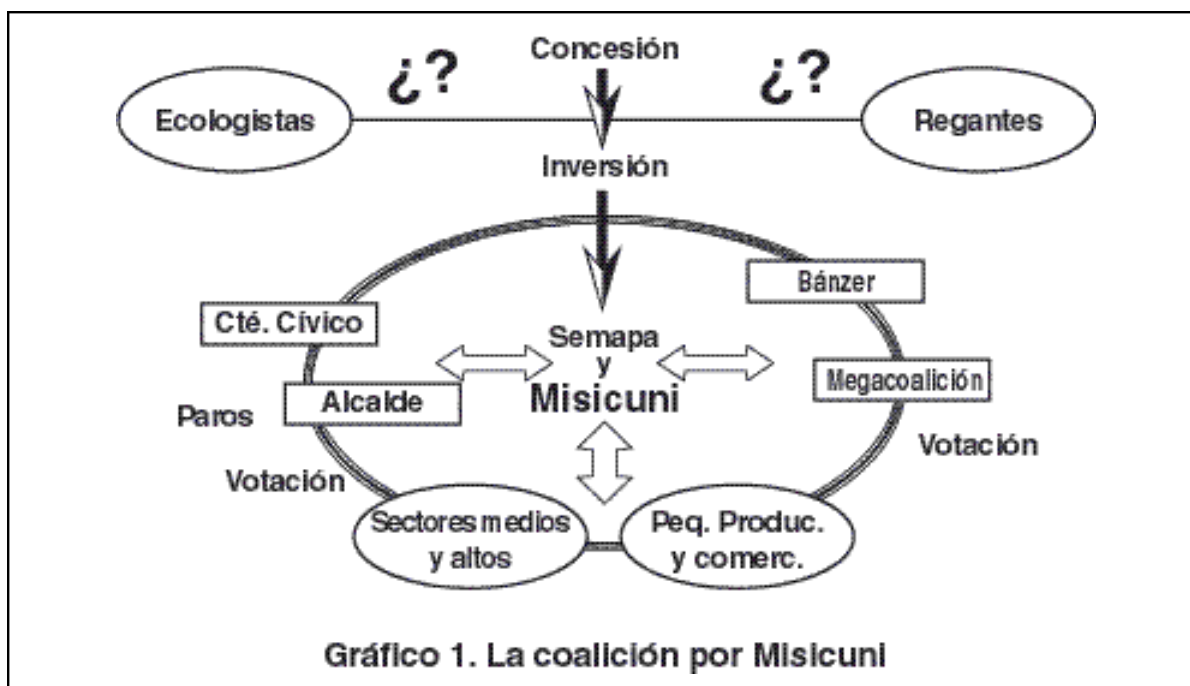
■ En Defensa del Agua

Fuera de la oposición del MNR, la única voz discordante que se escuchaba era la de una pequeña alianza compuesta por el movimiento ambientalista cochabambino y los regantes del valle bajo. Formada desde hace varios años en oposición a la perforación de pozos profundos para abastecer agua a la ciudad, solución alentada por la cooperación francesa, esa alianza no se opuso directamente a la concesión sino a las condiciones normativas que se estaban creando para hacerla posible. Ellos, unidos en un Comité de Defensa del Agua, estaban trabajando en la nueva legisla-



Cholita con Warak'a 05-02-2000 - Foto Thomas Kruse

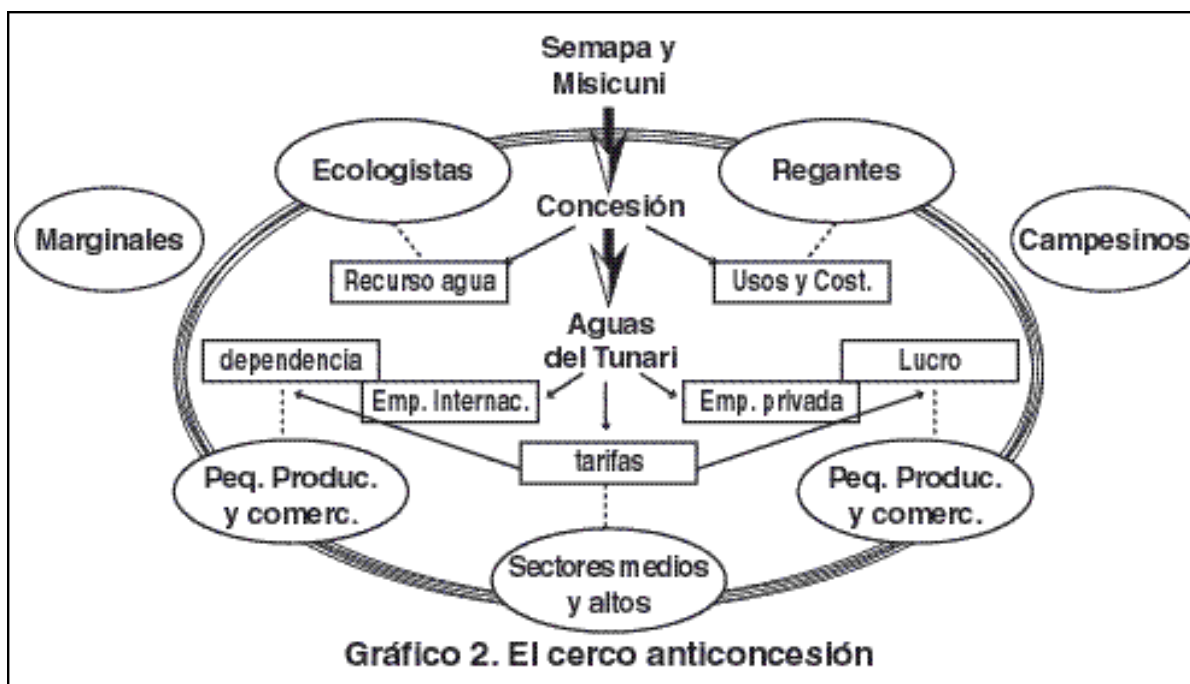
ción sobre el agua, y les llamó de inmediato la atención que algunos temas que se estaban concertando se incluyeran de una manera diferente en el Contrato con Aguas del Tunari y en la Ley 2.029 de Saneamiento Básico promulgada poco después. Los ambientalistas aspiraban a establecer mecanismos que garantizaran el aprovechamiento sostenible y equitativo de las aguas subterráneas y superficiales, y los regantes a que se respetaran las normas del derecho consuetudinario (“usos y costumbres”) que les permitirían mantener el control que hasta entonces ejercían sobre el agua. Pero era una oposición pequeña y apenas perceptible frente a la gran alianza “misicunista” formada por Alcaldía, Comité Cívico y Gobierno Nacional (ver gráfico 1).



Con la participación entusiasta de profesionales, algunos con vocación de servicio y otros con deseos de figuración, todo ese conjunto diverso de reivindicaciones y argumentos en contra del consorcio empezó a fluir de uno a otro grupo y el círculo se empezó a cerrar. La Coordinadora pronto se convirtió en un cerco político sobre Aguas del Tunari, reforzado por algunos partidos de oposición deseosos de romper con la

hegemonía de Reyes Villa en Cochabamba y quebrar la ampulosa coalición gubernamental (ver gráfico 2).

Sin embargo, pronto sumaron a esas reivindicaciones la defensa de los pozos de agua y la oposición al incremento de tarifas, que eran dos temas tratados en el contrato con Aguas del Tunari. Los sectores medios y altos de la ciudad, que son



los que reciben agua del servicio público o que han podido pagar pozos propios, se volcaron de inmediato en contra de esta empresa demandando la revisión del contrato. Tan rápida y masiva reacción atrajo la atención de otras organizaciones sociales y políticas como la Federación de Fabriles y los Colegios profesionales que se sumaron al Comité y crearon la Coordinadora de Defensa del Agua y la Economía Popular.

■ El cerco de la resistencia

La elevación de tarifas, acordada en el contrato para atraer las enormes inversiones requeridas para ampliar la red y hacer Misicuni, fue asociada de inmediato al carácter privado de la empresa y, por tanto, a su racionalidad capitalista basada en el lucro y la ganancia. Racionalidad que aún hoy tiene limitada legitimidad en Cochabamba, donde miles de pequeños productores, comerciantes y transportistas actúan en el mercado pero lo rechazan, no se perciben a sí mismos como empresarios y dudan de su propia acción mercantil. Para ellos, una cosa es vender para ganarse la vida, y otra muy distinta es vender para enriquecerse, aunque en el fondo es lo que harían si pudieran. En esa lógica dual, no les fue difícil unirse a la protesta contra esa empresa que convertiría el agua en un negocio, aunque seguramente no pensaron que de triunfar tendrían que seguir comprando agua de los “poceros” y camioneros que cobran más pero solamente para “ganarse la vida”.

Al mismo tiempo, la concesión y la elevación de tarifas fueron asociadas a la globalización y la renovación de la dependencia debido a la presencia determinante de empresas transnacionales en el consorcio Aguas del Tunari. Y esto sirvió para recordar que la aspiración nacional de la soberanía, “amenazada” esta vez por la privatización, sigue siendo una tarea pendiente, a lo que apeló de inmediato la izquierda que en Bolivia ha sido siempre más nacionalista que la derecha que se proclamaba como tal. De esta manera, la emergente alianza opositora encontró que el discurso nacional popular -o la retórica populista- la articulaba muy bien, integrando a su seno a dirigentes y partidos políticos que habían desaparecido del mapa electoral pero que conservaban su voluntarismo y eran capaces de traducirlo en activismo organizado y consistente.

Mientras todo eso ocurría, la coalición que había producido la concesión maniatada a Misicuni se debilitaba al extremo. El Comité Cívico entró en crisis cuando su Presidente, Edgar Montaña, saltó al escenario político como candidato a Concejal en el partido del Alcalde. A pesar de su victoria electoral, éste no solamente se negó a respaldar el contrato con Aguas del Tunari sino que incluso manifestó su oposición al aumento de tarifas -pese a haber firmado su aceptación durante la negociación- colocándose frente al

gobierno al acusarlo de insensible por no absorber la deuda de SEMAPA. No tardó en producirse la ruptura entre el Alcalde y el gobierno, quebrándose el eje político en el que descansaba la concesión. Los partidos del gobierno estaban agotados con la campaña municipal y sus propias disputas internas, de modo que no lograron explicar su posición ni siquiera a sus militantes, muchos de los cuales engrosaban las filas de la Coordinadora. Defendiendo el proyecto quedaron, prácticamente solos, el Superintendente Luis Uzín y el Presidente de la Empresa Misicuni Gonzalo Rico. Más tarde aparecería fugazmente el Ministro Saavedra Bruno y nunca el consorcio empresarial Aguas del Tunari, salvo en tímidos y tardíos spots televisivos que convocaban a pagar las tarifas para hacer posible la ilusión.

Los disturbios de febrero añadieron un nuevo ingrediente al conflicto, pues la respuesta represiva ensayada por el gobierno no hizo más que recordar el pasado dictatorial del Presidente Banzer, levantando deseos de revancha en quienes lo habían sufrido, y de dramatización de la historia en quienes solamente la conocían de oídas. Los gases y las piedras, las barricadas y el heroísmo querían volvernos a los ‘70 pero esta vez para darle la vuelta.

Y así llegó abril. Las negociaciones sobre la Ley 2.029 avanzaron a satisfacción de los regantes pero las que se realizaban sobre el contrato con Aguas del Tunari resultaron solamente una distracción mientras se ganaba tiempo y se consolidaban posiciones. La opinión pública recibía un bombardeo de denuncias. Siempre una nueva antes de que la anterior se aclarara o confirmara. No sabía en quién confiar. La gente dudaba de la eficacia del paro pues los costos de febrero estaban frescos en la memoria. Y cuando la Coordinadora parecía derrumbarse, despertaron los ‘70 en un corralito armado en la Prefectura, donde fueron detenidos sus dirigentes cuando empezaban a dialogar. La desconianza venció las dudas y la furia de la gente empezó a alimentar el círculo con bronca y solidaridad ya ajenas al tema del agua pero genuinas y vitales. Los campesinos se plegaron y en las barricadas encontraron dignidad los marginales urbanos, compartiendo heroísmo con jóvenes militantes que soñaban revivir la Comuna de París o el 17 de octubre en Cochabamba, o cuando menos el abril boliviano del ‘52.

Y aunque este 9 de abril trajo festejos, trajo también la paradoja de celebrar varias derrotas.

■ Y ahora... ¿dónde está el agua que se defendía?

Los dirigentes de la Coordinadora, que en un momento del conflicto sintieron naufragar su movimiento, lograron encubrir su incapacidad para negociar mejores condiciones del

contrato con Aguas del Tunari, obligándola a retirarse. La recuperación de SEMAPA como “empresa municipal”, aunque ahora conducida por los miembros más politizados de la propia Coordinadora, fue el logro real y simbólico más importante de la “batalla final”. Ya ella se aferran ahora para utilizarla como laboratorio de experimentación de un modelo de gestión que ya tiene nombre y apellido, “autogestionario y social”, pero que no acaba de nacer ni siquiera en el papel.

Menos visibles fueron las victorias particulares. Porque ganaron los regantes, que en nombre de la tradición han logrado conservar el control de los recursos hídricos que, frente a los demás campesinos sin riego, los convierte en privilegiados. Y ganaron los propietarios de pozos, que sin control ni regulación pública privatizaron de facto los recursos del subsuelo, que la Constitución dice que son de todos, y que los seguirán aprovechando tanto para su consumo como para su comercialización y venta. Y ganaron los distribuidores en camiones cisterna, que seguirán aprovechando los enormes espacios que tienen en un mercado libre para la especulación y en el que el control y la regulación no tienen cabida.

Derrotados fueron los de la alianza “misticunista” pues lo poco que lograron avanzar para hacer realidad el mito ha quedado sumergido en el mismo limbo que el contrato con Aguas del Tunari que prometía financiarlo. Arriba en la montaña continúa perforándose el túnel de trasvase de Misicuni, a pesar de que los contratistas de Astaldi-Ice -que forzaron su presencia en la obra con promesas difíciles de cumplir- siguen intentando modificar las condiciones de un contrato que, defendiendo el interés público, se yergue para ellos como una amenaza.

Derrotado fue el Alcalde Reyes Villa por no haber sido capaz de defender su proyecto y de demostrar un liderazgo constructivo, que es el que pone en juego su caudal político al servicio de una causa. Y derrotado fue el gobierno del Presidente Bánzer, que puso en evidencia la extrema debilidad de la coalición que lo sustenta y su falta de visión para resolver problemas sustanciales y prevenir conflictos.

Derrotado fue el consorcio Aguas del Tunari, que perdió una oportunidad de inversión y mostró al mundo su incapacidad para enfrentar los desafíos de invertir en países complejos como Bolivia. Tal vez logre recuperar sus escasas inversiones y consolar a sus inversionistas con una indemnización, pero pesará sobre sus ejecutivos el estigma de la incompetencia.

Derrotados fueron los ambientalistas, que crearon un movimiento que los ignora y que menosprecia su preocupación, y que a pesar de tenerlos cerca sigue pensando que en la explotación de los recursos naturales está la respuesta a las presiones que impone el corto plazo.

Derrotados fueron los que lucharon contra la mercantilización del agua, porque el agua se seguirá transando pero en un mercado negro y sin controles, donde los especuladores seguirán expoliando a los más pobres. Y derrotados fueron los anti-privatizadores porque los recursos comunes seguirán bajo la lógica de una privatización salvaje, dispersa y descontrolada.

Pero los que sufren la mayor derrota son los 100 mil hogares cochabambinos que seguirán creyendo que el agua es un lujo que no hay que pagar. La mitad mantendrá abiertas sus pilas todo el día para captar lo que les llegue en las esporádicas horas que se les asigna, un 20% seguirá imaginando cómo mantener su pozo que cae en producción porque

siempre hay cerca alguna nueva perforación, y los demás seguirán tratando de hacer amistad con el dueño de un cisterna para que en la próxima sequía los recuerde aunque sea cobrando más. Algunos quizás encontrarán consuelo recordando la batalla librada contra el capi-

talismo transnacional y el gobierno neoliberal, a quienes ciertamente doblegaron y enseñaron una formidable lección: deben tomarlos en cuenta.

Pero fue, en suma, derrotado el país, porque se postergó nuevamente la solución de un problema crucial de la región que articula oriente y occidente, y se crearon nuevas obligaciones económicas que terminarán sacrificando algunas oportunidades en algún rincón rural donde la gente que sufre mayor pobreza no tiene siquiera voz para acusar a quienes juegan con su futuro.

“Y derrotado fue el gobierno del Presidente Bánzer, que puso en evidencia la extrema debilidad de la coalición que lo sustenta y su falta de visión para resolver problemas sustanciales y prevenir conflictos.”



Continuidad y Ruptura: la “Guerra del Agua” y los nuevos movimientos sociales en Bolivia

Por Carlos Crespo F.*

■ Introducción

Oscar Olivera, uno de los portavoces de la Coordinadora del Agua y la Vida, gusta decir que “los cochabambinos, después de quince años han perdido el miedo..., y por primera vez creen en alguien que no les va a engañar” ¿Cómo se llegó al nivel de movilizaciones, sólo recordadas en la revolución del ‘52 y las coyunturas de recuperación democrática? ¿Qué factores influyeron para que la “señora” Coordinadora¹ tenga una legitimidad democrática pocas veces vista en la cultura política boliviana?

El presente texto es un intento por dar algunas pistas al respecto, y plantea que la Coordinadora es expresión de un movimiento social que recupera las pulsiones autogestionarias e insurreccionalistas de la Central Obrera Boliviana (o “forma COB”), en el contexto de las nuevas condiciones que ha impuesto el neoliberalismo, perfilando por tanto un conjunto de dispositivos de resistencia, novedosos para la tradición “cobista” de los movimientos sociales en Bolivia, hecho que la aproxima a los nuevos movimientos sociales de resistencia al capitalismo global, que están emergiendo en Latino América y el mundo globalizado (Crespo, 2000). En suma, la Coordinadora recupera elementos de la forma “COB” de resistencia, y a la vez va más allá de ella.

El documento está dividido en tres partes: en la primera se describen algunos antecedentes históricos que explican la “Guerra del Agua”; la segunda parte está dedicada a reconstruir los principales hechos que caracterizaron al conflicto, en sus diferentes momentos de movilización y negociación. En la última parte se desarrollan aspectos que a mi juicio muestran los rasgos de continuidad y ruptura con los movimientos sociales previos, particularmente las articuladas alrededor de la COB.

* Sociólogo; MSC en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (CESU-UMSS). Actualmente doctorante en Oxford Brookes University (UK). Coordinador del Área Medio Ambiente CESU; catedrático en la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba-Bolivia).



Aguas “Go Home” 07-04-2000 - Foto Thomas Kruse

■ I. Antecedentes

Bolivia ha sufrido el ajuste estructural, a partir del año 1985, expresado en reformas económicas, sociales y políticas, orientadas a promover una economía de mercado, una sociedad de stakeholders y un sistema político basado en la democracia liberal representativa.

El ajuste estructural debilitó la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente la Central Obrera Boliviana (COB), que hasta el ‘85 constituyó un verdadero factor de poder en la política boliviana, e introdujo la mediación política partidaria dentro la cultura política del país.

Desde los ‘70, en el valle de Cochabamba, ya existían movimientos campesinos de resistencia a la explotación de recursos hídricos para consumo de la ciudad; en el año 1994 se genera una gran movilización campesina contra la perforación de pozos profundos, por parte de la entonces empresa municipal de agua (SEMAPA) (Crespo, 1999). De estos movimientos surgirá posteriormente la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), uno de los actores principales involucrados en la “Guerra del Agua”.

Históricamente el tema del agua ha sido muy sensible en la región, pues el valle de Cochabamba (donde viven al-

rededor de 700.000 personas, del área urbana y rural) es una zona ecológicamente considerada semiseca, por tanto sufre una crónica escasez del recurso. Por otro lado, apenas el 50% de la población urbana tiene acceso al sistema público de distribución de agua potable, por tanto aproximadamente el 35% se ha organizado en cooperativas, asociaciones, comités de agua, y un 15% se aprovisiona a través de carros cisterna ("aguateros") u otros medios alternativos.

Desde hace aproximadamente 40 años, desde los sectores económicos y políticos dominantes de la región, se ha planteado como solución la implementación de un megaproyecto de trasvase de agua, mediante un túnel de 19 km. de largo y una presa de 115 metros de altura. Este proyecto, denominado Misisuni, ha sido instrumentalizado por las elites políticas para ganar elecciones y sacar otras ventajas políticas.

■ II. Los hechos

Las causas directas para la "Guerra del Agua" han sido dos:

1. La concesión, en forma poco clara, de la empresa municipal de distribución de agua (SEMAPA) a un consorcio privado internacional, denominado Aguas del Tunari, incluyendo la implementación del proyecto Misisuni (septiembre 1999).

2. La aprobación en el parlamento, sin haber consensado previamente con los stakeholders, de la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (octubre 1999).

Desde junio de 1999, un grupo de técnicos, representantes vecinales, ambientalistas, se reúne para analizar las probables consecuencias de la Ley, y se organiza en torno a un Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar.

En julio del mismo año el Banco Mundial emite un informe reservado sobre el gasto público en Bolivia sobre el sector, donde recomienda las concesiones privadas, destaca el rol de las superintendencias como organismos de regulación y propone la no subvención en la distribución del agua potable (World Bank, 1999).

En septiembre el gobierno, a través de la Superintendencia de Aguas, realiza la concesión de SEMAPA a la úni-

ca empresa que se presentó a la concesión: el consorcio internacional AGUAS DEL TUNARI, conformado por International Water U.K. (subsidiaria a su vez de Bechtel) con un 55% de las acciones, Abengoa de España con un 30%, y el resto por empresas bolivianas, una de ellas vinculada con el gobierno actual. La concesión de hecho era irregular, pues no llenaba los requerimientos establecidos por la legislación boliviana (se necesitan tres propuestas para validar una licitación). A las pocas semanas (fines de octubre), se aprueba en una sesión maratónica la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Organizaciones de la sociedad civil cochabambina hacen conocer sus observaciones a ambas decisiones gubernamentales.

Algunas observaciones a Ley y Contrato:

- No respeto a usos y costumbres, esto es, las formas tradicionales, de acceso y uso del recurso.
- No garantía de ejecución del Proyecto Múltiple Misisuni.
- Inseguridad sobre el futuro de las instituciones de distribución de agua que no tienen fines de lucro (empresas municipales, asociaciones, comités, cooperativas de agua).
- Estas instituciones sujetas a intervención judicial.
- Monopolio de concesionarios empresariales.
- Prohibición de perforar pozos para comunidades.
- Excesivo poder de Superintendencias.
- Modificación de tarifas no consultadas con población, además de estar indexadas al dólar.
- Criterio económico en fijación de tarifas y concesiones, antes que social y ambiental.

En noviembre se organiza el primer bloqueo de campesinos y regantes, dejando casi paralizada la región. Ese mes se crea la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, organismo que agrupa a una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil regional.

Pero la gota que llenó el vaso fue que la empresa Aguas del Tunari incrementó las tarifas en un 35% (aunque en muchos casos llegó a más del 100%),

a partir de enero del 2000, sin antes haber mejorado el servicio; la población reaccionó con indignación y el 11 de enero se realizó una movilización organizada por la Coordinadora del Agua, que terminó en represión policial. El 4 de febrero, la Coordinadora or-

ganizó "la toma simbólica de la ciudad de Cochabamba", para demandar, festiva y pacíficamente, cinco puntos:

- Derogación de la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

"En noviembre se organiza el primer bloqueo de campesinos y regantes, dejando casi paralizada la región. Ese mes se crea la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, organismo que agrupa a una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil regional."

- Derogatoria de los decretos 25.351 y 25.413, que hicieron posible la concesión.
- Nulidad del contrato con Aguas del Tunari.
- Destitución del Superintendente de Saneamiento Básico.
- Consensuar con todos los sectores la Ley del Recurso Agua, en fase de aprobación en el parlamento.

El gobierno reprimió violentamente la protesta. Los enfrentamientos continuaron el día 5, pues la población (urbana y rural) espontáneamente salió a las calles para enfrentar a la policía. La ciudad quedó completamente paralizada por los bloqueos en todas las rutas de acceso dentro y fuera del centro urbano.

Resultado de la revuelta: 22 heridos, 135 detenidos, y un acuerdo, bajo la mediación de la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, cuyos puntos más importantes son:

- Revisión del contrato de concesión con Aguas del Tunari.
- Elaboración de una ley modificatoria de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con participación de las representaciones campesinas, regantes y organizaciones sociales de distribución de agua.
- Suspensión del incremento tarifario mientras concluyan las negociaciones.

Es decir, la movilización obliga al gobierno a reconocer a la Coordinadora como actor del conflicto y negociar modificaciones a la Ley y Contrato.

En las negociaciones de la Ley se logran consensos, logrando modificar 31 artículos de los 75, hecho inédito en la vida política y legislativa de Bolivia. Pero en las negociaciones del Contrato no hay acuerdos, y luego de una semana la Coordinadora decide abandonar las negociaciones, luego de emitir su documento de conclusiones.

El 4 de abril la Coordinadora inicia la denominada “Batalla final”, pidiendo que Aguas del Tunari (AT) se vaya del país; el departamento de Cochabamba aparece totalmente aislado del país por los bloqueos campesinos, la ciudad es prácticamente tomada por la multitud durante una semana, hay enfrentamientos con la policía y ejército con un saldo de 1 muerto y 30 heridos; se declara el estado de sitio, aun así la movilización continúa; el 10 de abril había casi 50.000 personas tomando la plaza de armas; el gobierno decide rescindir contrato con la empresa, y AT decide retirarse de Bolivia, pidiendo una indemnización millonaria. La victoria es de la Coordinadora, convertida en portavoz de la región.

El gobierno declara que no pagará una cuantiosa deuda que arrastra la empresa de agua y señala que la Coordina-



Cholita y policía 08-04-2000 - Foto Thomas Kruse

dora se hará cargo de la administración. Esta acepta y en este momento hay un debate sobre qué tipo de empresa distribuidora de agua se debe implementar.

■ III. Ruptura y continuidad en el movimiento de la coordinadora

¿Qué elementos de continuidad y ruptura muestra el movimiento alrededor de la Coordinadora del Agua y la Vida? De ello hablo en el presente acápite.

Composición

La Coordinadora nace fundamentalmente alrededor de entidades autónomas como el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), la Central Obrera Departamental y la Federación de Trabajadores Fabriles, pero de ella han participado una multiplicidad de sectores: organizaciones vecinales, colegios de profesionales, perforadores de pozos, maestros, campesinos, cocaleros, universidad, jubilados, muchos de ellos sectores que la COB había “olvidado”; es-

ta diversidad también se expresaba en un espectro diverso de ideologías políticas: neomarxistas, ambientalistas, liberales demócratas, cívicos, jóvenes anarquistas.

Tipo de acciones

Respecto a sus acciones, la Coordinadora, si bien ha recuperado formas “clásicas” de protesta en el marco de la tradición insurreccionalista de la COB y la CSUTCB (organización nacional campesina), como son los bloqueos de caminos, paro indefinido, marchas de protesta, a la vez incorpora elementos de protesta novedosos, espectaculares, de gran impacto en los medios de comunicación. Ambas tácticas se complementaron y reforzaron mutuamente. A través de este tipo de actos la Coordinadora, que inicialmente carecía de acceso a los medios de comunicación, paulatinamente amplió su cobertura, capacidad de información y comunicación con la gente.

Algunas novedosas formas de resistencia aplicadas por la Coordinadora:

- *Meetings de protesta los martes en la plaza de armas (julio 99-abril 00). Organizado por el Comité de Defensa del Agua, cada martes en la mañana se mostraban paneles informativos, se habilitaban libros de firmas para expresar su protesta, y la gente de la Coordinadora conversaba directamente con el público y la prensa sobre el tema.*

- *Quema pública de facturas (enero 00). Acto de protesta en la plaza de armas de la ciudad en protesta por el incremento de tarifas de agua.*
- *Convocar a la “toma simbólica de Cochabamba” (febrero 00), para hacer conocer, pacífica y festivamente, que la ciudad es también de los “excluidos por el modelo neoliberal”.*
- *Concentración festiva de Carnaval (marzo 00). Aprovechando la ocasión se realizó una marcha festiva, con bandos bufos y “taquipayanacus” (coplas tradicionales de carnaval).*
- *Consulta Popular (marzo 00). Al margen de su legalidad, sirvió para motivar más a la población, donde la prensa dio gran cobertura.*
- *Teatro/Graffiti (febrero-abril 00). Grupos de jóvenes, de apoyo a la Coordinadora, realizaban actos culturales públicos, que además de los graffitis, medio de comunicación por excelencia de la juventud, formó parte de la artillería de resistencia de la Coordinadora.*
- *Toma simbólica a SEMAPA y el Comité Cívico (abril, 00). Convocada durante la “batalla final”, convocó a miles de ciudadanos, a pesar de lo cual no hubo grandes destrozos, como temía el gobierno.*
- *Cerco a la Prefectura (abril 00). Movilización para obligar al gobierno a negociar y aceptar la rescisión del contrato con AT.*

Asimismo, amalgamar la presión social con la lucha legal (demanda ante el Tribunal Constitucional) como otro



escenario de resistencia, es una de las innovaciones del movimiento del agua.

Negociación y presión como táctica

Siguiendo una práctica común del Estado frente a los conflictos, el gobierno osciló, dependiendo de la coyuntura, entre negar el conflicto o patologizarlo², es decir, no reconocerlos como actores, producto de la exaltación que hace de las instituciones de la democracia representativa liberal como únicos escenarios para canalizar demandas sociales, y por tanto garantía de vigencia de la gobernabilidad.

El conflicto aparece, por tanto, también como un recurso de la sociedad civil, “para ser escuchado”, actitud que ha formado parte de la cultura política de los movimientos sociales bolivianos, articulados en la COB. Frente a la resistencia, para aplacar, el Estado utiliza los recursos que tiene a mano, formen o no parte de los recursos habilitados por la Constitución Política del Estado, producto de una cultura autoritaria plenamente vigente en su funcionamiento.

La movilización obliga al Estado a negociar; en este momento, la Coordinadora, a diferencia de ciertas demandas maximalistas de la COB de los ‘80 (salario mínimo vital, escala móvil), que constituían consignas de movilización antes que producto de un análisis serio de su viabilidad, se rodeó de un equipo de asesores que analizó en detalle los contenidos de la Ley y el Contrato. En el caso de la Ley, ya existía la Mesa de Trabajo, una agrupación de ONGs y organizaciones campesinas que estaba analizando la Ley de Aguas, cuyos asesores elaboraron junto a la FEDECOR una propuesta de modificación de la Ley 2.029, que fue puesta a consideración de la mesa de negociación. En el caso del Contrato, el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, miembro de la Coordinadora, ya había revisado en detalle los términos de referencia del contrato del proyecto Misicuni y SEMAPA, haciendo conocer sus observaciones desde junio de 1999. Por tanto, los argumentos de la Coordinadora estaban sustentados en el análisis previo de la documentación existente.

Manejo de media y nuevas tecnologías de información

En una época donde “lo que aparece en los media existe”, en estos años de ajuste estructural, los movimientos so-

ciales, con excepciones, apenas si tuvieron acceso a la prensa, debido tanto a que los empresarios paulatinamente cerraron la cobertura a la sociedad civil, como al producto de una adecuada estrategia, particularmente de la COB, para llamar su atención.

Al inicio del conflicto, los movimientos de oposición a la Ley y el Contrato fueron estigmatizados como marginales, el comité de Defensa del Agua o la FEDECOR eran consideradas agrupaciones (y lo eran) minoritarias, parte del “folklore político” de resistencia marginal al modelo. Las acciones periodísticamente “espectaculares”, novedosas para el imaginario local, influyeron indudablemente en una mayor cobertura en la prensa.

La Coordinadora, al tener presencia en los medios de comunicación, aprovechaba para espectacularizar también los hechos:

- *Mostrar públicamente facturas incrementadas, que traían los vecinos.*
- *Llevar a la prensa vecinos pobres que habían recibido facturas incrementadas.*
- *Llevar a periodistas a lugares donde había problemas con el funcionamiento de la red.*

A la vez, la Coordinadora mostró una novedosa utilización de las nuevas tecnologías de información, que anteriores movimientos sociales no habían realizado: uso de fax y correo electrónico para enviar y recibir mensajes, celulares

“Siguiendo una práctica común del Estado frente a los conflictos, el gobierno osciló, dependiendo de la coyuntura, entre negar el conflicto o patologizarlo, es decir, no reconocerlos como actores, producto de la exaltación que hace de las instituciones de la democracia representativa liberal como únicos escenarios para canalizar demandas sociales, y por tanto garantía de vigencia de la gobernabilidad.”

para la comunicación entre los líderes del movimiento (urbano y rural) durante momentos de bloqueos y enfrentamientos con la policía, información en páginas web para denunciar la situación, recuperar información de la web para argumentar en las negociaciones y contar con noticias actualizadas sobre la problemática, redes de solidaridad en la web.... El conflicto del agua en Cochabamba seguramente es la primera revuelta en la era del Internet, en el país.

Comunicación con la gente

En los momentos históricos donde el sindicalismo co-bista, particularmente minero, era más que una organización tradeunionista, el sindicato canalizaba demandas más allá de sus funciones habituales (Escobar, F., 1984). La relación de la Coordinadora con la población recupera esta rica experiencia del movimiento sindical boliviano, utilizan-

do en algunos casos los medios de comunicación. En estas acciones hay un elemento común: la gran capacidad de los representantes de la Coordinadora para escuchar, virtud que a mi juicio se ha perdido entre los dirigentes políticos y sindicales, y que permitió un diálogo con la población, y a la vez ser retroalimentada en sus acciones.

Ejemplos de la comunicación Coordinadora-Población:

- La sede de la Federación de Trabajadores Fabriles, era el lugar donde la población ("el pueblo sencillo y trabajador" como diría Oscar Olivera) llevaba sus quejas: facturas incrementadas, cartas de vecinos (principalmente jubilados) protestando por la situación, señoras que deseaban hacer saber por qué les habían incrementado su tarifa...; algún periodista decía que la sede de la Coordinadora "era un paño de lágrimas".
- Esta misma situación se observaba los martes en la mañana, donde el Comité de Defensa del Agua recibía quejas y protestas ciudadanas.
- En las entrevistas en vivo por TV o radio, la población se comunicaba directamente con los representantes de la Coordinadora para dar su aliento, apoyo o mostrar sus diferencias.
- Cotidianamente los representantes de la Coordinadora asistían a asambleas barriales o comunales para explicar el problema del agua, escuchar sus demandas, y en algunos casos organizar Comités locales de defensa del agua.
- Las concentraciones de la plaza constituyeron verdaderos escenarios de diálogo con la población, pues allí se decidieron muchas acciones futuras.



Oscar Olivera - Foto Thomas Kruse

Alianza Urbano - Rural

En los '90, cuando los campesinos regantes se movilizaban contra la perforación de pozos profundos por parte de SEMAPA, en el valle bajo y central del Departamento, el gobierno logró dividir a la opinión pública urbana contra el movimiento. En este nuevo momento de la "Guerra del Agua", el nivel de movilización alcanzado es producto de la confluencia de intereses entre el área rural y el área urbana en la defensa del recurso hídrico, pues tanto la Ley como el Contrato afectaban, en mayor o menor grado, a ambos sectores.

La Coordinadora logró articular a la población, rural y urbana, principalmente debido a que el acceso a recursos hídricos y sus servicios ambientales afecta a todos, pues como decía una de las consignas de las movilizaciones "el agua es vida"; es decir, la reivindicación del agua como bien público.

Esta articulación de voluntades va más allá del discurso de la "alianza obrera campesina" manejado por la COB en los '80, donde los campesinos mantenían un rol subordinado a las decisiones de la "vanguardia proletaria". A mi juicio hubo un diálogo más horizontal entre el área rural y urbana, buscando proteger los intereses de ambos sectores.

Ética comunitaria

El neoliberalismo, discurso económico para la expansión del capitalismo global, es en el fondo "un programa de destrucción metódica de lo colectivo/comunitario" (Bourdieu, 1999:1), y a la vez una exaltación del individuo como el sujeto por excelencia del modelo. El agua, al ser reivindicada como bien público y manejada según "usos y costumbres", cuestiona este dispositivo de poder, esta forma de subjetivación del individuo (Nash, K., 2000; 24) y reivindica otro tipo de subjetividad, comunitaria/asociativa, y de solidaridad y apoyo mutuo. De esta manera la Coordinadora escarba, directa o indirectamente, una ética comunitaria, de apoyo mutuo (formas de gestión comunitaria del agua, sea riego o consumo humano) y solidaridad, frente a la lógica privatista y mercantilista del modelo, expresado en el Contrato y la Ley.

La Democracia del agua

La privatización promueve un debilitamiento de la democracia local, por tanto el mayor reto en la resistencia a este proceso es el uso de instituciones democráticas locales (Hall, D. y Goudrianan, J. W., 1999). El movimiento de la Coordinadora ha mostrado las debilidades del sistema democrático boliviano. En este sentido, la "Guerra del Agua" ha puesto en tela de juicio el conjunto del sistema político y sus dispositivos de poder.

Ha puesto un signo de interrogación a la forma en que las políticas públicas promueven procesos de participación y concertación, asumiendo que todos los actores involucrados están en las mismas condiciones y relación de fuerzas. En Bolivia definitivamente no existen actores iguales, pues el acceso a la información, recursos económicos, técnicos, influencia en las agencias gubernamentales, no es equitativo ni transparente. El conflicto aparece por tanto como un acto de visibilizar actores no reconocidos por el Estado, y por otro lado obligar al poder dominante a dialogar y llegar a acuerdos.

En segundo lugar, concebir la participación como un procedimiento administrativo de consulta y no un hecho político de toma de decisiones muestra las debilidades de la Participación Popular. La “Guerra del Agua” mostró la demanda de la sociedad civil de asumir un rol protagónico en la toma de decisiones: una ley aprobaba de forma inconsulta, un contrato firmado a espaldas de la sociedad (incluyendo una cláusula de confidencialidad del contrato) influyeron en la magnitud del conflicto.

En tercer lugar, en los tiempos que corren la participación popular se plantea como escenario de conflicto no sólo de concertación: con partidos políticos y municipios corruptos, donde los líderes locales constituyen poderes autoritarios y clientelistas, una moraleja de la Coordinadora es la oportunidad que tiene la sociedad civil de fiscalizar la gestión local; así como se expulsó a una multinacional apadrinada por el gobierno, gracias a un proceso de fiscalización, es posible realizar un seguimiento estricto a los gobiernos municipales y las empresas de servicios básicos, hoy privatizadas.

Si “las recetas que abogan por la privatización del agua, son en realidad una violación de principios porque abogan por un derecho sin límite de explotación del agua... (superando) los límites democráticos, los derechos que tiene la gente” (V. Shiva, 2000), la Coordinadora ha sabido reivindicar “la democracia del agua”, como parte de un proceso por reinventar la democracia (Idem).

■ II. A manera de conclusión

1. El ajuste estructural no es sólo una estrategia de reorganización socioeconómica y política, implica a la vez, en un sentido foucaultiano, un proyecto de “normalización” de la sociedad a través de la difusión de “discursos de verdad” que son internalizados por la población, y bajo los cuales actúa, participa, produce saberes; el mercado y la privatización como medios de gestión más eficientes de los recursos naturales, la gobernabilidad como sinónimo de democracia, los partidos políticos como única forma de mediación política, la partici-

pación como concertación y consenso... son verdades que han sido instituidas en nuestros países durante estos años de apuesta neoliberal. Pero la “Guerra del Agua” de Cochabamba ha visibilizado también otras verdades, otro tipo de subjetividades basadas en una ética asociativa, solidaria, de bien común, pero a la vez diversa y plural, y cuyas pulsiones las encontramos en la veta autogestionaria y comunista de ciertos momentos históricos de la COB. La Coordinadora recupera nuevamente esta ética gracias a que, volviendo a la frase de Olivera del inicio, “los cochabambinos, después de quince años han perdido el miedo...”.

2. Vivimos una era de incertidumbres, el neoliberalismo es la exaltación del corto plazo, pues el mercado así lo define; pero esta lógica, impuesta en países como Bolivia, donde el sistema político está basado en relaciones de poder clientelistas, prebendales, en suma “premodernas”, provoca que la incertidumbre se convierta en absoluta desconfianza del sistema político y sus instituciones, traducida en una escasa legitimidad y representatividad; por el otro lado, la crisis orgánica en la que se encuentra la COB hace que la sociedad civil no tenga un referente organizativo donde apoyarse; en esta coyuntura surge la Coordinadora, producto de la resistencia antes que la creación de un partido político, con una legitimidad social inédita en las luchas sociales bolivianas de los últimos quince años, de ahí también el sentido de la frase de Olivera, “...por primera vez creen en alguien que no les va a engañar”.

3. La Coordinadora, si bien se asienta en las pulsiones insurreccionalistas de la “forma COB”, está pergeñando a la vez rasgos de ruptura con la tradición clasista y centralista de ésta; al mismo tiempo, su desdén por el sistema político vigente y su reivindicación de participación democrática, solidaria y bien común, está orientando los nuevos escenarios y desafíos de la democracia boliviana.

4. Hoy, en Cochabamba existe una gran incertidumbre respecto al desafío de administrar el agua bajo criterios que no estén orientados al lucro, y sí asentados en una visión del agua como bien social, pues los poderes a los que el movimiento de la Coordinadora ha afectado, están buscando aislar, deslegitimar sus acciones, a la vez que existe el riesgo de que sus portavoces y líderes sean cooptados por el poder dominante y el sistema político. De todas maneras, hasta donde ha llegado, el “fenómeno” Coordinadora ha promovido la modificación del espectro político del país: luego de las jornadas de febrero y abril, Cochabamba y el país ya no serán los mismos, y los futuros movimientos sociales en el país tomarán como referente la experiencia cochabambina.

5. El movimiento alrededor de la Coordinadora resume el nuevo perfil de los movimientos sociales que empiezan a tomar cuerpo en Bolivia:

- Vinculadas principalmente con problemáticas de la cotidianeidad de la gente: acceso no equitativo y uso no sustentable de los recursos naturales y los servicios ambientales que éstos prestan, seguridad, flexibilidad laboral, demandas de mayor participación en la gestión local, control democrático en la toma de decisiones, aspectos que afectan a las condiciones socioeconómicas y calidad de vida de la población, y por tanto no tienen necesariamente un contenido “clasista”;
- Movimientos con mayor “flexibilidad discursiva”, es decir, menos relacionados a las posiciones clasistas y obreristas de la COB, y al mismo tiempo mayor heterogeneidad y diversidad en su composición, expresados por tanto en la revalorización de un ética solidaria/de apoyo mutuo, aunque desde la diferencia.
- Incorporación de otras tácticas de presión social, incluidos dispositivos legales, adaptadas a las condiciones impuestas por la impronta de los “media” en la vida cotidiana de la gente.

Oxford, Agosto 2000

■ Bibliografía

BOURDIEU, Pierre (1998) **The essence of Neoliberalism**. Le Monde Diplomatique, December.

CRESPO, Carlos (1999) “La Guerra de los pozos”. El conflicto por la perforación de pozos profundos en Vinto-Sipe Sipe. En **Conflictos Ambientales. Dos casos: agua y territorio**. CERES. Cochabamba.

CRESPO, Carlos (2000) **La “Guerra del Agua”: Nuevos Movimientos Sociales y Crisis de Dispositivos del Poder**. Ponencia al Seminario. PROMIC/IESE/CISO. Cochabamba

ESCOBAR, Filemon (1985). **Testimonio de un militante obrero**. HISBOL. La Paz.

HALL, D and GOUDRIANAN Jan Willeim (1999) **Privatization and Democracy**. Public services International Research Unit. Greenwich.

NASH, Kate (2000) **Contemporary Political Sociology. Globalization, Politics, and Power**. Blackwells. Oxford.

SHIVA, Vandana (2000) Intervención en la 4ta Cumbre de los países P7 “Water a right to life in the 21st Century”. European Parliament, Brussels, 7-10 June.

WORLD BANK (1999) **Bolivia: Public Expenditure Review**. Washington D.C.

■ Notas

1 Mucha gente creía que “la Coordinadora” era una mujer, y por tanto pedían a la “señora Coordinadora” que luche hasta el final, sin traicionar a los cochabambinos.

2 Término utilizado por Thomas Kruse en un debate con los investigadores del CERES sobre la “Guerra del Agua”.



Muita terra e pouco dono. Análise histórico-estrutural da questão agrária no Brasil

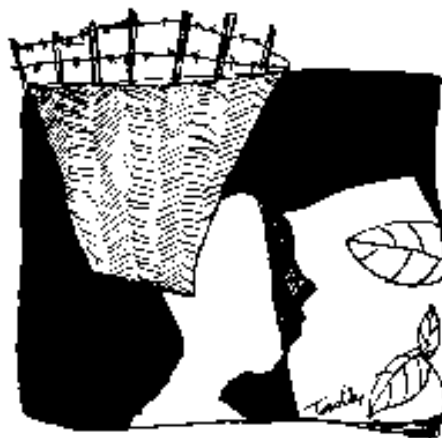
Por Angela Mendes de Almeida*

Como complemento do projeto neoliberal posto em prática nos sucessivos governos de Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1994, a sua política para o campo tem sido um contínuo reforço do histórico e tradicional latifúndio brasileiro. Em documento recentemente publicado¹, o MST descreve essa política como uma tentativa de aplicação de um “modelo norte-americano”: estímulo à implantação de grandes fazendas de grãos, sobretudo no Centro-Oeste do Brasil, visando à exportação; oligopolização do mercado interno agrícola por parte das grandes agroindústrias, na maioria multinacionais; abandono da pequena agricultura familiar, com exceção de um pequeno número de estabelecimentos rurais ligados diretamente às agroindústrias.

Por trás de uma retórica que mal dissimula sua verdadeira intenção meramente propagandística, o governo FHC (como o chamam os brasileiros) continua dizendo, sem muita convicção, que foi quem que mais fez avançar a reforma agrária, na medida em que desapropriou 14 milhões de hectares de terra, o que equivaleria ao território de três Bélgica. Só que durante esse mesmo período, apenas cerca de 3.065 fazendeiros se apropriaram de um território muito maior, 93 milhões de hectares (um deles, uma empresa construtora, tendo abocanhado sozinha 4 milhões). Essa apropriação foi sobretudo feita pelo conhecido processo, tradicional na história brasileira, de “grilagem”².

O governo vangloria-se também de ter assentado mais de 300 mil famílias em mais de 12 milhões de hectares, constituindo isso a sua reforma agrária. Boa parte desses supostos assentamentos nada mais são do que a legalização de terras de “posseiros”, pessoas que, quando ainda havia uma fronteira agrícola para avançar, nas regiões Norte e Centro-Oeste, tomaram posse de terras do Estado mas não se deram ao trabalho de forjar falsos títulos de propriedade.

* Professora aposentada, Curso de Pós Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (C.P.D.A.), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.



Enquanto esses dados são lançados como propaganda governamental, o que se sabe é que nos últimos dez anos desapareceram 942 mil estabelecimentos agrícolas com menos de 100 hectares. Pelos dados atuais do Atlas do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) dos 3.114.898 imóveis rurais cadastrados, ocupando uma área total de 331.364.012 hectares, 62,2% - constituídos de minifúndios - ocupam apenas 7,9% dessa área, enquanto 2,8% - os latifúndios - ocupam 56,7% da área total. Esta é a estrutura fundiária que o Brasil tem hoje, que estruturalmente em nada difere da que sempre teve desde os primórdios da colonização portuguesa.

A dualidade de intenções do governo em relação ao tratamento da política agrícola está expressa na existência de dois Ministérios. Um deles, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, trata da pequena propriedade, dos créditos para ela e dos conflitos de terra que se sucedem invariável e independentemente da presença ou não de movimentos organizados como o MST, a CONTAG e outros. É um ministério tido como voltado para as questões sociais, vale dizer, questões menores para esse governo, questões cuja resolução parcial é feita a conta-gotas e apenas na medida de necessidades impostas por conflitos e manifestações. O outro, o Ministério da Agricultura, cuida exclusivamente da grande propriedade, dos latifúndios

modernizados e voltados para a exportação. E foi este Ministério, e seu respectivo ministro, Pratin de Moraes, que foram convidados a fazer parte da delegação brasileira que iria defender “os interesses brasileiros” na frustrada Rodada do Milênio, que afinal não se abriu em Seattle, em novembro de 1999. Para defender esses interesses o governo brasileiro se enfeudou ao “Grupo de Cairns”, capitaneado pela Austrália, congregando grandes proprietários de terras com agricultura mecanizada ou criação de gado em larga escala. Os “interesses brasileiros” foram portanto reduzidos aos interesses da minoria de proprietários de latifúndios com perspectivas de exportação.



Nessas circunstâncias é fácil compreender porque o campo brasileiro é um barril de pólvora. Desde a instalação dos governos democráticos, em 1985, foram recenseados pela Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja católica, 7.843 conflitos, dentre os quais 4.866 diretamente ligados à luta pela posse da terra. Ocorreram também, nesse período, 1.169 assassinatos de agricultores, sindicalistas, advogados e religiosos, que se traduziram em apenas 56 julgamentos e apenas sete condenações. A certeza da impunidade e a “meia-cegueira” da justiça local, que só enxerga os

interesses dos mandantes dos crimes e dos grandes proprietários, é um constante estímulo, não houvesse outros, para que a violência continue. A ilustração talvez mais escandalosa dessa impunidade foi o julgamento do massacre de Eldorado de Carajás, em agosto de 1999, no qual foram mortos 19 agricultores sem terra. Sob o indecoroso argumento de terem atirado em legítima defesa, os policiais militares foram absolvidos³.

Essa notória preferência do governo pela grande propriedade com vistas à exportação têm sido defendida por alguns de seus áulicos, setores justamente ligados à ação do Ministério da Agricultura, como a única via condizente com a globalização. Segundo esse ponto de vista, a pequena propriedade seria coisa do passado, ultrapassada, sendo que a incrível desigualdade da estrutura fundiária constituiria um pré-requisito importante que o Brasil já teria para entrar na modernidade agrícola. Nesse aspecto, ao contrário de outros em que o neoliberalismo argumentava ter que superar obstáculos e entraves à modernidade, o país já estaria - subentende-se, desde sempre, desde a instalação dos portugueses - preparado para receber a grande propriedade agrícola mecanizada.

Já em relação ao universo dos direitos trabalhistas e à situação do aparelho de Estado, que com todas as suas enormes deficiências, havia sido montado para servir o público, o governo FHC encontrou em seu caminho muitos empecilhos. Dizia, no início, que sua função era a de “acabar com a era Vargas”. A tradução literal disso deve ser entendida da seguinte maneira: era preciso acabar com todos os resquícios daquele Estado nacional que foi instalado no Brasil a partir de 1930 e que, com enormes déficits, esteve sempre voltado para a construção nacional do país e para projetos visando estender os direitos sociais das populações. Era preciso sobretudo acabar com os chamados “privilégios” dos trabalhadores, com os sistemas sociais de aposentadorias e pensões, com os direitos trabalhistas arduamente conquistados de 1930 até 1964, e apenas para os trabalhadores urbanos. Dito de outra maneira, era preciso voltar aos tempos em que o Estado sequer se dizia voltado para o público e em que o capital imperava sobre o trabalho.

A modernidade portanto almejada, sob o argumento de ir para frente, voltava atrás na história, voltava a antes da era Vargas, inaugurada com a Revolução de 30. Queria limpar da face do país a única tentativa de modernizá-lo - modernizar no sentido progressista de humanizar e de estender direitos sociais - tentativa que evoluiu lentamente até ser abortada pelo golpe militar de 1964. É de se notar que todo o progresso da legislação trabalhista restringia-se, até aquele momento, ao mundo urbano. E que um dos grandes argumentos da direita para o golpe militar eram as

chamadas “Reformas de Base” do governo Goulart, dentre as quais se destacava a reforma agrária e a extensão dos direitos trabalhistas ao campo.

Assim sendo o neoliberalismo teve um certo trabalho para eliminar as conquistas sociais dos trabalhadores urbanos, mas no campo deparou-se com uma estrutura fundiária já pronta desde sempre, pela extrema concentração de terras em poucas mãos. Não teve necessidade de voltar atrás e de eliminar “eras”, pois a estrutura permanecera intocada. O Brasil neoliberal reencontrou-se, assim, com seu passado redivivo, agora passível de ser utilizado em prol da modernidade.

Qual é o significado, para o Brasil, dessa estrutura fundiária e de sua história? Até 1930 o país era essencialmente rural, toda a vida econômica e social desenvolvendo-se à volta da economia cafeeira. Depois dessa data o país industrializou-se, porém até às vésperas do golpe militar de 1964 a maioria da população ainda vivia no campo, daí porque a reforma agrária era então uma proposta incendiária.

Porém o que significa dizer-se que o Brasil era rural? Um historiador, cuja interpretação do Brasil já constitui uma perspectiva clássica, Sérgio Buarque de Holanda, definiu, na década de 30, o sistema de exploração agrícola que aqui se instalou com uma “civilização de raízes rurais”, completamente diferente de uma “civilização tipicamente agrícola”. Na “civilização agrícola” predomina a pequena propriedade trabalhada essencialmente pela família, os agricultores, que têm a posse ou a propriedade dos seus instrumentos de trabalho e da terra, alimentam um grande amor pela sua atividade e, por isso mesmo, preocupam-se com o desenvolvimento das técnicas agrícolas. No Brasil a atividade rural avassaladoramente preponderante era a grande propriedade agro-exportadora e monocultora. Quem trabalhava a terra - os escravos - não tinham nem a posse, nem a propriedade da terra, dos instrumentos de trabalho e até de si mesmos. Não podiam alimentar qualquer amor pela atividade de plantar que lhes era imposta sob pena de duros castigos. Quem tinha a propriedade da terra - os senhores rurais - não a trabalhava e não a amava. A terra era de graça: de queimada em queimada, de grilagem em grilagem, abandonavam-se as terras fatigadas e tomava-se posse de outra porção. Tampouco interessava ao senhor rural a implementação de tecnologias porque o braço escravo era farto, o escravo servia ao senhor para tudo. Daí porque, pela sua natureza

perdulária, Buarque de Holanda assimilava a fazenda agro-exportadora, em grande parte, à mineração. Assim sendo, a terra que servia de base para a “civilização de raízes rurais” não tinha valor para nenhuma das classes principais com ela envolvidas⁵.

A atual tentativa de transformar os velhos latifúndios em grandes empreendimentos para a exportação tampouco é novidade na história do Brasil. Outro grande historiador, parâmetro de muitos estudos históricos, Caio Prado Júnior, já havia definido, na década de 40, a fazenda monocultora como uma “empresa”, integrada, desde os primórdios da colonização portuguesa, no ciclo de acumulação mundial de capital comercial. Usando necessariamente mão-de-obra escrava, a propriedade agro-exportadora colocou-se no circuito de compra de escravos e venda do produto monocultor, primeiro o açúcar, depois o café. Se de um lado foram as circunstâncias do momento da acumulação de capital que orientaram o modo de organização da produção rural no Brasil, de outro, uma vez definido esse modo, ele passou a orientar o sentido da colonização e a estrutura social. Classes e sociedade estavam organizadas para a produção para o exterior. A alimentação das populações era pobre porque todos os esforços estavam voltados para fora. Nos momentos de crise de exportação, terras e braços podiam voltar-se para produzir alimento e comia-se melhor⁶.

A estrutura das classes sociais também foi forjada por este modo de organização da exploração agrícola. No topo da pirâmide social os homens com propriedade e suas famílias. Na base a escravaria, sem direito algum. E no meio uma importante camada de população, livre, porém sem propriedade. Como todo o sistema social estava organizado em torno da escravidão e da propriedade de terras e escravos, não havia

espaço social para que o trabalho livre fosse respeitado. O trabalho era um opróbrio, digno apenas para a base escala social, a classe “abjeta” dos escravos. A classe dos homens livres pobres irá constituir, no campo e nas cidades, aquela camada de pessoas que, para existir, trabalhar e conservar-se honrada, devia obter o favor dos senhores rurais. Daí nasceram alguns dos fenômenos mais interessantes da vida mental e material dos brasileiros, entre outros o coronelismo e o mandonismo.

Ao longo da história do Brasil esta estrutura de classes foi sendo conservada - inclusive a instituição do favor dos

“Assim sendo o neoliberalismo teve um certo trabalho para eliminar as conquistas sociais dos trabalhadores urbanos, mas no campo deparou-se com uma estrutura fundiária já pronta desde sempre, pela extrema concentração de terras em poucas mãos. (...) O Brasil neoliberal reencontrou-se, assim, com seu passado redivivo, agora passível de ser utilizado em prol da modernidade.”

de cima como modo de ascensão social - ao sabor de transformações sem mudanças radicais. A Independência nacional, em 1822, foi comandada pelo filho do rei de Portugal, ficando tudo em família. Quando D. Pedro I foi obrigado a abdicar, em 1831, a aliança com a metrópole portuguesa, já então corroída por verdadeiro liberalismo e anticlericalismo, foi rompida, desnudando o apego inabalável das elites ao instituto da escravidão. Quase sete décadas foram gastas para que essas elites, enfim, abolissem a escravidão, em 1888. E quando isso foi feito, os ex-escravos foram abandonados à sua própria sorte, indo constituir o universo do pobres e miseráveis, hoje, os excluídos.

Mas a escravidão permaneceu, para além de sua institucionalidade, como uma segunda natureza dos brasileiros, que incorporaram no fundo de seu subconsciente a desigualdade social como uma marca indelével separando os ricos e os pobres. A idéia de que os indivíduos nascem todos iguais e com os mesmos direitos permanece sendo algo irreal e abstrato em uma nação dividida entre os cidadãos de primeira e de segunda categoria. A desigualdade foi inscrita a ferro e fogo na mentalidade nacional⁷.

Por essa razão, a desigualdade social que faz do Brasil um dos campeões mundiais nesse aspecto, não é enxergada pelos brasileiros. Eles podem ver uma criança sozinha e abandonada na rua, mas não enxergam nisso nenhuma injustiça social. Faz parte da ordem natural das coisas que haja pessoas na miséria, bem ao lado da escandalosa ostentação do consumismo. O miserável não faz parte da mesma nação dos ricos. É preciso que algum organismo internacional publique estatísticas que coloquem o Brasil na última escala do bem-estar social para que a desigualdade seja então enxergada.

Pela mesma razão o incrível desequilíbrio da estrutura fundiária em favor do latifúndio não constitui escândalo. Embora a Constituição Brasileira, defina que “a propriedade atenderá a sua função social”⁸, a mentalidade brasileira está embebida pelos direitos inalienáveis de propriedade que herdou do período escravista. Com base em elementos de uma legislação variada, foi consagrada, a partir do fim do regime militar, a idéia de que apenas o latifúndio “improdutivo” - vale dizer, terras abandonadas - seria passível de desapropriação para a reforma agrária. Esta idéia não leva em consideração que a existência em larga escala do latifúndio produtivo voltado para a exportação desequilibra a política agrária a seu favor, inviabilizando a pequena propriedade. Corrigindo este equívoco está sendo encaminhada, pelo Fórum Nacional pela Reforma Agrária e pela Justiça do Campo, uma campanha por uma emenda constitucional que limite

qualquer propriedade agrícola a 35 módulos fiscais (uma medida que limitaria os estabelecimentos a cerca de 2000 hectares no Norte e no Nordeste, e a 700 no Sul e no Sudeste). Se olharmos o tempo que a escravidão levou para ser abolida, pode-se esperar o resultado dessa campanha para daqui a algumas décadas, a não ser que haja mobilização e conscientização de que esta estrutura fundiária é um escândalo.

Na verdade, onde predomina o latifúndio, predomina a desigualdade entre patrões e trabalhadores sem direitos sociais. O meio-ambiente é devastado pelas necessidades de lucro imediato. O meio social fica rarefeito, desertificado, pela utilização maciça de maquinaria, sem qualquer atenção ao desemprego. A vida rural expressa-se pela exploração e pela humilhação. Já as qualidades mais democráticas da pequena propriedade são evidentes. A solidariedade dos membros da família em torno das condições de trabalho e de produção, o plantio voltado para o consumo da região, a vida girando em torno de uma comunidade de famílias de membros relativamente menos desiguais conformam núcleos sociais densos de humanidade.

Notas

1 “Sem terra, com idéias”, *Reportagem*, São Paulo, nº 10, maio de 2000, pp. 38-42.

2 Trata-se simplesmente de tomar posse de terras pertencentes ao Estado, portanto sem dono, forjando depois em um cartório, um título de propriedade e “envelhecendo-o” ao contacto, em uma gaveta fechada, com grilos.

3 O absurdo era tão grande que os advogados do MST conseguiram que o julgamento fosse anulado.

4 *Rafes do Brasil*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1982, pp. 18-41.

5 Sobre os desdobramentos teóricos dessa distinção, ver Angela Mendes de Almeida, “Notas de leitura sobre uma visão histórica do campo”, *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, São Paulo, nº 40, 1996, pp. 13-29.

6 Caio Prado Junior, *Formação do Brasil contemporâneo*. São Paulo, Brasiliense, 1976.

7 Ver Angela Mendes de Almeida, “Violência e cordialidade no Brasil”, *Estudos - Sociedade e Agricultura*, Rio de Janeiro, nº 9, 1997, p. 130.



O MST e a luta pela reforma agrária no Brasil

Por Bernardo Mançano Fernandes*

■ A formação do MST.

O MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é uma organização social muito conhecida por suas ações, principalmente, por causa das ocupações de terra, de prédios públicos e de enfrentamento com o governo. Por meio dessas ações, o MST tem conquistado a terra e um conjunto de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento socioeconômico dos assentamentos rurais. Dessa forma, os sem-terra vêm se ressocializando e lutando contra a exclusão.

No princípio da formação do MST (1979-1984), os sem-terra construíram suas primeiras experiências, cientes de que eram herdeiros da resistência camponesa. Desde essa época, sabedores de que a questão agrária não mudaria, a não ser por meio de suas ações, esses trabalhadores rurais começaram a construção de um movimento social que se tornaria, na década de 1990, uma das mais importantes organizações sociais do Brasil.

Em janeiro de 1984, fundaram o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na primeira metade da década de 1980, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra – CPT, órgão vinculado à Igreja Católica, os sem-terra se organizaram em cinco estados: Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

No período de 1985 – 1990, o MST se territorializou nas regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e em parte da região amazônica. Territorializar-se significa desenvolver um processo de luta e de conquista da terra, que acontece por meio da ocupação das propriedades que não estão cumprindo com a sua função social. Ao realizarem a ocupação e estabelecerem o acampamento, as famílias criam uma determinada conjuntura política que será modificada por meio de negociações envolvendo sem-terra, latifundiário e governo, entre outras organizações que apóiam a reforma agrária: sindicatos de trabalhadores, partidos políticos etc.

* Geógrafo, professor e pesquisador da Unesp – campus de Presidente Prudente. Coordenador do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária – NERA.
e-mail: bmf@prudente.unesp.br



Para a mudança dessa conjuntura é necessária a negociação política mediada por diferentes forças e interesses. De um lado a reação dos latifundiários por meio da contratação de pistoleiros e pedidos de liminares de reintegração de posse. De outro lado, os sem-terra resistem à reintegração e enfrentam os pistoleiros. Fazem marchas até as cidades, realizam manifestações e ocupam prédios públicos como formas de pressionar o governo na tentativa de uma solução para o conflito. Nesse contexto, os governos federal e estaduais procuram uma resposta para a questão agrária por meio da desapropriação ou compra da área ocupada. Noutras vezes, as famílias são despejadas violentamente pela polícia e ocupam outro latifúndio, de onde podem ser despejadas novamente. Os sem-terra ocupam e reocupam a terra até conquistarem o assentamento.

Desse modo acontece a territorialização da luta pela terra. Cada assentamento conquistado é uma fração do território, onde os sem-terra vão construir uma nova comunidade. A luta pela terra leva a territorialização porque com a conquista de um assentamento abrem-se as perspectivas para a conquista de um novo assentamento. Assim, a cada assentamento conquistado, o MST se territorializa. É exatamente isto que diferencia o MST de outros movimentos sociais e o torna um movimento socioterritorial. Quando a luta acaba na conquista da terra, não existe territorialização. É o que acontece com os movimentos sociais isolados que são criados em diversos estados brasileiros. Os sem-terra organizados no MST, ao

conquistarem a terra vislumbram uma nova conquista. Assim, também dimensionam a luta pela terra em luta pela educação, saúde, moradia, crédito agrícola, cooperação agropecuária etc.

Tal processo tem como ponto de partida e de retorno os trabalhos de base. São reuniões que os assentados fazem com as famílias interessadas em lutar pela terra. Esses encontros acontecem nos bairros rurais, nos assentamentos, acampamentos e nas periferias de diversas cidades de todas as regiões do Brasil: nas escolas, nos salões paroquiais, nos sindicatos etc. Nesses trabalhos são construídos espaços de socialização política, onde são definidas as ações de luta pela terra. Esses trabalhos podem demorar meses ou anos, desde a formação dos grupos de famílias à ocupação de um ou mais latifúndios, os enfrentamentos com jagunços e com a polícia, até as negociações com o governo e a implantação dos assentamentos.

Na década de 1990, o MST se tornou um movimento nacional. Territorializou-se para os Estados do Pará, Mato Grosso, Tocantins e no Distrito Federal, organizando em 23 estados da federação. Desde 1986, o Movimento intensificara as discussões a respeito da organização do trabalho e da produção nos assentamentos. Conhecedores das conquistas e fracassos da histórica luta camponesa e da lógica do desenvolvimento desigual e contraditório do capitalismo, os sem-terra determinaram como princípio do MST: não separar nunca nas lutas pela terra e pela reforma agrária a dimensão econômica da dimensão política.

Na década de 1990, principalmente desde a segunda metade, o MST tornou-se conhecido nacionalmente, bem como em diversos países. Todavia, infelizmente, esse conhecimento foi resultado muito mais dos massacres que os sem-terra sofreram do que necessariamente pela efetivação das reivindicações do Movimento. Em 1995, o massacre de Corumbiara em Rondônia e em 1996 o massacre de Eldorado dos Carajás no Pará, projetaram a questão agrária brasileira e seus principais protagonistas: os sem-terra. Por outro lado, o MST também se tornou conhecido pelas ocupações massivas de terra e pelo processo de ressocialização de parte da população excluída pelo modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária.

De 1995 até 1999, foi o período em que mais se implantou assentamento no Brasil (ver quadro 1). Também foi o período em que mais se ocupou terra no país (ver quadro 2). O crescimento das ocupações aconteceu, principalmente por causa da territorialização do MST. De 1996 a 1998, o número de ocupações cresceu 50% e o número de famílias aumentou 21%. A organização dos movimentos sociais, o aumento do desemprego no campo e na cidade, obrigou o governo federal a implantar uma política de assentamentos rurais. Atendimento das ocupações e do número de famílias é de crescimento. A decréscimo do número de ocupações e de famílias do MST é resultado do acúmulo de famílias acampadas. Em 31 de dezembro de 1999, estavam

Quadro 1 - Brasil - Assentamentos Rurais – 1979 – 1999

Período	Nº Assentamentos	%	Nº Famílias	%	Nº Hectares	%
1979/1994	1.193	27,5	166.378	33,1	8.942.407	37,4
1995/1999	3.180	72,5	337.064	66,9	14.909.812	62,6
Total	4.373	100,0	503.442	100,0	23.852.219	100,0

Fonte: DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela Terra – UNESP/MST. Bases de dados: INCRA-MST-ITESP-CPT.

Quadro 2 - 1996/1999 - Brasil - Número de ocupações e número de famílias - participação do MST

Ano	Nº total de ocupações	Nº total de famílias	Nº ocupações feitas pelo MST	%	Nº famílias vinculadas ao MST	%
1996	398	63.080	176	44	45.218	72
1997	463	58.266	173	38	28.358	49
1998	599	76.482	132	22	30.409	40
1999	249*	29.223*	149**	60	24.519**	83
Total	1709	227.051	630	37	128.504	57

Fonte: DATALUTA: Banco de Dados da Luta pela Terra, 1999. Bases de dados: CPT – MST– INCRA. * até abril. ** até maio.

Procuraram formar a compreensão de que a luta não termina na conquista da terra. Essa é apenas uma fase. Desse modo, organizam simultaneamente a cooperação agrícola e as ocupações de terra, a formação técnica e a formação política. Essa concepção faz com que o MST atue diretamente na formação tecnológica, na educação e se preocupe com a socialização das conquistas com vistas à qualidade de vida dos assentados.

acampadas 67.704 famílias organizadas no MST.

■ **A questão agrária brasileira no limiar do século XXI.**

De fato, o MST vem lutando para transformar a questão agrária brasileira. Todavia, essa mudança é para evitar o pior. O modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária implantado desde os governos militares (1964

– 1984), intensificou a concentração fundiária com a expropriação e a expulsão dos pequenos agricultores. Isso porque privilegiou os produtores capitalistas em detrimento dos produtores camponeses. Com o desenvolvimento tecnológico: mecanização, utilização de insumos agrícolas, aumentou-se a produtividade com a diminuição da área cultivada. Nesse processo ocorreu o crescimento do desemprego no campo e na cidade, tornando-se um problema estrutural. Dessa forma, aumentou o número de famílias sem-terra ao mesmo tempo em que a agricultura capitalista utiliza menos terra. Essa realidade torna impossível evitar as ocupações e tentar segurar a luta pela terra, por mais que os latifundiários desenvolvam discursos afirmando que as ocupações são uma afronta à propriedade privada. Na verdade, quando se faz uma ocupação é a

realizá-la, o governo federal tenta incriminar os sem-terra, criando leis que os condenam se ocuparem a terra. Embora essa tem sido a forma mais eficaz de garantir a condição de vida de suas famílias.

Desde a origem do MST até o ano de 1999, a ocupação massiva da terra tornou-se uma importante forma de acesso à terra. Conforme o quadro 3, observa-se que 77% dos assentamentos implantados nas regiões Sul e Sudeste, nos Estados de Mato Grosso do Sul e Goiás e nos Estados do Ceará, Alagoas, Sergipe e Pernambuco (período 1986-1997), foram originados por meio de ocupações de terra. É por meio dessa ação, que os sem-terra tentam diminuir o processo de exclusão causado pelo modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária e se

Quadro 3 - 1986/1997 -Número de assentamentos segundo a origem

Estado	Origem Ocupação pelos Sem-Terra	Origem Projeto do Governo	Sem Informações
Rio Grande do Sul	159	0	0
Santa Catarina	94	6	2
Paraná	158	22	4
São Paulo	79	4	0
Rio de Janeiro	45	3	0
Espírito Santo	32	3	0
Minas Gerais	80	16	0
Mato Grosso do Sul	22	25	7
Goiás	63	23	31
Ceará	92	89	4
Alagoas	21	7	6
Sergipe	28	12	0
Pernambuco	106	22	0

Fonte: DATALUTA, 1998.

sobrevivência das famílias sem-terra que está em questão.

Por outro lado, o preço da terra vem diminuindo. Nessa conjuntura, a renda da terra também diminui, o que faz com que os latifundiários prefiram vender suas terras para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), porque é um negócio mais vantajoso do que manter a terra, com o risco de vê-la ocupada pelos sem-terra. E, também, para evitar as ocupações, o Governo Federal criou o Banco da Terra, uma maneira de mercantilizar a questão agrária. O fato é que pela inexistência de um plano de reforma agrária, procura-se medidas paliativas. E todas elas implicam em não penalizar a elite agrária, que com a venda das terras transferem seu capital para outro setor da economia.

Por mais que se tente impedir as ocupações, criminalizando-as e considerando-as somente como manifestações políticas, na realidade, o Estado só tem um meio para evitá-las: fazer a reforma agrária – o que é de sua exclusiva competência, conforme a Constituição. Ao não

ressocializam, construindo sua própria existência.

Na realidade, na confrontação entre a exclusão causada pelo modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária e a ressocialização causada pela implantação dos assentamentos resultantes das ocupações ou de projetos governamentais, os sem-terra estão perdendo. A exclusão é maior que a ressocialização. O número de famílias assentadas ainda é menor que o número de famílias expropriadas. A área destinada aos assentamentos ainda é menor que as áreas incorporadas pelos latifúndios, ou seja, continua a concentração fundiária. Até o presente, nem as ocupações dos sem-terra, nem os projetos do governo foram suficientes para mudar a estrutura fundiária.

Esse processo faz parte da lógica de desenvolvimento do capitalismo. Na agricultura, a tendência é de destruição e de recriação do campesinato. Com o desenvolvimento econômico acontece a diferenciação entre estes agricultores: uma pequena parte compra mais terra e contrata trabalho assalariado; uma grande parte empobrece,

perde a terra e vai trabalhar como assalariado; outra parte intermediária tenta se manter entre essas duas condições. Evidente que os sem-terra estão contidos na maior parte.

Dito desenvolvimento além de ser desigual é contraditório. Na região do Pontal do Paranapanema – Estado de São Paulo, por exemplo, alguns pecuaristas arrendam terras para pequenos produtores por um período determinado, para plantarem algodão, mandioca, milho etc., e depois devem entregar a terra com o capim plantado. Ao invés dos proprietários terem que investir para plantar o capim, eles ganham com o arrendamento porque ficam com parte da renda do que foi produzido e tem o replantio do capim sem nenhum custo. Na realização desses arrendamentos, há a recriação do trabalho familiar. Outra forma, de recriação do campesinato é por meio da ocupação de terra, que é a ação que mais tem se intensificado no Brasil.

Frente a essa realidade, o MST resiste e luta para transformar a questão agrária. Mas, diante da atual conjuntura política, é muito mais uma forma de resistência do que de transformação. Sem as ocupações e a conquista da terra, as famílias sem-terra estariam nas periferias das cidades somando-se ao grande número de excluídos.

Por isso, é importante salientar que vem aumentando o número de desempregados urbanos na luta pela terra. No Estado de São Paulo, o MST realizou ocupações de terra exclusivamente com desempregados urbanos lutando contra a percepção que somente devem ser assentados os trabalhadores rurais. Muitas famílias que participam das ocupações sofreram com o êxodo rural das décadas de 1950 até 1980, quando mais de trinta milhões de camponeses migraram para as cidades para trabalharem na indústria e no comércio. Hoje não conseguem emprego e parte dessa população não encontra condições de vida nas cidades. Desse modo, ocupam a terra e muitos trabalhadores urbanos estão se transformando em agricultores familiares por meio das ocupações de terra.

Aimplantação dos assentamentos representa um impacto socioterritorial importante, promovendo o desenvolvimento local. Nessas áreas, os sem-terra constroem sua própria existência por meio da geração de renda e trabalho. Existem várias lutas após a conquista da terra: luta por crédito agrícola, por escola no assentamento, por moradia, por estradas, por transporte coletivo, por energia elétrica, por saúde etc., que levam a melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas. A conquista da terra é condição essencial para o avanço dessa luta pela cidadania. Desse modo, os sem-terra contribuem para o crescimento da agricultura familiar. Assim, derrubam as cercas dos latifúndios e a velha rígida tese que defende o fim do agricultor familiar como tendência

inevitável do desenvolvimento do capitalismo.

Nesta década, o MST criou uma rede de cooperativas em todas as regiões brasileiras e fundou a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil - CONCRAB. Também fundou escolas, criou cursos de educação básica e fez convênios com diversas universidades para realização de cursos de nível superior, para formação técnica e política. Ampliou, dessa forma, sua participação na questão agrária, elaborando estudos que propõem outro modelo de desenvolvimento para a agropecuária. Nesse sentido, avança nas lutas políticas e econômicas, ao mesmo tempo em que sofre ataques de outras instituições, principalmente do governo e dos latifundiários. Na realidade, o que está em questão são projetos políticos de desenvolvimento para o Brasil.

De um lado, o governo e os ruralistas querem manter o velho modelo econômico de exclusão dos trabalhadores. De outro lado, uma proposta que discute a participação democrática dos trabalhadores e um projeto de desenvolvimento da agropecuária e do país. Entretanto, na história do Brasil, a maior parte da população sempre esteve à margem das decisões políticas. A política clientelista controlou essa marginalização sob um discurso pseudodemocrático. Mas todas as vezes que essa população se manifesta, rompendo com concepção de dependência enraizada, o Estado responde com violência e deixa para a mídia construir a idéia de que violentos são os revoltosos. Isso aconteceu com as principais revoltas camponesas, foi assim nas manifestações dos índios e dos sem-terra em Porto Seguro, na semana de 22 de abril de 2.000, quando o governo federal comemorava os “500 anos da descoberta do Brasil”.

Portanto, o MST incomoda as elites. No mês de maio de 2.000, o Movimento sofreu uma dos ataques mais ferozes da mídia e do governo. O governo acusou o Movimento, que ocupou prédios públicos nas principais capitais do país, de “colocar em risco a democracia” e mandou prender várias lideranças. Na verdade, o que está em questão não é a democracia, que também é sustentada pelos movimentos sociais, mas sim um modelo de desenvolvimento econômico que não oferece perspectiva de futuro para os trabalhadores.

Não há como evitar a reforma agrária. Não há como continuar adiando esse processo que se arrasta por séculos. As experiências construídas nesses vinte anos pelas ocupações de terra e pela implantação dos assentamentos são lições que ajudam a projetar um futuro melhor para o campo e, portanto, para o Brasil.

■ Bibliografia

Benjamin, César (Org.) *A opção brasileira*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998.

Fernandes, Bernardo Mançano. *A Formação do MSTno Brasil*. Editora Vozes: Petrópolis, 2.000.

Conflictos sociales rurales en el Brasil contemporáneo

Por Leonilde Servolo Medeiros*

Desde los años '80 los conflictos sociales rurales se intensificaron y dieron mayor visibilidad a la lucha por la tierra, actualizando el tema de la reforma agraria al mismo tiempo que recolocaron la cuestión del rol económico, social y político de los pequeños agricultores. De esta forma, reivindicaciones gestadas en el seno del sindicalismo rural a lo largo de los años '90 (la demanda por un "modelo de desarrollo sustentable en base a la agricultura familiar) así como también en la trayectoria del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (sintetizado en el lema de su último congreso "Reforma agraria: por un Brasil sin latifundios") ocupan un lugar significativo en los debates de inicios del siglo XXI. En un país marcado por una intensa urbanización, los temas agrarios no sólo persisten, sino que son cruciales para la comprensión de algunos *impasse* de la sociedad brasileira.

En este artículo analizaremos algunas de las relaciones existentes entre los temas instalados públicamente por los movimientos sociales en la última década y las propuestas de políticas públicas más recientes.

■ Las luchas por la tierra y la resemantización de la reforma agraria

Durante las décadas del '50, '60 y '70 los conflictos agrarios en Brasil adoptaron fundamentalmente la forma de resistencia: "posseiros", "foreiros", "arrendatarios" se organizaron y resistieron las amenazas de expulsión por parte de los propietarios o pretendidos propietarios de tierra que deseaban retomar el control sobre ésta, ya sea para introducir nuevos cultivos o bien para uso especulativo. En torno a esas luchas se constituyeron las primeras organizaciones de trabajadores rurales en los años '50 (Ligas Campesinas, Asociaciones de Labradores y, a comienzos de los '60, sindicatos) que se articularon en torno a una consigna que unificó las luchas en el campo: "la reforma agraria".

* Profesora del Curso de Pos-graduación en Desarrollo, Agricultura y Sociedad (C.P.D.A.) de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre "Desarrollo Rural".

Traducción realizada por Emilio H. Taddei



A pesar de la fuerte represión que se abatió sobre las nascentes organizaciones de trabajadores rurales después del golpe militar de 1964, las luchas por la tierra continuaron, aunque de forma atomizada, actualizadas por las nuevas condiciones que aparecieron.

Durante el régimen militar el campo brasileiro sufrió profundas transformaciones impulsadas por la política gubernamental de otorgamiento de crédito subsidiado e incentivos fiscales a las grandes unidades: se produjo una intensa modernización tecnológica, nuevas áreas de frontera fueron ocupadas por emprendimientos agropecuarios, se acentuó el éxodo rural, se provocó una transformación radical en los modos de uso de la tierra y en los modos de vida. El proceso de modernización afectó de distinta forma los diversos segmentos que vivían de las actividades agrícolas. Si, en momentos previos, la modernización y la expulsión del campo correspondió a un crecimiento de empleos urbanos, en los años '70 ya comenzaban a aparecer señales del agotamiento de esta posibilidad. El éxodo de las áreas rurales correspondía o bien a alternativas de empleos temporales, sin garantías laborales y marcados por la precariedad en la propia agricultura, principalmente en las grandes plantaciones de caña estimuladas por la política energética gubernamental, o bien al empleo precario en las grandes ciudades, una vez que las transformaciones tecnológicas en el sector industrial y de servicios exigían una mano de obra con cierto grado de calificación.

No casualmente las ocupaciones de tierra se iniciaron, a comienzos de los años '70, en el corazón de la modernización de la agricultura brasilera (el sur del país), llevadas a cabo por los huérfanos de ese proceso: arrendatarios, hijos de pequeños propietarios que ya no tenían condiciones para acceder a la tierra para poder reproducirse, pequeños productores que habían perdido la tierra en virtud de las deudas contraídas. Frente a un proceso de inminente exclusión, desencantados con la alternativa esbozada por el régimen militar de migración hacia nuevas áreas en la región norte del país y con la dificultad de alternativas urbanas, la ocupación de tierras en la propia región de origen fue la salida encontrada por ese contingente. Así, a la lucha de resistencia, característica de las décadas anteriores, se sumaron iniciativas de búsqueda de acceso a nuevas tierras a través de campamentos y ocupaciones de áreas improductivas.

La lucha de resistencia cobró impulso a través de la articulación, en especial en la zona norte del país, de la lucha por la tierra con la lucha por la preservación de las matas nativas, condición para la reproducción económica y social de los que vivían de la extracción, mezclando los trazos tradicionales de la cuestión agraria (resistencia y expulsión) con la novedad de la cuestión ambiental. Es el caso del movimiento de los "seringueiros".

Las ocupaciones de tierra crecieron durante la primera mitad de los '80, se consolidaron con la organización del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra y fueron, por los hechos políticos que crearon y por las presiones que ejercieron, un importante motor de las expropiaciones realizadas a partir de ese momento, en especial después del final del régimen militar en 1985. Al final de los años '80 esa forma de lucha, que hasta entonces se concentraba en el sur del país, inició un proceso de expansión por nuevos espacios, correspondiendo a la nacionalización del MST que ganó expresión nacional y se transformó en el símbolo de la lucha por la tierra. Su inserción en San Pablo se inscribe en este proceso, en especial en la región del Pontal de Panapanema, que comenzó a ser objeto de las acciones sistemáticas del MST a inicios de los '90 y la intensificación de sus acciones en las regiones Norte y Nordeste del país. Las ocupaciones no sólo se tornaron más recurrentes en número, sino también en términos de la cantidad de participantes en las mismas: los diarios pasaron a mencionar ocupaciones con mil, dos mil, tres mil personas que ocupaban tierras de dudosa propiedad, especialmente en los estados de San Pablo, Paraná y Pará. En otras localidades, como es el caso de

las regiones cañeras pernambucana y fluminense, las ocupaciones estuvieron apuntadas a propiedades en quiebra, motivadas por la crisis de las actividades agrícolas tradicio-

nales. Con los altos índices de miseria y desempleo existentes, la posibilidad de acceso a la tierra no sólo facilitaba el reclutamiento de personas dispuestas a ir a los campamentos sino que legitimaba las acciones de los "sin tierra" junto a la opinión pública. En un con-

texto de reducción de las alternativas de empleo, hasta los trabajadores que habían vivido un largo período de experiencia urbana pasaron a engrosar las ocupaciones de tierra, en especial en estados bastante urbanizados como es el caso de Río de Janeiro y San Pablo. Se observa un cambio en el propio público que demandaba tierra.

La constitución y expansión del MST representaron, en relación a experiencias anteriores, no sólo innovaciones en las formas de lucha, sino también en el plano organizativo. En efecto, uno de los trazos más significativos de ese movimiento es la concepción de que la demanda de tierra no se agota en la obtención de una parcela o lote, sino que implica la necesidad de organizar la producción, de obtener créditos con este objetivo, de formar líderes como modo de dar continuidad a las ocupaciones más allá de su lugar de origen. En sintonía con esto se verifica un gran énfasis en la organización de los asentamientos, tanto en el plano local como regional, estatal, nacional, de forma tal de hacer de la lucha por la tierra una reivindicación amplia, capaz de abarcar a diferentes sectores sociales. Ya en el II Encuentro Nacional del MST, realizado en 1989, al lema "ocupar, resistir" formulado años antes, fue adicionado el verbo "producir". En ese momento los asentamientos se transformaron en laboratorios de una serie de experiencias con énfasis en las actividades colectivas, buscando dinamizar la producción y transformarlos en ejemplos de las potencialidades de un proceso de reforma agraria. La estrategia de consolidación del MST implicaba entonces no sólo garantizar la supervivencia económica de los asentados sino también buscar legitimarlos socialmente por medio de la producción. En el marco de esa estrategia pasaron a estimularse formas de producción cooperativa y de beneficiamiento¹, se establecieron rígidas reglas de conducta en el interior de los asentamientos (desde la prohibición de bebidas alcohólicas hasta la reglamentación de la transferencia y la división de lotes), se puso énfasis no sólo en la educación política sino formal (escolarización básica, apuntando a la erradicación del analfabetismo entre los adultos y la preparación de niños y jóvenes) y tecnológica. La educación de niños y jóvenes pasó a merecer

"La constitución y expansión del MST representaron, en relación a experiencias anteriores, no sólo innovaciones en las formas de lucha, sino también en el plano organizativo. En efecto, uno de los trazos más significativos de ese movimiento es la concepción de que la demanda de tierra no se agota en la obtención de una parcela o lote, sino que implica la necesidad de organizar la producción, de obtener créditos con este objetivo, de formar líderes como modo de dar continuidad a las ocupaciones más allá de su lugar de origen."

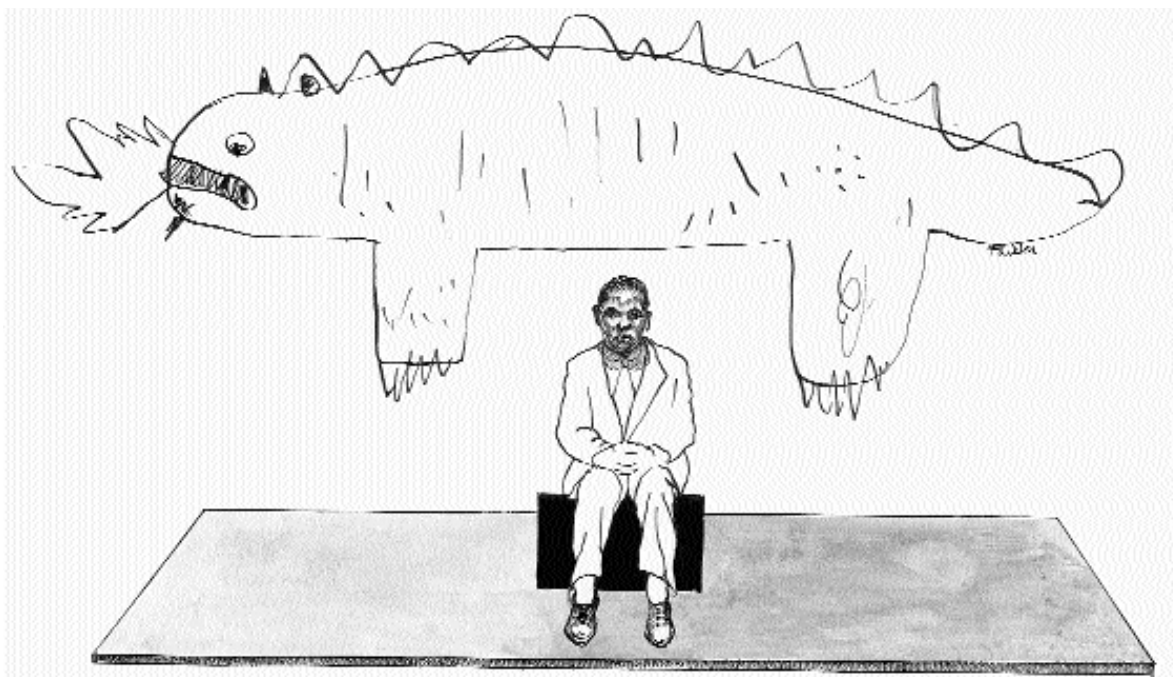
especial atención y también su movilización para la participación en actos públicos, buscando tanto iniciar precozmente la formación de líderes como mostrar a la sociedad la preocupación por la formación de una nueva generación.

La inversión en la viabilización de los asentamientos y la ampliación del radio de acción del MST tienen como sustento una política de formación y “liberación” de cuadros, es decir, el conjunto de los asentados que adhirieron a la propuesta del MST pasó a contribuir para que algunos líderes de relevancia en el asentamiento pudieran trasladarse a otras regiones con el objetivo de organizar nuevas ocupaciones y, de esta forma, nacionalizar el movimiento.

Se conjugan así, como estrategia política, movilizaciones y ocupaciones que involucran un gran número de personas, dando mayor visibilidad a las luchas por la tierra, con un trabajo cotidiano y molecular de reclutamiento de nuevos ocupantes, organización de campamentos, fortalecimiento de los asentamientos y formación de líderes.

A mediados de los años ‘90 el MST decidió difundir el tema de la reforma agraria entre un público más amplio. El lema de su III Congreso Nacional, “Reforma agraria: esa lucha es de todos”, señalizaba el esfuerzo tendiente a mostrar los beneficios para la sociedad de una política de reforma agraria, buscando ampliar su campo de alianzas en dirección a otros movimientos, estudiantes, intelectuales. Además intentó vincular el tema del acceso a la tierra a la problemática del creciente desempleo, mostrando las ocupaciones como una alternativa de supervivencia para aquellos

que estaban siendo progresivamente excluidos del mercado de trabajo. Con esa perspectiva intentó ampliar sus acciones en dirección a las ciudades a través de la realización de manifestaciones públicas que funcionaran al mismo tiempo como rituales solidificadores de la adhesión al movimiento y como estrategia de disputa de espacios en los medios. Un ejemplo de esto fue la organización de la Marcha Nacional por la Reforma Agraria, el Empleo y la Justicia en 1997, que partió de diferentes puntos del país con grupos que se reunían en diferentes lugares previamente establecidos, de forma tal de formar tres grandes corrientes convergentes en Brasilia. La Marcha movilizó en forma directa mil trescientos trabajadores “sin tierra” que representaban a campamentos y asentamientos de todo el país, y se caracterizó por la valorización de lo simbólico: fue realizada a pie en su totalidad por los caminantes, hombres, mujeres, niños calzados con sandalias de suela de caucho y exhibiendo la pobreza. Duró dos meses y ganó espacio diario en los medios, despertando la curiosidad del público y mostrando la otra cara del país, poco conocida en los centros urbanos. Por su propia forma de organización suscitaba el apoyo local en las comunidades por donde pasaba, materializado en ofrecimiento de espacios para armar las carpas, alimentación, ayuda médica. El carácter épico que asumía dramatizaba la demanda de los sin tierra y la transformaba en un espectáculo político, provocando el posicionamiento de diferentes fuerzas sociales. Juntando la cuestión de la tierra con la del empleo, tocaba temas candentes y despertaba simpatía popular. En el momento de su arribo a la capital de la República, en abril de 1997, se transformó en un gran acto público contra el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con



la adhesión de las diferentes fuerzas de oposición, dando aún mayor visibilidad a las demandas del MST².

Evidentemente el proceso organizativo que ha revigorizado la lucha por la tierra en Brasil no ha sido ajeno a la aparición de ciertas tensiones, tanto internamente en los asentamientos, donde la resistencia de los asentados a las formas colectivas de trabajo fue importante, produciendo una flexibilización del modelo, como en las dificultades planteadas por la forma en que se produjo la expansión nacional del MST: a través de la acción de los líderes, en la mayoría de los casos formados en el sur del país, y que poseían una tradición agrícola familiar, con fuertes lazos de solidaridad. Esa trayectoria a menudo era trasladada a regiones donde había una tradición secular de subordinación a la figura de un patrón. El choque de percepciones sobre las formas organizativas y el significado de la tierra fue concomitante a ese proceso, produciendo tensiones en diferentes momentos.

En el contexto de expansión de las acciones y de la visibilidad del MST surgieron iniciativas de otros actores que reafirmaban a las ocupaciones como forma principal de la lucha por la tierra. Por un lado el sindicalismo, tradicionalmente más proclive a la lucha institucional por la reforma agraria priorizando la canalización a través del poder público de las demandas de expropiación, que comenzó a actuar de forma más significativa en ocupaciones de tierra, principalmente a partir del momento en que el MST pasó a disputar sus bases tradicionales, en especial en los estados del Nordeste. Aunque esas ocupaciones fueron focalizadas y en escala inferior fueron políticamente significativas en la medida en que representaron una legitimación de esa forma de actuar, ampliamente cuestionada por el gobierno³. Por otro, el MST comenzó a sufrir divisiones internas y surgieron nuevas organizaciones de lucha por la tierra en diversos puntos del país (MLT, MCC, MT, MLST, etc.)⁴. Más allá de las disputas políticas que esas diferentes siglas connotan, esos movimientos, de carácter más localizado, indicaban la extensión que la lucha por la tierra asumía y la legitimación de las ocupaciones como forma eficaz del acceso a la tierra.

El aumento en la cantidad de ocupaciones y el volumen de ocupantes fue concomitante con el crecimiento de la violencia en el campo, culminando, en el inicio del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con la muerte de un gran número de trabajadores en Corumbiara, estado de Rondônia (agosto de 1995), durante una acción de ocupación; en Eldorado de Carajás, en Pará (abril de 1996), en ocasión de una movilización; y en Pontal de Paranapema, en San Pablo, con el encarcelamiento de importantes líderes del MST. En los dos primeros casos, identificados como “masacres” de trabajadores, llama la atención el hecho de que no se tra-

taba de acciones de milicias privadas sino de fuerzas policiales llamadas a intervenir, confirmando la tesis de Tavares dos Santos y al. (1998) de que una tendencia de la violencia en el campo es el crecimiento de sus formas legales (o sea a través de la acción policial o judicial) y la reducción de la violencia ilegal (a través de la acción de pistoleros y *jagunços*). Ambos hechos tuvieron gran repercusión internacional y fueron varias las manifestaciones de denuncia y protesta en diversas capitales, en especial en el caso de Eldorado de Carajás, una especie de muerte anunciada, por la intensificación de las tensiones en la región, registradas por la prensa nacional a lo largo del año en que sucedió la matanza. Bajo una fuerte presión de la opinión pública, las “masacres” acabaron generando crisis y arreglos políticos en el seno del gobierno.

■ Agricultura familiar

Las manifestaciones de los “agricultores familiares” constituyen un segundo e importante frente de tensión de la sociedad brasileira, aunque no representa el dramatismo expresado por el MST.



A principio de la década del '80, los entonces llamados "pequeños agricultores" comenzaron a constituirse como actores políticos. La emergencia de esa categoría está ligada a un proceso de empobrecimiento de segmentos que fueron en alguna medida beneficiados por la modernización de los años '70. El proceso de mecanización, la integración con las agroindustrias, nuevas formas de relación con los mercados, el endeudamiento, colocaron la "cuestión de la producción" en el centro de sus preocupaciones, paralelamente a la germinación de un conjunto de nuevos liderazgos, con fuerte influencia de la Iglesia ligada a la teología de la liberación (la misma matriz que algunos de los liderazgos del MST), cuestionadoras de la acción de la

"En un contexto de creciente pauperización, jóvenes liderazgos pasaron a conducir movilizaciones marcadas por la práctica de cortes de ruta, manifestaciones en las puertas de los bancos y de organismos públicos, como forma de dar visibilidad a sus demandas relacionadas con los precios mínimos para productos agrícolas, tasas cambiarias, etc. y presionar al Estado para dar una respuesta a las mismas."

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), en relación a las acciones conjuntas con "pequeños productores". En un contexto de creciente pauperización, jóvenes liderazgos pasaron a conducir movilizaciones marcadas por la práctica de cortes de ruta, manifestaciones en las puertas de los bancos y de organismos públicos, como forma de dar visibilidad a sus demandas relacionadas con los precios mínimos para productos agrícolas, tasas cambiarias, etc. y presionar al Estado para dar una respuesta a las mismas. También maduraron propuestas de "toma" de la dirección de cooperativas (en la mayoría de los casos frustradas), alimentadas por la percepción de que los pequeños productores, si bien eran mayoría en su seno, no tenían ningún control político sobre las decisiones que, muchas veces, contrariaban sus expectativas. También fueron creados sindicatos por categorías específicas ("fumicultores", "suinocultores", "apicultores"), orientados a las complejas negociaciones que implicaban a una cantidad significativa de pequeños productores en el sur del país.

En las disputas políticas que recortaban al sindicalismo ese segmento pasó a ocupar lugares de importancia, organizando en el seno de la Central Unica de los Trabajadores. Demandas que existían desde hace mucho tiempo adoptaron nuevos perfiles a través de su reencuadramiento dentro de un diagnóstico de la situación agraria y agrícola del país que los llevó a hablar cada vez más de la necesidad de un "nuevo modelo de desarrollo" y no sólo de políticas específicas de financiamiento. En el armado de esa propuesta fueron muy importantes las actividades de formación y los intercambios internacionales promovidos principalmente por iniciativas de la Iglesia y de organizaciones no gubernamentales. A través de estas actividades, diferentes liderazgos sindicales pudieron conocer y reflexionar sobre experiencias europeas, principalmente las relacionadas con el

apoyo estatal a la agricultura familiar, comprendiendo técnicas de preservación ambiental, combinación de actividades productivas con turísticas, etc. Esos elementos se sumaron al desarrollo de debates en los medios académicos sobre la importancia económica y social de la agricultura familiar; debate que, por medio de la acción de asesorías circuló en el ámbito sindical, poniendo en el centro de la discusión sobre políticas públicas para el campo al "agricultor familiar". Esa categoría rápidamente substituyó, en el debate político y en el lenguaje sindical, el término dominante hasta los años '80 ("pequeño productor"), y viene constituyéndose en una identidad relacionada a las demandas de transformaciones del actual mo-

delo de desarrollo, basado en priorizar a las grandes unidades productivas dedicadas a la exportación. Bajo esta perspectiva, temas antes considerados de menor importancia tales como la discusión de alternativas de comercialización, la experimentación de formas de producción asociadas, el estímulo a la constitución de pequeñas agroindustrias, el significado e implicancias de opciones tecnológicas, las dimensiones ambientales de la producción agrícola, la importancia de la intervención en la política local, pasaron a ser valorizados y a ganar nuevos significados como parte de una propuesta alternativa para la agricultura.

En el proceso de constitución de esa categoría también jugaron un papel esencial los Gritos de la Tierra Brasil, manifestaciones públicas que comenzaron a ser organizadas por la CONTAG a inicios de los años '90 con la finalidad de llamar la atención de la opinión pública y de los gobernantes sobre las reivindicaciones de los trabajadores del campo. Se trataba de dar extensión nacional a eventos de gran repercusión política que se gestaron en el estado de Pará. Traducían un conjunto de demandas de diferentes categorías en una pauta unificada nacionalmente, movilizando trabajadores de diversos puntos del país, con fuerte presencia de las demandas relacionadas a los agricultores familiares. Se constituyeron en un momento importante de formulación y de negociación de demandas con el Estado. Los sindicalistas atribuyen a la fuerza de los "Gritos" una serie de medidas entendidas de interés para los agricultores como es el caso del Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar, línea de crédito destinada tanto a iniciativas relacionadas ya sea con el mejoramiento de la infraestructura (red eléctrica, pozos, rutas, instalaciones agroindustriales de pequeño tamaño, etc.) o bien con el costeo de la producción. De esa forma no sólo se consolida el agricultor familiar como identidad política, sino que también se exacerba la disputa por el encuadramiento formal como tal, una vez que ese reconoci-

miento es una condición para el acceso a esa línea de crédito.

■ Efectos políticos

La presencia en el escenario político de los “sin tierra” y de los “agricultores familiares” fue, en un primer momento, apenas objeto de acciones represivas del Estado y de condenas públicas a las manifestaciones. El aumento de sus acciones y consecuentemente de la visibilidad y fuerza política, con un número de adeptos cada vez mayor, tuvieron como resultado más inmediato iniciativas gubernamentales que, al mismo tiempo que incorporaron algunas de las reivindicaciones, procuraron dar algún tipo de previsibilidad a un conjunto de demandas que se sumaban y que, más que colocar el tema de la tierra y de la agricultura familiar en el centro de los debates, traían a colación importantes impases generados por las opciones en torno a la dirección de las políticas públicas y de la preservación de los intereses ligados al gran capital.

Bajo esa óptica, dos programas dirigidos al campo ganaron importancia en las dos últimas décadas: las expropiaciones de tierra para la realización de asentamientos, que se intensificaron a partir de la Nueva República y ganaron un nuevo impulso en los últimos años, y un programa de crédito destinado a la agricultura familiar.

El Programa de Crédito para la Agricultura Familiar representó una innovación política agrícola brasilera y corresponde a una tentativa de dar viabilidad a agricultores en proceso de empobrecimiento. Fruto de las luchas sindicales, por el volumen de recursos de que dispone, está lejos, sin embargo, de constituirse como un instrumento capaz de viabilizar un “nuevo modelo de desarrollo”.

En lo que respecta a las expropiaciones se verifica la continuidad de la tendencia heredada del régimen militar de centralización de las decisiones referentes a la demanda por la reforma agraria en la esfera federal, predominando la lógica de expropiar áreas en donde existe tensión social con el fin de eliminar tensiones más intensas. Esa lógica explica en gran parte el perfil del mapa de los asentamientos rurales en Brasil: dispersos y localizados a partir de una geografía de conflictos, contrariando la idea de “áreas reformadas”, presente en la legislación agraria y condición de la eficacia de las acciones de apoyo a los asentamientos. Aún forma parte de ese proceso la formación de un cuerpo burocrático-estatal que desarrolló una cultura institucional marcada en un primer momento por la identificación entre reforma agraria y colonización, y luego entre reforma agraria y asentamientos, lo que implica una ausencia de planificación de acciones fundiarias, excepto en lo que refiere a las metas numéricas a ser alcanzadas.

Pese a esos hechos, a lo largo de las dos últimas décadas creció significativamente el número de asentamientos rurales y ocurrieron una serie de cambios en el aparato institucional estatal, mostrando no sólo la importancia creciente de los temas relacionados con la cuestión agraria como la dificultad del Estado brasilero para lidiar con ellos. Así, todavía en el último gobierno militar, fue creado un Ministerio Extraordinario de los Asuntos Fundiarios. Con el fin del régimen militar la cuestión de la tierra pasó bajo la órbita del Ministerio de la Reforma y el Desarrollo Agrario, *locus* tradicional de acción política de los intereses ligados a la propiedad de la tierra y a la gran producción agropecuaria. Ese encuadre permanece a comienzos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, momento en que la intensificación de las tensiones sociales en el campo, de la violencia y de las ocupaciones de tierra, produjo nuevos arreglos políticos. Inmediatamente después de la masacre ocurrida en Eldorado de Carajás, el gobierno creó el cargo de Ministro Extraordinario de Asuntos Fundiarios, colocando nuevamente la cuestión de la tierra bajo control directo de la Presidencia de la República. La continuidad de los conflictos y la necesidad de acciones más intensas hizo que ese ministerio perdiera su carácter transitorio y fuese substituido por un Ministerio de Desarrollo Agrario que agregó a sus atribuciones el tratamiento de las cuestiones relacionadas con los asentamientos rurales y la agricultura familiar. Tales arreglos administrativos revelan una



nueva mirada sobre el tema, cuya síntesis es un documento de 1999 titulado “Agricultura familiar, reforma agraria y desarrollo local para un nuevo mundo rural”.

Uno de los énfasis principales de la política anunciada entonces es la inserción competitiva de los asentamientos en el “mundo de los negocios”, frente a un diagnóstico de poca inserción de las familias en el mercado. La idea fuerza de la propuesta es que la actividad agropecuaria es cada vez más dinámica, tanto desde el punto de vista tecnológico como en relación al comportamiento del mercado, requiriendo agricultores con un comportamiento cada vez más empresarial. Desde este punto de vista debe estimularse la verticalización de la producción a través de una línea de crédito especial, obtenida a través de

la fusión entre el sistema de crédito creado para los asentamientos en los años ‘80 (Programa de Crédito Especial para la Reforma Agraria – Procerá) y el programa destinado a la agricultura familiar (Pronaf). Respecto a los asentamientos, la propuesta del gobierno es emanciparlos rápidamente (en dos o tres años) de manera de transformar a los asentados en agricultores familiares. De esa forma el crédito para los asentados pasa a tener las mismas restricciones del Pronaf, programa cuyo objetivo es afectar una parcela de los productores y no su totalidad. Bajo esa óptica, la propuesta apunta a producir nuevas exclusiones. Enfatizando la productividad y el productivismo, se homogeneiza el tratamiento de los agricultores familiares, negando su potencial de creadores/preservadores de cualquier otro “estilo de vida” que no sea el generado por el “negocio”.

También son formuladas una serie de reglas que formalizan la dimensión contractual de los asentamientos y procuran romper con lo que el gobierno caracteriza como “dependencia de las familias ante el poder público”, derivada, según el Ministro de Desarrollo Agrario, “de la concepción de colonización que se expresa en el compromiso de rutas, energía, salud, educación, crédito, asistencia técnica, vivienda, etc.; típico de una intervención fundiaria en zona de frontera, pero que desde hace décadas no se realiza más en la frontera. El remedio es la definición de reglas contractuales rígidas y claras entre las partes (poder público y asentados), especificando derechos y obligaciones mínimas y el tiempo de su realización” (O Globo, 3/10/98, p. 7). Uno de los aspectos de esta propuesta es la exigencia de contratos, en los cuales queden claras las deudas a ser contraídas por los asentados. Desde este punto de vista la firma del contrato abre las puertas a la cobranza judicial de las deudas asu-

midas en el momento de entrada.

Diversas tareas que eran atributo del gobierno federal (demarcación de los lotes, caminos, habitación) pasan a ser terciarizadas, volviéndose responsabilidad de los asentados.

Otra medida significativa es la introducción de mecanismos de mercado para la obtención de tierras, tendiendo a atraer trabajadores deseosos de acceder a la tierra pero reticentes a los enfrentamientos inherentes a las ocupaciones. En esta perspectiva se plantea un impasse para los movimientos sociales que partici-

pan en la lucha por la tierra. Aunque condenen con vehemencia la medida, es muy común que los dirigentes sindicales reconozcan que “hay filas” de trabajadores buscando informaciones en las sedes sindicales y en las intenciones acerca de cómo

obtener un crédito. Más allá de esta cuña, la lógica del mercado sepulta definitivamente cualquier posibilidad de una reforma agraria planificada, dado que ésta queda sometida a los intereses de los propietarios en vender o no sus tierras.

Uno de los supuestos de las nuevas medidas es que el poder del latifundio fue quebrado en función de los mecanismos de estabilización monetaria y de caída de los precios de la tierra. Sin entrar en una definición de lo que se entiende por latifundio, es importante resaltar que algunas de las propuestas presentadas fueron el resultado de la presión de entidades representativas de los propietarios de tierra. Es el caso de la medida provisoria que impide la inspección de áreas ocupadas y el Banco de la Tierra. Bajo esta óptica el poder de la propiedad queda totalmente resguardado en la medida que la posibilidad de acceso a la misma pasa a depender fundamentalmente del interés del propietario en la venta. En la medida en que se presente como un comprador privilegiado, es muy probable que el Estado pase a funcionar como un activador del mercado de tierras.

Intentando imponer una lógica estrictamente contractual a poblaciones que nunca pautaron sus comportamientos en base a la misma, sino más bien regidos por reglas de reciprocidad, la propuesta tiende a producir frustraciones cuyo resultado a mediano plazo apunta a una intensificación de la exclusión.

En su conjunto estas propuestas van provocando profundos cambios en los espacios y condiciones de diálogo entre el gobierno federal y los movimientos de lucha por la tierra, transfiriéndolos lentamente a espacios locales donde

“En su conjunto estas propuestas van provocando profundos cambios en los espacios y condiciones de diálogo entre el gobierno federal y los movimientos de lucha por la tierra, transfiriéndolos lentamente a espacios locales donde la capacidad de presión de los movimientos es más frágil porque se encuentra atomizada y sujeta a las presiones del poder local.”

la capacidad de presión de los movimientos es más frágil porque se encuentra atomizada y sujeta a las presiones del poder local. Por otro lado, dado que esos caminos no son lineales, el proceso de descentralización en curso, que constituye el eje de la propuesta gubernamental, abre posibilidades interesantes de disputa política en la medida en que pasan por la creación de Consejos Estatales de Desarrollo Rural, Consejos Regionales y Consejos Municipales de Desarrollo Sustentable, con la participación de representantes de las organizaciones de trabajadores. Por ellos pasan decisiones ligadas a las aplicaciones de los recursos. Si bien en algunos lugares esos consejos se revelaron como un espacio de manipulación clientelística, en otros han puesto en discusión y articulado las fuerzas locales en torno al uso de los recursos, dando así más transparencia a los procesos y potencializando las transformaciones.

■ Bibliografía

Concrab. *Concrab: quatro anos organizando a cooperação*. São Paulo, 1996.

Fernandes, Bernardo Mançano. *MST: formação e territorialização*. São Paulo, 1996, Hucitec.

MEPF. *Agricultura familiar, reforma agrária e desenvolvimento local para um novo mundo rural. Política de desenvolvimento rural com base na expansão da agricultura familiar e sua inserção no mercado*. 1999.

Projeto CUT/CONTAG. *Desenvolvimento e Sindicalismo Rural*. São Paulo, 1999, Projeto CUT/CONTAG.

Tavares dos Santos, José Vicente et al. *Conflitos sociais agrários*, Brasília, 1998, Convênio FAO/Inra.

■ Notas

1 Según João Pedro Stedile y Gilberto Portes de Oliveira, líderes del MST, entre 1986 y 1998 ese movimiento organizó más de 70 cooperativas de producción y comercialización, nueve cooperativas centrales, dos de crédito y decenas de pequeñas y medianas unidades industriales (FSP, 22/03/98, p. 1 a 3).

2 La capacidad de organización de la marcha puede ser evaluada por la ausencia de incidentes de cualquier tipo. En la cobertura cotidiana de la manifestación, la prensa dio cuenta de algunos casos de expulsión de trabajadores que violaban las reglas de comportamiento establecidas durante la marcha.

3 Los estados donde ocurrieron prioritariamente esas ocupaciones fueron Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia (gran parte de las acciones en forma conjunta con el Movimiento de Lucha por la Tierra), São Paulo, a partir de la Federación de Asalariados Rurales de São Paulo, entidad sindical no reconocida por la CONTAG y que nucleaba a sindicatos de la región cañera de Ribeirão Preto. Nótese que en los estados donde el MST estaba más consolidado (estado del Sur y Sudeste) no ocurrieron acciones impulsadas por el sindicalismo (Projeto Cut/CONTAG, 1998).

4 La acción de esas organizaciones es muchas veces identificada por la prensa como parte del movimiento de los "sin tierra", sin mucha preocupación en distinguir formas organizativas distintas.



Sem Terra (ainda), mas com muita Educação

Por Attico Inácio Chassot*

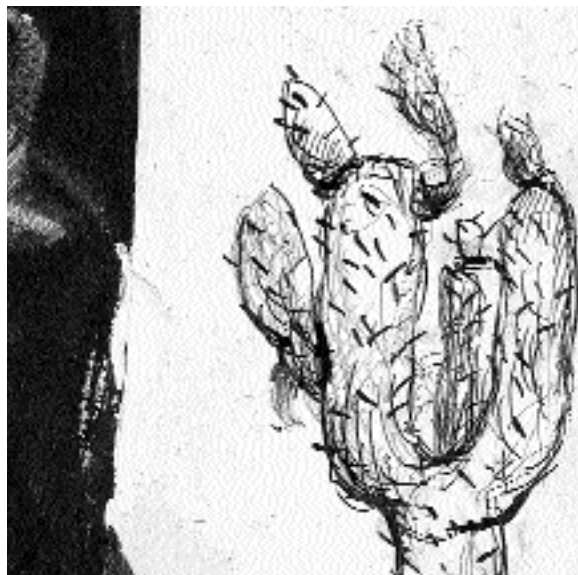
“Se a Educação que os ricos inventaram ajudasse o povo de verdade, os ricos não davam dessa Educação prá gente.”

Neste número do *Observatório Social da América Latina* os leitores e as leitoras encontram artigos que fazem incursões, com acuradas perspectivas, naquele que é hoje no Brasil, indiscutivelmente, o movimento social mais organizado e o que influi no cenário político de maneira mais decisiva que a maioria dos partidos políticos. Assim, não há necessidade de contextualizar, aqui e agora, a história nem destacar a importância atual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: o MST.

Neste texto procuro evidenciar algumas das relações do MST com a Educação. Esta é uma dimensão usualmente não presente no imaginário da maioria das pessoas que ouvem falar do MST – e aqui é preciso enfatizar que o que se conhece é quase só de ouvir falar. E mais, como os autores das falas mais publicizadas são os dos chamados formadores de opinião, usualmente a serviço dos detentores do poder econômico, o matiz conhecido é marcado fortemente por um viés antagônico ao MST. Na tentativa de olhar o quanto a Educação é parte entranhada das ações do MST, proponho mostrar como mudanças sociais ocorrem ao ensejar inclusões na sociedade e aventuro-me a compartilhar também um pouco de meu envolvimento neste fazer Educação.

Quando a grande imprensa usualmente fala do MST, dá destaque às ocupações, sempre mostradas como invasões ou, às incursões a alimentos estocados na busca da mitigação da fome, chamados de saques. Há no noticiário o mascaramento de três dos objetivos fundamentais do MST: terra, implantação da Reforma Agrária e mudanças sociais no Brasil. Às vezes, na imprensa de massa se produz algo sobre o outro lado da medalha, mas isso é muito pouco diante do volume de informações contrárias que são publicadas.

* Licenciado em Química e Doutor em Educação. Professor no Centro de Ciências Humanas e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.
e-mail: achassot@portoweb.com.br
<http://www.attico.chassot.nom.br>



Uma das mudanças sociais mais decisiva para as mulheres e os homens que lutam pela terra são as possibilidades de acesso a Educação (Knijnik : 1996; Caldart : 1997). Para isso o MST mantém entre os diferentes setores de sua estrutura organizacional um Setor de Educação. As ações que envolvem a Educação têm como pressuposto um conjunto de princípios pedagógicos orientadores, apresentados em documentos de ampla circulação entre a militância (MST, 1996, p. 23), que merecem ser referidos aqui para que se conheça a profundidade com que estas ações são vividas:

Relação entre prática e teoria; Combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação; Arealidade como base da produção do conhecimento; Conteúdos formativos socialmente úteis; Educação para o trabalho e pelo trabalho; Vínculo orgânico entre os processos educativos e processos políticos; Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos; Vínculo orgânico entre educação e cultura; Gestão democrática; Auto-organização dos/as estudantes; Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores /educadoras; Atitude e habilidades de pesquisa; Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais.

Assim, as atividades de fazer Educação estão fortemente enraizadas e enraizam todas as ações daqueles que lutam para tornar a Terra produtiva. E é importante reconhecer o quanto há nas mesmas competência e profissionalismo.

Antes de visibilizar algumas realizações do MST na dimensão educacional, parece oportuno referir de fazeres, aparentemente externos ao MST ou talvez onde ele não seja o sujeito das ações. Em um segundo momento contemplo as do Setor de Educação do MST.

Mesmo sem dispor de estudos mais quantificados, parece que se pode afirmar que, em diferentes regiões do país, há uma significativa adesão da comunidade acadêmica às propostas do MST. Essa participação se dá em duas dimensões: por iniciativa pessoal de intelectuais e também por parcerias institucionais. Elas ocorrem tanto entre universidades públicas como entre as particulares.

As iniciativas pessoais são de características muito diferenciadas. Há um número representativo de teses e dissertações, mais acentuadamente nos Programas de Pós-Graduação em Educação que têm como problema de pesquisa as realizações de Educação do MST, especialmente a alfabetização, preservação de saberes e também estudos envolvendo exclusão e inclusão social. As origens destes trabalhos são: a busca de respostas de interrogações dos pesquisadores ou militantes que transformam sua prática em objeto de pesquisa.

Há ainda intelectuais que se envolvem em ações que têm a marca de fazeres comprometidos com a busca da diminuição das desigualdades sociais. Nessa dimensão, intelectuais inquietos com políticas governamentais que trazem marcas do modelo econômico dominante na América Latina encontram nas ações dos homens e mulheres do MST parceiros com os mesmos horizontes. O mundo da Academia tem sido um locus privilegiado, mas ainda sem muita ousadia, na contestação das propostas neoliberais globalizadas.

Mesmo que pareça pretensioso, permito-me contar das emoções que senti na comunidade acadêmica, quando recentemente (julho de 2000), fiz colocar no meu último livro *Alfabetização científica: Questões e desafios para a Educação*² – onde faço uma crítica contundente ao cientificismo que atravessa a sociedade e as escolas,

procurando desconstruir a imagem de uma ciência asséptica e isenta, contrapondo-me ao esquema confortável em que muitos cientistas se colocam ao separar sua produção científica propriamente dita da aplicação de sua produção – esta mensagem: *Os direitos autorais desta edição destinam-se ao Departamento de Educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)*³. Sei de várias pessoas que se sensibilizaram quando viram essa

colocação, não foram poucos que me cumprimentaram efusivamente por isso e outros há que compraram o livro especialmente por isso. Mais que os 100 exemplares (10% dos 1.000 exemplares da edição) que o MST já recebeu e distribuiu o livro em

escolas em vários pontos do Brasil, está a ampliação de sonhos de ajudar numa melhor alfabetização científica dos homens e das mulheres.

Mesmo que traga um exemplo pessoal, ações assim não são isoladas. Há inúmeros pesquisadores que por escolherem escolas de acampamento ou de assentamento para as suas investigações contribuem materialmente em muitas ações (Knijnik: 1995). Mesmo que invoque uma semelhança que tenha ranços criticáveis, vejo nestes homens e mulheres da Academia, os missionários hodiernos.

Há, todavia uma maravilhosa história dentro da história sangrenta da luta pela terra em nosso país que é desconhecida do grande público. Vemos, quase diariamente, páginas tristes narrando embates de brasileiros lutando por condições para poder produzir. Quando se olham os relatos se corre o risco de uma leitura reducionista: a de que estas mulheres e estes homens lutam apenas por um pedaço de terra. Quando se discute a problemática da Reforma Agrária num país de tantos contrastes na distribuição de terras, as questões mais gerais não se deixam mostrar – e, às vezes, são propositalmente escondidas – uma das lutas maiores do MST: a Educação, ou mais especificamente, uma Educação de qualidade para todos.

Esta é uma história que nasce com os primeiros acampamentos, no início dos anos oitenta. Já nos acampamentos – tempo fértil de preparação para a vida nos assentamentos –, ao lado de discutir as questões relativas à forma de produzir, de comercializar, de organizar a própria vida, se busca refletir intensamente os assuntos de Educação. E esta não é pensada apenas na dimensão de se oferecer escola às crianças, mas também e principalmente, de como as mulheres e os homens que passam a se

Esta é uma história que nasce com os primeiros acampamentos, no início dos anos oitenta. Já nos acampamentos – tempo fértil de preparação para a vida nos assentamentos –, ao lado de discutir as questões relativas à forma de produzir, de comercializar, de organizar a própria vida, se busca refletir intensamente os assuntos de Educação.

constituir em uma nova célula de produção podem se tornar, através da Educação, cidadãos e cidadãs mais críticos.

As ações de Educação do MST se fazem presente em 23 do 26 estados do Brasil e acontece em diferentes frentes: educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, formação de educadores (cursos não formais, cursos formais de Magistério e de Pedagogia) e ensino médio na área de formação de técnicos em administração de assentamentos e cooperativas.

As ações não estão centralizadas no oferecimento de educação - isso é de ter escolas, mesmo que o número dessas já seja significativo - mas em lutas pelo direito à educação básica e construção de uma escola voltada às necessidades do campo. As escolas dos assentamentos são escolas públicas. Nos acampamentos também se quer garantir, por primeiro e exclusivamente, a escola pública. No Rio Grande do Sul isto foi conseguido a partir de 1996, com a aprovação pelo Conselho Estadual de Educação da Escola Itinerante dos Acampamentos do MST, que são escolas móveis que acompanham o movimento da luta pela terra.

Para que se possa fazer uma avaliação (com dados de julho de 2000) da dimensão das ações de Educação do MST, bastaria lembrar que em acampamentos e assentamentos de todo Brasil há aproximadamente 150 mil crianças freqüentando as mais de 1.200 escolas ligadas ao MST, isto significa cerca de 3.800 mil professoras e professores do ensino fundamental e 25 mil jovens e adultos com os quais se envolvem 1.200 mil educadoras e educadores. Há, ainda, programas de educação infantil - as *Cirandas Infantis*⁴ - onde se envolvem 250 educadores. Há também diferentes cursos supletivos ou alternativos (estes de ensino médio e fundamental) para capacitar aos homens e mulheres envolvidos na luta pela Reforma Agrária. Centenas de monitores atuando no Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos estão ensinando a ler, escrever e fazer as contas para milhares de pessoas.

Menos que nos impressionarmos com os números acima é preciso que se distinga a qualidade da Educação que se faz. Há ações muito ricas, mesmo que possam ser pobres na forma. É fácil imaginar a precariedade de algumas destas escolas de acampamentos (legais ou não), muitas das quais funcionando nestas verdadeiras cidades de lona preta, que vemos nas margens de rodovias brasileiras. Muitas vezes estas escolas tem uma só peça, onde as crianças das quatro primeiras séries do ensino fundamental estudam juntas com um mesmo professor ou professora. Há outras situações, especialmente onde os assentamentos já têm uma vida mais consolidada, onde a escola é a principal e mais bonita construção da vila, na qual, durante o dia, as crianças têm sua escolarização acompanhada por

professoras e professores que não só receberam uma formação especializada, mas são continuamente assistidos no seu fazer pedagógico pelo Setor de Educação do Movimento.

À noite, usualmente a escola é freqüentada por jovens e adultos que não apenas buscam uma Educação formal, mas procuram se tornar mais capazes naquilo que é específico para as suas lides, e isto inclui uma sólida formação política. A escola de um assentamento geralmente é o grande pólo cultural que nos fins de semana se transmuta em igreja e em centro comunitário, isto é local de recreação e de intensa vivência participativa.

Uma das instituições de ensino mantida pelo MST é o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária - ITERRA em Veranópolis no Rio Grande do Sul - sonhado embrião da Universidade da Terra - que já formou 7 turmas do Curso de Magistério, 7 turmas do Curso de nível médio de Técnico em Administração de Cooperativas/TAC, 1 turma do Curso de nível médio de Técnico em Administração de Assentamentos/TAA e 2 turmas do Curso de Especialização em Administração de Cooperativas/CEACOOOP, este em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e com a Universidade de Campinas (UNICAMP).

Há em funcionamento cinco cursos de nível superior para formação professoras e professores em parceria com cinco universidades (Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul/UNIJUÍ, Universidade Estadual do Mato Grosso e Universidade Federal do Espírito Santo). Hoje o MST já tem parceria com 40 universidades brasileiras, entre essas estão as de mais significativa produção intelectual. A esses dados podem ser aditados já dois grupos (um de 13 e outro de 12 estudantes) que iniciaram em 1999 e em 2000 estudos de Medicina em Cuba.

Para que se tenha uma idéia da importância do Setor de Educação do MST basta referir que o mesmo edita três séries de publicações temáticas especializadas: "*Cadernos de Formação*" onde já foram publicados 19 números, alguns dos quais reeditados em várias edições, algumas das quais em espanhol e "*Cadernos de Educação*" com nove números publicados e "*Boletins de Educação*" com seis números-temáticos publicados. Há ainda três coleções "*Fazendo História*" que já tem 4 títulos, "*Fazendo Escola*" com 2 títulos e "*Pra Soletrar A Liberdade*" com 1 título. Estas bem cuidadas produções levam a cada acampamento e a cada assentamento subsídios para que se faça uma melhor prática pedagógica. Quando são referidas as publicações poderia se alinhar a produção de alguns livros, livretos, álbuns seriados e discos e fitas com músicas de artistas militantes.

Uma das dificuldades para levar as ações do Setor de Educação para todo o Brasil é a extensão territorial do país. Uma das alternativas para superar isso tem sido a realização de encontros nacionais e regionais. Alguns desses mais recentes são: ENERA - Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária; ENEJA- Encontro Nacional de Educadoras e Educadores de Jovens e Adultos do MST; Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, em parceria com CNBB, UNESCO, UNICEF e UnB; ENEFA - Encontro Nacional de Educadoras e Educadores do Ensino Fundamental do MST; Conferência Regional do Centro Oeste, "Por Uma Educação Básica do Campo"; Encontro Estadual dos Sem Terrinha do Rio Grande do Sul⁵.

Muitas destas atividades merecem o reconhecimento externo e por isso tem recebido premiações. As mais recentes são: Prêmio Educação e Participação "Por uma escola de qualidade no meio rural", dezembro 1995, concedido pelo Itaú & Unicef; Prêmio Alceu Amoroso Lima de Direitos Humanos em agosto de 1999, concedido pela Fundação Alceu Amoroso Lima; Prêmio Pena Libertária pela Escola Itinerante, em outubro de 1999, concedido pelo SINPRO/RS; "Por uma Educação Básica do Campo", em novembro 1999, concedido pelo Itaú & Unicef.

É importante destacar que, mesmo que o MST não defenda uma guetização da Educação, ele está muito preocupado com uma escola que responda àquelas que são exigências mais próximas dos sujeitos que recebem as ações desta escola. É impossível deixar de reconhecer, quanto várias das escolas que conhecemos não respondem as necessidades daquelas e daqueles que as freqüentam. Isto me faz acreditar na simplicidade da frase que fiz epígrafe deste texto e que recolhi na escola "Uma Terra de Educar", em Braga e é capitular de uma das seções do livro *Para que(m) é útil o ensino?*: "Se a Educação que os ricos inventaram ajudasse o povo de verdade, os ricos não davam dessa Educação prá gente." Realmente, prefiro crer que a Educação que o MST oportuniza está contribuindo para fazer mulheres e homens mais críticos para que estas e estes sejam mais capazes de interferir na sociedade que estão inseridos e modificá-la para melhor.

Permito-me, como encerramento, ratificar uma vez mais o crédito nesta quase epopéia aqui palidamente narrada. Tenho planos de, ainda por muitos anos, poder emprestar a minha colaboração como educador ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Lamentavelmente, não posso sonhar que a minha colaboração com este fabuloso movimento se encerre com uma certa brevidade, pois parece estar ainda distante o tempo em que o MST deixe de ter necessidade de existir pelo fato de que todos que precisam já tenham acesso à terra e, com esta, também à Educação.

Bibliografia referida

- CALDART, Roseli Salete. *Educação em movimento*. Petrópolis: Vozes, 1997.
- CALDART & KOLLING, Edgar. O MST e a Educação. In: STEDILE, João Pedro. *O MST e a luta pela Reforma Agrária*. Petrópolis: Vozes, 1997.
- CALDART, Roseli Salete. *Pedagogia do Movimento Sem Terra*, Petrópolis: Vozes, 2000.
- KNJINIK, Gelsa. Intelectuais, Movimentos Sociais e Educação. p. 57-81. In: VEIGA-NETO, Alfredo (org) *Crítica Pós-estruturalista e Educação*. Porto Alegre: Sulina, 1995.
- KNJINIK, Gelsa. Intelectuais. *Exclusão e Resistência Educação Matemática e Legitimidade Cultural*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
- MST. *Cadernos de Educação do Movimento Sem-Terra*, nº8. 1996.

Notas

- 1 Uma discussão aprofundada de tais princípios está em Caldart & Kolling (1997)
- 2 CHASSOT, Attico. Alfabetização científica : questões e desafios para a Educação. Ijuí : Editora UNIJUÍ, 2000, 432 p. ISBN 85-7429-145-5
- 3 Por uma questão de justiça, devo creditar essa iniciativa a inspiração que tive em Michael Apple, quando em palestra no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS, no dia 05 de julho de 2000, falou lateralmente da destinação dos direitos autorais de seus livros. Imediatamente acessei a Editora, que já finalizava a obra. Afortunadamente, ainda foi possível aditar a informação, que valoriza minha publicação.
- 4 *Ciranda Infantil* é o nome dado pelo MST a tempos e espaços educativos dos Sem Terrinha da faixa etária de zero a seis anos. Ver nota seguinte.
- 5 Dentre os encontros citados, vale destacar esse, como destaca fica ratificada a construção histórica da categoria *crianças Sem Terra* ou *Sem Terrinha*, denominação não usada com exclusividade para os filhos dos assentados e acampados Caldart (2000), mas que já se constitui um novo sujeito social nas lutas para vencer as desigualdades na realidade brasileira. A realização de um congresso desse grupo social parece ser indicativo dessa condição.
- 6 CHASSOT, Attico. Para que(m) é útil o ensino? Canoas: Editora da Ulbra, 1995, 196p. ISBN 85-85692-13-9.



Assim, as atividades de fazer Educação estão fortemente enraizadas e enraizam todas as ações daqueles que lutam para tornar a Terra produtiva. E é importante reconhecer o quanto há nas mesmas competência e profissionalismo.

Antes de visibilizar algumas realizações do MST na dimensão educacional, parece oportuno referir de fazeres, aparentemente externos ao MST ou talvez onde ele não seja o sujeito das ações. Em um segundo momento contemplo as do Setor de Educação do MST.

Mesmo sem dispor de estudos mais quantificados, parece que se pode afirmar que, em diferentes regiões do país, há uma significativa adesão da comunidade acadêmica às propostas do MST. Essa participação se dá em duas dimensões: por iniciativa pessoal de intelectuais e também por parcerias institucionais. Elas ocorrem tanto entre universidades públicas como entre as particulares.

As iniciativas pessoais são de características muito diferenciadas. Há um número representativo de teses e dissertações, mais acentuadamente nos Programas de Pós-Graduação em Educação que têm como problema de pesquisa as realizações de Educação do MST, especialmente a alfabetização, preservação de saberes e também estudos envolvendo exclusão e inclusão social. As origens destes trabalhos são: a busca de respostas de interrogações dos pesquisadores ou militantes que transformam sua prática em objeto de pesquisa.

Há ainda intelectuais que se envolvem em ações que têm a marca de fazeres comprometidos com a busca da diminuição das desigualdades sociais. Nessa dimensão, intelectuais inquietos com políticas governamentais que trazem marcas do modelo econômico dominante na América Latina encontram nas ações dos homens e mulheres do MST parceiros com os mesmos horizontes. O mundo da Academia tem sido um locus privilegiado, mas ainda sem muita ousadia, na contestação das propostas neoliberais globalizadas.

Mesmo que pareça pretensioso, permito-me contar das emoções que senti na comunidade acadêmica, quando recentemente (julho de 2000), fiz colocar no meu último livro *Alfabetização científica: Questões e desafios para a Educação*² – onde faço uma crítica contundente ao cientificismo que atravessa a sociedade e as escolas,

procurando desconstruir a imagem de uma ciência asséptica e isenta, contrapondo-me ao esquema confortável em que muitos cientistas se colocam ao separar sua produção científica propriamente dita da aplicação de sua produção – esta mensagem: *Os direitos autorais desta edição destinam-se ao Departamento de Educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)*³. Sei de várias pessoas que se sensibilizaram quando viram essa

colocação, não foram poucos que me cumprimentaram efusivamente por isso e outros há que compraram o livro especialmente por isso. Mais que os 100 exemplares (10% dos 1.000 exemplares da edição) que o MST já recebeu e distribuiu o livro em

escolas em vários pontos do Brasil, está a ampliação de sonhos de ajudar numa melhor alfabetização científica dos homens e das mulheres.

Mesmo que traga um exemplo pessoal, ações assim não são isoladas. Há inúmeros pesquisadores que por escolherem escolas de acampamento ou de assentamento para as suas investigações contribuem materialmente em muitas ações (Knijnik: 1995). Mesmo que invoque uma semelhança que tenha ranços criticáveis, vejo nestes homens e mulheres da Academia, os missionários hodiernos.

Há, todavia uma maravilhosa história dentro da história sangrenta da luta pela terra em nosso país que é desconhecida do grande público. Vemos, quase diariamente, páginas tristes narrando embates de brasileiros lutando por condições para poder produzir. Quando se olham os relatos se corre o risco de uma leitura reducionista: a de que estas mulheres e estes homens lutam apenas por um pedaço de terra. Quando se discute a problemática da Reforma Agrária num país de tantos contrastes na distribuição de terras, as questões mais gerais não se deixam mostrar – e, às vezes, são propositalmente escondidas – uma das lutas maiores do MST: a Educação, ou mais especificamente, uma Educação de qualidade para todos.

Esta é uma história que nasce com os primeiros acampamentos, no início dos anos oitenta. Já nos acampamentos – tempo fértil de preparação para a vida nos assentamentos –, ao lado de discutir as questões relativas à forma de produzir, de comercializar, de organizar a própria vida, se busca refletir intensamente os assuntos de Educação. E esta não é pensada apenas na dimensão de se oferecer escola às crianças, mas também e principalmente, de como as mulheres e os homens que passam a se

Esta é uma história que nasce com os primeiros acampamentos, no início dos anos oitenta. Já nos acampamentos – tempo fértil de preparação para a vida nos assentamentos –, ao lado de discutir as questões relativas à forma de produzir, de comercializar, de organizar a própria vida, se busca refletir intensamente os assuntos de Educação.

constituir em uma nova célula de produção podem se tornar, através da Educação, cidadãos e cidadãs mais críticos.

As ações de Educação do MST se fazem presente em 23 do 26 estados do Brasil e acontece em diferentes frentes: educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, formação de educadores (cursos não formais, cursos formais de Magistério e de Pedagogia) e ensino médio na área de formação de técnicos em administração de assentamentos e cooperativas.

As ações não estão centralizadas no oferecimento de educação - isso é de ter escolas, mesmo que o número dessas já seja significativo - mas em lutas pelo direito à educação básica e construção de uma escola voltada às necessidades do campo. As escolas dos assentamentos são escolas públicas. Nos acampamentos também se quer garantir, por primeiro e exclusivamente, a escola pública. No Rio Grande do Sul isto foi conseguido a partir de 1996, com a aprovação pelo Conselho Estadual de Educação da Escola Itinerante dos Acampamentos do MST, que são escolas móveis que acompanham o movimento da luta pela terra.

Para que se possa fazer uma avaliação (com dados de julho de 2000) da dimensão das ações de Educação do MST, bastaria lembrar que em acampamentos e assentamentos de todo Brasil há aproximadamente 150 mil crianças freqüentando as mais de 1.200 escolas ligadas ao MST, isto significa cerca de 3.800 mil professoras e professores do ensino fundamental e 25 mil jovens e adultos com os quais se envolvem 1.200 mil educadoras e educadores. Há, ainda, programas de educação infantil - as *Cirandas Infantis*⁴ - onde se envolvem 250 educadores. Há também diferentes cursos supletivos ou alternativos (estes de ensino médio e fundamental) para capacitar aos homens e mulheres envolvidos na luta pela Reforma Agrária. Centenas de monitores atuando no Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos estão ensinando a ler, escrever e fazer as contas para milhares de pessoas.

Menos que nos impressionarmos com os números acima é preciso que se distinga a qualidade da Educação que se faz. Há ações muito ricas, mesmo que possam ser pobres na forma. É fácil imaginar a precariedade de algumas destas escolas de acampamentos (legais ou não), muitas das quais funcionando nestas verdadeiras cidades de lona preta, que vemos nas margens de rodovias brasileiras. Muitas vezes estas escolas tem uma só peça, onde as crianças das quatro primeiras séries do ensino fundamental estudam juntas com um mesmo professor ou professora. Há outras situações, especialmente onde os assentamentos já têm uma vida mais consolidada, onde a escola é a principal e mais bonita construção da vila, na qual, durante o dia, as crianças têm sua escolarização acompanhada por

professoras e professores que não só receberam uma formação especializada, mas são continuamente assistidos no seu fazer pedagógico pelo Setor de Educação do Movimento.

À noite, usualmente a escola é freqüentada por jovens e adultos que não apenas buscam uma Educação formal, mas procuram se tornar mais capazes naquilo que é específico para as suas lides, e isto inclui uma sólida formação política. A escola de um assentamento geralmente é o grande pólo cultural que nos fins de semana se transmuta em igreja e em centro comunitário, isto é local de recreação e de intensa vivência participativa.

Uma das instituições de ensino mantida pelo MST é o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária - ITERRA em Veranópolis no Rio Grande do Sul - sonhado embrião da Universidade da Terra - que já formou 7 turmas do Curso de Magistério, 7 turmas do Curso de nível médio de Técnico em Administração de Cooperativas/TAC, 1 turma do Curso de nível médio de Técnico em Administração de Assentamentos/TAA e 2 turmas do Curso de Especialização em Administração de Cooperativas/CEACOOOP, este em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e com a Universidade de Campinas (UNICAMP).

Há em funcionamento cinco cursos de nível superior para formação professoras e professores em parceria com cinco universidades (Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul/UNIJUÍ, Universidade Estadual do Mato Grosso e Universidade Federal do Espírito Santo). Hoje o MST já tem parceria com 40 universidades brasileiras, entre essas estão as de mais significativa produção intelectual. A esses dados podem ser aditados já dois grupos (um de 13 e outro de 12 estudantes) que iniciaram em 1999 e em 2000 estudos de Medicina em Cuba.

Para que se tenha uma idéia da importância do Setor de Educação do MST basta referir que o mesmo edita três séries de publicações temáticas especializadas: "*Cadernos de Formação*" onde já foram publicados 19 números, alguns dos quais reeditados em várias edições, algumas das quais em espanhol e "*Cadernos de Educação*" com nove números publicados e "*Boletins de Educação*" com seis números-temáticos publicados. Há ainda três coleções "*Fazendo História*" que já tem 4 títulos, "*Fazendo Escola*" com 2 títulos e "*Pra Soletrar A Liberdade*" com 1 título. Estas bem cuidadas produções levam a cada acampamento e a cada assentamento subsídios para que se faça uma melhor prática pedagógica. Quando são referidas as publicações poderia se alinhar a produção de alguns livros, livretos, álbuns seriados e discos e fitas com músicas de artistas militantes.

Uma das dificuldades para levar as ações do Setor de Educação para todo o Brasil é a extensão territorial do país. Uma das alternativas para superar isso tem sido a realização de encontros nacionais e regionais. Alguns desses mais recentes são: ENERA - Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária; ENEJA- Encontro Nacional de Educadoras e Educadores de Jovens e Adultos do MST; Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, em parceria com CNBB, UNESCO, UNICEF e UnB; ENEFA - Encontro Nacional de Educadoras e Educadores do Ensino Fundamental do MST; Conferência Regional do Centro Oeste, "Por Uma Educação Básica do Campo"; Encontro Estadual dos Sem Terrinha do Rio Grande do Sul⁵.

Muitas destas atividades merecem o reconhecimento externo e por isso tem recebido premiações. As mais recentes são: Prêmio Educação e Participação "Por uma escola de qualidade no meio rural", dezembro 1995, concedido pelo Itaú & Unicef; Prêmio Alceu Amoroso Lima de Direitos Humanos em agosto de 1999, concedido pela Fundação Alceu Amoroso Lima; Prêmio Pena Libertária pela Escola Itinerante, em outubro de 1999, concedido pelo SINPRO/RS; "Por uma Educação Básica do Campo", em novembro 1999, concedido pelo Itaú & Unicef.

É importante destacar que, mesmo que o MST não defenda uma guetização da Educação, ele está muito preocupado com uma escola que responda àquelas que são exigências mais próximas dos sujeitos que recebem as ações desta escola. É impossível deixar de reconhecer, quanto várias das escolas que conhecemos não respondem as necessidades daquelas e daqueles que as freqüentam. Isto me faz acreditar na simplicidade da frase que fiz epígrafe deste texto e que recolhi na escola "Uma Terra de Educar", em Braga e é capitular de uma das seções do livro *Para que(m) é útil o ensino?*: "Se a Educação que os ricos inventaram ajudasse o povo de verdade, os ricos não davam dessa Educação prá gente." Realmente, prefiro crer que a Educação que o MST oportuniza está contribuindo para fazer mulheres e homens mais críticos para que estas e estes sejam mais capazes de interferir na sociedade que estão inseridos e modificá-la para melhor.

Permito-me, como encerramento, ratificar uma vez mais o crédito nesta quase epopéia aqui palidamente narrada. Tenho planos de, ainda por muitos anos, poder emprestar a minha colaboração como educador ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Lamentavelmente, não posso sonhar que a minha colaboração com este fabuloso movimento se encerre com uma certa brevidade, pois parece estar ainda distante o tempo em que o MST deixe de ter necessidade de existir pelo fato de que todos que precisam já tenham acesso à terra e, com esta, também à Educação.

Bibliografia referida

- CALDART, Roseli Salete. *Educação em movimento*. Petrópolis: Vozes, 1997.
- CALDART & KOLLING, Edgar. O MST e a Educação. In: STEDILE, João Pedro. *O MST e a luta pela Reforma Agrária*. Petrópolis: Vozes, 1997.
- CALDART, Roseli Salete. *Pedagogia do Movimento Sem Terra*, Petrópolis: Vozes, 2000.
- KNIJNIK, Gelsa. Intelectuais, Movimentos Sociais e Educação. p. 57-81. In: VEIGA-NETO, Alfredo (org) *Crítica Pós-estruturalista e Educação*. Porto Alegre: Sulina, 1995.
- KNIJNIK, Gelsa. Intelectuais. *Exclusão e Resistência Educação Matemática e Legitimidade Cultural*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
- MST. *Cadernos de Educação do Movimento Sem-Terra*, nº8. 1996.

Notas

- 1 Uma discussão aprofundada de tais princípios está em Caldart & Kolling (1997)
- 2 CHASSOT, Attico. Alfabetização científica : questões e desafios para a Educação. Ijuí : Editora UNIJUÍ, 2000, 432 p. ISBN 85-7429-145-5
- 3 Por uma questão de justiça, devo creditar essa iniciativa a inspiração que tive em Michael Apple, quando em palestra no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS, no dia 05 de julho de 2000, falou lateralmente da destinação dos direitos autorais de seus livros. Imediatamente acessei a Editora, que já finalizava a obra. Afortunadamente, ainda foi possível aditar a informação, que valoriza minha publicação.
- 4 *Ciranda Infantil* é o nome dado pelo MST a tempos e espaços educativos dos Sem Terrinha da faixa etária de zero a seis anos. Ver nota seguinte.
- 5 Dentre os encontros citados, vale destacar esse, como destaca fica ratificada a construção histórica da categoria *crianças Sem Terra* ou *Sem Terrinha*, denominação não usada com exclusividade para os filhos dos assentados e acampados Caldart (2000), mas que já se constitui um novo sujeito social nas lutas para vencer as desigualdades na realidade brasileira. A realização de um congresso desse grupo social parece ser indicativo dessa condição.
- 6 CHASSOT, Attico. Para que(m) é útil o ensino? Canoas: Editora da Ulbra, 1995, 196p. ISBN 85-85692-13-9.



Documentos del Conflicto

La “Guerra del Agua” en Cochabamba - Bolivia

*Comunicado de la “Coordinadora del Agua”
al cabo de las movilizaciones de enero de 2000*

COD, FEDECOR, FTFC, FDTEUC, PROFESIONALES, FSTCC Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y de la Vida

“Los bolivianos jamás hemos tenido alma de esclavos”

■ Comunicado No. 6

La Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y de la Vida hace conocer a todos los valerosos hombres, mujeres y niños que con esfuerzo, sacrificio y valentía sostuvieron el Gran Bloqueo por la Dignidad Civil, el siguiente balance del movimiento:

1. Nuestra combativa y compacta movilización ha sido un triunfo; el primer triunfo en la dura y larga pelea por defender los intereses del pueblo sencillo y trabajador contra las imposiciones y negociados del mal gobierno de empresarios y politiqueros.

2. A lo largo de todo el movimiento se ha mostrado la enorme fuerza y unidad de la Federación de Regantes (FEDECOR) y Comités de Agua Potable de las provincias organizada en toda la zona rural. Esta organización ha sido y será la columna vertebral de las siguientes movilizaciones. En el Cercado, si bien los bloqueos en amplias zonas populares fueron igualmente contundentes, tuvieron la debilidad de estar dispersos. Ha sido decisiva la participación de los compañeros de la Federación del Autotransporte, particularmente de TRANSPECO, quienes en todo momento trabajaron por la unidad del pueblo de Cochabamba y participaron decididamente en el refuerzo del Bloqueo.

3. En las zonas urbanas, las fuerzas movilizadas fueron básicamente los hombres y mujeres organizados en torno a varias Juntas Vecinales y a los Comités Urbanos de Agua Potable creados en los barrios para conseguir acceso al agua y dispuestos a defender lo que es enteramente suyo. La Coordinadora llama a todos los Comités de Agua Potable a registrarse en la Coordinadora de Defensa del Agua (la Sede funciona en la Federación de Fabriles, Plaza Principal, y en la Sede de la Federación de Regantes -FEDECOR-, Calle Uruguay N° 648), para que las siguientes movilizaciones puedan realizarse de manera más organizada y contundente.

4. En relación al convenio con el autodenominado gobierno boliviano, expresamos lo siguiente:

- Los puntos principales exigidos por los Regantes y los Comités de Agua Potable están contenidos en el Convenio: todos los pozos, infraestructura de riego y fuentes de agua (aguas subterráneas, lagunas, ríos-tajamares, vertientes), quedan fuera de la intervención de Aguas del Tunari y somos nosotros quienes seguiremos utilizando y decidiendo sobre el Agua según nuestros usos y costumbres.

- Dado que el gobierno se ha comprometido a revisar, modificar y complementar la Ley de Agua Potable, y a consensuar la futura Ley del Recurso Agua de acuerdo a usos y costumbres, según el Convenio firmado para levantar el Bloqueo, tenemos una importante tarea en conjunto, Asociaciones de regantes, Comités de agua, vecinos, trabajadores y pueblo en general. La tarea de todos es que estas leyes expresen los derechos de las organizaciones de los Regantes y los Comités de Agua, y que consoliden la seguridad jurídica de los derechos ya existentes. Las Asociaciones de regantes y Comités de Agua Potable deben estar discutiendo los nombres de las personas que conformarán las comisiones para la modificación de la Ley de Agua Potable y para la futura Ley del Recurso Agua; y para sacar del Contrato con Aguas del Tunari todos los puntos que perjudican al Valle Central y al Valle de Sacaba.

- En relación a la ciudad, el problema del engañoso contrato con Aguas del Tunari está pendiente y el tarifazo solamente se ha postergado y ha de ser discutido por una Comisión. Por eso mismo, todos los cochabambinos y cochabambinas, especialmente los de la ciudad, necesitamos estar en apronte, fortaleciendo la nueva organización popular en torno a los Comités Urbanos de Agua Potable que nos ha de permitir triunfar también en la segunda batalla contra los abusos de Aguas del Tunari y sus aliados del gobierno.

5. Después de muchos años, el pueblo cochabambino ha dicho BASTA, se ha levantado y ha obtenido un primer triunfo. En esta ocasión, el movimiento no ha sido dirigido ni por politiqueros, ni por partidos, ni por irresponsables: la gente humilde y trabajadora, todos nosotros hemos discutido, hemos decidido y hemos ejecutado. Esta experiencia de Asambleas constantes, de reuniones permanentes y de confianza colectiva es nuestro principal recurso para defender lo que es nuestro. En este movimiento se ha mostrado que cuando el pueblo todo se levanta no existe lugar ni para tibios ni para irresponsables.

Cochabamba unida, Cochabamba victoriosa

15 de enero de 2000

*Comunicado de la “Coordinadora del Agua”
al cabo de las movilizaciones de febrero de 2000*

Coordinadora Departamental por la Defensa del Agua y de la Vida

■ **¡Y... EL AGUA SIGUE SIENDO NUESTRA!**

La Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y de la Vida al terminar la segunda batalla de la larga lucha por el agua y la vida, expresa lo siguiente:

1. Pese a que el mal gobierno lanzó a criminales vestidos de policías a aplastar la voz de la población de Cochabamba, instruyendo reprimir una marcha pacífica programada para el viernes 4, la multitud, los cochabambinos y cochabambinas de la ciudad y el campo, ahora sí, unidos en una sola voz, en un solo cuerpo que resiste, hemos hecho parar la masacre que estaba preparando el carnicero Guiteras.

¡Las piedras han derrotado a los gases y balines! ¡La dignidad de los ciudadanos derrotó la cobardía de mediocres y corruptos funcionarios gubernamentales! ¡La solidaridad venció la intriga! ¡Hemos perforado la cínica defensa gubernamental de los negociados de unos cuantos empresarios! Entramos a la Plaza tras dos días de batalla tal como dijimos, jubilosamente, para decir que Cochabamba no se rinde, que el Agua no está en venta, para recuperar la palabra, la democracia; en fin, para mostrar que en relación al agua, somos nosotros los que decidimos y que no estamos dispuestos a someternos a lo que digan ministros, empresarios e instituciones financieras internacionales. Eso es lo que esforzada y decididamente hizo la población cochabambina de la ciudad y el campo, acompañada por nosotros.

2. Por otro lado, la Coordinadora saluda la masiva respuesta de la población de la ciudad que ahora sí, de manera contundente, se ha volcado a la calle a defender lo que es suyo. En esta oportunidad, regantes, organizaciones provinciales, campesinos y cocaleros, se lograron fundir con una gigantesca cantidad de vecinos y vecinas, comerciantes, trabajadores y población urbana sencilla y luchadora para enfrentar la brutalidad policial, para resistir a los gases y para avanzar en la lucha por el Agua, que no ha terminado pero sin lugar a dudas se ha reforzado.

3. En esta batalla hemos conseguido lo siguiente:

- Congelamiento de las tarifas al mes de octubre. Esto es, EL TARIFAZO YA HA QUEDADO SIN EFECTO, cualquier incremento estará en función de las posibilidades de la gente. Sin embargo, esto no cubre todos los objetivos que tenemos: nosotros rechazamos el contrato de concesión con Aguas del Tunari y seguimos en apronte para que se modifique sustancialmente.

- En relación a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario se ha conseguido la seguridad jurídica de los usos y costumbres de los sistemas de agua potable y riego de las cooperativas, comités y asociaciones del área rural y urbana. Esto significa que ya no habrá monopolio en la concesión de aguas y que se reconoce legalmente la existencia y autoridad de las iniciativas que la población ha tomado, por cuenta propia, para dotarse y gestionar el agua. En este punto, los cochabambinos y cochabambinas hemos preparado las condiciones para que la lucha por el agua adquiera el carácter nacional que le corresponde; ya que en todas partes existen sistemas de riego y consumo de agua basados en prácticas tradicionales que están siendo agredidos por la privatización y dolarización que permitía la Ley de Agua Potable antes de la lucha.

- En tercer lugar, se reafirmó la voluntad de toda la región de llevar adelante el proyecto múltiple Misicuni, pero esto no se hará a expensas y a espaldas del pueblo como se hizo con la concesión a Aguas del Tunari que fue avalada por el silencio cómplice de políticos, autoridades y dirigentes cívicos. La población cochabambina unida como está hoy, obligará a los gobernantes a que Misicuni realmente sea en beneficio de los ciudadanos y que sus costos sean reales y no inflados.

- El otro gran logro de esta movilización es que perdimos el miedo. Salimos de nuestras casas y de nuestras comunidades para hablar entre nosotros, para conocernos, para aprender nuevamente a confiar unos en otros. Ocupamos las calles y los caminos porque somos los verdaderos dueños. Lo hicimos en base a nuestra propia fuerza. Nadie nos pagó, nadie nos dio ficha ni nos multó. Para nosotros, población trabajadora de la ciudad y el campo, este es el auténtico significado de la democracia: decidimos y hacemos, discutimos y ejecutamos. Arriesgamos la vida para cumplir lo que nos proponemos, lo que consideramos justo. Democracia es soberanía del pueblo y eso es lo que hemos hecho.

El 4 y 5 de febrero marcan un hito más en la historia de la lucha social de Bolivia. Los gobernantes han temblado y han tenido miedo. La gente sencilla hemos peleado y hemos celebrado. No podemos bajar la guardia ahora, el camino de unirnos, de confiar, de dialogar entre nosotros, de ocupar las radios y convocarnos unos a otros, de organizarnos y pelear, ha empezado.

5. Esta batalla la hemos ganado. Después de 15 años estamos disfrutando el júbilo de un triunfo. Sin embargo, falta mucho. No podemos confundirnos, hemos ganado sólo una batalla y sobre esa fuerza hay que seguir avanzando. Son varias las tareas para los próximos días:

- Fortalecer las organizaciones de base que forman parte de la Coordinadora como los Comités urbanos y rurales de agua potable, las asociaciones de regantes, las brigadas de jóvenes combatientes que tan valerosamente mantuvieron a raya a la policía durante dos días.
- Continuar entendiendo y discutiendo la temática del agua en Asambleas de barrios y comunidades. Asimismo llevar esta voz cochabambina de esperanza y de lucha a todos los rincones del país porque el cambio de la Ley 2.029 compete a todos los bolivianos.
- Exhortamos también, a la valiente población que luchó estos dos días sacrificadamente, a que pida cuentas a los dirigentes que han mostrado posturas ambiguas. No necesitamos en estos momentos, ni tibios ni irresponsables. Necesitamos dirigentes respetuosos de las bases, que escuchen y conduzcan, que no se vendan y que no se asusten.

Cochabambino, Cochabambina, la sangre derramada, los esfuerzos realizados, los gases y balines soportados y resistidos han valido la pena. Hemos ganado otra batalla y hay esperanza, hay futuro, hay vida.

Cochabamba, 6 de febrero de 2000

*Fragmento de la Denuncia enviada por la “Coordinadora del Agua”
a los Organismos de Derechos Humanos frente a la represión y
detención de dirigentes de la misma en los primeros días de abril de 2000*

Cochabamba, 8 de abril de 2000

■ Denuncia de secuestro de dirigentes de la Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y la Vida.

La ilegalidad de esta represión del gobierno se produce en el contexto de la lucha del pueblo de la ciudad de Cochabamba y de los campesinos regantes de los valles circundantes por una administración honesta del servicio de agua potable y por una ley de agua potable y alcantarillado que respete el derecho de los grupos sociales a administrar con autonomía sus recursos hídricos.

Como usted sabe, los antecedentes de la represión actual ocurrieron los días 13 y 14 de enero y, con mayor brutalidad, los días 4 y 5 de febrero de este año, cuando fuerzas policiales reprimieron salvajemente a la población cochabambina que expresaba su decisión de no pagar incrementos desmesurados de la tarifa de agua.

La protesta ciudadana del 4 y 5 de febrero concluyó con la firma, por parte del gobierno, la brigada parlamentaria y las instituciones cochabambinas, entre ellas la Coordinadora, del Acuerdo por Cochabamba, garantizado por Monseñor Tito Solari y José Luis Baptista, representante del Defensor del Pueblo, acuerdo que establecía 30 días de plazo sin movilizaciones para negociar soluciones a los temas del incremento tarifario, contrato con la empresa Aguas del Tunari, modificación de los artículos de la Ley 2.029 de Agua Potable y Alcantarillado que atentan contra los derechos de usuarios y regantes, y análisis técnico del proyecto múltiple Misicuni.

Las negociaciones, realizadas por cuatro comisiones encargadas de los temas específicos mencionados, avanzaron en el tema de la Ley 2.029, pero se atascaron en los otros tres asuntos. Entre febrero y marzo, los cochabambinos se enteraron de que el contrato con Aguas del Tunari es escandalosamente lesivo a sus intereses, de que este contrato tiene cláusulas confidenciales, de que la empresa no tiene capitales registrados, no ha invertido ningún dinero según es su obligación contractual, y de que importantes empresarios-políticos del MIR, ADN y MNR son accionistas de la empresa consorcio.

Mientras el período de negociación se cumplía superabundantemente, la Coordinadora organizó, el 26 de mayo, una Consulta Popular, en la que aproximadamente 50 mil ciudadanos cochabambinos rechazaron el alza de tarifas, exigieron la rescisión del contrato de concesión con Aguas del Tunari, y rechazaron la privatización del recurso agua. El día martes 4 de abril, dos meses después del Acuerdo por Cochabamba, la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida convocó a ciudadanos y campesinos a bloquear calles y caminos para presionar al gobierno y solucionar el problema. La respuesta de la población fue masiva, organizada y militante: el bloqueo paralizó la ciudad, los valles cercanos y aun zonas rurales distantes.

Inicialmente, el gobierno no quiso negociar, pero la fuerza de la movilización popular lo obligaron a hacerlo el jueves 6. A las diez y media de la noche del jueves, cuando los representantes de todas las instituciones importantes de Cochabamba (Alcaldía Municipal, empresarios

privados, Comité Cívico), reunidos en la Prefectura, aceptaron como suyas las demandas de la Coordinadora de rescindir el contrato con Aguas del Tunari y de exigir la modificación acordada de la Ley 2029, fueron apresados a traición, por orden, aparentemente, del viceministro Orias, presente en la misma Prefectura. Monseñor Solari se declaró preso en solidaridad con los dirigentes. A las 4 de la madrugada del viernes 7, los dirigentes fueron liberados.

El día viernes 7 de abril, ante la noticia de este abuso, la población de Cochabamba reaccionó masivamente, reforzando los bloqueos ciudadanos y rurales, y ratificó su apoyo a la Coordinadora concentrándose en la plaza 14 de Septiembre para exigir una pronta solución del problema. A la tarde, en un clima de total consenso de los cochabambinos con las demandas de la Coordinadora, las instituciones mencionadas se reunieron con la oficialistas también decidieron que la solución era la aceptación de las demandas de la Coordinadora. Entonces, el prefecto Hugo Galindo comunicó a Solari que “más vale romper un contrato que perder vidas de cochabambinos” y le dijo que una autoridad competente del gobierno le garantizaba la cancelación del contrato con Aguas del Tunari.

A las cuatro y media de la tarde del 7 de abril, luego de haber transmitido Solari este compromiso del Prefecto a los dirigentes de la Coordinadora y las instituciones cochabambinas, el pueblo, la gente reunida en los alrededores de la plaza 14 de Septiembre, que sumaba probablemente más de 50 mil personas, empezaron a festejar el triunfo de la mitad de sus reivindicaciones: la salida de Aguas del Tunari. La Coordinadora difundió su decisión de levantar los bloqueos en un cuarto intermedio hasta el lunes 10, a la espera de la aprobación en el Parlamento de las modificaciones a la Ley 2.029. A las siete de la noche, el arzobispo Solari celebró una misa de regocijo en la catedral.

Pero a la salida de la misa, en la puerta misma de la iglesia, la policía atacó a los fieles asistentes con gases lacrimógenos. Después ocurrieron, entre otros asaltos y abusos, los que denunciarnos en la primera parte de esta carta.

Nosotros, dirigentes de la Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y la Vida que no hemos sido apresados, le comunicamos que, obligados por la decisión unánime e inquebrantable del pueblo de Cochabamba de seguir luchando hasta lograr sus exigencias, hemos instruido, desde la clandestinidad, la reinstalación de los bloqueos en todas las cuerdas de la ciudad y en todos los puntos necesarios de carreteras y caminos en el campo.

En este contexto de fuerza y abuso desatados por el gobierno y de resistencia popular generalizada contra el estado de sitio, vigente en los hechos sino decretado ya, serán inevitables mayor represión y violencia. Por esto, le pedimos que haga lo posible por interponer su voz de autoridad moral para así frenar la violencia abusiva del gobierno contra los cochabambinos.

Le urgimos a que se ocupe de este caso flagrante de violación de los derechos humanos de las personas por parte del gobierno, le pedimos que exija garantías para nuestra seguridad y libertad personales, y le instamos a que facilite la documentación de este abuso para luego juzgar y sancionar a sus responsables, los funcionarios de gobierno encargados de la represión. Le pedimos que averigüe el paradero de los dirigentes secuestrados y que gestione su libertad. Consideramos que la implantación del estado de sitio, de la cual no tenemos aún confirmación, no justifica el presente abuso de la libertad de nuestros compañeros dirigentes de la Coordinadora ni el desconocimiento y pisoteo de la voluntad de todo el pueblo de Cochabamba, que sólo quiere agua y vida.

Le agradecemos su atención y preocupación.

Carmen Peredo Montaña
Representante Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y de la Vida

El Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil

BALANÇO DA REFORMA AGRÁRIA EM 1999

1999: UM ANO DE MUITA PROPAGANDA E REPRESSÃO E POUCA REFORMA AGRÁRIA

Apresentamos a seguir um balanço do que aconteceu durante o ano de 1999, em termos de realização da reforma agrária no país. Infelizmente o balanço é negativo. O governo, cada vez mais comprometido com um modelo econômico concentrador, abandonou de vez a reforma agrária. Apela apenas para os conselhos do Banco Mundial e para a propaganda para iludir a opinião pública.

Vejam a seguir os principais elementos desse balanço.

1. O modelo econômico:

Durante o ano de 99 se evidenciou para a sociedade brasileira a verdadeira natureza do modelo econômico adotado pelo Governo FHC (do Presidente Fernando Henrique Cardoso), com a crise cambial de janeiro e a crescente dependência e vulnerabilidade a que está submetida a economia brasileira. Nessa economia subordinada apenas aos interesses do capital internacional – representado pelas empresas multinacionais, pelo capital financeiro especulativo e pelos grandes bancos – não há mais espaço para uma economia nacional, voltada para o mercado interno e para as necessidades básicas da população. O Brasil virou apenas um cassino do capital internacional que vem aqui para obter o maior lucro possível.

2. A crise da agricultura brasileira:

Subordinada a esse modelo econômico, a agricultura como um todo, e em especial a agricultura familiar, continua enfrentando a pior crise de toda sua história. A área cultivada continua diminuindo. A produção está estagnada há 10 anos e a renda dos agricultores continua caindo. Apenas ganham dinheiro os que se dedicam à exportação. E o resultado é de que nos últimos dez anos, registrados pelo censo agropecuário, cerca de 942 mil estabelecimentos com menos cem hectares desapareceram. E o mercado passou a ser abastecido pelo comércio mundial controlado pelas multinacionais e passamos de um bilhão para oito bilhões de dólares gastos com importações de produtos agrícolas.

3. A estratégia do governo para a reforma agrária:

Diante do modelo econômico adotado e da falência da agricultura nacional voltada para o mercado interno, em especial a agricultura familiar, como se poderia imaginar que o governo adotaria a estratégia de, de fato, distribuir as grandes propriedades? E imaginar que realizaria a reforma agrária? Se a reforma agrária está casada com a distribuição de renda na cidade (e continua havendo cada vez mais concentração), com o mercado interno e com o fortalecimento da agricultura familiar.

O governo não quer fazer uma verdadeira reforma agrária. E para enganar a opinião pública passou a adotar, a partir de 99, as medidas orientadas pelo banco Mundial, através do Banco da Terra e do Novo Mundo Rural. Ambos são, na prática, a adoção tardia do neoliberalismo na questão agrária. E as medidas foram complementadas, ainda, por gastos cada vez maiores em propaganda.

4. Banco da Terra:

O governo assinou um convênio com o Banco Mundial que previa o financiamento de 2 bilhões de dólares, em quatro anos, a serem aplicados meio a meio – entre o governo e o banco – para compra de terras e para viabilizar obras nos assentamentos. Na prática, o banco da terra serviu mais como propaganda, para evitar as desapropriações. O governo destinou apenas 120 milhões para compra de terras, o que representaria o atendimento a apenas 15 mil famílias.

Por outro lado, os movimentos sociais (MST, Contag, MPA), entidades de apoio (INESC, rede Brasil) e as igrejas se unificaram contra essa proposta e conseguiram barrar sua implantação massiva. As entidades entraram com dois pedidos de auditoria (inspeção do banco) baseadas na falsidade dos objetivos de combater a pobreza e nos casos de corrupção que se praticam. O segundo pedido está ainda em análise.

O próprio Banco Mundial, que pretende ser democrático, teve que recuar. Desacelerou a liberação de recursos, condicionando que os recursos externos não fossem aplicados na compra de terras mas apenas em obras nos assentamentos. Condição o convênio apenas para os estados do sul e do nordeste.

Apesar da propaganda do governo de que o banco da terra seria a solução, não conseguiu convencer nem sua equipe econômica. O conselho monetário nacional impôs uma taxa de 6% de juros anuais mais o índice de IGP, que corresponde, no ano de 99, a mais 20,14% e que inviabilizou completamente o pagamento por parte dos incautos sem-terras que se iludiram.

Mesmo assim, o governo insistiu com o Banco da Terra na região sul, muito mais como propaganda para evitar que os sem-terras despolitizados se somassem ao MST. Existem, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, listas de sem-terras organizadas pelas Prefeituras, políticos e todo tipo de interesseiros, prometendo terra fácil e sem necessidade de acampar.

Mas, por outro lado, vários governos estaduais, seja de oposição e até mesmo da situação como em São Paulo, se recusaram a aderir ao banco da terra e representaram um revés nas intenções do governo.

5. O “Novo Mundo Rural” e os recursos para assentamentos:

Outra tática do governo, orientado pelo Banco Mundial, foi criar uma nova metodologia de assentamentos, chamado de Novo Mundo Rural. Em dita tática se transferia para os assentados a “liberdade” deles próprios fazerem o assentamento. O INCRA transferiria para uma conta dos assentados um certo recurso por família e os assentados teriam que assumir todos os encargos: medição final da área, construção de estradas, contratação de assistência técnica, etc...

Os movimentos sociais se opuseram também, de forma unânime, a esse embuste. Na maioria dos estados os próprios funcionários do INCRA foram contra tal metodologia. Na verdade essa metodologia retira do estado a responsabilidade de garantir as obras sociais e de infraestrutura necessárias e que viabilizam os assentamentos. E retira, ainda, a própria função do INCRA.

Nesse aspecto criou-se um impasse. Em alguns estados o governo conseguiu ir empurrando essa metodologia, mas em outros houve uma paralização. E, no final, quem pagou a conta foram os assentados, que durante todo ano praticamente não tiveram recursos liberados para as obras de infraestrutura ou para os créditos de implantação. E mesmo estando “em cima” das áreas já liberadas não conseguiram construir suas casas, nem desenvolver a produção.

6. As desapropriações e os recursos de assentamentos:

O governo anunciou que no ano de 99 teria assentado mais de 85 mil famílias. Todos os funcionários do INCRA sabem que as áreas começaram a ser liberadas somente no segundo semestre e que praticamente durante todo primeiro semestre não houve desapropriações, já que o governo apostava no Banco da Terra. Esses dados serviram apenas para propaganda.

Primeiro as desapropriações foram inferiores à própria propaganda do governo, que disse ter assentado 105 mil em 98. Segundo, e sobretudo, o governo repetiu a mesma tática de 94-98: liberou áreas com capacidade de assentamento nas regiões norte e centro-oeste, onde é mais fácil conseguir terras públicas ou conseguir terras beneficiando os fazendeiros. Cerca de 68% das 85 mil famílias que teriam sido assentadas estão localizadas em projetos na região norte e centro-oeste. Todos sabem que nas regiões sul, sudeste e nordeste não houve praticamente assentamentos e os conflitos aumentaram.

O governo considera uma família como assentada, pelo simples fato de estar inscrita num projeto de assentamento. Mas para ser de fato assentada a família precisa ter seu lote definido, ter recursos para a casa e para a produção. Já no primeiro mandato, haviam sido liberados recursos para crédito de fomento e alimentação para somente 60% das famílias que teriam sido assentadas e, para apenas 40%, os recursos de habitação. Esses indicativos são os que revelam de fato o número de famílias assentadas.

7. Orçamento do INCRA:

O governo usou de todos os instrumentos possíveis para sucatear o INCRA, já que agora a filosofia é a de deixar que o “mercado” resolva os problemas de terra. E um deles foi o orçamento do INCRA.

Os técnicos haviam incluído na primeira proposta orçamentária a necessidade de um volume de 2,5 bilhões de reais para assentar as 85 mil famílias propostas. No Ministério do Planejamento o orçamento foi cortado para 1,9 bilhões e, depois da crise cambial, por imposição do FMI, reduziu-se ainda mais para 1,2 bilhões. Até o mês de outubro, o INCRA tinha liberado apenas 35% desses recursos.

8. Recursos para a produção:

O ano de 99 foi uma verdadeira tragédia para os assentados. O governo acabou com o PROCERA e empurrou todos os assentados para o mesmo programa dos pequenos agricultores, onde as condições de pagamento e prazos eram piores. Resultado: não houve nem recursos suficientes para os pequenos agricultores familiares e muito menos para os assentados.

9. Acampamentos de sem-terras:

Como resultado da falsa reforma agrária do governo, se multiplicaram em todo país o número de acampamentos. Chegou-se ao final do ano com mais de 500 acampamentos que agrupavam mais de 72 mil famílias.

10. Recrudescimento da violência em alguns estados:

Com o processo de reforma agrária andando de marcha-ré e diante da falta de iniciativas

do governo federal, permitiu-se que os latifundiários e seus setores mais conservadores se articulassem para reprimir e realizar despejos por conta própria. Da mesma forma, alguns governos estaduais mais fiéis ao governo federal, tentando aplicar a política nacional, se anteciparam e usaram a violência contra os sem-terras.

Assim, houve um recrudescimento da violência contra os sem-terras em algumas regiões do país, onde coincidia a força maior do conservadorismo dos fazendeiros com a benevolência dos governos estaduais em relação a eles. O aumento da violência registrou-se principalmente nos estados do Paraná, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pará e na região do Triângulo Mineiro.

11. A propaganda do governo:

O único item do orçamento do INCRA que foi plenamente gasto foi o dos recursos para a propaganda. O Governo centrou sua propaganda em que: estava realizando a maior reforma agrária do mundo, havia derrotado o latifúndio no país, estava criando bolsa-escola para os filhos dos assentados, e iria acabar com as grandes áreas de latifúndio na região amazônica.

Qualquer cidadão minimamente informado sabe a força e as ligações que os latifundiários continuam tendo no poder local, nas prefeituras, nos governos estaduais e no governo FHC. Basta acompanhar o noticiário político.

Em outros anos o governo se utilizou do mesmo expediente – o da propaganda – para criar soluções milagrosas em torno do novo ITR, da nova Lei Agrária, das áreas do INSS, das áreas do Banco do Brasil e das áreas da maconha para realizar reforma agrária. Passado o tempo, todos perceberam que se tratava apenas de propaganda.

12. A sociedade continua apoiando a reforma agrária:

Apesar das mentiras do governo e da manipulação permanente que faz dos meios de comunicação contra os sem-terras, a sociedade já está vacinada contra essas enganações. Sabe que a reforma agrária não está sendo feita e que é uma necessidade para resolver os problemas econômicos e sociais do país. Várias pesquisas de opinião pública indicaram isso.

Mas, além das pesquisas, que também podem ser manipuladas, o MST percebe o apoio da sociedade através de outras manifestações concretas. Foi a sociedade brasileira que impediu o recrudescimento da violência contra o sem-terra no Paraná, que exigiu a anulação do julgamento de Carajás, que garantiu apoio às diversas marchas de sem-terras realizadas nos estados e a marcha popular para o Brasil.

É como fruto desse apoio da sociedade que muitos governos estaduais preferiram inclusive afastar-se do governo federal na política agrária e apoiar as ações dos sem-terras.

O Povo Brasileiro está cada vez mais consciente da necessidade da reforma agrária. Se a sociedade não estivesse defendendo os sem-terras e o MST, a repressão e o governo federal já teriam destruído o MST, utilizando-se de qualquer pretexto. Como, aliás, tentaram fazer de

**Declaración del 4^{to} Congreso Nacional del MST realizado
en Brasilia del 8 al 12 de agosto de 2000**

“Manifiesto del MST al pueblo brasileño”

■ Estuvimos acampados en Brasilia, con más de 11 mil delegados llegados de 23 estados del país, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, del medio rural, compartiendo sacrificios, alegrías y esperanzas. Estuvimos reunidos en el 4to Congreso Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Nuestro país vive una grave crisis. Más esta crisis no afecta a todos. Los más ricos continúan ganando mucho dinero, explotando. Las grandes empresas multinacionales continúan enviando billones de dólares al exterior. Los bancos nunca ganaron tanto dinero como ahora. Pero, para quien vive de su sudor, son cada vez más precarias las condiciones de vida. No hay trabajo; quien tiene empleo gana muy poco; los jóvenes no tienen escuela de calidad; y la universidad dejó de ser pública y gratuita. Mucha gente se ve forzada a salir del interior para ir a las periferias de las grandes ciudades. Allí encuentran miseria y violencia.

¿Dónde está la causa de eso?

Es verdad que nuestra sociedad siempre fue injusta. Como en toda sociedad capitalista, el pobre fue siempre explotado y humillado. Mientras, la clase rica, cada vez más gananciosa, reprimía al pueblo y se sometía a los intereses del capital internacional.

Sin embargo, desde 1994, con la política neoliberal del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, los problemas se agravaron todavía más. Esta política económica representa tan sólo los intereses de los bancos y de las empresas multinacionales. A éstas, el gobierno garantiza altas tasas de interés, mercado y ayuda financiera. Basta decir que, en el año pasado, el gobierno gastó 64% del presupuesto de la unión en pagos de intereses de las deudas interna y externa. Y el gobierno de las elites brasileñas, a pesar de todos los problemas sociales, tiene el coraje de, todos los años, enviar 50 mil millones de dólares hacia los países ricos. Por eso falta dinero para la educación, salud, transporte colectivo, casa popular, y generación de empleos.

En la agricultura, la situación es todavía más grande. El gobierno de FHC quiere “modernizar” el medio rural otorgando estímulos solamente a las grandes haciendas exportadoras; entregando el control del mercado agrícola a las empresas multinacionales; y permitiendo a las agroindustrias controlar el abastecimiento de alimentos.

Acabó con sus centros de investigación y desarrollo tecnológico. Así, las conquistas de la ciencia, que pertenecen a la humanidad, hoy son monopolizadas por las multinacionales que detentan sus propios centros de investigación. Ahora, este mismo gobierno, está poniendo toda la investigación de la biotecnología bajo control de las multinacionales, que van a hacer cambios genéticos en las plantas y alimentos, sin ningún control, buscando únicamente aumentar sus ganancias. Poniendo, así, en riesgo el medio ambiente, la salud de los agricultores y de los consumidores.

Lo más grave, para favorecer la explotación y especulación sobre los pequeños agricultores y consumidores, el gobierno acabó con las reservas reguladoras de alimentos. Estos también son monopolizados por las agroindustrias multinacionales. La población es rehén de las ganancias de esos grupos.

En la política, proliferan, todos los días, noticias de corrupción y latrocinios con el dinero y patrimonio del pueblo. Hay un sector, cada vez mayor, de las clases dominantes que se está enriqueciendo apenas con el desvío del dinero público, con el narcotráfico, con el contrabando. Esos sectores son tan poderosos e influyentes, que involucran a magistrados, jueces, comandantes de la Policía Militar, diputados, senadores, dueños de medios de comunicación, banqueros, militares... y llegó hasta el ex-secretario de Planalto (la casa presidencial). Este, considerado el brazo derecho del gobierno, está sindicado de pertenecer al grupo que promovió el robo de 169 millones de reales, destinados a la construcción del edificio del Tribunal de Justicia del Trabajo de São Paulo.

¿Nuestro país tiene sentido?

Nosotros respondemos que sí. Pero será necesario que el pueblo brasileño se levante, se organice y salga a las calles, para luchar por sus derechos históricos. Es posible, sí, construir otro proyecto para Brasil. Un Proyecto Popular, orientado a las necesidades del pueblo. Vamos a necesitar cambios radicales. Es preciso impedir que los bancos, las multinacionales y los ladrones del pueblo continúen enriqueciéndose. Es preciso suspender el pago de la deuda externa. Es preciso controlar el sistema financiero y la tasa de intereses. Es preciso determinar que los bancos usen el dinero para financiar la producción, y no la especulación. Es preciso renegociar la deuda interna y priorizar el presupuesto público en educación, salud y agricultura. Retomar las riendas de la política económica, que sea administrada por brasileños en favor de nuestro pueblo, rompiendo el acuerdo con el FMI. Es preciso implementar una reforma agraria, asociada con un nuevo modelo agrícola, que garantice renta a los agricultores y futuro para quien vive en el medio rural.

Con los recursos que dejarán de ser enviados al exterior y a los bancos, se deberá formar un fondo nacional de inversiones sociales, para la generación de empleos y el aumento del poder adquisitivo de la población.

En fin, no hay ninguna razón económica o social que impida a nuestro pueblo tener acceso a tierra, trabajo, vivienda digna, escuela pública de calidad y alimentación para todos los brasileños. Pero es preciso tener coraje para cambiar el gobierno, cambiar la política económica y enfrentar a la ganancia de los poderosos.

Los próximos meses y años serán decisivos para el futuro de nuestro país. O recuperamos nuestra soberanía o seremos condenados a ser una nueva colonia del gobierno de los Estados Unidos, que está con el ojo puesto hasta en nuestra Amazonia.

Por eso, como un movimiento social de los trabajadores rurales sin tierra, nos comprometemos y convocamos a todas las organizaciones del pueblo brasileño, a organizarse y luchar por esos cambios.

Precisamos exigir la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación para aclarar los casos de corrupción, que involucran a altas autoridades del gobierno. Proponemos que todos se impliquen en el plebiscito popular contra el pago de la deuda externa, a realizarse en la semana de la Patria, del 2 al 7 de septiembre. Precisamos derrotar a ese gobierno y a los ricos en las próximas elecciones, y elegir candidatos progresistas que estén realmente comprometidos con el Proyecto Popular.

Precisamos discutir, en la casa, en el trabajo, en las escuelas, en los sindicatos y parroquias, en todos lados, un Proyecto Popular para Brasil.

Y seguir luchando siempre. Todas las conquistas sociales fueron resultantes de grandes luchas populares. Esperamos, junto con todo el pueblo brasileño, construir un Proyecto Popular que conquiste la soberanía de nuestro país, la dignidad y el bienestar de toda la población.

La conflictividad social en América Latina

Por José A. Seoane y Emilio H. Taddei



El pensamiento social crítico latinoamericano, entendido como pensamiento cuestionador de las estructuras sociales y los mecanismos de dominación vigentes, sufrió en las últimas décadas un notable retroceso. La difusión de corrientes teóricas acordes con una visión conservadora y pragmática del saber y del poder constituye la contracara del “desalojo académico” experimentado por las corrientes más críticas de las ciencias sociales en el continente. Este fenómeno se inscribe en un proceso mucho más amplio, que trasciende el ámbito específico de las ciencias sociales, pero que incide en las premisas epistémicas a partir de las cuales se produce conocimiento social: la difusión de la economía de mercado y de la ideología neoliberal, y la reconfiguración de las relaciones sociales de explotación y dominación que resultaron de este proceso.

Según esta visión, la economía de mercado es el nuevo mito constituyente de la realidad social y política. Es el mercado el que produce las nuevas referencialidades sociales: competitividad, racionalidad, productividad y eficiencia, en el marco de las cuales es preciso encuadrar y analizar el comportamiento social. Dicha perspectiva, a su vez, pretende determinar la viabilidad de la conducta social, descalificando todo elemento que atente contra el normal desarrollo de esta “nueva racionalidad social de mercado”.

El predominio de este pensamiento conservador o “único” en las ciencias sociales latinoamericanas significó, entre otros resultados, la relativa desaparición del estudio científico de los conflictos sociales (que constituyó una temática central del pensamiento social crítico) confinándolo a los ámbitos más marginales de la vida académica.

Así este pensamiento redujo la política a un ejercicio de ingeniería social. La “governabilidad”, en su formulación hoy hegemónica, se restringe entonces al mantenimiento del juego político dentro de los cada vez más estrechos límites que establece el mercado. Los conflictos sociales y los sujetos colectivos que los vehiculizan son deconstruidos o tildados como desestabilizadores de esta racionalidad. En la medida en que en esta visión la democracia se limita, en el mejor de los casos, a la existencia formal de reglas de juego, cualquier intento de ampliar sus estrechos horizontes es visto como antidemocrático. Esto es lo que corrientemente sucede cuando algunos movimientos sociales cuestionan las políticas económicas neoliberales e intentan ampliar el debate más allá de los límites o de las reglas formales de participación del “capitalismo democrático”.

Por el contrario el estudio del conflicto social se inscribe en una perspectiva crítica y cuestionadora de las fetichizaciones características de este pensamiento “único”. Sin caer en una visión ingenua o dogmática según la cual el estudio del conflicto social “lo explica todo” creemos, sin embargo, que el análisis de la conflictividad es una “puerta de acceso” importante a la comprensión de las transformaciones estructurales que signan al capitalismo latinoamericano y a las dinámicas sociales en que dichas transformaciones se inscriben y despliegan. El conflicto, entendido como alteración del orden social en curso, permite dar “visibilidad” a las tensiones y contradicciones originadas por las profundas transformaciones sociales, así como, a la trama de relaciones de fuerzas y sujetos que estas transformaciones suponen. Esta recuperación del carácter socio-histórico de los procesos sociales plantea también, en el estudio del largo plazo, identificar la aparición de ciertas tendencias y prácticas democráticas que nacen y se desarrollan al margen de la lógica institucional pero que pueden, en ciertos momentos, generalizarse y universalizarse contribuyendo así a la conquista de nuevos derechos políticos, sociales y económicos.

Recuperar el interés y el estudio de la conflictividad social en Latinoamérica es una tarea importante, aunque no única, en el cuestionamiento al pensamiento que legitima el actual orden social y se inscribe en un desafío más amplio de renovación epistémica y paradigmática del pensamiento crítico en América Latina.

■ La (in)visibilidad del conflicto social en la era neoliberal

Existe una visión bastante difundida en el discurso político dominante y en la sociedad en general que sostiene que los procesos de apertura de las economías latinoamericanas, ocurridos durante las dos últimas décadas, fueron un “tranquilo transcurrir” hacia la sociedad de mercado, y que no supusieron mayores conflictos y/o tensiones, en el marco de una legitimidad socialmente aceptada por todos. La naturalización de los procesos sociales que implica esta perspectiva diluye la memoria de las luchas y la historicidad de las relaciones sociales. La realidad es, sin embargo, mucho más compleja y obstinada de lo que señala dicha visión y muestra que los procesos de re-regulación socioeconómica han generado, en el conjunto de los países de América Latina, innumerables conflictos de diversa índole. Contrariamente a lo que podría pensarse durante la década de los ‘80 y ‘90 existió un amplio proceso de resistencia social a las políticas neoliberales; así como la imposición de dichas políticas supuso la conformación de una poderosa coalición social dominante capaz de vencer estas resistencias.

En la “invisibilidad social” de este proceso los medios de comunicación de masa han jugado un papel importante: ya sea a través de la censura lisa y llana de ciertos conflictos o por un abordaje segmentado y fragmentante, que podríamos denominar de “ocultar mostrando”, que disuelve la historicidad de los procesos sociales. Así, en el tratamiento mediático los conflictos aparecen, en la mayoría de los casos, como hechos aislados, sin antecedentes históricos y sin inscripción temporal y social, dificultando la comprensión de las continuidades y rupturas en las que se inscriben. Demás está decir que este tipo de estrategia informativa deja poco espacio a la voz de los propios actores de las protestas, prevaleciendo casi siempre la de los “expertos” ajenos a los movimientos sociales. Su efecto “naturalizador” de las políticas neoliberales tiende a desacreditar como “arcaico” todo intento por oponerse a las mismas. Esto resulta particularmente evidente en el tratamiento informativo de los conflictos que surgen en oposición a las privatizaciones de empresas públicas, donde el discurso predominante intenta afirmar la inevitabilidad del reemplazo de la propiedad y gestión pública por la privada.

Reconstruir la continuidad de los conflictos y permitir una visión regional del conjunto son pues tareas necesarias para contrarrestar el ocultamiento y la fragmentación que reproducen, entre otros dispositivos, el procesamiento mediático y el pensamiento sistémico en ciencias sociales. Como señaláramos en la presentación del primer número del OSAL, ésta es la tarea que da sentido a este nuevo programa de CLACSO. Intentamos desde la problemática del conflicto retomar el análisis de los movimientos sociales, que fuera una de las temáticas estructurantes del debate regional en ciencias sociales, prescindiendo de un determinismo apriorístico que, la mayoría de las veces, no está sustentado en un análisis empírico del desarrollo de la conflictividad. Se trata de reasignar a la temática toda la complejidad que ella requiere para poder medir los avances, retrocesos y síntesis que caracterizan a los movimientos sociales y poder disponer de una lectura más certera sobre la reconfiguración de las relaciones entre las clases y grupos sociales en la actual fase del desarrollo capitalista en América Latina.

■ Aspectos metodológicos de la elaboración de las cronologías

Las dimensiones regionales que asume la tarea de relevamiento y elaboración de las cronologías del conflicto social plantea sin dudas restricciones y límites de orden metodológico. Definido el conflicto como toda acción que altera el orden social, quebrando o interrumpiendo temporalmente la reproducción de las relaciones sociales dominantes; el relevamiento del mismo significa dar cuenta de una multiplicidad de registros que involucran diversidad de actores y movimientos sociales. Trascendiendo el recorte del conflicto la-

boral, el relevamiento que da cuerpo a la cronología comprende al conjunto de actores sociales (movimientos campesinos, de derechos humanos, ecológicos, de mujeres, movimiento obrero, organizaciones patronales, entre otros) intentando dar cuenta de la multiplicidad y riqueza de las formas de protesta contemporáneas.

La recolección de la información, en base al seguimiento cotidiano de fuentes periodísticas nacionales de los países considerados, plantea sin duda una primera limitación, difícil de superar, según lo expuesto anteriormente respecto al tratamiento de los conflictos por parte de los medios de comunicación. Sin embargo su presentación bajo la forma de cronología intenta, trascendiendo la fragmentación deshistorizante, alimentar una perspectiva de proceso y regional de la conflictividad social. En la medida en que la información disponible lo permite se intenta dar cuenta en la síntesis del conflicto del actor que lo protagoniza, de las reivindicaciones enunciadas, de la forma de la protesta, de otros actores que se manifiestan en referencia al conflicto y de la resolución del mismo si la hubiera.

La cronología presenta, ordenada por país y por fecha, la síntesis de todos los conflictos sociales en el período considerado (en este caso mayo-agosto de 2000) reportados en las fuentes utilizadas. Con el objetivo de dar cuenta del contexto político general en el que se desarrollan e inscriben los conflictos, se incluyen también los principales hechos de la vida político-institucional, los resultados electorales nacionales, referencias a las crisis políticas y los resultados de los congresos de las principales organizaciones sociales y sindicales.

Las cronologías presentadas a partir de este número, por cuestiones de espacio, sólo consideran los principales hechos del conflicto social del período. Sus versiones completas pueden ser consultadas en la página de Internet del OSAL (<http://www.clacso.org/osal/home.html>).

■ Mayo – agosto 2000: características de la protesta social en América Latina

63

Antes de dejar paso a las cronologías mismas quisiéramos presentar un esbozo de las características destacadas de la conflictividad social en la región durante el período considerado, combinando distintos criterios analíticos (por sector de actividad involucrado, por sujetos protagonistas de la protesta y por alcance de las mismas). A la luz de estos recortes y en la medida de lo posible, se intenta señalar también las reivindicaciones y las formas de protesta más recurrentes.

Considerados los sectores de actividad de los conflictos relevados, las protestas de los trabajadores del sector público en los diferentes países aparece como el rasgo sobresaliente del período, representando, aproximadamente, un quinto de los hechos consignados. Dentro de este sector se destacan aquellos protagonizados por los trabajadores de la educación y la salud.

En el primer caso, en 15 sobre los 18 países considerados, aparecen reflejadas acciones protagonizadas por este sector. Entre los mismos cabe destacar el de México, donde una serie prolongada de luchas estatales y nacionales se extienden desde mayo hasta fines de julio, impulsadas particularmente por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y algunas representaciones estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En el caso de Ecuador la Unión Nacional de Educadores (UNE) protagoniza, a lo largo de un mes y medio, una intensa serie de protestas. Por otra parte en Brasil se destacan las largas huelgas de los profesores universitarios de San Pablo (17/5 al 15/6) y Río de Janeiro (8/6 al 26/7) por aumento salarial. También en Argentina, a lo largo del período, se extienden distintos conflictos a nivel provincial que culminan en una huelga nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) el 30 de agosto. Finalmente en Colombia el paro nacional (7 y 8 de junio) convocado por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) es seguido por diversas protestas regionales, hasta finales de agosto, encabezadas principalmente por la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA).

Las reivindicaciones que animan esta conflictividad sectorial a nivel regional refieren fundamental-

mente al aumento salarial o al pago de salarios adeudados, y en gran parte de las mismas se plantea también el reclamo de mayor presupuesto educativo. En algunos casos las protestas expresan también el rechazo a propuestas de reformas educativas (con particular impacto en las condiciones laborales) impulsadas por los gobiernos (como el caso de Argentina con la Ley Federal de Educación y el Pacto Educativo II, Ecuador o Colombia con la modificación del régimen pensional docente). La oposición a la privatización de la educación pública aparece a menudo como una consigna explícita de estas acciones. Las formas más difundidas que adoptan las mismas son la huelga, movilizaciones y actos. Esto no excluye otras modalidades como lo demuestran las huelgas de hambre en Bolivia y Ecuador, los cortes de ruta (Ecuador y Argentina), o la ocupación de instituciones públicas (Ecuador).

Por otra parte, en el caso de los trabajadores de la salud pública, puede señalarse la serie de conflictos que se extienden desde fines de mayo hasta principios de julio en Ecuador por aumentos salariales y mayor presupuesto para el hospital público. Así también en Honduras se destacan los paros en distintos hospitales y en Venezuela la huelga de médicos. Merece una consideración particular la situación en Uruguay donde alrededor de la crisis del sistema mutualista se desprenden una importante sucesión de protestas, entre las que se cuentan sendas huelgas nacionales sectoriales (12/5 y 15/6) convocadas conjuntamente por las organizaciones sindicales del sector de la salud pública y privada. En este caso las reivindicaciones parecen ser más heterogéneas que en el sector educativo, verificándose una fuerte presencia de demandas salariales (aumento o cobro adeudado) y condiciones de trabajo.

Por último es necesario señalar, dentro del sector público, las medidas de fuerza encaradas por los trabajadores de las administraciones públicas consignados en, aproximadamente, la mitad de los países considerados. En este registro se destacan las protestas protagonizadas por los trabajadores de la administración nacional en Argentina frente a la reducción salarial resuelta por el gobierno nacional en el marco de las medidas de ajuste del gasto público a finales de mayo.

El conjunto de estos hechos recientemente enumerados están ligados a los efectos de las políticas de reforma y privatización de la esfera pública inscriptos en la profundización de las políticas neoliberales en la región. Esta ola de reformas de "segunda generación" adopta formas y ritmos diferentes según los países en la medida que en algunos casos la privatización de las empresas públicas es una asignatura aún pendiente. La medida nacional de la aplicación de estas políticas puede recortarse, en la propia cronología, a la luz de los conflictos consignados contra las privatizaciones. En este sentido, este tipo de conflictos y reivindicaciones ocupan un espacio importante en la conflictividad del período. Pueden apreciarse, entre otros países, en Honduras, Panamá (electricidad y teléfonos) y México (electricidad y el petróleo). En esta consideración se destaca la situación en Paraguay donde se suceden una serie de importantes protestas contra la ley de privatizaciones impulsada por el gobierno nacional. Entre ellas vale resaltar la movilización de mediados de mayo convocada, entre otros, por la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Coordinadora Obrera Campesina (COC) así como la huelga general de 48 horas (22/6) que reclamaba, entre otras cuestiones, el retiro de la ley de Reforma del Estado y la reincorporación de los trabajadores despedidos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En relación al alcance de las protestas, un dato interesante de señalar es la existencia, a lo largo de los cuatro meses relevados, de casi media centena de huelgas, protestas, actos y movilizaciones de extensión nacional. Dentro de este recorte vale resaltar que en Paraguay (22/6), Argentina (5/5 y 9/6), Colombia (3/8) y Uruguay (8/6) tienen lugar huelgas generales con diferentes grados de repercusión. Por otra parte, Argentina, Ecuador y Perú son los países que parecen presentar el mayor número de protestas de alcance nacional. En estos dos últimos países éstas trascienden el ámbito de la reivindicación socioeconómica para situarse también en el terreno de la legitimidad e institucionalidad política. En el caso peruano se inscriben en el reclamo por la postergación del ballottage y posteriormente en el cuestionamiento de la legitimidad de la elección presidencial. En el caso ecuatoriano las protestas plantean, entre otras cuestiones, la necesidad de convocar a elecciones legislativas y la renovación de la Corte Suprema de Justicia, resultando de un largo proceso de conflictos que, en enero de este año, signó la caída del presi-

dente J. Mahuad.

Por otra parte también pueden apreciarse un gran número de protestas de alcance local, sobre todo en Bolivia. Las acciones encabezadas por los Comités Cívicos de Sacaba, Santa Cruz, Oruro y La Paz, entre otras, ejemplifican este señalamiento que, como lo menciona Luis Tapia en su análisis del conflicto en Cochabamba, podría interpretarse como el pasaje de una fase de luchas sociales mediadas por la articulación nacional de la Confederación Obrera Boliviana (COB) a una nueva fase de luchas sociales con dirección y organización local. Esta consideración, sin embargo, debe medirse en el señalamiento de la Tercera Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos naturales que, impulsada por diferentes organizaciones campesinas e indígenas, se desarrolla desde fines de mayo a mediados de junio en dicho país.

Esta mención ejemplifica la gran importancia que, en la cronología del período, guardan los conflictos protagonizados por los movimientos campesinos-indígenas, que dan cuenta de la centralidad que le cabe a los procesos de reestructuración agraria en la región. En más de la mitad de los países aparecen registradas luchas de esta naturaleza. Al ya mencionado caso boliviano deben sumársele los conflictos de diversa naturaleza en Guatemala (derechos humanos, por programas de desarrollo); en Paraguay (ocupaciones y reclamos de tierras); en Chile (fundamentalmente el conflicto mapuche en el sur del país). En esta rápida enumeración debe otorgarse un lugar especial al caso brasileño (encabezadas fundamentalmente por el Movimiento Sin Tierra - MST) y al caso mexicano (la continuidad de los conflictos en Chiapas, signados por la creciente militarización de la región al inicio del período y el triunfo de la oposición al PRI en las elecciones para la gobernación del Estado a finales de agosto).

Otro de los sujetos destacados de la conflictividad del período es el movimiento estudiantil, presente en casi todos los países a través de acciones en reclamo de aumento de presupuestos universitarios, contra el cierre de establecimientos, en apoyo a medidas de fuerza de profesores, entre otras cuestiones. Chile presenta una gran cantidad de este tipo de hechos, al que debe sumársele Venezuela, Nicaragua y México (prolongación de la larga huelga estudiantil en la UNAM).

En el caso de los conflictos que involucran al sector industrial, los mismos guardan, respecto de los anteriormente citados, un peso menor en la cronología. Vale mencionar en este sentido las distintas protestas que involucran a los pescadores artesanales del sur chileno, a los trabajadores del sector pesquero y a los cañeros del azúcar en el caso argentino, y a los conflictos en varias maquiladoras y en una planta de Volkswagen en México, así como en Venezuela. En este aspecto el caso venezolano parece destacarse, no sólo por la diversidad de sectores involucrados (petroleros, metro, electricistas, etc.) sino también por el hecho que, en la mayoría de los casos, estas medidas de fuerza remiten a discusiones convencionales particularmente centradas en el aumento salarial.

Sobre este mapa de la conflictividad presentada en las cronologías podríamos señalar también la particularidad y extensión que parece alcanzar los conflictos en el sector del transporte (sea de pasajeros o bienes). Ligado al aumento de los precios del petróleo y, en algunos casos, a la desregulación del sector y la privatización de las redes viales (cobro de peajes) las protestas del transporte (protagonizadas fundamentalmente por las cámaras empresariales) atraviesan más de la mitad de los países considerados, manifestándose con mayor intensidad en Guatemala, El Salvador y Brasil.

Este señalamiento de las tendencias más generales y sobresalientes de la conflictividad en el período analizado, no ha podido considerar al conjunto y diversidad de sujetos y protestas presentes en la cronología. La temporalidad a la cual se restringe es aún limitada como para aventurar conclusiones prematuras sobre su evolución en el corto y mediano plazo. Es, sin embargo, un primer esfuerzo que esperamos reanudar regularmente para desarrollar una imprescindible mirada que pretende tanto resaltar las convergencias y similitudes regionales como señalar las especificidades nacionales y las formas particulares de desarrollo y resolución de los conflictos. Es, por último, una invitación a una necesaria reflexión colectiva y regional sobre la temática que podrá enriquecer y ampliar estos primeros y modestos pasos.

Argentina*

M a y o

Lunes 1

• Las distintas centrales y corrientes sindicales organizan diferentes actos para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. La Confederación General del Trabajo (CGT) oficial realiza un acto en la plaza de Lomas de Zamora (Gran Buenos Aires - GBA). La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lleva a cabo una marcha en La Matanza (GBA). La Corriente Clasista y Combativa (CCC) realiza un acto frente al ingenio La Esperanza, en Jujuy. Mientras que la CGT disidente ya había hecho un acto en un club de Mar del Plata (Buenos Aires) el día 28 de abril.

Jueves 4

• En General Mosconi (Salta), alrededor de 200 desocupados, ex beneficiarios del Plan Trabajar, cortan la ruta N° 34 en reclamo del pago del subsidio y la continuación y ampliación del Plan Trabajar en la zona.

Viernes 5

• Se realiza una huelga general nacional convocada por la CGT disidente y la CTA, con apoyo de la CCC y diversos partidos de izquierda, en repudio al proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. La mayor adhesión se registró entre los camioneros, choferes del transporte automotor, docentes, empleados judiciales, portuarios, municipales, obreros metalúrgicos y de automotrices. Según el gobierno, la adhesión fue del 33,31%, mientras que para la CGT disidente fue del 85% en todo el país. En las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Fe y San Luis y en el Gran Buenos Aires, grupos de huelguistas cortaron rutas y formaron piquetes para garantizar la huelga.

Sábado 6

• En Mar del Plata (Buenos Aires) los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comienzan una huelga por tiempo indeterminado en reclamo de un plus salarial que les fue quitado.

Domingo 7

• Se realizan las elecciones para Jefe de Gobierno y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Es electo como Jefe de Gobierno Anibal Ibarra (Alianza UCR-Frepaso) con el 49,41% de los votos. El candidato por Encuentro por la Ciudad, Domingo Cavallo, obtuvo el 33,08% de los votos. La candidata por PAIS, Irma Roy, obtuvo 4,58% y la candidata por Izquierda Unida, Patricia Walsh, el 3,44%.

Miércoles 10

• En la Plaza de Mayo (Ciudad de Buenos Aires), 5.000 pescadores de Mar del Plata (Buenos Aires) acompañados de sus familias realizan una concentración exigiendo distintas medidas para proteger al sector pesquero.

Jueves 11

• En General Mosconi (Salta), más de 3.000 personas se concentran en el piquete instalado en la ruta N° 34 para apoyar a los desocupados que estaban cortando la ruta ante la posibilidad de que las fuerzas de seguridad intenten desalojarlos.

• La Cámara de Diputados aprueba finalmente la Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno nacional con 121 votos a favor, 84 en contra y 2 abstenciones.

Viernes 12

• Tras la muerte accidental de un camionero detenido por el corte de la ruta N° 34 en Salta, más de 1.000 gendarmes y policías desalojan a los 500 piqueteros que se encontraban en ese momento cortando la ruta. Ante el avance de las fuerzas de seguridad, los piqueteros se repliegan hacia la ciudad de General Mosconi (Salta), perseguidos por los policías. 10.000 personas llegan marchando desde la vecina ciudad de Tartagal en apoyo a los piqueteros. Ante esto la policía debe retirarse. Numerosos manifestantes incendian y saquean el edificio de la municipalidad y otros edificios públicos. Se llega a una tregua a partir de la intervención del obispo local, junto con funcionarios de los gobiernos nacional y provincial. Sin embargo, a la noche un grupo de piqueteros vuelve a cortar la ruta. En distintos puntos del país (Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, La Matanza - Provincia de Buenos Aires) se realizan actos de repudio a la represión en Gral. Mosconi (Salta).

• Militantes de distintas organizaciones de derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y otros), centros de estudiantes y partidos de izquierda realizan un escrache frente al edificio del Estado Mayor Conjunto, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna "No al avance de los militares, sí a la justicia".

Sábado 13

• Los piqueteros de General Mosconi (Salta), reunidos en asamblea sobre la ruta N° 34, aprueban el acuerdo logrado entre sus representantes y los funcionarios de los gobiernos nacional y provincial.

Lunes 15

• En San Pedro (Jujuy) 300 obreros azucareros cortan la ruta N° 34 en reclamo del pago de salarios adeudados y de un crédito al ingenio La Esperanza a fin de mantener la fuente de trabajo.

• En Orán (Salta), 700 desocupados cortan la ruta N° 34 en demanda de planes de empleo y ayuda social.

Miércoles 17

• En Chaco los trabajadores estatales nucleados en el Frente de Gremios Estatales realizan una huelga con movilización para protestar contra la ley de ajuste provincial que se disponía a aprobar la Legislatura. Dos mil trabajadores marchan hacia la casa de gobierno y luego hacia la legislatura. Al avanzar hacia el edificio, son reprimidos por la policía. Los manifestantes entran a la municipalidad, a una dependencia oficial, a juzgados y a la casa del presidente del bloque de la Alianza en la Legislatura. La Legislatura finalmente aprueba la ley de ajuste.

Jueves 18

• Los desocupados que cortaban la ruta N° 34 en Orán (Salta) levantan el corte tras llegar a un acuerdo con las autoridades provinciales.

• En Tucumán 500 productores de caña de azúcar, agrupados en la Unión Cañera del Sur, cortan una ruta en protesta por la falta de respuesta del gobierno provincial a los reclamos del sector.

Martes 23

• 300 pobladores de General Mosconi (Salta) vuelven a cortar la ruta N° 34 en demanda del cumplimiento del acuerdo firmado entre piqueteros y autoridades provinciales a raíz de un corte anterior.

• En Río Grande (Tierra del Fuego), docentes cortan la ruta 3 en reclamo de una recomposición salarial del 30% que les había sido quitada. Reciben el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande.

Cronología

Miércoles 24

- En la Ciudad de Buenos Aires, 3.000 trabajadores de Aerolíneas Argentinas realizan una marcha para reclamar una solución para la situación de la empresa y que el gobierno español se haga cargo de la deuda de la aerolínea.

Lunes 29

- En Mar del Plata (Buenos Aires), obreros de la pesca se movilizan hasta la sede de la Cámara de Armadores y Procesadores para reclamar una solución a los empresarios del sector.
- El gobierno nacional anuncia la implementación de drásticas medidas de ajuste del gasto fiscal. Entre ellas se contempla la reducción de salarios para los trabajadores estatales que implicaría una baja del 12% para las remuneraciones entre \$ 1.000 y \$ 6.500 y del 15% para aquellas superiores a esos montos.

Miércoles 31

- Se realiza una marcha a la Plaza de Mayo, Ciudad de Buenos Aires, convocada por la CGT disidente, para repudiar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la política económica del gobierno nacional. Se movilizan unas 40.000 personas; entre otros, camioneros, choferes de colectivos, obreros de la construcción, metalúrgicos y de automotrices, junto con trabajadores estatales y bancarios, estudiantes universitarios, jubilados, pequeños y medianos empresarios, militantes de la CTA, de la CCC, de organizaciones de derechos humanos, de partidos de izquierda, así como del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. También están presentes diputados del partido Acción por la República y de la Alianza UCR-Frepaso, así como un representante de la Iglesia Católica. En otros puntos del país se realizaron movilizaciones contra el FMI, la política económica y la reducción del 12% en los salarios de los trabajadores estatales (Neuquén, Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz, Corrientes, Misiones, Mendoza, Río Negro).

- En Salta, unos 400 docentes, trabajadores de la sanidad y desocupados cortan la ruta 34 a la altura de Tartagal para reclamar al gobierno provincial el pago en dinero del 20% de sus salarios que estaban cobrando en tickets canasta.

68

J u n i o

Lunes 5

- Trabajadores estatales de ATE de diversos organismos públicos cortan numerosas calles en la Ciudad de Buenos Aires en protesta contra la reducción salarial a los empleados estatales dispuesta por el gobierno nacional.

- En Tucumán, productores cañeros del sur y del centro de la provincia vuelven a cortar las rutas N° 38 en Famaillá, Concepción y Río Chico, y la ruta N° 157 a la altura de Río Colorado, en demanda, entre otras cuestiones, del cumplimiento de la ley nacional que regula la actividad.

Jueves 8

- Los trabajadores estatales nucleados en el Frente de Gremios Estatales (en el que el principal sindicato es la Unión Personal Civil de la Nación –UPCN) realizan una huelga en rechazo a la reducción salarial.

- En Cruz del Eje (Córdoba), unos 300 manifestantes cortan la ruta N° 38 en demanda de puestos de trabajo. Son reprimidos por la Policía.

Viernes 9

- Se lleva a cabo, con una amplia adhesión, una nueva huelga general nacional convocada por las dos CGT (la “oficial” y la “disidente”) y por la CTA. Se producen ataques a colectivos en numerosas ciudades y a algunas empresas, como la petrolera Repsol-YPF en Neuquén; apedreos a bancos en Rosario (Santa Fe) y Avellaneda (GBA); cortes de rutas y calles en Cruz del Eje (Córdoba), Santa Fe, Rosario, La Plata (Buenos Aires), Ushuaia (Tie-

rra del Fuego), Jujuy y Gregorio de Laferrere (GBA); piquetes de huelguistas, quema de neumáticos y bloqueo de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Entre los trabajadores que adhieren a la huelga se encuentran los ferroviarios, los choferes de colectivos, choferes de camiones, estatales, docentes, y en menor medida, obreros industriales, trabajadores bancarios y de comercio. La huelga cuenta con la adhesión de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias, por lo que muchos comercios cierran sus puertas. La inactividad es predominante en las provincias con grandes centros urbanos y dispar en las que tienen zonas industriales más acotadas. Según el gobierno nacional, hubo un 60% de acatamiento; para la CGT oficial, 85%; para la CTA, 90%; y para la CGT disidente, 91,2%.

- En Cruz del Eje (Córdoba) se levanta el corte de la ruta N° 38 luego de que en una asamblea en la que participan unos 3.000 manifestantes se aprueba el acuerdo con el gobierno provincial, que incluye 360 puestos de trabajo y la liberación de los cuatro piqueteros detenidos.

Lunes 12

- En Neuquén 3.000 personas marchan por el centro exigiendo al gobierno provincial la renuncia de la presidenta del Consejo de Educación, a quien consideran responsable del accidente en el que murió una docente. Los docentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) llevan a cabo una huelga por 24 horas que tuvo un acatamiento del 90%.

Miércoles 14

- Los trabajadores estatales agrupados en ATE realizan una nueva huelga por 24 horas con movilización contra la reducción salarial. En la Ciudad de Buenos Aires se movilizan 3.000 trabajadores hasta la Plaza de Mayo.

Miércoles 21

- Los trabajadores estatales convocados por ATE vuelven a parar y a cortar numerosas calles en la Ciudad de Buenos Aires en protesta por la reducción salarial.

Viernes 23

- Los docentes universitarios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) concluyen una huelga por 48 horas con una marcha hasta el Ministerio de Educación, en reclamo de aumentos salariales y aumento del presupuesto para las universidades.

J u l i o

Lunes 3

- Los marineros de buques de altura de Mar del Plata (Buenos Aires), levantan el paro que mantenían desde hacía 45 días, tras aprobar el acuerdo alcanzado con los empresarios y el gobierno de la Prov. de Buenos Aires, por el cual obtienen, entre otras cuestiones, aumentos en el pago por el franco compensatorio y en el salario básico.

Martes 4

- Cientos de trabajadores de Aerolíneas Argentinas protagonizan una jornada de múltiples protestas contra el “plan de salvataje” anunciado por la empresa. Cortan la autopista Riccheri, realizan una manifestación frente al hotel donde diserta el presidente De la Rúa, y demoran la salida de los vuelos.

Viernes 7

- Trabajadores y dirigentes de la ATE vuelven a cortar avenidas en la ciudad de Buenos Aires para protestar contra la reducción salarial establecida en el decreto 430. Se movilizan, entre otros, trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Secretaría Nacional de Sanidad Animal (Senasa), del Instituto Malbrán, del Poder Ejecutivo, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), del Congreso y de la justicia.

Cronología

- Miércoles 12** • En la terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) los choferes de ómnibus de media y larga distancia comienzan una huelga por tiempo indeterminado declarada por la UTA en solidaridad con los trabajadores despedidos de la empresa La Internacional, que venían reclamando por el pago de salarios adeudados.
- Jueves 13** • En la Ciudad de Buenos Aires unos 1.000 trabajadores estatales participan de una marcha convocada por ATE en protesta, entre otras cuestiones, por la reducción salarial dispuesta por el gobierno nacional.
- La UTA levanta la huelga por tiempo indeterminado de los choferes de ómnibus de media y larga distancia tras lograr un acuerdo con los empresarios del sector, que incluye el pago de los salarios adeudados a los choferes de la empresa La Internacional.
- Viernes 14** • El Frente de Gremios Estatales realiza un paro nacional de características parciales contra la desobediencia jurídica del gobierno al medio centenar de fallos contrarios a la reducción salarial. El paro se hace sentir en las oficinas públicas donde trabajan los afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). También paran, entre otros, los empleados de los bancos oficiales, de la Aduana, los agentes impositivos, los empleados del INTA, y del Instituto Malbrán.
- Martes 18** • En Mar del Plata (Buenos Aires), los marineros de los barcos de pesca costera y de altura, organizados en el Sindicato Obrero Marítimos Unidos, levantan la huelga que se extendió por 90 días en reclamo de aumentos salariales, tras lograr un acuerdo con los empresarios del sector.
- Miércoles 19** • En Tucumán, 200 obreros azucareros organizados en la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) marchan a la casa de gobierno en reclamo de salarios adeudados por un ingenio. Son reprimidos por la policía.
- Viernes 21** • En Posadas (Misiones), convocadas por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, la Unión Docentes Argentinos y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, más de 5.000 personas -en su mayoría docentes provenientes de distintas ciudades de la provincia- marchan para protestar contra la reducción salarial a los educadores dispuesta por el gobierno provincial. Los docentes realizan también una huelga, a la vez que mantienen una carpa (la “carpa de la dignidad”) frente a la casa de gobierno.
- Miércoles 26** • Se inicia la Marcha Grande por el Trabajo, convocada por la CTA, en el transcurso de la cual se busca recolectar firmas para presentar al Congreso solicitando la convocatoria a una consulta popular para aprobar un seguro de desempleo de \$380 para todos los jefes de hogar desocupados y una asignación mensual por hijo de \$60 para todos los trabajadores ocupados o desocupados. La marcha parte de la ciudad de Rosario (Santa Fe). La columna está integrada por los principales dirigentes de la Central, militantes sindicales, y un grupo de niños pertenecientes al Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo. El destino final de la marcha es la plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires, a la que se llegaría el 9 de agosto.
- Se realiza una concentración frente al Congreso Nacional, convocada por la CGT disidente, para reclamar, entre otras cuestiones, que el Parlamento investigue la composición de la deuda externa y repudie la deuda fraudulenta. La movilización reúne a unas 5.000 personas. Recibe el apoyo del Frente de Gremios Estatales, la CCC y partidos de izquierda.

Lunes 31

- Los docentes “autoconvocados” de Misiones, deciden continuar con la huelga que venían llevando a cabo, desconociendo así la decisión del sindicato, que había acatado la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno provincial. Reclaman la renuncia de la comisión directiva del sindicato.

A g o s t o**Martes 1**

- Trabajadores estatales agrupados en ATE Ciudad de Buenos Aires marchan a los Tribunales para repudiar la apelación del gobierno nacional a los fallos judiciales en contra de la reducción salarial dispuesta.

Miércoles 2

- Unos 200 investigadores y trabajadores del Conicet ocupan el edificio de ese organismo en la Ciudad de Buenos Aires y realizan una concentración y asamblea frente a él para protestar por los recortes presupuestarios en el área, la reducción de salarios y el proyecto oficial de reforma del organismo.

Miércoles 9

- La Marcha Grande por el Trabajo, organizada por la CTA, llega a la Ciudad de Buenos Aires. La columna, que había partido el 26 de julio desde Rosario, pasó por diversas ciudades: en la provincia de Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y Villa Constitución; en la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Campana; en el Gran Buenos Aires, Escobar, San Miguel, Moreno y La Matanza; para finalizar en la plaza del Congreso en la ciudad de Buenos Aires. Los docentes de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los trabajadores estatales de ATE realizan una huelga por 24 horas en apoyo de la Marcha Grande. De la concentración en la Plaza del Congreso –que reunió a unas 10.000 personas- participan un grupo de diputados nacionales de la Alianza UCR-Frepaso, Madres de Plaza de Mayo, una delegación de la CGT “disidente”, la CCC, la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados y partidos de izquierda, entre otros. La CTA presenta 400.000 firmas apoyando su proyecto de seguro de desempleo de \$380 para los jefes de hogar desocupados y \$60 por asignación mensual por hijo.

Lunes 14

- Los docentes de la provincia de Jujuy inician una huelga por tiempo indeterminado en reclamo del pago de salarios atrasados.

Jueves 17

- En Mar del Plata (Buenos Aires) 800 trabajadores participan de una marcha, convocada por las dos CGT, la CTA y la CCC, para protestar por el alto índice de desocupación en esa ciudad. Suman su apoyo partidos de izquierda, sectores del P.J. y de la U.C.R., sociedades de fomento y organizaciones de desocupados.

Martes 22

- Los docentes de Santa Fe, agrupados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), instalan una carpa frente a la legislatura provincial para protestar por el recorte en el presupuesto del área educativa.

Jueves 24

- En Bahía Blanca (Buenos Aires) 1.000 habitantes de Ingeniero White cortan los accesos a la planta de Solvay Indupa para evitar su funcionamiento luego de comprobarse un escape de gas cloro.

Martes 29

- Trabajadores estatales nucleados en ATE, junto con científicos del Conicet y docentes universitarios, realizan una huelga con movilización por las calles de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la reducción salarial y contra el proyecto de reforma del Conicet.

Miércoles 30 • Los docentes de todos los niveles educativos llevan a cabo una huelga a nivel nacional convocada por CTERA para oponerse al proyectado Pacto Federal Educativo II y en protesta por el atraso del pago del incentivo docente. La huelga tuvo una adhesión del 85% en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires los docentes realizan una marcha desde el Congreso Nacional hasta el Ministerio de Educación.

GLOSARIO DE SIGLAS

AMSAFE	Asociación del Magisterio de Santa Fe
ATE	Asociación de Trabajadores del Estado
ATEN	Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén
CCC	Corriente Clasista y Combativa
CGT	Confederación General del Trabajo
CNEA	Comisión Nacional de Energía Atómica
CONADU	Confederación Nacional de Docentes Universitarios
CONICET	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
CTA	Central de Trabajadores Argentinos
CTERA	Confederación de Trabajadores de la Educación de la Rep. Arg.
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOTIA	Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera
FREPASO	Frente País Solidario
H.I.J.O.S.	Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTI	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
PJ	Partido Justicialista
SENASA	Secretaría Nacional de Sanidad Animal
UCR	Unión Cívica Radical
UOM	Unión Obrera Metalúrgica
UPCN	Unión Personal Civil de la Nación
UTA	Unión Tranviarios Automotor
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales

** Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA – Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) en colaboración con el OSAL. Fuentes: diarios Clarín, La Nación y Crónica.*

Bolivia*

Mayo

Lunes 1

- En La Paz se realizan tres manifestaciones paralelas por el Día Internacional de los Trabajadores. La Central Obrera Boliviana (COB) reúne un grupo de miles de obreros y empleados que piden en sus consignas la unidad de todos los trabajadores para enfrentar la flexibilización laboral. Al mismo tiempo la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) realiza una manifestación que cuenta con la participación de 5000 campesinos. Por su parte la Confederación de Gremiales, que nuclea entre otras organizaciones a los pequeños comerciantes, inicia su marcha en la Garita de Lima, con consignas en contra de la reforma tributaria.
- En la ciudad de El Alto comerciantes informales marchan hasta la Ceja, en el Día del Trabajador, para pedirle al Gobierno que cumpla con el financiamiento estatal para poner en marcha la universidad de esa ciudad.

Martes 2

- La Central Obrera Departamental de La Paz realiza una concentración en los alrededores del Ministerio de Trabajo para manifestar su repudio a los cuatro anteproyectos que ese ministerio quiere impulsar para el sector laboral. Los proyectos son la Ley de Microempresa, la Ley de Cooperativas, el Seguro de Cesantía y el Código de Procedimiento Laboral, que según los trabajadores, representan la flexibilización laboral. La manifestación es reprimida por la Policía.

Sábado 6

- En el penal de Palmasola, en Santa Cruz, 700 presos inician una huelga de hambre como medida de presión para reclamar la libertad para aquellos que cumplieron tres cuartas partes de su condena y la restitución de las visitas judiciales a las cárceles.

Lunes 8

- En el penal de Palmasola, los presos en huelga de hambre llegan a 1.250 en protesta por la lentitud de la justicia.

Martes 9

- Alrededor de 300 presos de la cárcel El Abra de Cochabamba se suman a la huelga de hambre.

Jueves 11

- Los presos en huelga de hambre suman 3.550 en nueve cárceles del país. Los reclusos de las cárceles de Chonchorro y el Centro de Orientación Femenina (COF) inician la huelga en reclamo por la aprobación de la Ley de Ejecución de penas y la ley Extraordinaria del Indulto (JUBILEO 200) propuesta por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo que beneficia a los menores de edad, ancianos y madres o padres de familia con hijos menores a su cargo. Una comisión interinstitucional encabezada por el ministro de Justicia y el director de Régimen Penitenciario, viaja a Santa Cruz para dialogar con los reclusos y encontrarle una solución al problema penitenciario.

Sábado 13

- Los presos de los penales de Tarija, Beni y Pando levantan la huelga de hambre luego de firmar un convenio con el gobierno. El acta de compromiso establece el extramuro a los reclusos que cumplieron el 50% de su sentencia, beneficiando a 250 internos del penal de Palmasola. Los presos de Santa Cruz, Cochabamba, Sacaba y Quillacollo continúan en huelga de hambre porque no están de acuerdo con el acta firmada en Santa Cruz, ya que la misma no contempla la libertad condicional para los detenidos por narcotráfico que cumplieron con las tres cuartas partes de su condena.

Cronología

Domingo 14 • Los reclusos de todas las cárceles del país, excepto el COF, levantan la huelga de hambre luego que el director Nacional de Régimen Penitenciario comunicó la ampliación del beneficio del extramuro a los presos por narcotráfico.

Lunes 15 • Los reclusos de la cárcel de San Pedro de La Paz entran en ayuno por la lentitud de la justicia y para demandar la aprobación de las leyes de Jubileo 2000 y de Ejecución de Penas.

• Un grupo de adjudicatarios de la Urbanización Amancayas ocupa las oficinas del Fondo Nacional de Viviendas (FONVIS) en Cochabamba, en protesta por el remate de 160 casa ubicadas en el kilómetro 8, carretera a Sacaba.

Lunes 22 • La Confederación Nacional de Gremiales realiza una movilización por las calles del centro de La Paz para rechazar la eliminación del Régimen Tributario Simplificado (RTS) y la creación de un impuesto único para el sector. Ambas disposiciones se encuentran establecidas en el anteproyecto de Código Tributario. Las movilizaciones se extienden a todo el país.

Jueves 25 • El Comité Cívico de Sacaba, junto a instituciones populares y sindicales de esa región, comienza un bloqueo en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz como medida de presión para exigir que no se ejecute el Decreto Supremo N°25.608 que establece que el distrito de Pacata Alta y sus habitantes pasen al municipio de Cercado, capital de Cochabamba.

Lunes 29 • Los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto junto a sus padres inician un bloqueo al acceso a esta zona para reclamar la creación de una universidad pública para esa ciudad. Los trabajadores agrupados en la Confederación de gremiales se movilizan en la misma ciudad exigiendo la derogación de dos ordenanzas municipales, que implican el alza de las tasas y patentes para los comerciantes callejeros y las tiendas; y rechazando la propuesta de reforma tributaria nacional; además se solidarizan con el reclamo de los estudiantes. Por otra parte, los vecinos de la ciudad de El Alto se movilizan para protestar contra el alza en las tarifas de luz y aseo urbano, y en apoyo a la creación de una universidad alteña (los sindicalistas marchan en apoyo a estos tres movimientos). Al mediodía estas marchas desembocan en la Alcaldía, provocando el destrozo del edificio. Las manifestaciones son reprimidas por el Grupo Especial de Seguridad (GES).

• Colonizadores, transportistas y pobladores de Rurrenabaque bloquean totalmente las vías de acceso a ese municipio para exigir el mejoramiento de los caminos. Este movimiento cuenta con el apoyo de los transportistas de los Yungas, quienes desde el 27 de mayo dejaron de operar sus vehículos por las malas condiciones de las carreteras que conducen al norte del país.

• Los trabajadores y pilotos de las compañías Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y AeroSur inician un paro de 24 hs por el ingreso al mercado aéreo de la empresa Transportes Aéreos del MERCOSUR (TAM). Las aerolíneas nacionales aseguran que no se hace necesario el ingreso de nuevas líneas en el país por el hecho de que existe más oferta que demanda de asientos.

Miércoles 31 • El paro de los trabajadores de LAB no hizo retroceder al gobierno. La TAM ingresó al mercado aéreo boliviano con el permiso para realizar vuelos nacionales.

J u n i o

Viernes 9 • Los trabajadores del Banco Central de Bolivia (BCB) inician un paro de 24 hs. en demanda de aumento salarial.

- Los trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) realizan un paro de brazos caídos de 2 horas a nivel nacional demandando un incremento salarial del 9,7%. Luego, marchan desde el edificio de la calle Ayacucho hasta las oficinas de la Federico Zuazo.

Lunes 12

- Gremialistas, padres de familia, juntas vecinales y otras organizaciones de El Alto, junto a los estudiantes, se movilizan hasta la sede del gobierno de La Paz para exigir la promulgación de la ley de creación de la universidad autónoma de esa ciudad.

Jueves 15

- Docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) realizan una movilización, por las principales calles de La Paz, en protesta por las intenciones del gobierno de recortar su presupuesto para la apertura de una universidad autónoma del Alto.

Viernes 16

- Alrededor de 200 campesinos sin tierra de Yacuiba, Caiza y Cruce Pajoso llegan a Tarija y ocupan gran parte de la plaza Luis Fuentes después de andar 400 km, para exigir la redistribución de los latifundios improductivos. Los manifestantes representan a 14 comunidades y a 9 núcleos de campesinos. El prefecto de Tarija reciben a los campesinos pero no anuncia una solución a las demandas.

Miércoles 28

- Indígenas y campesinos parten desde Cujibá para darle inicio a la tercer Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales, que pretende llegar hasta La Paz, para exigirle al Gobierno la titulación de tierras, el derecho al libre uso y acceso a los recursos naturales, fondos económicos para planes de desarrollo, la derogación del decreto supremo N° 25.532, que permite que grandes extensiones de tierras pasen a manos de sectores privados, y la reforma de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Esto implica la eliminación del artículo 236, a partir del cual se pretende quitar la función económico-social a las tierras menores de 500 hectáreas.

75

J u l i o**Lunes 3**

- Comunidades campesinas de Laja, Tampillo, Tiwanaku, Guaqui, Desaguadero y otras comunidades menores, bloquean la carretera Río Seco-Desaguadero, que comunica al departamento de La Paz con el sur de Perú. La medida es adoptada para exigir la pavimentación de las vías de acceso a sus respectivas poblaciones.
- Más de 4.000 trabajadores participan en la marcha de inauguración del XII Congreso Ordinario de la COB. Los trabajadores le reclaman a la central obrera recuperar la fuerza para defender sus conquistas. Además reclamaron unidad y respeto a la estructura clasista y proletaria de la organización.

Martes 4

- Comunidades campesinas de Río Seco-Desaguadero levantan el bloqueo a la carretera internacional luego que el Gobierno se comprometió a buscar un crédito de 500 mil dólares, y a comenzar las tareas en 15 días y a concluir en un plazo no mayor a los ocho meses.

Jueves 6

- La tercera marcha por la tierra cuenta ya con más de medio millar de indígenas y campesinos, que llegan hoy a Santa Cruz, para exigirle al Gobierno una solución legal al problema de la tierra. El Gobierno comienza negociaciones con los indígenas para que detengan la marcha y no lleguen hasta la ciudad de La Paz.
- Tras la reanudación del XII Congreso de la COB que se realiza en la ciudad de Potosí con

la participación de 240 delegados, el llamado bloque antineoliberal critica duramente a la dirección de la central y amenaza con retirarse del Congreso si no se reforman los estatutos de la misma. Dicho bloque está conformado por seis federaciones regionales de campesinos, los sindicatos de maestros, jubilados, constructores, gremialistas y fabriles de La Paz, luz y fuerza y las Centrales obreras departamentales de Oruro, La Paz, Beni y Chuquisaca.

Viernes 7

- Indígenas de los pueblos amazónicos junto a campesinos y colonizadores deciden en la Gran Asamblea de los Pueblos Originarios continuar con la tercera marcha por la tierra hasta La Paz, ya que no llegan a un acuerdo con el Gobierno.

Lunes 10

- A la tercera marcha se suman dos regionales indígenas, la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC) y la Central Indígena de la Región Amazónica (CIRABO). También participan de la marcha campesinos y colonos de estos tres departamentos.
- La Confederación Nacional de Choferes inicia un paro y diferentes bloqueos en las carreteras del país, para exigir la participación del sector del transporte en el Plan de Reactivación Económica, entre otras demandas.

Martes 11

- El ministro de Desarrollo Sostenible anuncia la anulación del decreto N° 25.532 que permite concesiones privadas dentro de las tierras de los originarios y un programa de titulación de tierras en respuesta a la marcha indígena.
- Los choferes levantan el bloqueo al conocer la intención del Gobierno de recibirlos en una reunión para atender sus demandas.

76

Miércoles 12

- Alrededor de un millar de indígenas, campesinos y colonos llegan a Warnes, primera escala de la tercera marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales. La derogación del Decreto Supremo N° 25.532 no es suficiente para que los manifestantes detengan la marcha.

Viernes 14

- El Comité Cívico de Santa Cruz junto a federaciones campesinas, gremiales y universitarias, entre otras, convoca cerca de 20.000 personas en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz para exigir la rebaja del precio del diesel y para protestar contra la política económica llevada adelante por el gobierno de Banzer.

Domingo 16

- Las organizaciones indígenas y campesinas deciden finalizar la tercera marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales luego de que el Gobierno accediera a la firma de un acuerdo entre los dirigentes de los manifestantes y el equipo de negociación del Gobierno, el INRA y la Prefectura de La Paz. El acuerdo se compone de tres decretos del Poder Ejecutivo. El primero modifica siete artículos del reglamento de la Ley INRA, el segundo aprueba la creación de un fondo de reactivación productiva de los pequeños productores campesinos y colonizadores, y el tercero flexibiliza las normas de quemas y desmontes. Los gobiernos departamentales se comprometen a reconocer las personerías jurídicas de indígenas y colonizadores, y tienen la instrucción de desalojar a los asentamientos ilegales en territorio indígena. El INRA ofrece apurar la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen.

Jueves 27

- El Comité Cívico de la ciudad de Oruro junto a la Central Obrera, la federación de fabriles, gremiales y juntas vecinales comienza un paro por 48hs. para protestar por la falta de políticas estatales de desarrollo y el pésimo estado de los caminos. Se producen enfrentamientos entre el ejército y los manifestantes.

Viernes 28

- La Coordinadora de Defensa del Agua de Cochabamba inicia una movilización por el centro de la ciudad donde se concentran cerca de 5.000 campesinos, para denunciar la total pasividad del Gobierno frente a la constante alza del nivel de vida.
- Todos los sectores sociales y económicos de Santa Cruz se suman al paro cívico que paraliza totalmente la ciudad para protestar contra las políticas económicas del Gobierno y para exigir una inmediata reactivación de la economía.

Lunes 31

- Los sindicatos del transporte pesado inician bloqueos de carreteras, avenidas y calles de las ciudades de Cochabamba y Sucre en protesta por el alza de los combustibles, por el mal estado de los caminos y por la eliminación del peaje en varias rutas.

A g o s t o**Martes 1**

- El Comité Cívico de La Paz realiza una manifestación en las puertas de la Cooperativa Telefónica de esa ciudad (COTEL) para rechazar el aumento de las tarifas telefónicas.

Jueves 10

- Los jubilados mineros de Oruro inician la marcha por la sobrevivencia para demanda un aumento de su renta mensual de 1.000 bolivianos y la devolución de sus aportes al FONVIS. Un grupo de jubilados de La Paz inicia bloqueos y manifestaciones en apoyo a la medida adoptada.
- El sindicato de COTEL de La Paz inicia una huelga general por tiempo indefinido para exigir la renuncia de los administrativos, el pago de bonos adeudados y la reincorporación de los despidos.

Martes 15

- La Federación de Padres de Familia de los universitarios junto a 3.000 estudiantes realizan una movilización en la ciudad de El Alto en demanda de la creación de una universidad autónoma. La manifestación es reprimida por el GES.

Viernes 25

- La Federación de Padres de Familia de El Alto realiza una movilización hasta la plaza San Francisco para exigir la aprobación de la ley para la creación de la Universidad autónoma de esa ciudad.

Lunes 28

- Estudiantes y padres de familia realizan una marcha en rechazo al proyecto de Ley de Creación de la Universidad Autónoma de El Alto porque el mismo no reconoce la autonomía inmediata de la casa de estudio.

GLOSARIO DE SIGLAS

BCB	Banco Central de Bolivia
CIDOB	Confederación Indígena del Oriente Boliviano
CIRABO	Central Indígena de la Amazonia
COB	Central Obrera Boliviana
COF	Centro de Orientación Femenina
COTEL	Cooperativa Telefónica
CPESC	Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz
CSUTCB	Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
ENTEL	Empresa Nacional de Telecomunicaciones
FONVIS	Fondo Nacional de Viviendas
FUD	Federación Universitaria de Docentes
GES	Grupo Especial de Seguridad
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
LAB	Lloyd Aéreo Boliviana
RTS	Régimen Tributario Simplificado
SNC	Servicio Nacional de Caminos
TAM	Transportes Aéreos del MERCOSUR
UMSA	Universidad Mayor de San Andrés
UMSS	Universidad Mayor de San Simón

** Realizado por Florencia Ayala, colaboradora del OSAL.*

Brasil*

M a i o

2ª feira 1

• Lock out nacional dos caminhoneiros. Protesto foi liderado pelo Movimento União Brasil Caminhoneiro e pelo Sindicato dos Caminhoneiros. Os caminhoneiros permaneciam estacionados no acostamento das rodovias federais e estaduais de todo o país. O movimento conseguiu a adesão de 800 mil a 1 milhão de uma frota total de 1,6 milhão de caminhões. Os grevistas reivindicavam, entre outros: a flexibilização das leis de trânsito em relação às multas; a redução do preço do pedágio; o fim da pesagem por eixo; aposentadoria aos 25 anos de trabalho; combate à corrupção na Polícia Rodoviária Federal. O adversário foi o Governo Federal, e o movimento não obteve apoio de outras entidades sociais. Os protestos ocorreram principalmente na região Centro-Sul do país. Inicialmente, a União respondeu com repressão policial, procurando impedir o estacionamento no acostamento das rodovias.

3ª feira 2

• Ocupação de prédios públicos nas principais capitais do país. Militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam prédios públicos, contabilizando cerca de 5 mil manifestantes, que reivindicavam audiência com o Presidente da República e os ministros da área econômica, assentamento de todas as famílias acampadas, distribuição de cestas básicas enquanto não ocorre o assentamento dos acampados, aumento dos financiamentos estatais para os assentados e desapropriação de áreas rurais nos Estados de Rondônia, Mato Grosso e São Paulo. Protestavam contra o governo federal e obtiveram a adesão da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e do Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), entre outros. Os manifestantes ocuparam prédios públicos nas principais capitais do país. Como resultado, ocorreu confronto com a Polícia Militar (PM) em São Paulo, com a prisão de 15 manifestantes; e em Curitiba, com o saldo de 1 morto e 80 feridos.

• Início da greve dos professores da rede estadual de São Paulo, exigindo reajuste salarial e criação de uma política salarial – com reajuste periódico dos vencimentos

Sábado 6

• Finalização do lock out dos caminhoneiros iniciado no dia 01. A União editou Medida Provisória instituindo o Vale-Pedágio, além de transferir para os proprietários das cargas transportadas as despesas relativas às taxas pagas pelos caminhoneiros.

4ª feira 10

• Manifestação em Brasília (DF). Integrantes da CONTAG, do MLST, do MST, de partidos políticos de esquerda, de sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT), além de servidores públicos federais em greve, seringueiros e índios realizaram passeata e vigília que reuniu, aproximadamente, 10 mil pessoas, e reivindicavam aumento de verbas e crédito para a reforma agrária; renegociação das dívidas dos pequenos agricultores; assinatura de convênio com o Ministério da Educação (MEC) e a CONTAG para elaboração de programa de alfabetização de jovens e adultos do mundo rural; adoção do programa Bolsa-Escola; entre outros. Protestavam contra o Governo Federal, em frente ao Congresso Nacional, no Distrito Federal. O Governo Federal não se manifestou a respeito da pauta de reivindicações.

5ª feira 11

• Pacote agrário. Ainda em resposta às ocupações ocorridas no dia 02/05, o Governo Federal lançou o “pacote agrário”, que, entre outras medidas, estabeleceu a não

desapropriação das fazendas ocupadas pelo MST por até 4 anos e a transferência da reforma agrária para os Estados, além da redução dos juros para a agricultura e o anúncio de verbas para o setor. O Governo Federal recebeu, ainda, a liderança da CONTAG, ao mesmo tempo em que procurou utilizar a Lei de Segurança Nacional contra o MST e ordenou a prisão de 28 lideranças dos sem-terra pela Polícia Federal.

4ª feira 17

- Professores da rede estadual de São Paulo, em greve desde o dia 02/05, realizaram passeata que reuniu 30 mil pessoas. Protestavam contra o governo estadual e obtiveram a adesão dos professores estaduais em greve, secundaristas, universitários, além de metroviários e servidores federais em greve. O protesto ocorreu na cidade de São Paulo. Como resultado, o governo estadual, neste momento, ignorou as reivindicações dos trabalhadores.

6ª feira 26

- Greve do funcionalismo público federal, iniciada em 06/04. Os grevistas, sem aumento há 5 anos, organizaram manifestações, da qual participaram entre 3 mil e 5 mil pessoas, que reivindicavam reajuste de 63,8%, negociação do pagamento de passivos trabalhistas, contratação dos aprovados nos concursos públicos realizados, além de melhoria nos benefícios oferecidos pela União. Protestavam contra o governo federal, nas principais capitais do país. Neste momento, a resposta da União foi o corte do ponto, repressão policial e a reabertura do Programa de Demissão Voluntária (PDV).

J u n h o

6ª feira 2

- Greve dos professores da rede estadual de São Paulo. Dezenas de professores em greve desde o dia 02/05, montam acampamento para exigir reajuste de 54,71%, máximo de 35 alunos por turma nos níveis fundamental e médio de ensino e fim da “aprovação automática” dos alunos. Protestavam contra o governo estadual, sem obter, no entanto, a adesão de outras entidades do movimento social. O conflito ocorreu na cidade de São Paulo em frente à Secretaria Estadual de Educação e resultou em violenta repressão da PM com 5 feridos e 5 manifestantes presos.

Sábado 3

- O MST promoveu passeata, com aproximadamente 4 mil pessoas, que protestavam contra a violência da PM, que, em maio, assassinou um militante sem-terra em manifestação. Contou com o apoio do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A passeata ocorreu em Curitiba (PR). A União reabriu as negociações com o MSTe anunciou que pretende assentar mais 15 mil famílias, além das 45 mil inicialmente previstas para o ano 2000.

5ª feira 8

- Início da greve dos professores e servidores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Eles reivindicavam reajuste salarial de 28,38% e incorporação do abono de 10% aos salários. A greve foi iniciada em protesto contra o governo estadual.

5ª feira 15

- Término da greve dos professores da rede estadual de São Paulo, iniciada em 02/05, devido à baixa adesão da categoria. A contra-proposta do governo estadual aos professores não foi aceita, e a greve foi finalizada sem que os grevistas conseguissem o que reivindicavam.

J u l h o

- 3ª feira 4** • Militantes do MST provocaram, com ameaça de invasões, aumento da tensão social na região de Buritis (MG), onde o Presidente Fernando Henrique Cardoso possui uma propriedade rural; como resultado, o Governo Federal liberou verbas para os assentados e a ocupação da fazenda pelo exército.
- 4ª feira 5** • Greve dos professores e servidores da UERJ. Confronto entre os manifestantes, em greve desde 08/06, e a PM. Os professores e servidores estavam acampados nos jardins da sede do governo estadual. Contavam com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores da UERJ (SINTUERJ), do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (SINTRASEF) e da Federação das Associações dos Servidores das Universidades Públicas Brasileiras (FASUBRA), além do apoio de grevistas do funcionalismo federal. O conflito ocorreu no Rio de Janeiro.
- 3ª feira 18** • Término da greve do funcionalismo público federal, iniciada em 06/04. Como resultado, o Presidente da República anistiou as faltas e reabriu as negociações.
- 2ª feira 24** • Manifestações de repúdio à política agrícola do Governo Federal. O MST, com a presença de cerca de 17 mil militantes, realizou passeatas, acampamentos e atos públicos em repúdio à política agrícola do governo federal, nos Estados da Paraíba, do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Não houve resposta por parte do governo federal.
- 3ª feira 25** • Manifestação do MST no Dia do Trabalhador Rural, protestaram em forma de passeata, bloqueio de estradas, acampamentos, ocupação de empresas e de prédios públicos contra a política agrária adotada pelo Governo Federal. Os protestos reuniram aproximadamente 36 mil militantes em todo o país. Eles reivindicavam o combate radical à corrupção, fim da importação e produção de alimentos transgênicos, a proibição do uso de agrotóxicos, ampliação das verbas para os assentamentos e para os pequenos proprietários rurais. Houve conflitos com a PM em várias manifestações, e ocorreu a morte de 2 militantes: em Recife (PE), e no interior do Ceará.
- 4ª feira 26** • Término da greve dos professores e servidores da UERJ, iniciada em 08/06. O Poder Executivo concedeu 10% de abono, extensivo aos aposentados, com incorporação definitiva aos salários a partir de 2001.
- 2ª feira 31** • Índios caiapós retém 15 turistas que invadiram região objeto de disputa entre fazendeiros/madeireiros e indígenas. O objetivo dos índios era a demarcação da reserva indígena e a repressão à pesca ilegal na região. O conflito ocorreu na Terra do Baú, região situada no sul do Pará.

A g o s t o

- 4ª feira 2** • Maquinistas da Supervia (empresa concessionária do transporte ferroviário do Estado do Rio de Janeiro) entram em greve; os ferroviários reivindicam, entre outros pontos, a reintegração dos funcionários demitidos, o cancelamento das punições aplicadas, estabilidade no emprego e aumento do valor do ticket refeição.

6ª feira 4

- Índios caiapós liberaram os reféns após a União determinar à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) o atendimento das suas reivindicações. Os fazendeiros, que ocupam 600 hectares dos 1,85 milhão de hectares da reserva, não ficaram satisfeitos com a decisão ministerial, pois ocupam área cedida pela própria União, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), situada às margens da rodovia Santarém-Cuiabá.

- Fim da greve da Supervia. Após passeata dos grevistas no centro do Rio de Janeiro, a empresa concordou em reintegrar os funcionários demitidos.

- Ofensiva do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST): Cerca de 130 militantes promoveram, pela 1ª vez, passeio a um shopping freqüentado pelas classes média e alta, no intuito de chamar a atenção da mídia e do poder público para a questão da moradia e da exclusão social. O protesto foi realizado na cidade do Rio de Janeiro; foi um protesto pacífico, embora alguns comerciantes tenham fechado as lojas, por temerem tumultos; a seguir, os manifestantes seguiram em passeata até a sede do governo estadual.

3ª feira 8

- Realização do IV Congresso Nacional do MST, que discutiu as perspectivas do movimento, reunindo 11 mil militantes e sendo a maior reunião promovida por uma organização rural no Brasil. O MST reivindicou, entre outros: a votação da emenda constitucional que transfere para a Justiça Federal os crimes contra os direitos humanos, que estão sob responsabilidade da Justiça Estadual; aprovação da emenda constitucional que limita a propriedade rural; proibição da importação e da produção de alimentos geneticamente modificados; modificação do modelo de agricultura que seja baseado na pequena propriedade e voltado para o consumo interno. O Congresso contou com o apoio dos partidos de esquerda e de organizações do movimento social; realizou-se em Brasília (DF), encerrando-se em 12/08.

5ª feira 10

- Marcha das Margaridas: A maior manifestação já realizada exclusivamente por mulheres, que reuniu entre 13 mil e 20 mil pessoas. Além da passeata, elas fixaram cruzeiros em frente ao Ministério da Justiça, criticando a não-apuração dos crimes cometidos contra a mulher. As manifestantes protestaram contra a fome, a pobreza e a violência no campo e exigiam a ampliação dos direitos trabalhistas e previdenciários, o combate à discriminação e a criação de linhas especiais de crédito para as agricultoras. As manifestantes contavam com o apoio da CONTAG. Os protestos ocorreram em Brasília (DF), e a União respondeu com novas regras para o crédito agrícola voltado para os pequenos proprietários rurais.

6ª feira 11

- Protesto do MTST: Cerca de 280 militantes sem-teto, promoveram manifestação em supermercado freqüentado pela classe média-alta; eles fizeram compras de elevado valor, e, como pagamento, apresentaram panfletos alusivos ao escândalo, de repercussão nacional, relativo ao desvio de verbas das obras do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Os manifestantes sem-teto reivindicavam, do governo estadual, o fornecimento de cestas básicas e a construção de residências nos locais onde moram. O protesto ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. As reivindicações não foram atendidas, pois o governador do Estado alegou fornecer-lhes, mensalmente, cestas básicas; além disso, a PM revistou um dos acampamentos do MTST.

- Em resposta à manifestação do MTST de 04/08, a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) notificou os comerciantes que fecharam as lojas, por crime de discriminação.

2ª feira 14

Segunda-feira 14 – Julgamento dos envolvidos no massacre de Corumbiara (RO), ocorrido em 1995, onde morreram 10 integrantes do MST e 2 policiais militares; o julgamento,

realizado em Porto Velho (RO), resultou na absolvição de 2 oficiais que comandavam a operação e de 5 soldados da PM; foram condenados 2 policiais militares (penas de 16 e 18 anos de prisão) e 2 líderes sem-terra (penas de 6 anos e de 8 anos e 6 meses de prisão).

Sábado 19

• Realização do 7º Congresso Nacional da CUT, a maior e mais importante central sindical do país, em Serra Negra (SP), onde, pela primeira vez em 17 anos, foi eleito para presidente da central sindical um não-metalúrgico, João Felício, líder do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo.

LISTA DE SIGLAS

ALERJ	Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
CNBB	Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
CONTAG	Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CUT	Central Única dos Trabalhadores
FUNAI	Fundação Nacional do Índio
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MEC	Ministério da Educação
MLST	Movimento de Libertação dos Sem Terra
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
MTST	Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
PM	Polícia Militar
UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro

** Realizado por Laboratório de Políticas Públicas (LPP); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Emir Sader, Prof. Dra. Silene de Moraes Freire. SISTEMATIZAÇÃO DACRONOLOGIA: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida, Andrea de Souza de Carvalho, Mariana Oliveira Setúbal. COLETA DE DADOS: Fernanda Rohen, Janaina Bilate Martins, Marcelo Augusto N. Muniz, Maria Fernanda Ramos. Fontes: Jornal O Globo / RJ, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Estado de São Paulo.*

Chile*

M a y o

Lunes 1

- En Santiago de Chile se realiza el acto convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Se estima que la concurrencia es de entre 6 mil (según la fuente periodística) y 20 mil personas (para los organizadores). El presidente de la CUT, Eitel Moraga, critica el proyecto de ley sobre Seguro de Desempleo, plantea la necesidad del cumplimiento de las leyes laborales y se manifiesta a favor del enjuiciamiento a Pinochet.

Miércoles 3

- Medio centenar de pehuenches y mapuches de las comunidades indígenas de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, que se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica de la empresa Endesa, cortan por más de 15 horas la ruta de acceso a la misma, ubicada en el Alto Bío Bío, en reclamo por la paralización de las obras.

Viernes 5

- Agricultores mapuches de la Novena Región realizan una movilización en la ciudad de Temuco reclamando al gobierno por una solución ante los problemas que atravesaban como producto de malas cosechas.
- Cerca de 400 pescadores artesanales toman las tres empresas más importantes de Puerto Chacabuco (Friosur, Pesca Chile y Salmar), ubicado en la Undécima Región, para impedir la carga y descarga de productos con el fin de exigir la apertura del registro de pescadores artesanales y la obtención de un mejor precio en la merluza del sur.

Lunes 8

- Alrededor de 300 pescadores artesanales de la Duodécima Región toman por la mañana la ruta 9 norte, principal acceso a la ciudad de Punta Arenas, mientras que otro grupo pone cadenas y un candado en las oficinas del Servicio Nacional de Pesca (SERNAP) para impedir el ingreso de funcionarios. Cerca de las 21 horas los dirigentes pescadores y el gobierno llegan a un acuerdo por el cual se asignarán 390 toneladas de cuota de captura de merluza para los meses de mayo, junio y julio.
- Cerca de 200 pescadores artesanales de la caleta Queule, en la Novena Región, cortan la ruta 5 sur en reclamo de mayor protección ante la arremetida de barcos factoría al interior de las cinco millas náuticas destinadas a la pesca artesanal. Pasadas las 13 hs. la movilización se levanta luego de un compromiso del gobernador de Malleco de discutir el tema.

Martes 9

- El gobierno acuerda con las comunidades pehuenche/mapuche de Alto Bío Bío la conformación de una mesa de trabajo para discutir el problema suscitado a raíz de la construcción de la hidroeléctrica de Endesa.

Miércoles 10

- Cerca de 400 pescadores artesanales de la Undécima Región toman el puente Presidente Ibáñez y la ruta N° 5 sur en protesta por la negativa del subsecretario de Pesca de acudir a la zona de Calbuco para dialogar con integrantes de Fepesca sobre la cuota de extracción de la merluza.

Sábado 13

- Los pescadores de la Undécima Región llegan a un acuerdo con el gobierno. En este queda establecido que se iniciará la elaboración de una nómina de pescadores artesanales en el más breve plazo y que se fijará una cuota específica de captura de merluza para el área.

Jueves 18

- En las afueras de la intendencia regional de Concepción se reúnen el Sindicato de Naves Especiales junto con 600 trabajadores pesqueros para protestar por las restricciones a la captura de jurel.
- En Santiago, un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile conducido por la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) toma la imprenta de la editorial universitaria en protesta por la medida del Consejo Universitario de declararla en quiebra.
- Estudiantes del desaparecido Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Itesa protagonizan una protesta en el frontis del Ministerio de Educación debido a que esa repartición no informó acerca de la crisis que llevó al cierre del establecimiento sobre la que tenía conocimiento desde el año pasado.
- En Copiapó más de 500 estudiantes de la Universidad de Atacama acompañados por la FECH realizan una marcha para solicitar que se otorguen los recursos para el crédito fiscal. En Chillán, alumnos de las universidades de Concepción y del Bío Bío realizan una marcha por el centro de la ciudad para solicitar los créditos universitarios. En la Universidad de Santa María de Talcahuano se producen disturbios.

Viernes 19

- En Santiago 4 alumnos del Itesa inician una huelga de hambre y toman una de las sedes del instituto junto con una veintena de estudiantes a fin de que el Ministerio de Educación, que anunció su cierre, les permita finalizar el año académico. En La Serena los alumnos toman otra de las sedes del instituto con el mismo motivo.

Martes 23

- Alrededor de 50 estudiantes toman la casa central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) en protesta por el monto propuesto por la rectoría para el Fondo Solidario: según los estudiantes, los 580 millones exigidos por las autoridades al Ministerio de Educación, no son suficientes para detener la deserción de alumnos por falta de recursos.

Miércoles 24

- Un grupo de aproximadamente 100 estudiantes de Temuco toma por la mañana la sede de la subdirección sur de la CONADI con el fin de exigir recursos para el hogar universitario mapuche de la región y el mejoramiento en la calidad de vida de sus residentes.

Jueves 25

- Un centenar de productores de leche de la Novena Región se instala al frente de la Planta de la Sociedad de Productores de Leche S.A. para protestar por la situación que padecen a causa de los bajos precios del producto.
- Un grupo de pehuenches toma la catedral de la ciudad de Concepción en protesta por el incumplimiento del gobierno en la entrega de 150 mil hectáreas al pueblo mapuche.
- Los estudiantes mapuches que ocupaban la sede sur de la Conadi son desalojados luego de enfrentarse con carabineros. En Santiago, estudiantes de la misma etnia ocupan la sede central de la Conadi en solidaridad con sus compañeros de Temuco y se retiran pacíficamente horas después.

Viernes 26

- Un centenar de estudiantes de la UTEM toma en Santiago la Facultad de Ingeniería en protesta por la falta de compromisos para la entrega de créditos universitarios.
- Un preacuerdo alcanzado entre el rector de la Universidad Miguel de Cervantes, el presidente del Centro de Alumnos del Itesa y el presidente del sindicato de trabajadores comienza a poner fin al conflicto del instituto. Según este acuerdo, la totalidad de los alumnos y profesores será asignada a la universidad. Los estudiantes y docentes de La Serena también fueron incluidos en el traspaso.

- Estudiantes de la Universidad de La Frontera realizan una movilización en Temuco en solidaridad con los estudiantes mapuches que mantienen un conflicto por la existencia de hogares estudiantiles para ellos y por la obtención de créditos universitarios.

Sábado 27

- Estudiantes de la UTEM toman el campus de la Facultad de Administración y Economía, ubicada en la comuna de Providencia, en Santiago, a fin de protestar por la deficiente asignación de recursos para el crédito fiscal.

Lunes 29

- Estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) paralizan el funcionamiento de la institución en reclamo por más recursos para el Fondo Solidario.

Martes 30

- Los estudiantes de la Universidad de Chile representados por la FECH terminan con la toma de la Editorial Universitaria tras una serie de acuerdos que evitaron que se declarara su quiebra.

Miércoles 31

- Estudiantes del Itesa toman por algunos minutos el Ministerio de Educación en demanda de una pronta reubicación en otros centros educacionales.

J u n i o**Jueves 1**

- Estudiantes de la Universidad de La Frontera toman las oficinas de la rectoría y la avenida Francisco Salazar en la ciudad de Temuco ya que 360 alumnos que se encuentran sin becas y sin el crédito fiscal necesario para continuar sus estudios.

- El gobierno asigna recursos adicionales al Fondo Solidario de las universidades por un monto de 3.100 millones de pesos.

Jueves 8

- Los estudiantes de la UTEM realizan una protesta frente a la sede de la Cámara de Diputados en Santiago por considerar insuficientes los \$ 410 millones adicionales asignados a esta universidad.

Martes 13

- Más de 50 integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se movilizan hacia la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda para protestar contra los contenidos del acuerdo propuesto por la mesa de diálogo sobre el mecanismo que se implementaría para buscar los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Este acuerdo establece la reserva de identidad de los que aporten información sobre el tema, entre otras cosas.

Martes 20

- Unos 200 trabajadores de la minería Quebrada Blanca intentan instalar barricadas en Iquique en reclamo de un aumento en sus remuneraciones de un 12 por ciento, lo que motivaba las huelgas que venían realizando desde hacía 22 días. La intervención policial impide la realización de la protesta y causa la detención de 20 manifestantes.

Miércoles 21

- Unos 4.000 estudiantes de diversos planteles del país paran sus actividades luego del anuncio del gobierno de que los dineros disponibles en el fondo solidario no alcanzarán para todos los alumnos. En la Universidad de Atacama un grupo tomó parte de la ruta N° 5 norte. Por otro lado, unos 200 estudiantes de las universidades de Playa Ancha, Valparaíso, Católica de Valparaíso y Federico Santa María marchan por el mismo motivo.

Cronología

Jueves 22

- Los trabajadores del Ferrocarril de Arica a La Paz realizan una paralización de las actividades en protesta por las insuficientes condiciones de seguridad. El reclamo se desencadenó a raíz de la muerte por accidente de un maquinista. El gerente general de la administradora del FCALP, se compromete con los dirigentes sindicales a mejorar las condiciones de seguridad, por lo que el paro es depuesto.

Miércoles 28

- Alrededor de 300 estudiantes universitarios se manifiestan frente a La Moneda en protesta por la falta de fondos para aquellos que necesitan recursos para seguir estudiando.

Viernes 30

- En Osorno, un grupo de estudiantes ocupa la Universidad de Los Lagos en protesta por la decisión de las autoridades de cambiar a 17 compañeros las becas por el crédito fiscal.

J u l i o

Miércoles 5

- Familiares de ejecutados y ex-presos políticos toman a las 11 hs. la sede de la Concertación, en Santiago, para repudiar la actitud del gobierno y de los parlamentarios de esa agrupación que aceptaron los acuerdos de la mesa de diálogo que establecen el secreto de identidad a aquellos que aporten información sobre el paradero de los desaparecidos. La acción termina una hora después.
- Alrededor de 500 integrantes de La Voz de los sin Casa ocupan en Peñalolén una estación de servicio perteneciente al empresario Miguel Nasur con el fin de presionarlo para que les venda terrenos “a precio de pobre” y para conmemorar el primer aniversario de la ocupación de terrenos de Nasur en Peñalolén. La acción es reprimida por los carabineros, produciendo un enfrentamiento con un saldo de 32 detenidos y dos carabineros lesionados.

86

Jueves 6

- En Santiago, trabajadores en huelga pertenecientes a 16 sindicatos, asesorados y apoyados por la CUT, entre los que se destacan los de Clínica Los Condes, Teletón y Muebles Andes realizan una Marcha al Ministerio de Trabajo para protestar porque los empresarios no les otorgan un aumento salarial.

Sábado 8

- Los estudiantes de la UTEM, quienes mantenían tomados 3 edificios de la institución, llegan a un acuerdo con las autoridades del plantel relacionados con la asignación de créditos universitarios lo que motiva la finalización de las medidas.

Martes 11

- En Lanco, un grupo de aproximadamente de 300 camioneros dirigidos por el presidente de la Federación de Camioneros de la Décima Región, toma la ruta N° 5 sur en protesta por el nivel de endeudamiento que enfrenta su sector y por la instalación de un nuevo peaje en la zona.

Jueves 13

- En la Novena Región, una veintena de mapuches de la Comunidad Francisco Llanca-Lonko ingresa al fundo Ginebra, propiedad de la Sociedad Avícola Selva Limitada en demanda de 80 hectáreas.
- Los trabajadores municipales de la salud de Iquique inician una huelga para que la Corporación Municipal de Desarrollo Social acepte aprobar la carrera funcionaria para ellos.

Viernes 14

- En Santiago, tras cumplir 50 días de paro, cientos de estudiantes toman las dependencias del campus del ex Pedagógico, luego de lo cual representantes de los estudiantes y académicos de la

UMCE llegan a un preacuerdo con el rector por el cual se definiría un cronograma de temas a tratar, fundamentalmente el crédito universitario y las políticas futuras sobre el Fondo Solidario.

Lunes 17

- Cerca de un centenar de estudiantes, representantes del sector docente y del personal no docente de la UMCE se moviliza al Palacio de La Moneda para entregar una carta al presidente Lagos en la que se lo llama a una reunión urgente para que ocupe el rol de intermediario entre ellos y las autoridades de la universidad con las que se encuentran en conflicto.

Jueves 20

- Unos 120 trabajadores de la cerrada empresa minera La Cascada realizan una protesta en el centro de Iquique por la indemnización de 500 operarios despedidos. Luego de un enfrentamiento entre los manifestantes y los carabineros, dos trabajadores fueron heridos y cinco detenidos.

- Viñateros del Valle de Itata que se oponían a la construcción de una planta forestal en las inmediaciones de sus propiedades intentan realizar una marcha en Concepción, con el fin de llegar a la sede de gobierno regional cuando son interrumpidos por carabineros, con quienes se enfrentaron. Como consecuencia nueve manifestantes fueron detenidos.

Viernes 21

- Un grupo de manifestantes pertenecientes a distintas organizaciones de derechos humanos marcha por el centro de Santiago rumbo al monumento al ex presidente Salvador Allende tras la finalización de los alegatos del proceso de desafuero del senador vitalicio Pinochet.

Martes 25

- El Ministerio de Educación acuerda con la Universidad de Aconcagua el traspaso de 500 alumnos del ex-Itesa a esa entidad.

A g o s t o

87

Jueves 3

- En Santiago, la CUT organiza un acto al que acuden 15 mil personas (8 mil para los carabineros) en el cual su titular, se manifiesta en contra de los resultados de las negociaciones que venían realizando con el sector empresarial en torno del seguro de desempleo y hace un llamado al presidente a impulsar una reforma tributaria y la industrialización del país. La Asamblea de Derechos Humanos, presente en el acto, se expresa a favor del enjuiciamiento a Pinochet.

Martes 8

- La Corte Suprema confirma el desafuero del ex-dictador Augusto Pinochet por 14 votos contra 6. La resolución produce el festejo de 1.500 opositores al general retirado, quienes, junto al Partido Comunista, el Partido Socialista, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la de Ejecutados Políticos se movilizan del Palacio de la Moneda hacia la Plaza de la Constitución y luego al Estadio Nacional.

Miércoles 16

- En Concepción, el sindicato de Trabajadores Sanitarios, junto con cerca de 675 trabajadores de la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío (ESSBIO), realiza una huelga y cierra las dependencias de la compañía en reclamo por un acuerdo con el Sistema Administrador de Empresas del Estado respecto de las indemnizaciones que deberían recibir por su privatización en igualdad de condiciones a los realizados con otros organismos estatales.

Viernes 18

- Cerca de 400 empleados y técnicos de ESSBIO marchan en Concepción y otro tanto lo hace en Los Ángeles.

Lunes 21

- En Santiago, más de mil funcionarios de la salud municipal de diferentes consultorios de la Región Metropolitana, integrantes de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), marchan hacia el Ministerio de Salud en reclamo por la lentitud del Ejecutivo en satisfacer sus demandas: el aumento del piso salarial, el establecimiento de un aumento por antigüedad, su reconocimiento como funcionarios públicos, a fin de gozar de los derechos del sector, y un pronunciamiento oficial a favor de la gratuidad del servicio de salud.
- Estudiantes mapuches, apoyados por la Federación de Estudiantes local, toman las dependencias de los campus Menchaca Lira y San Francisco de la Universidad Católica de Temuco en reclamo de mayores espacios para el desarrollo de la etnia en la institución y exigen una prórroga al pago de los aranceles del primer semestre.

Martes 22

- 674 trabajadores de ESSBIO comienzan un paro por tiempo indefinido.

Miércoles 23

- Alrededor de 400 alumnos junto con la organización gremial estudiantil de la UMCE realizan una marcha hacia el Ministerio de Educación para exigir la renuncia del rector y un aumento en la asignación de recursos del Fondo Solidario.

Viernes 25

- La ministra de Planificación, el director de la Conadi y representantes de 8 comunidades indígenas de Lumaco oficializan un acuerdo que establece el traspaso de 4.225 hectáreas a 425 familias.

Sábado 26

- Representantes de la Junta Directiva de la UMCE y los delegados del Consejo de Presidentes de los estudiantes acuerdan realizar una mesa de diálogo.

88

Lunes 28

- El Consejo Nacional de la CUT conformado por 45 consejeros, elegidos el 24/8, proclaman como presidente de la organización al ex dirigente socialista Arturo Martínez, luego de negociar el apoyo de los representantes electos del PC, lo cual le permitió superar en número a los votos de la Concertación. Al dirigente del PC, José Ortiz, le es asignada la Secretaría General de la entidad.

Martes 29

- La Confederación Nacional de Dueños de Camiones dirigida por Héctor Moya comienza una marcha dividida en etapas desde la ciudad de Ancud hacia Santiago que convoca a 180 camioneros que reclaman por el incumplimiento del acuerdo firmado con el gobierno tendiente a solucionar el endeudamiento del sector y a reducir los impuestos del diesel y del petróleo, entre otras cosas. En la recepción realizada en Osorno, primer destino de la medida, dirigentes de gremios de turismo, construcción y agricultura, pertenecientes a la multigremial, junto a la Asociación de dueños de Camiones de Osorno apoyan la medida. La movilización continúa luego hacia Valdivia.

GLOSARIO DE SIGLAS

CONFUSAM	Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
CONADI	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
ESSBIO	Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío
FCALP	Ferrocarril Arica La Paz
FECH	Federación de Estudiantes de Chile
FEPESCA	Federaciones de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
SERNAP	Servicio Nacional de Pesca
UTEM	Universidad Tecnológica Metropolitana
UMCE	Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

** Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuente: Diario La Tercera Digital.*

Colombia*

M a y o

Lunes 1

- Miles de colombianos, junto con las centrales obreras, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), marchan en varias ciudades del país en el Día Internacional de los Trabajadores. En Santafé de Bogotá se lleva a cabo una importante movilización, en Bucaramanga marchan cerca de 5.000 personas, mientras que en Barranquilla protestan movilizándose alrededor de 10.000 habitantes. Se manifiestan en contra de la política económica neoliberal aplicada por el Gobierno, y especialmente en rechazo a la política de privatizaciones y a la ausencia de soluciones al problema del desempleo.

- Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y paramilitares de extrema derecha se enfrentan en las zonas rurales de las poblaciones de Río Blanco (centro) y Yondó (noroeste), posible zona a desmilitarizar para desarrollar el proceso de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejando hasta el momento un saldo de 39 muertos en combate.

Viernes 5

- El ELN y el Gobierno, después de más de un año de negociaciones, acuerdan crear una zona de convivencia donde realizar la Convención Nacional y los diálogos formales de paz. Así también, acuerdan constituir una veeduría con dos niveles de funcionamiento: uno constituido por representaciones nacionales, el Gobierno y el ELN, y otro conformado por la comunidad internacional.

Martes 9

- Comerciantes de la Zona Especial Aduanera de la región de Maicao, en La Guajira, realizan una movilización en contra del control de mercancías que pretende llevar a cabo el Gobierno mediante la implementación de un proyecto de ley que establece un impuesto del 10% a las mercaderías que entren por esa región.

Miércoles 10

- Los trabajadores de El Cerrejón, agremiados en Sintracarbón, y los sindicatos de los sectores de salud, educación, Telecom y las ONG,s, convocados por la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) realizan un paro regional, con bloqueos de vías y protestas pacíficas en distintos puntos del distrito de Barranquilla, en contra del proceso de privatizaciones y de la política neoliberal aplicada por el Gobierno. Participan también usuarios de servicios públicos que protestan por las altas tarifas del agua, la energía eléctrica y el teléfono. La Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios manifiesta particularmente su descontento con el recorte de presupuesto que afecta al sector. Por su parte, la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) para en rechazo a la medida adoptada por el Gobierno de evaluar a los maestros.

- Alrededor de 2 mil habitantes de pueblos aledaños al sur de Bolívar bloquean pacíficamente, con pancartas y banderas, la carretera del Magdalena Medio, que comunica al interior del país con la costa Atlántica, en rechazo al establecimiento en esa región de una zona de convivencia para diálogos entre el Gobierno y el ELN.

Jueves 11

- Comerciantes de La Guajira e indígenas wayuú, paisas y arijunas, se concentran en Paradero, a la altura de Cuestecitas, en protesta por la puesta en marcha del nuevo Régimen de Estatuto Aduanero, produciéndose enfrentamientos con la policía. Asimismo, cerca de mil manifestantes, encabezados por la Corporación de Desarrollo Comercial y Cívico de Mai-

cao (Codecma) en el sitio de las Cuatro Vías, también en La Guajira, mantienen bloqueadas las vías, así como también la línea férrea.

Viernes 12

- El Gobierno y los comerciantes de Maicao acuerdan el cese del bloqueo de carreteras, vías férreas y la normalización de actividades. El acuerdo incluye el cobro de un arancel del 10% al consumo. Los comerciantes podrán ingresar todo tipo de mercaderías, siempre que cumplan con las normas aduaneras.

Sábado 13

- Comerciantes liderados por la Asociación de Usuarios de Ranchería (Asorranchería), de los Municipios de Fonseca y San Juan, al Sur del Departamento de La Guajira, bloquean carreteras exigiendo al Gobierno Nacional que, junto con el acuerdo realizado con los comerciantes de Maicao, contemple, entre otras cosas, la reactivación de la represa del río Ranchería y el distrito de riego de San Juan. Los habitantes del resto de los Municipios del Sur se unen a la protesta.

Domingo 14

- Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) combaten en Sumití, sur de Bolívar, dejando un saldo de 2 muertos y 2 heridos.

Miércoles 17

- El Gobierno Nacional cancela la Audiencia Pública Internacional del 28 de mayo, en la que 22 estados del mundo discutirían en la zona de distensión la problemática de cultivos ilícitos y de medio ambiente del país, en protesta por el aumento de secuestros y asesinatos de la guerrilla.

- El Consejo Gremial Nacional y centenares de estudiantes del país se reúnen en el Parque Lourdes, en Bogotá, y piden al gobierno detener los acercamientos de paz con las FARC hasta que cesen los asesinatos y enfrentamientos.

- Cerca de 2 mil habitantes del sur de Bolívar bloquean la carretera que conduce de Barrancabermeja a Bucaramanga, en contra de la decisión del Gobierno de realizar la Zona de Encuentro con el ELN en Yondó (Antioquia), y San pablo y Cangallo (sur de Bolívar).

Martes 23

- Miembros de la población de Cauca, bloquean las dos carreteras que conectan a Antioquia con la costa Atlántica por la vía Montería, en protesta por la calidad de los servicios públicos, especialmente el de agua potable y el de energía, que suspenden el servicio durante 3 horas diarias.

Sábado 27

- Los campesinos de los municipios de Doradal (Antioquia), Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto Araujo (Santander) levantan por el momento el bloqueo de carreteras que realizan en contra de la conformación de una zona de despeje con el ELN en esa región, luego de que representantes de los Comités de bloqueo y el Gobierno Nacional se reúnen en La Lizama. Por su parte, los campesinos de Puerto Boyacá deciden mantener el taponamiento de la vía 24 hs. más hasta que el Ejecutivo firme un acuerdo con las comunidades, mientras que alrededor de 5 mil campesinos que bloquean la Troncal del Magdalena Medio anuncian que no levantarán los bloqueos hasta tanto el Gobierno no les dé una respuesta positiva.

Martes 30

- Transportistas interdepartamentales de Barranquilla y Cartagena protestan en estas ciudades con marchas y taponamientos, por una pronta solución a los bloqueos realizados por el Movimiento No a la Zona de Despeje, en las vías que comunican a la costa con el interior del país, en el Magdalena Medio, y también por la reparación de las vías damnificadas durante las protestas.

Miércoles 31

- Voceros del Gobierno Nacional y de las FARC, reunidos en Villa Nueva Colombia, sede de negociación, acuerdan realizar la “Audiencia Pública Nacional sobre Medio Ambiente y Cultivos Ilícitos” durante los días 29 y 30 de junio.

Junio

Jueves 1

- Conductores y ayudantes de 140 buses de servicio interdepartamental taponan las principales vías de acceso a Barranquilla en protesta por los bloqueos del Magdalena Medio y del César, produciéndose enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Posteriormente, representantes de los transportistas, el gobernador del Atlántico, y otras autoridades acuerdan levantar los bloqueos, a cambio, entre otras cuestiones, de la liberación de los manifestantes detenidos y la no toma de represalias.

Miércoles 7

- La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), las agremiaciones sindicales de salud, y los empleados del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) realizan un paro nacional con marchas en las principales vías de Barranquilla, en protesta por las políticas de privatización aplicadas por el Gobierno. La Fecode en particular inicia un paro de 48 hs. y reclama la derogación del Decreto N° 955 sosteniendo que atenta contra el régimen pensional de los docentes. Por otra parte, amenaza con no reanudar las clases una vez que terminen las vacaciones semestrales, y aplazar indefinidamente el comienzo del ciclo lectivo.

Jueves 8

- La Fecode y trabajadores del sector salud realizan marchas en todo el país y finalizan el paro nacional de 48 hs. en protesta por las privatizaciones. El Gobierno se compromete a mantener una instancia de diálogo con esta organización para cualquier toma de decisiones.

• EL Gobierno Nacional declara abierto formalmente el proceso de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), concediéndole a éste nuevamente estatus político, y prorroga por seis meses más la zona de despeje con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para facilitar la continuación de los diálogos con esa organización.

• Los voceros de las FARC y del Gobierno se reúnen en Madrid, España, en el encuentro llamado "El Proceso de Paz de Colombia", para seguir negociando el proceso de paz, y con el fin de continuar recibiendo subsidios para seguir con el desarrollo del proceso conciliatorio

Miércoles 14

- Las FARC y miembros de la policía se enfrentan en diferentes puntos del poblado de Ovejas, en Sucre, en un intento de los primeros por tomar esa región.

Sábado 17

- Autoridades del sur de Bolívar, el Gobierno y representantes del ELN se concentran en esa región para tratar el tema de la creación de la zona de encuentro en los municipios de Cangallo y San Pablo (Bolívar) y Yondó (Antioquia).

Lunes 26

- Miembros de las FARC efectúan acciones armadas en la población de los Montes de María, en el Municipio de Colosó, Sucre, y en el Municipio huilense de Algeciras, al suroeste de Neiva.

Jueves 29

- El ELN anuncia que suspendería los secuestros en todo el país, si con el Gobierno se encuentra una forma de financiamiento para las necesidades del grupo y sus miembros durante el tiempo que dure el proceso de paz.

• Representantes de gobiernos de más de 20 países, incluido el Vaticano, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), miembros de las FARC, el Parlamento Europeo, la Unión Europea y representantes del Gobierno Nacional, participan en la "Audiencia Pública Internacional sobre Cultivos Ilícitos y Medio Ambiente", que se realiza en Villa Nueva Colombia, sede de los diálogos de paz, el día de la fecha hasta el 30 de junio inclusive.

Viernes 30

- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un paquete de ayuda para el “Plan Colombia” de 1.319 millones de dólares.

J u l i o

Sábado 1

- El Ejército y las FARC combaten en zona rural del municipio de Algeciras, departamento de Huila (suroeste) dejando un saldo de alrededor de 100 muertos.

Lunes 3

- El Gobierno y las FARC se reúnen en San Vicente del Caguán, en Villa Nueva Colombia, para tratar de lograr un acuerdo que paralice hostilidades. Por el momento las FARC descartan cualquier cese del fuego hasta que un 80% de sus demandas por la reforma agraria, la redistribución de riquezas y por el fin a las políticas económicas de libre mercado se cumplan.

Miércoles 12

- Alrededor de 600 desplazados toman la sede de la Pastoral Social de Barranquilla, exigiendo programas de solución de vivienda, proyectos de generación de empleo, registro único de la población marginada por la violencia, un subsidio de arriendo, y garantías de no tomar represalias contra ellos una vez finalizada la toma.

Jueves 13

- Las FARC atacan militarmente las poblaciones de Colombia y Vegalarga, en Huila, destruyendo una importante parte de los poblados.

Domingo 16

- Trabajadores del Hospital General de Barranquilla realizan un paro en reclamo del pago de los salarios de los tres últimos meses.

Lunes 17

- El Consejo Nacional Sindical, conformado por las tres centrales obreras, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), y la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) se retira de las mesas de concertación, sobre transferencias, empleo y pensiones, en protesta por la falta de avance en el diálogo, contra el “Plan Colombia” y el creciente desempleo, entre otros reclamos.

Martes 18

- Desplazados continúan con la toma de la Pastoral Social de Barranquilla. Dos de los manifestantes se crucifican en protesta por la poca voluntad manifestada por el Gobierno para resolver las demandas.

Miércoles 19

- La Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) convoca a un paro de 48 hs. (miércoles y viernes por ser el jueves el día de la Independencia Nacional de Colombia) con bloqueos pacíficos de calles en la ciudad de Barranquilla, en reclamo por el salario adeudado de junio, el pago de las prestaciones sociales, y la entrega de una dotación de uniformes, y en disconformidad con el concurso abierto para crear 700 plazas educativas.

Lunes 24

- Los líderes del Ejército de Liberación Nacional, delegados del Gobierno, representantes de los sindicatos, empresarios, y partidos políticos, entre otros sectores de la sociedad civil colombiana se reúnen en Ginebra en el encuentro denominado “Por un Consenso Nacional por la Paz de Colombia” en busca de una solución política para avanzar en el proceso de paz.
- Integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, policías y militares se enfrentan en distintos puntos del país, en el Municipio de La Cruz (850 Km al sur de Bogotá) en el área

rural de Putumayo, en el Municipio de Cerro Azul (900 Km al norte de Bogotá) y en la población de Sevilla (480 Km al suroeste de Bogotá), dejando en total un saldo de alrededor de 20 muertos.

Martes 25

- El ELN suspende temporalmente las mesas de trabajo en Ginebra, Suiza, en rechazo a la ofensiva que las AUC están realizando en el sur de Bolívar contra el Comando Central del ELN.

A g o s t o**Jueves 3**

- Las Centrales obreras colombianas realizan un paro nacional en rechazo a los proyectos laborales y la política económica impulsada por el gobierno. La mayor adhesión se registra en los sectores de la salud, la educación y trabajadores estatales. Se realizan distintas movilizaciones, una de las más importantes en el Departamento del Atlántico, en la que participan también desplazados y usuarios de los servicios públicos.

Domingo 6

- El ELN inicia un paro armado en las carreteras de Bolívar y Sucre, contra el “Plan Colombia” y el Plan Trueno, que adelanta la Primera Brigada de Infantería en esa región, y en protesta por la visita que hará el 30 de agosto el presidente de los Estados Unidos.

Martes 8

- El Gobierno Nacional y el ELN, junto con delegados de España, Francia, Suiza, Noruega y Cuba se reúnen en el Sur del Departamento de Bolívar para reanudar el proceso de paz, luego de la preconvención realizada en Ginebra, Suiza.

Miércoles 9

- La Adea se declara en paro indefinido con la participación de cerca de 11 mil educadores departamentales, distritales y municipales para exigir el pago de salarios atrasados y prestaciones sociales, y que se los afilie al Fondo Nacional de Prestaciones.

Lunes 14

- Los sindicatos vuelven a participar en las mesas de concertación con los gremios y el Gobierno para tratar el tema de la reforma laboral y pensional, la generación de empleo, y la fijación de un salario mínimo. En la reunión que sostienen, el Gobierno se compromete a no presentar ningún proyecto de ley al Congreso, y los sindicatos a mantenerse en las mesas hasta el 30 de octubre.

Martes 15

- Tropas del Ejército y las FARC se enfrentan en la localidad de Pueblorrico, 60 Km al suroeste de Medellín, dejando un saldo de alrededor de 10 muertos, entre ellos 6 niños que recibieron tiros del Ejército.

Jueves 17

- Estudiantes de la Universidad de Nariño (Udenar) bloquean la salida del complejo universitario en Torobajo e impiden la salida de 20 colectivos, en protesta por el alto precio del pasaje.

Jueves 24

- La Adea realiza un paro en el Departamento del Atlántico acatado por cerca de 11 mil docentes, en reclamo de la paga de salarios y subsidio familiar adeudados, así como también la entrega de una prometida cantidad de uniformes, y en rechazo a la propuesta de la Administración Distrital de firmar convenios de desempeño que reducen la planta docente y les garantizan el pago de salario solo hasta el mes de octubre (inclusive).
- Estudiantes de la Universidad de Nariño, transportistas y la Alcaldía firman un acuerdo tarifario en el que se establece la baja de la tarifa del transporte en un 20%, y se estipulan dos incrementos de la misma hasta finalizar el año 2001, uno en diciembre de este año y otro en mayo del 2001. Los estudiantes desbloquean la salida de colectivos.

• Alrededor de 270 docentes realizan un paro en el Municipio de Caguán, en reclamo de la paga de salarios adeudados, y anuncian que sostendrán el paro hasta que el Gobierno se comprometa a mandar la suma de dinero de los salarios correspondientes a los meses adeudados y de los meses que restan hasta fin de año. Por su parte, los transportistas anuncian su adhesión al paro de maestros, y se unirán a estos para reclamar también recursos para culminar con las obras de la vía San Vicente –Neiva.

Viernes 25

• La Administración Departamental del Atlántico anuncia que no pagará los salarios docentes adeudados hasta que los maestros no reinicien las clases.

• Representantes del Gobierno, miembros de las FARC, y una delegación del Gobierno de Noruega se reúnen para tratar el proceso de paz. Paralelamente, se sesiona el Comité Temático Nacional, para evaluar las propuestas ciudadanas sobre cómo generar empleo e impulsar el desarrollo económico.

Martes 29

• Universitarios, sindicalistas y trabajadores realizan actos de protesta en distintos puntos del país, en rechazo a la visita del presidente de Estados Unidos, y en contra del Plan Colombia. Cerca de 300 universitarios, sindicalistas y otros trabajadores, marchan hacia la embajada norteamericana en Bogotá. Los estudiantes de la Universidad de Bogotá toman las instalaciones de la misma. La Policía reprime.

• Las FARC realizan cerca de 30 incursiones armadas, en distintos puntos de Magdalena, en protesta por el Plan Colombia, y la visita del Presidente norteamericano.

Miércoles 30

• Las FARC atacan militarmente los municipios de Valle, Cauca, Huila, Arauca, Magdalena, Antioquía, Nariño y Santander, en rechazo al “Plan Colombia” y a la presencia del presidente norteamericano en el país.

Jueves 31

• El Ministerio de Educación anuncia que garantizaría los recursos para el pago de salarios y prestaciones sociales a los maestros de los departamentos en huelga, con los que cancelaría el pago de sueldos hasta Diciembre del corriente año. La Fecode sostiene que los recursos no son suficientes para saldar los déficits del sector.

GLOSARIO DE SIGLAS

Adea	Asociación de Educadores del Atlántico
Asorranchería	Asociación de Usuarios de Ranchería
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CGTD	Confederación General de Trabajadores Democráticos
Codecma	Corporación de Desarrollo Comercial y Cívico de Maicao
CTC	Central de Trabajadores de Colombia
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
ELN	Ejército de Liberación Nacional
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Fecode	Federación Colombiana de Educadores
Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje
Udenar	Universidad de Nariño

** Realizado por: María Chaves, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios El Heraldo y El Espectador.*

Ecuador*

M a y o

Lunes 1

- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a organizaciones sociales y fuerzas progresistas, realizan una movilización por el Día Internacional de los Trabajadores. Alrededor de 50.000 personas se concentran en las cercanías del edificio de Seguro Social de Quito para marchar hasta el centro de esa ciudad con consignas en contra del proceso de dolarización.

- Un grupo de indígenas de la CONAIE y ECUARUNARI toman la Iglesia San Francisco de Quito para exigirle al Gobierno la amnistía de los coroneles que participaron en el levantamiento del 21 de enero pasado.

- La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) comienzan movilizaciones y bloqueos en las carreteras interprovinciales para rechazar la dolarización de la economía y para exigirle al gobierno que cambie las autoridades del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE)

Jueves 4

- Alrededor de 100 miembros de la cooperativa San Juan Bosco de Itchimbía llegan al Municipio de Quito para exigirle a las autoridades la dotación de los servicios básicos como el agua potable, luz eléctrica, redes de alcantarillado, entre otros.

Lunes 15

- La Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), el Consejo Nacional de Servidores Públicos (CONASEP), la CONAIE, junto a militares y policías que participaron en el levantamiento del 21 de enero, comienzan hoy la “Acción Combativa Popular” que consiste en realizar jornadas de protesta en donde se elaborará un petitorio que será entregado al Poder Ejecutivo. Los puntos más importantes son el rechazo al modelo de dolarización, un incremento salarial para el sector público, y la amnistía para todos los militares y civiles que participaron en la revuelta indígena del 21 de enero pasado.

- La UNE inicia un paro indefinido en demanda de un aumento del salario básico de 100 dólares y para exigirle al Gobierno que archive la Ley de Privatizaciones de la Educación que ya está en el Congreso. Alrededor de 3.000 maestros de la ciudad de Quito realizan una marcha de protesta hasta el Palacio de Gobierno. Sólo un grupo de maestros llega hasta el lugar ya que la movilización es reprimida por la policía. En Guayaquil los docentes también inician una movilización en apoyo al paro declarado por la UNE.

- Un grupo de clientes del Banco del Progreso de Quito inicia una marcha hasta la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) para exigir la efectiva devolución de sus recursos.

Jueves 18

- La UNE decide continuar con el paro indefinido a pesar de las amenazas del Ministro de Educación de iniciar procesos penales contra los dirigentes de la organización si no dan marcha atrás con la medida de protesta.

Martes 23

- La CONAIE, la CMS, la UNE y el FUT inician una movilización hasta el monumento a Si-

Cronología

món Bolívar en Quito para rechazar el conjunto de medidas económicas que presentará el presidente Gustavo Noboa. Además, las organizaciones sociales y sindicales anuncian que están preparando un plan económico alternativo que no contempla el sistema de dolarización.

- Un grupo de maestros de la UNE inicia una movilización hasta la Plaza Independencia para seguir exigiendo un incremento salarial del sueldo básico y para que el Gobierno otorgue la amnistía a los policías y militares que participaron del levantamiento indígena del 21 de enero pasado. La marcha es reprimida por la Policía Nacional con gases lacrimógenos.

- Los trabajadores de la salud comienzan una paralización de los servicios de atención al público para exigirle al gobierno aumentos salariales y la entrega de partidas económicas para que los hospitales públicos puedan seguir funcionando.

Jueves 25

- La Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (FENAJE) inicia un paro preventivo en rechazo al anteproyecto de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Denuncian que el anteproyecto no fue elaborado por la Corte Suprema Judicial sino por una comisión que pretende controlar el poder judicial.

Martes 30

- La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), junto a El Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP), realizan una manifestación hacia el Congreso Nacional para rechazar el conjunto de medidas económicas anunciadas por el gobierno y para dar a conocer su oposición a la nueva Ley de Educación Superior, que atenta contra la autonomía universitaria, quitándole a los estudiantes el derecho de manejar los propios recursos universitarios.

Miércoles 31

- La UNE inicia el bloqueo de carreteras y la toma de instituciones públicas como forma de radicalizar su protesta ya que no han obtenido respuesta del gobierno con respecto al incremento del salario básico. La Fiscalía General de la Nación inicia acciones legales contra los dirigentes de la UNE por llevar adelante una acción ilegal como es la paralización de los servicios públicos.

- Cerca de 50 trabajadores de la salud realizan una manifestación en los alrededores del Hospital de la Virgen de las Lajas en rechazo a las medidas económicas decretadas por el Gobierno.

J u n i o

Lunes 5

- La Federación de Profesionales de la Salud Rural de Manabí comienzan un paro indefinido para exigirle a las autoridades de ese sector el pago de sueldos atrasados y el incremento del salario básico.

- En el Día del Liberalismo, en el cual se conmemoran 105 años desde que Eloy Alfaro logró la liberación del Ecuador, alrededor de 500 miembros de la coordinadora campesina de Manabí realizan una movilización hasta el parque Central para expresar su oposición a las políticas económicas decretadas por el Gobierno.

Miércoles 14

- Cerca de 30.000 médicos del sector estatal inician un paro indefinido en demanda de un aumento del salario básico de 300 dólares mensuales. Además, realizan una movilización hasta el Ministerio de Economía para exigir mayor presupuesto para equipar los hospitales públicos.

Jueves 15

- La UNE y el Frente Popular inician un paro por 48 hs. en todo el país para rechazar las medi-

Miércoles 21 das económicas como la dolarización y el alza del precio de los combustibles. La CONAIE y los campesinos anuncian que no participarán de la medida de protesta pero sí brindarán su apoyo.

- Alrededor de 10.000 personas, agrupados en la UNE, realizan una movilización hacia la Presidencia de la República en demanda del incremento del salario básico de 100 dólares. La manifestación fue reprimida por la policía y fue detenida la dirigente de la UNE Aracelly Moreno, quien tiene inmunidad parlamentaria.

Jueves 22

- Maestros de 13 provincias inician una huelga de hambre en demanda de la libertad de los docentes detenidos y por el aumento de los sueldos. Anuncian que el resto de las provincias se sumarán en las próximas horas a la medida de protesta si el Gobierno no atiende sus demandas.

- Los médicos rurales se suman al paro que llevan adelante los trabajadores de la salud, en demanda del incremento de salarios, el equipamiento de los hospitales y bonos de transportes y permanencia en las zonas rurales donde no existen los servicios básicos.

Sábado 24

- Los profesores que llevan adelante la huelga de hambre en el Consejo Provincial de Pichincha fueron desalojados violentamente por la policía. La medida de protesta continúa en las instalaciones de la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE).

Domingo 25

- Más de 30 maestros de la provincia de Sucumbíos paralizan sus actividades y se suman a la huelga de hambre convocada por la UNE.

Lunes 26

- Las profesoras afiliadas a la UNE realizan una movilización hasta la Gobernación de Manabí para exigir que se cumplan las demandas docentes. La dirigente detenida de dicha organización inicia la huelga de hambre para que las autoridades le otorguen su libertad.

Martes 27

- La UNE decide suspender la medida de protesta luego del compromiso del Gobierno de aumentar el salario básico, incrementar el presupuesto educativo a partir del 2001, pagar los sueldos de mayo y junio, y reanudar el diálogo sobre la Ley de Educación. Uno de los liberación de 3 dirigentes de la UNE.

J u l i o

Viernes 7

- El Sindicato Unico de Trabajadores de la Salud levanta la medida de presión luego de la firma de un acuerdo con los ministros de Salud, Trabajo y Economía. El acta de compromiso establece la entrega de partidas extrapresupuestarias para el equipamiento de los hospitales, la estabilidad laboral y el incremento de un 50% del salario básico.

Lunes 10

- Un grupo de indígenas, campesinos, ecologistas, mujeres y jóvenes, toman la Nunciatura Apostólica en protesta contra la exclusión de los pobres en la discusión de la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la ley de privatizaciones.

Lunes 24

- La Confederación Unica Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEU-NASSC) inicia un paro de actividades a nivel nacional en protesta por la aprobación de la Ley del IESS, que establece la privatización del Instituto y deja a los sectores de bajos recursos sin la posibilidad de acceder a la atención pública y gratuita.

Miércoles 26

A g o s t o

or (FENAJE) inicia un paro por 24 hs. en deman-
al para ese sector decretado por el Poder Ejecutivo.

Miércoles 2

- La CONAIE y la CMS realizan una movilización desde la Casa de la Cultura Ecuatoria-
na hasta el Tribunal Supremo Electoral para entregar un millón y medio de firmas que res-
paldan la realización de una consulta popular. Las preguntas de la consulta se refieren a la
disolución del Congreso Nacional junto al llamado a nuevas elecciones en los próximos
60 días, la reestructuración total de la Corte Suprema de Justicia, la amnistía a los milita-
res y civiles que participaron en el levantamiento del 21 de enero pasado, el rechazo a la
dolarización de la economía y de las privatizaciones, entre otros interrogantes.

Jueves 17

- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Ecuador y la Coordinadora del Gru-
po Civil de Monitoreo del Plan Colombia realizan una serenata de protesta en las cercanías
de la embajada norteamericana en Quito para manifestar su repudio a la Secretaria de Es-
tado de EEUU. Le exigen más información sobre las consecuencias del Plan Colombia fi-
nanciado por Estados Unidos y por el uso militar de la Base de Manta.

Martes 22

- La Federación de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC) inicia una paralización de activida-
des en protesta de la ley de Promoción de Inversiones y Participación Ciudadana (Ley Trole II).

Sábado 26

- La CMS inicia una recolección de firmas para presentar ante el Tribunal Constitucional
como respaldo a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Trole II.

Martes 29

- La CONAIE y la CMS, junto a organizaciones campesinas y gremiales, realizan una
asamblea para decidir la fecha del próximo levantamiento indígena-popular en protesta de
las privatizaciones contempladas en la Ley Trole II, la dolarización de la economía y el
Plan Colombia. La medida tiene el apoyo de la unión de cooperativas de Taxis de Pichin-
cha y del sindicato de transportistas urbanos (ASTRASUR).

Miércoles 30

- La CONAIE y organizaciones gremiales y campesinas anuncian que el próximo lunes comenzará
el levantamiento popular con movilizaciones nacionales y otras medidas para rechazar la Ley Trole
II, la participación de Ecuador en el Plan Colombia, la utilización de la Base de Manta por parte de
los EEUU, la dolarización, y el congelamiento de los precios de los combustibles por cinco años.

GLOSARIO DE SIGLAS

AGD	Agencia de Garantía de Depósitos
STRASUR	Sindicato de Transportistas Urbanos
CMS	Coordinadora de Movimientos Sociales
CODENPE	Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONASEP	Consejo Nacional de Servidores Públicos
CONFUNASSC	Confederación Nacional Única de Afiliados al Seguro Social Campesino
CONUEP	Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas
FEINE	Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador
FENAJE	Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador
FENOCIN	Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FETRAPEC	Federación de Trabajadores Petroleros
FEUE	Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FUT	Frente Unitario de Trabajadores
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
UGTE	Unión General de Trabajadores de Ecuador
UNE	Unión Nacional de Educadores

El Salvador*

M a y o

Martes 16

• Un grupo de trabajadores en representación de los 221 despedidos del Seguro y un grupo de dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), toma las instalaciones del Hospital Médico Quirúrgico (MQ) y la Unidad de Oncología, para impedir la entrada de las jefaturas (directores) de dichos centros médicos. Con esta acción buscan presionar a las autoridades para que reinstalen a los despedidos y cancelen los descuentos.

Lunes 22

• La Alianza Intergremial de Transporte (AIT), que aglutina a ocho gremiales de buses, microbuses, “pick ups” y taxis se moviliza en San Salvador con el objetivo de presionar al gobierno para que resuelva lo que los agremiados consideran “la crisis de la industria del transporte”. El sector transporte adolece de tres problemas: el financiero, porque no cuentan con una línea de crédito con bajos intereses; el económico, porque deben comprar sus insumos en un sistema de libre mercado mientras que el servicio se ofrece en un mercado regulado. Otro problema de índole administrativa son las demoras en la entrega de los permisos de líneas por parte del viceministerio de Transporte. Al paro no se sumaron otras gremiales como la Asociación de Transporte de Pasajeros (ATP) y AEAS 2, quienes la semana pasada firmaron un pacto con el viceministerio de Transporte (VMT) para reorganizar los recorridos de los buses que circulan por el centro histórico de la capital.

Martes 23

• Dirigentes de la Asociación Nacional de Trabajadores Municipales (ANTRAM) amenazan a la alcaldía para obtener una solución satisfactoria en el caso de los cincuenta trabajadores despedidos en la alcaldía usuluteca. Consideran que los despidos son ilegales y que se realizaron para ubicar en esos puestos adeptos partidarios.

Viernes 26

• Una comisión de manifestantes del comercio presiona para entrar a la Asamblea Legislativa durante el tratamiento del registro IVA para los pequeños comerciantes (proyecto de Ley de creación del régimen simplificado de pago del impuesto para importadores y productores pequeños). Finalmente obtuvieron que su petición (solicitando la derogación del decreto que establece la imposición del IVA a los productos agrícolas importados y granos) pasara a las Comisiones de Economía y Hacienda. También se analiza la posibilidad de crear un régimen diferente para emplearlo en los mercados.

Martes 30

• Se producen fuertes disturbios entre vendedores y agentes del CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos) durante el desalojo de ventas en el centro. Los agentes retiraron puestos de ventas y decomisaron mercadería. Pero los comerciantes se resistieron y trataron de recuperar sus bienes respondiendo con una lluvia de piedras que obligó a los miembros del CAM a refugiarse, por varias horas, en el Mercado Sagrado Corazón. La PNC se presentó a restablecer el orden. Agentes del CAM atacaron al fotoperiodista Ricardo Segura, de Co-Latino, cuando fotografiaba el enfrentamiento con los vendedores.

J u n i o

Jueves 1

Los vendedores de los mercados capitalinos bloquean un tramo de la calle Rubén Darío afectando considerablemente el tráfico vehicular. Durante la concentración los comercian-

tes reiteran su oposición a la aplicación del 13 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a frutas y verduras importadas, productos lácteos y medicinas. La concentración también fue organizada en solidaridad a los transportistas de frutas y verduras, quienes a partir de ayer no ingresan al país con sus productos.

Miércoles 7

- Productores y comerciantes acuerdan elaborar propuestas conjuntas en beneficio del sector y anuncian que el paro finalizará mañana. A pesar de lo cual reafirman que no están de acuerdo con el IVA.

Jueves 8

- El paro mantenido por los importadores de frutas y verduras finaliza hoy. A partir de mañana, los camiones ingresarán al mercado La Tiendona con normalidad.

Viernes 9

- El mercado La Tiendona regresa hoy a su actividad normal luego de una semana de alzas continuas en los precios de las hortalizas generadas por el paro. Los precios tenderían a bajar.

Miércoles 14

- Comerciantes de los mercados capitalinos realizan la “marcha de las cacerolas” para protestar por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las frutas y verduras importadas. Los comerciantes exigen la derogación del decreto N° 877 -que establece la aplicación del IVA a los productos importados-, por considerar que daña la economía de los hogares salvadoreños. La marcha fue apoyada por vendedores de los mercados capitalinos, así como por sectores comunales y comerciantes de algunos departamentos del país, entre ellos San Vicente, Ahuachapán y Sonsonate.

J u l i o**Lunes 3**

- Los vendedores del centro capitalino protestan por el reordenamiento de aquellos que se ubican en los alrededores del Mercado Sagrado Corazón de Jesús, es decir, sobre la 4ta y 6ta. calles Poniente, y la 3ra. Avenida Sur, en donde se procederá al ordenamiento anunciado para esta semana. Coordinadora Nacional de Vendedores (CNV), dijo que el desalojo afecta a unas 200 familias. La CNV considera, además, que los reordenamientos no se pueden ejecutar sin ofrecer alternativas de reubicación. De acuerdo con la comuna, el plan obedece a que muchos utilizan los puestos que tienen al interior de los mercados únicamente como bodega.

Miércoles 5

- Un grupo de transportistas de buses toman las calles en el centro de la capital debido al descontento de los transportistas de la Ruta N° 26, la N° 102, N° 151 y N° 152 (de la Libertad) ante la ampliación del recorrido de más de 20 microbuses de la Ruta N° 42 hasta Zaragoza, la Libertad, y los buses de la Ruta A, hasta San Marcos. Según los transportistas, el Viceministerio de Transporte ha incumplido el acuerdo que firmó en el que se comprometía a no autorizar más ampliaciones de recorridos ni otorgar nuevas líneas, puntos que, según la ATP, se han violado.

Jueves 6

- La autorización de más permisos de línea a microbuseros ha provocado el descontento entre las gremiales de buses. Los empresarios amenazan con realizar un paro nacional del transporte.

Miércoles 12

- Se producen violentos enfrentamientos cuando los vendedores informales intentan evitar que trabajadores municipales en la medianoche del martes despejen las calles adyacentes en el Centro Comercial Galería Central para darles “una nueva imagen”. Los gritos e insultos se escuchaban desde cada rincón de la zona, pero los trabajadores municipales, con protección de unos cien miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y de la Uni-

dad del Mantenimiento del Orden (UMO), de la Policía Nacional Civil (PNC), hicieron caso omiso y siguieron avanzando.

Jueves 13

- La Alcaldía capitalina inicia la asignación de puestos a los vendedores desalojados de las aceras la madrugada del miércoles, y se apresta a notificar a otros comerciantes los próximos traslados de ventas. En tanto se producen nuevas protestas gremiales de los vendedores informales (que quemaron papeles frente al Mercado Sagrado Corazón).

Miércoles 26

- Miles de ex patrulleros cantonales paralizan diferentes calles del país, para exigir al gobierno una indemnización por el apoyo que brindaron al Ejército durante la guerra. (Los ex patrulleros obstaculizan las principales carreteras de diferentes ciudades del país, entre ellas Santa Ana; Cojutepeque, en Cuscatlán; el Bulevar del Ejército, en Soyapango, San Salvador; carretera Troncal del Norte, cerca de Aguilares, y la autopista hacia Santa Ana, cerca de El Congo.) A San Salvador llegan desde varios puntos del país. Gran parte de los antiguos escoltas militares proceden de la zona paracentral. La protesta se produce porque no fueron tomados en cuenta para recibir los beneficios fruto de los Acuerdos de Paz, firmados en 1992. La mayoría de ellos son miembros de la Asociación de Ex patrulleros de El Salvador (AEES). No en todos los lugares se logró una solución pacífica. En Cojutepeque, dos ex patrulleros se enfrentan con agentes de la PNC que intentaron decomisarles los machetes y palos que portaban. Uno de los ex patrulleros resultó herido y otro fue detenido y trasladado a la delegación de la PNC de San Pedro Perulapán.

Jueves 27

- Aproximadamente 200 vendedores estacionarios marchan por el centro capitalino en protesta por la reubicación de puestos que impulsa la Alcaldía desde hace tres semanas. Representantes de los manifestantes se reunieron con funcionarios y se resolvió que ningún reordenamiento se realizaría sin antes haber hecho un inventario de los puestos disponibles en los mercados.

101

A g o s t o**Miércoles 2**

- Tras la finalización de la huelga, el Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) inicia un proceso legal en contra de las autoridades de esta institución. Después de cuatro meses, se resuelve que el ISSS ha violado los derechos laborales de los trabajadores despedidos. Las autoridades del ISSS deciden devolverle el empleo a los despedidos.

Martes 8

- Más de 500 vendedoras ambulantes, miembros de la Asociación de Comerciantes en Pequeño del Sector Informal de Sonsonate (ACPIS), marchan por las principales calles de la ciudad en protesta por el desalojo que pretende realizar el alcalde Douglas Galicia. Después de varias horas de negociación se establece suspender la reubicación, pero los comerciantes deberán respetar algunas disposiciones como mantenerse al margen de la línea amarilla marcada por el Viceministerio de Transporte y no colocar champas en el sector.

Miércoles 9

- Los transportistas de autobuses, microbuses, taxis y “pick ups” paralizan el servicio, y llevan a cabo un bloqueo en las vías de entrada a la capital. La Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS), dijo que el paro es indefinido. También reiteró que no volverán a la mesa de negociaciones con el Gobierno mientras sea presidida por los ministros de Economía y de Obras Públicas. No apoyan la medida los empresarios agremiados a AEAS 2 y los microbuseros de FECOATRANS, que prestan servicio en el área metropolitana de San Salvador, AEAS 2, y FECOATRANS, coinciden en que el paro no trae ningún beneficio al sector, sino a dirigentes de otras gremiales. Los dueños de “pick ups” que prestan servicio

a las señoras de los mercados de la capital que pertenecen a la cooperativa La Cabanita no apoyan la protesta. Tampoco acuerdan con el paro los dueños de buses de color amarillo, que son contratados para transporte de personal, evangélicos, los buses escolares, los empresarios independientes que operan en todo el país y los agremiados al Consejo Nacional del Transporte. El gobierno decide que toda persona que tenga vehículo puede transportar pasajeros. La Policía Nacional Civil no impondrá multas mientras dure el paro de transporte colectivo, dijo ayer el ministro del MOP, licenciado José Quirós. El funcionario dio a conocer el plan contingencial que cuenta con el apoyo de camiones de Agricultura, ANDA, Caminos, DUAY de la PNC. Piden, principalmente, aumento en la cuota del diesel que reciben en concepto de subsidio. El Presidente Flores sostuvo que deben atenerse a las consecuencias de sus acciones ya que se impondrán penalizaciones.

Jueves 10

- El paro de transportes continúa. En tanto el Gobierno pide, a la Asamblea Legislativa, que se apruebe un decreto que cancele las concesiones de líneas a los transportistas en paro y los subsidios. Según datos del MOP, el 80% de las unidades no prestó el servicio. Traducido eso en números, significa que de 1.205 buses autorizados en todo el país, 750 del área metropolitana no prestaron servicios. Otras 508 no lo hicieron en el resto del país

Viernes 11

- Finaliza paro del transporte público ya que el Gobierno y los buseros llegan a un acuerdo inicial: terminar el paro a cambio de que el vicepresidente, Carlos Quintanilla, forme parte de la mesa que negociará soluciones al problema del transporte público. La Alianza Intergremial (AIT), aclaró que su posición no variará respecto de las demandas de los transportistas: la revisión de las tarifas, la autorización de un fondo propio de garantía y la apertura de una línea de financiamiento del 5% anual y agregó que el aumento de la cuota del diesel fue una campaña del Gobierno y que nunca formó parte de las demandas de los transportistas. El vicepresidente Quintanilla advirtió que las sanciones impuestas a los participantes en el paro son irreversibles. En el segundo día de paro del transporte, las autoridades comenzaron a tratar con mano dura a los participantes en el movimiento: 697 empresarios están a punto de que les suspendan los permisos de línea; al menos 58 vehículos fueron decomisados por obstaculizar el tránsito y el retiro del diesel subsidiado es inminente para los participantes en la protesta.

Lunes 14

- Cerca de 40 vendedores de Ciudad Delgado llegan a la entrada de la sede municipal para protestar porque no se les ha asignado un puesto en el nuevo mercado. Hasta el momento, de las 462 plazas comerciales sólo han sido entregadas 262. Entre éstos hay varios que tenían su local en el antiguo mercado y, pese a que fueron censados, aún no les ha sido asignado un cupo. Además los vendedores no están conformes, piden un reordenamiento justo, pues los puestos que se han construido para algunos giros son demasiado pequeños.

Viernes 18

- Las principales calles de Ahuachapán son testigos de una marcha que realiza más de un centenar de jóvenes y niños de diferentes centros educativos, en contra del maltrato infantil. Fueron 24 las escuelas que participaron en la manifestación, y provenían tanto del sector rural como del urbano del municipio. El Comité Interinstitucional Ahuachapaneco fue el encargado de realizar esta actividad en la que participan diferentes instituciones, tales como los ministerios de Salud y de Educación, Derechos Humanos, alcaldía y otras. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza la marcha en contra del maltrato infantil.

Viernes 25

- El Sindicato de la Industria de Turismo, Hotelería y Similares (SITHS), se pronunció en contra de la flexibilización laboral y la concesión de algunas entidades de servicios, propuesta por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), como uno de los pun-

tos para lograr la inversión y la reactivación de la economía. En materia laboral, la ANEP propone definir la jornada ordinaria en un número determinado de horas por semana, y no por día; establecer un recargo mínimo por hora de trabajo fuera de la jornada ordinaria y disponer de una opción destinado a las mujeres para concentrar las horas de trabajo, en un número de días reducido. Los sindicalistas del turismo sostienen que la propuesta de la ANEP busca eliminar el pago de horas extras y nocturnidad y que los contratos por tareas y tiempo definido busca evitar la permanencia y la estabilidad laboral. En cuanto a las concesiones, la ANEP hace la propuesta al estado para que conceda a la empresa privada la administración del Puerto de Acajutla, Aeropuerto Internacional, Zoológico Nacional, Correos, Lotería Nacional de Beneficencia, Turicentros, Sitios Arqueológicos, Radio Nacional, Imprenta Nacional y Ferrocarriles. Ante esa propuesta, la dirigencia sindical considera que impactará negativamente en el sector laboral, ya que significaría el desempleo de cerca de 10 mil personas.

Sábado 26

• Centenares de personas desfilaron por las principales calles de Cuisnahuat, en Sonsonate, en un abierto desafío al Ministerio de Medio Ambiente, a quien le exigen que retire los 42 barriles con tóxicos que el gobierno trasladó del cantón Agua Shuca. La marcha fue apoyada por salvadoreños procedentes de otros municipios sonsonatecos como Jujutla, Nahui-zalco y Sonsonate. En vista de la negligencia gubernamental, se ha organizado el Comité Interinstitucional contra los Desechos Tóxicos de Cuisnahuat, integrado por representantes de los diferentes cantones y caseríos. Esta organización ha solicitado la personería jurídica a la municipalidad. El Comité envió una nota a la Ministra de Medio Ambiente, en la que se le hace una serie de peticiones que buscan garantizar el bienestar de las comunidades afectadas. En la marcha participaron delegaciones del Comité de Concientización para la Recuperación Espiritual y económica del Hombre (CREDHO) y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Martes 29

• Los 314 detenidos del penal de San Francisco Gotera iniciaron una serie de protestas, como medida de presión para que la comida que distribuye la empresa privada Alimentos Prácticos S.A. sea mejorada. El subdirector de los Centros Penales prometió que la situación se solucionará a partir del 5 de septiembre.

103

GLOSARIO DE SIGLAS

ACPIS	Asociación de Comerciantes en Pequeño del sector informal de Sonsonate
AEAS	Asociación de Empresarios de Autobuses
AEES	Asociación de Ex patrulleros de El Salvador
AIT	Alianza Intergremial de Transporte
ANEP	Asociación Nacional de la Empresa Privada
ANTRAM	Asociación Nacional de Trabajadores Municipales
ATP	Asociación de Transporte de Pasajeros
CAM	Cuerpo de Agentes Metropolitanos
CNV	Coordinadora Nacional de Vendedores
CREDHO	Comité de Concientización para la Recuperación Espiritual y económica del Hombre
FEATRANS	Federación Centroamericana de Transportes
FESPAD	Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MOP	Ministerio de Obras Públicas
ANDA	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
DUA	Dirección General de Urbanismo y Arquitectura
MQ	Hospital Médico Quirúrgico
PNC	Policía Nacional Civil
SITHS	Sindicato de la Industria de Turismo, Hotelería y Similares
STISSS	Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
UMO	Unidad de Mantenimiento del Orden

** Realizado por: Liliana Demirdjian, Florencia Ayala y María Chaves, colaboradoras del OSAL.*

Fuentes: Diario de Hoy, La Prensa, El Faro y Colatino.

Guatemala*

M a y o

Lunes 1

• Aproximadamente 15 mil obreros - pertenecientes a la Unidad de Acción Sindical y Popular, la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), el Comité de Unidad Campesina, asociaciones de jubilados, la Asociación de Estudiantes Universitarios, la Federación Sindical Obrero Campesina y niños trabajadores de la calle - marchan en la capital hasta la Plaza Constitución con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. Reclaman justicia para los casos de represión policial desatada en abril contra las manifestaciones por el alza del pasaje urbano y que el Gobierno cumpla con sus promesas electorales de asegurar libertad sindical y de expresión.

• En Petén y Quetzaltenango se realizan masivas manifestaciones en las que los sindicalistas critican la indiferencia del gobierno ante el problema de la tierra y del transporte urbano en la capital y reclaman justicia e igualdad para todos los guatemaltecos.

Jueves 4

• La Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) solicita un subsidio para poder paliar los problemas económicos del servicio de transporte y así reparar los autobuses con daños mecánicos. El presidente Alfonso Portillo responde que no subsidiará el transporte, dado que esta medida no representaría una solución de fondo.

104

Miércoles 10

• La Asociación de Estudiantes Universitarios, agrupaciones de mujeres y el Grupo de Apoyo Mutuo marchan junto a los familiares de la catedrática desaparecida el 7 de abril, Mayra Gutiérrez, desde la Corte Suprema de Justicia hasta las oficinas del Ministerio Público para pedir su pronta aparición.

Lunes 15

• Decenas de indígenas integrantes de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua) y el Movimiento de Jóvenes Mayas marchan hasta la Casa Presidencial para entregarle al presidente Alfonso Portillo un documento en el que expresan su preocupación por la integración de comités de seguridad ilegales en varios municipios del país.

• Alrededor de trescientos estudiantes ocupan instalaciones del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO) en Quetzaltenango para reclamar por falta de catedráticos y exigir la remodelación de áreas deterioradas del edificio.

Miércoles 17

• Cerca de ciento cincuenta albañiles se manifiestan frente a la Municipalidad de Coatepeque para exponerle al alcalde su discrepancia con el despido en menos de un mes de doscientos sesenta trabajadores de la empresa que construye el mercado terminal de ese pueblo y denunciar deficiencias en la obra.

Jueves 18

• Los exportadores de verduras y frutas se declaran en huelga, en oposición a las medidas tributarias aplicadas por autoridades de El Salvador a sus productos.

• Representantes de varios parcelamientos de Santa Lucía Cotzumalguapa y Tiquisate, Escuintla, culminan frente al Palacio Nacional de la Cultura una marcha de 72 hs. para exigirle tierras y viviendas al presidente Alfonso Portillo.

Miércoles 24 • Aproximadamente tres mil mujeres indígenas y campesinas, convocadas por la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) marchan hasta el Palacio Nacional de la Cultura, en demanda de programas gubernamentales de desarrollo que les permitan salir de la pobreza.

Lunes 29 • Alrededor de cuatro mil vendedores de la economía informal se congregan frente al Congreso para oponerse a la aprobación de la Ley de Propiedad Industrial, cuyo objeto es legalizar los decomisos de mercaderías de imitación y piratería, y consiguen que los diputados del FRG suspendan la aprobación de la medida.

Martes 30 • Jubilados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se manifiestan frente al Congreso y la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia para que el Primer Mandatario autorice un incremento de sus pensiones, similar al otorgado a los jubilados del Estado.

J u n i o

Lunes 5 • Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, integrantes de diversas organizaciones ambientalistas ocupan pacíficamente las instalaciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) para denunciar que más de sesenta casos de delitos contra el patrimonio natural de Guatemala han quedado archivados y para exigirle al Gobierno medidas a favor del medio ambiente.

• Cientos de jubilados del IGSS protestan frente a la Casa Presidencial en demanda de un aumento a sus pensiones, similar al otorgado a los jubilados del Estado.

Lunes 26 • Los conductores del transporte urbano de Quetzaltenango se declaran en huelga para presionar a las autoridades municipales para que suban el pasaje de Q0,50 a Q0,75. El problema consiste en que los choferes exigen un aumento salarial de Q20 y los empresarios argumentan que sólo sería posible otorgarlo si la comuna autorizara un incremento de 25 centavos al valor del viaje.

• Alrededor de cien militantes de la CGTG se congregan frente a la Fiscalía Metropolitana para exigir que se investigue la muerte del sindicalista Oswaldo Monzón Lima, ocurrida el viernes último.

Jueves 29 • Los conductores del transporte urbano de Quetzaltenango reinician la prestación del servicio, luego de un acuerdo con la Municipalidad por el que ésta se compromete a analizar un estudio presentado por los transportistas en el que sugieren un aumento del pasaje urbano.

Viernes 30 • Decenas de militantes de derechos humanos y familiares de desaparecidos protestan contra el Ejército y exigen justicia y castigo a quienes califican como violadores de derechos humanos, en un desfile que la institución castrense realiza en conmemoración de su 129 aniversario.

J u l i o

Sábado 1 • Organizaciones sindicales protestan frente al Ministerio Público para que se investigue el asesinato del sindicalista Oswaldo Monzón Lima, ocurrido el 22 de junio.

Miércoles 5

- Representantes de la Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA) se manifiestan frente al Congreso para presionar a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que no aplique a tres radios comunitarias las multas que les impuso y para pedir que se elabore una ley referente a radios comunitarias que facilite a los sectores indígenas la adquisición de frecuencias.

Domingo 9

- Un grupo de ex soldados del Ejército, integrantes de la Asociación de Lisiados de Guerra, corta un tramo de la carretera al Atlántico para que el Ministerio de la Defensa Nacional les otorgue una pensión que prometió y no ha hecho efectiva.

Miércoles 26

- Militantes del Frente de Pobladores de Guatemala (FREPOGUA) y de la Coordinadora Nacional de Asentamientos (CONAG) marchan hasta la Casa de Gobierno para que no sea cerrado el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI) argumentando que hasta que no se defina una política de gobierno que vele por el derecho a la tierra de los pobres del país, disolver el FOGUAVI acentúa aún más el carácter de emergencia nacional sobre problemática de vivienda.

Sábado 29

- La Municipalidad de Guatemala interviene el servicio de transporte y pone en marcha la estructuración de una nueva Empresa Municipal de Transporte (EMT) que funcionará con autobuses que la Comuna expropió a los empresarios del transporte por deficiente administración y por no haber pagado la deuda que pesa sobre los mismos.

Lunes 31

- Alrededor de 4 mil trabajadores del Frente de Emergencia de Vendedores de la Economía Informal marchan hasta el Congreso de la República y la Casa Presidencial para reclamar a las autoridades que no se vete la Ley de Propiedad Industrial, que protege al sector de la economía informal, reconociéndolos como contribuyentes.

- El transporte urbano capitalino funciona durante las primeras horas de la mañana con un servicio irregular, debido a que alrededor de treinta choferes bloquean la entrada principal a la terminal Central de Moyano e impiden la salida de unidades, para exigir a las autoridades Q200 de salario diario y Q50 para el pago de ayudantes. Ante dicha situación, cincuenta agentes de la Policía Nacional Civil despejan el área para que las unidades comiencen a prestar servicio.

A g o s t o

Miércoles 2

- Numerosos campesinos reunidos en la Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC) ocupan pacíficamente las instalaciones de la empresa COINTER S.A. para que se les haga efectivo el pago de una deuda de Q300 mil. Los agricultores han abastecido durante todo el año a la empresa con distintos productos, a cambio únicamente de promesas de pago. Por eso piden la intervención inmediata de las autoridades para que exijan a los empresarios el pago de esta deuda.

Viernes 4

- Varios sindicatos convocados por la Unión Guatemalteca de Trabajadores (UGT), realizan una marcha hasta el callejón Manchén, cerca de la casa presidencial, en contra de la violencia, la impunidad y la degradación del estado de derecho en la que está sumido el país.

Domingo 6

- Los propietarios de autobuses y camionetas del servicio urbano de transporte esconden numerosos vehículos y desmontan piezas esenciales a unas trescientas unidades que se hallaban en los predios de sus respectivas empresas, para impedir la prestación de servicio decretada por la Municipalidad.

Lunes 7

- Los choferes del transporte urbano decretan un paro por tiempo indeterminado, por lo que sólo circula el 50% de los autobuses.
- El alcalde de Guatemala, Fritz García Gallont, pide apoyo al Ejército para restaurar y garantizar el servicio de transporte urbano. De ahora en más, los soldados conducirán los autobuses.

Martes 8

- El paro de autobuses en la capital es casi total, por lo que el Ejército proporciona a la población cuarenta unidades de transporte gratuito.

Miércoles 9

- El Concejo Metropolitano cancela tres contratos de concesión de servicios de transporte urbano a dos empresas, por haber interrumpido ilegalmente el servicio durante la semana.
- Los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos obstruyen el tránsito vehicular que va desde la aldea Caxaque hasta la zona costera de San Marcos para exigir mayor presupuesto para ese establecimiento y son reprimidos por la PNC con bombas lacrimógenas.

Viernes 11

- Aproximadamente quinientos jubilados del Programa de Invalidez, Vejez y Supervivencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, toman las instalaciones de sus oficinas centrales, en protesta por la negativa de las autoridades del Seguro Social de aumentar sus pensiones.
- Los autobuses de la ciudad de Guatemala comienzan a circular casi con normalidad.

Miércoles 16

- Grupos de pobladores pertenecientes al FREPOGUAY a la CONAG detienen el tránsito en todas las entradas a la ciudad de Guatemala para protestar contra la decisión del Ejecutivo de cerrar el FOGUAVI y para informar y concientizar a la población sobre el problema de miles de guatemaltecos que no tienen legalizada su tierra. Además, un grupo de integrantes de las mismas organizaciones se manifiesta frente al Congreso contra la misma determinación.

Jueves 17

- Integrantes del FREPOGUA paralizan el tránsito de diferentes puntos de la capital, en protesta por los cambios que el Gobierno pretende efectuar al FOGUAVI.

Domingo 20

- Aproximadamente cuatrocientos choferes del servicio de transporte urbano se declaran en huelga y se reúnen en la Central de Mayoreo para impedir que circulen las unidades hasta que la municipalidad capitalina (órgano del cual dependen) atienda sus demandas laborales, que consisten en: el mantenimiento a las unidades, la no exigencia de un número mínimo de pasajes diarios y mayor seguridad.

Lunes 21

- Representantes de trescientos sesenta asentamientos humanos, organizados a través de la Coordinadora Nacional de Asentamientos de Guatemala y el Frente de Pobladores de Guatemala, marchan hasta la Casa Presidencial para protestar por la intervención del FOGUAVI.

GLOSARIO DE SIGLAS

AEAU	Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos
CGTG	Central General de Trabajadores de Guatemala
CONAG	Coordinadora Nacional de Asentamientos
CONAP	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CONIC	Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
COPMAGUA	Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala
EMT	Empresa Municipal del Transporte.
FOGUAVI	Fondo Guatemalteco para la Vivienda
FREPOGUA	Frente de Pobladores de Guatemala
FRG	Frente Republicano Guatemalteco
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
INVO	Instituto Normal para Varones de Occidente
PNC	Policía Nacional Civil
UGT	Unión Guatemalteca de Trabajadores
USAC	Universidad de San Carlos de Guatemala

** Realizado por Mariana Fassi y Juan Chaves, colaboradores del OSAL.
Fuentes: diarios La Hora y Prensa Libre.*

Honduras*

M a y o

Lunes 1

• En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores se realizan en Tegucigalpa dos manifestaciones diferentes. En la primera, convocada por la Central General de Trabajadores (CGT), por la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y por la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), los oradores critican al gobierno y protestan por la situación de pobreza y miseria, la falta de libertad sindical y el desempleo. La Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) marcha por otro camino junto a 8 mil obreros de 24 organizaciones sindicales agremiadas, criticando las políticas neoliberales oficiales, la privatización de las empresas del Estado, el incremento del precio de la canasta básica y las violaciones a los derechos laborales en las maquilas.

Martes 9

• En Tegucigalpa, 700 Enfermeras, médicos residentes y 115 practicantes de medicina del hospital Escuela realizan una huelga. Éstos últimos paran en protesta por la amenaza que sufrían de quitarles las becas, mientras que las enfermeras apoyan la medida en busca de la creación de un fondo de vivienda, la posibilidad de jubilarse a los 50 y 53 años y la aprobación de un estatuto que establezca un salario anual de 6 mil lempiras. Los médicos residentes, en cambio, paralizan sus actividades en reclamo contra la amenaza de recorte de su decimotercer y decimocuarto salario.

• Los dueños de microbuses, motoristas y cobradores de la capital hondureña realizan un paro que es acompañado por cortes de calle, organizados por 300 dueños de microbuses afiliados a la Federación Nacional de Empleados de Microbuses de Honduras, y por una marcha hacia la casa de gobierno en reclamo por la falta de pago del subsidio estatal.

Miércoles 10

• En San Pedro Sula, 5 mil enfermeras auxiliares de los hospitales Miguel Paz Barahona, Mario Rivas y Leonardo Martínez entre otros, realizan un paro en reclamo de mejores salarios y del reconocimiento a los beneficios de cesantía y jubilación.

• En Tegucigalpa, 2.800 empleados técnicos, de cocina, de administración, de lavandería y camilleros del hospital Escuela, paralizan sus labores en solidaridad con las enfermeras y los médicos residentes, quienes continúan con sus protestas. Por otro lado, las asambleas informativas, órgano de deliberación y difusión implementado por las enfermeras, suman a 1.300 afiliados al Sindicato de Empleados Públicos de Hospital Escuela, 600 del Sindicato de Trabajadores de la Salud y 800 del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS).

• Los 25 estudiantes miembros de la Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR) se manifiestan frente a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ubicada en Tegucigalpa, pidiendo la destitución de la directora de la entidad así como la gratuidad de las clases vacacionales.

Viernes 12

• En San Pedro Sula, enfermeras del hospital Mario Rivas, Leonardo Martínez y del centro de salud M. P. Barahona acompañadas por otras del Seguro Social y de algunas clínicas y hospitales privados, realizan una marcha con 300 trabajadoras exigiendo un aumento salarial, la aprobación del estatuto y un mejoramiento en la alimentación, el transporte y el equipo médico.

Cronología

- Dos mil enfermeras auxiliares de Tegucigalpa, convocadas por la Asociación de Enfermeras Nacionales de Honduras (AENAH), marchan hacia el Palacio Legislativo. Por otro lado, 200 empleadas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) realizan su propia movilización hacia el Congreso Nacional.

Lunes 15

- En La Ceiba, un grupo de estudiantes denominado Voz Democrática toma las instalaciones del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en reclamo contra la eliminación del subsidio del transporte que quería hacer la universidad.
- El gobierno acuerda pagar el decimotercer y decimocuarto salario a los médicos residentes del hospital Escuela y del IHSS.

Viernes 19

- A la huelga iniciada días antes por los controladores aéreos del aeropuerto de Golosón, ubicado en La Ceiba, en reclamo del pago del bono de entre 500 y 1.500 lempiras acordado en marzo se pliegan los trabajadores de la estación aérea de Toncotin, de Tegucigalpa, y los de San Pedro Sula, en solidaridad con las exigencias de sus compañeros.

Sábado 20

- Los controladores aéreos de todo el país levantan la medida que vienen realizando a raíz del acuerdo al que llegan los trabajadores del aeropuerto de La Ceiba y la administración en beneficio de los primeros.

Martes 23

- Las enfermeras auxiliares del hospital Escuela y del IHSS realizan un paro y marchan hacia el Congreso Nacional.

110

Jueves 25

- Agricultores agrupados por la Sociedad Civil Organizada de Olancho toman la ruta que une Juticalpa con la capital del país exigiendo la implementación de la Ley de Reactivación Financiera para el sector agropecuario y que se giren instrucciones a los bancos privados para que detengan el remate de sus propiedades.

Martes 30

- El Frente de Reforma Universitaria y la Fuerza Universitaria Revolucionaria junto con decenas de estudiantes paralizan por 4 horas las clases de la UNAH exigiendo que no se trasladen las clases vacacionales a diciembre y que se elimine el arancel de ese ciclo.

Miércoles 31

- Al menos dos mil habitantes de El Progreso, toman dos puentes en reclamo de mejores condiciones de vida. En la medida participan organizaciones obreras, campesinas, civiles e indígenas, quienes exigen la destitución del director del hospital progreseño, la asignación de 1.501 manzanas de tierras a familias campesinas, la construcción de rutas, el mejoramiento del hospital zonal, el abastecimiento de agua potable así como otras obras de infraestructura.

J u n i o

Lunes 5

- El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) junto con un grupo de maestros que se encuentra en huelga toma por una hora la autopista que une a Puerto Cortés con San Pedro Sula en reclamo por el pago de salarios atrasados desde febrero de unos 500 docentes, por un incremento salarial para los técnicos y por un aumento en la partida presupuestaria para educación.
- Empleados de hospitales de El Progreso, Yoro, Santa Bárbara y San Pedro Sula se suman al paro organizado por SITRAMEDHYS en demanda del cumplimiento del acuerdo firma-

do el año pasado que establece un incremento en la contratación de personal, un mejoramiento en las condiciones salariales, la compra de material quirúrgico, el abastecimiento de medicamentos y la destitución del director del hospital de El Progreso.

Martes 6

- Cerca de 600 profesores afiliados al COPEMH y al Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras toman la Dirección Departamental de Francisco Morazán como protesta ante la lentitud de los nombramientos de varios docentes y ante la falta de pago de 1.200 sueldos atrasados.

Sábado 10

- Más de 800 productores agrícolas del departamento de Choluteca realizan una marcha en demanda de nuevos capitales y por la readecuación de sus créditos.

Lunes 19

- Los médicos internos del Mario Rivas realizan un paro en todas las áreas del hospital ante la negativa del Ministerio de Salud de enviar reemplazantes de los practicantes que han finalizado su internado. Por otro lado, exigen un aumento salarial y una reducción de la jornada laboral que la haga llegar a las 36 horas semanales.

Martes 20

- Los médicos internos de los hospitales regionales de La Ceiba, Atlántida, Santa Rosa de Copán y Choluteca inician un paro en apoyo a sus compañeros del Mario Rivas y en reclamo por el nombramiento de más practicantes.

Miércoles 21

- La Secretaría de Salud Pública acuerda con la Asociación de Enfermeras Auxiliares del Hospital Mario Rivas un salario base de 1.229 lempiras y la contratación de más personal, que se efectivizaría a partir de julio.

Jueves 22

- El Gobierno y SITRAMEDHYS llegan a un acuerdo por el cual el primero se compromete a incrementar la base salarial y el pago de las horas nocturnas.

- Los médicos internos del Hospital Mario Catarino Rivas y las autoridades de la Secretaría de Salud llegan a un acuerdo consistente en la apertura de una nueva fecha de ingreso rotatorio al centro de salud para julio, en la que entrarán 30 estudiantes que no cobrarán sueldo por tres meses.

Domingo 25

- Los médicos internos de Mario Rivas continúan con el paro que vienen realizando desde hace diez días debido a que los manifestantes no ven interés en resolver el problema de parte del viceministro de Salud ni del director del hospital.

Lunes 26

- Los sindicatos afiliados a la CTH junto con varios grupos campesinos y organizaciones populares toman distintas carreteras y realizan un paro de brazos caídos en reclamo de un aumento general de salarios, la aplicación de la reforma agraria, el combate a la inflación, la estabilidad del precio de combustible y otros productos básicos y la no privatización de empresas públicas.

Jueves 29

- Los docentes realizan un paro en 84 colegios del país que afecta a 100 mil alumnos en reclamo del pago de 6 meses de salario atrasado.

J u l i o

- Miércoles 5** • Unas 2 mil personas acuden a la marcha organizada por el Bloque Popular hacia el Palacio Legislativo de Tegucigalpa con el fin de protestar contra la privatización de los entes estatales y sus servicios.
- Viernes 7** • El Ministerio de Salud se compromete a asignar 20 médicos al hospital Mario Rivas a fin de solucionar el conflicto mantenido con los médicos residentes en demanda de un incremento de personal.
- Miércoles 12** • Decenas de productores de palma africana protestan en San Pedro Sula frente a las oficinas regionales de la Secretaría de Industria y Comercio en demanda de un incremento del precio del producto. La Asociación Nacional de Productores de Palma Africana de Honduras (ANAPROPALMAH) se manifiesta a favor de la medida reclamada.
- En Tegucigalpa, casi un centenar de miembros del Comité de Desaparecidos de El Progreso realiza una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos y la Cancillería para exigir que se hagan las gestiones necesarias para encontrar a sus familiares que emigraron hacia dicho país.
- Jueves 20** • El Consejo de los Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) junto con 500 indígenas y negros arriban a la capital hondureña para protestar frente al Congreso Nacional, la Casa Presidencial y las oficinas del Banco Mundial en reclamo de educación, tierras, salud, un aumento salarial para los trabajadores, el pago de la indemnización a sus compañeros heridos por la policía en 1992 y las privatizaciones.

A g o s t o

- Miércoles 2** • El gobierno, representantes de la banca privada y de los productores del sector primario acuerdan la readecuación de las deudas y la aceleración de créditos para el sector ganadero y agropecuario.
- Jueves 10** • El director del hospital de El Progreso es destituido de su cargo, como pedían sus empleados.
- Lunes 14** • La ANAPROPALMAH toma las principales rutas del litoral atlántico exigiendo una reducción en la tasa de interés de los créditos, la inclusión del producto en la Ley de Recuperación Financiera para el Sector Agropecuario y la readecuación de las deudas que mantenían con la banca privada, entre otras cosas.
- Martes 15** • Las negociaciones en torno al aumento salarial que mantiene el sector empresarial, las centrales obreras y los ministros de la Presidencia y de Trabajo quedan suspendidas por falta de acuerdo: los trabajadores plantean un aumento general de mil lempiras mientras que los empresarios quieren negociar en base al salario mínimo.
- Miércoles 16** • El gobierno acuerda con la ANAPROPALMAH un financiamiento de 28 millones de lempiras y la readecuación de las deudas que mantienen con la banca privada.

Viernes 18

- La Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales, la Coordinadora Indígena Campesina Agroforestal de Centroamérica, la Alianza Hondureña Agroforestal y otros grupos del sector acuerdan realizar una coalición a fin de hacer frente a cualquier intento estatal de implementar medidas que afecten al ramo impuestas al subcontinente por los organismos financieros internacionales y para impulsar la reglamentación de una ley forestal socializada que no excluya a los pequeños y medianos productores.

Lunes 21

- El Sindicato de Trabajadores del IHSS realiza un paro indefinido al que se pliegan 1.750 trabajadores exigiendo la ruptura de los techos de cotización, el pago de la deuda que mantenía el Estado y el sector privado, reformas a la Ley del Seguro Social y la anulación de una resolución tomada por la dirección del instituto sobre su privatización. El Ministerio de Trabajo declara la medida ilegal.

Jueves 24

- Los empleados de IHSS acuerdan con autoridades del Ministerio de Trabajo y con la Junta Directiva de la institución la ruptura de los techos de cotización y la imposibilidad de tomar represalias con los paristas, por lo que la huelga es depuesta.

Lunes 28

- Unos 2.500 empleados de sindicatos de distintos servicios del Estado, varios de los cuales son integrantes del Bloque Popular, realizan un paro, diversas tomas de dependencias de servicios públicos estatales y una marcha en Tegucigalpa para protestar contra las privatizaciones.

Martes 29

- Decenas de indígenas realizan una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno exigiendo la restitución de Gilberto Sánchez Chandías al cargo de fiscal de las Etnias y del Patrimonio Cultural.

Miércoles 30

- El Gobierno, representantes del sector empresarial y del obrero acuerdan retornar a la mesa de diálogo para negociar el aumento general de salarios.
- Miembros del COPINH realizan un plantón frente a la Casa de Gobierno en apoyo a sus compañeros en huelga de hambre y exigiendo el pago de las indemnizaciones otorgadas a los indígenas heridos durante la manifestación del 12 de octubre de 1999.

GLOSARIO DE SIGLAS

AENAH	Asociación de Enfermeras Nacionales de Honduras
ANAPROPALMAH	Asociación Nacional de Productores de Palma Africana de Honduras
CGT	Central General de Trabajadores
CTH	Confederación de Trabajadores de Honduras
COPEMH	Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
COPINH	Consejo de los Pueblos Indígenas de Honduras
CUTH	Central Unitaria de Trabajadores de Honduras
FUR	Fuerza Universitaria Revolucionaria
FUTH	Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras
IHSS	Instituto Hondureño de Seguridad Social
SITRAMEDHYS	Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares
UNAH	Universidad Nacional Autónoma de Honduras

** Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuentes: Diarios La Prensa y La Tribuna.*

México*

Mayo

Lunes 1

• En el Distrito Federal, miles de trabajadores del sindicalismo independiente, entre los que se encuentran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), acompañados por integrantes del Consejo General de Huelga (CGH), campesinos y diversas organizaciones sociales marchan rumbo al Zócalo en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores exigiendo cambios en la política económica, la liberación de los estudiantes detenidos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y manifestando su repudio por la política oficial ante la industria eléctrica nacionalizada y la educación pública. Por otro lado, alrededor de 20 mil trabajadores del movimiento obrero oficialista, que incluye entre otros a mineros, metalúrgicos, petroquímicos, automotores, electricistas, azucareros, trabajadores del sector de alimentos, maestros, médicos, enfermeras y empleados del gobierno del DF acuden al acto en conmemoración del primero de mayo organizado en el Zócalo por el Congreso del Trabajo en el cual habló el presidente Zedillo.

• En Toluca, cerca de 28 mil profesores del sistema educativo estatal marchan a la Plaza de los Mártires junto al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México en demanda de un incremento salarial del 12 por ciento. Alrededor de 10 mil participantes reclamaron uno del 38 por ciento y quemaron gorras y banderas del organismo gremial como gesto de inconformidad por la magnitud de su reclamo.

Jueves 4

• Cerca de 13 mil maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) paran y realizan manifestaciones en el estado de Tuxtla Gutiérrez para exigir un aumento salarial de 100 por ciento y un mejoramiento en las prestaciones sociales.

Martes 9

• Cientos de efectivos de la Policía Federal Preventiva se suman a las ya instaladas fuerzas policiales y del ejército en los Altos de Chiapas. Ante la medida, el consejo autónomo de San Pedro Polhó refuerza el cinturón de personas a la entrada de la localidad como medida de defensa.

Viernes 12

• Las personas, que desde hacía unos días se encontraban instaladas frente al edificio de gobierno de la UNAM en reclamo por la liberación de los paristas presos, realizan una manifestación en la que participan alrededor de 7 mil personas frente a la Secretaría de Gobernación que luego se dirige al edificio de la Procuraduría General de la República.

Domingo 14

• En el norte de Chiapas, cientos de indígenas toman el palacio municipal de Tila para exigir un alto a las agresiones del grupo paramilitar Paz y Justicia y detener la venta de terrenos ejidales que realizaban las autoridades de dicha agrupación armada.

• El SNTE acepta el incremento salarial del 16,7 por ciento y la asignación de 500 millones de pesos para el programa Carrera Magisterial propuesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP). La CNTE, por su parte, se manifiesta en contra del acuerdo por considerarlo insuficiente respecto a sus demandas.

Lunes 15

- La CNTE organiza protestas en varios puntos del país en demanda de un mayor aumento salarial, el pago de 90 días de aguinaldo y de un sueldo correspondiente a la categoría de zona de vida cara, por un incremento del presupuesto educativo hasta el 12 por ciento del PBI y por la cancelación de las leyes y acuerdos emparentados con la privatización de la educación pública. En Michoacán la sección 18 del SNTE rechaza el aumento salarial de la SEP y realiza un paro y una movilización a la que acuden 10 mil maestros. En Oaxaca más de 55 mil miembros de la sección 22 del SNTE realizan un paro. Más de 40 mil empleados del Instituto Estatal de Educación Pública realizan un plantón frente a las oficinas de la SEP en el DF. Allí también se manifiestan representantes de maestros de 15 estados, frente al Zócalo, la sede de la SEP y del SNTE. En Chiapas más de 70 mil docentes continúan con el paro que venían realizando desde el 11/5 junto con los de Guerrero y Michoacán.

Martes 16

- La Comisión Ejecutiva de la Asociación Unica y Democrática al Servicio de la Comunidad organiza distintas movilizaciones de policías en el DF en reclamo de la creación de una caja de previsión de la policía auxiliar.

Miércoles 17

- El Ejército instala al menos nueve campamentos militares en Huejutla, ubicado en el estado de Hidalgo.

Jueves 18

- Alrededor de 64 mil docentes de la sección 11 del SNTE de la capital mexicana realizan un paro.

Viernes 19

- Alrededor de 35 mil docentes de la CNTE, acompañados por otras fuerzas marchan a la residencia oficial de Los Pinos como medida de presión para obtener la satisfacción de sus demandas, lo que condujo a una negociación con el gobierno en la que no se produjeron acuerdos.

Martes 23

- El CGH suspende formalmente su participación en las negociaciones con la comisión de la rectoría como producto de una decisión tomada en asamblea general.

Miércoles 24

- La CNTE busca la mediación de senadores y diputados para negociar con el gobierno nacional. Por su parte, los secretarios de Gobernación sostienen que las negociaciones con el magisterio a nivel federal ya han concluido y que la resolución de las demandas docentes deben supeditarse a una negociación con los gobiernos estatales, posición que apoya el SNTE. Mientras tanto, continúa la concentración de más de 5 mil docentes frente a la Secretaría de Gobernación en el DF al tiempo que más de 600 profesores en Huautla, Hidalgo, toman la alcaldía y que cerca de 4 mil de Mérida, Yucatán, exigen mejoras salariales y la renuncia de dirigentes del SNTE de las secciones correspondientes a la zona frente al Palacio de Gobierno local.

- Cerca de 300 campesinos de 22 municipios, pertenecientes a la Unión de Productores de Maíz, realizan una concentración y bloquean la calle ubicada frente al Palacio de Gobierno de Toluca en reclamo de un precio adecuado para el grano y mayores oportunidades de comercializarlo.

Viernes 26

- En Durango, casi 2 mil trabajadores de la maquiladora Chic By HIS realizan un paro en protesta por el bajo monto de las utilidades que perciben. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) anuncia la inminente sindicalización de los 8 mil empleados de la empresa.

- Unos 20 padres de universitarios presos bloquean la entrada de la rectoría de la UNAM para exigir la liberación de sus hijos y el sobreseimiento de los cargos de los procesados. Por la noche cerca de 250 maestros de la CNTE se acercan a la rectoría para manifestar su apoyo a la medida y su descontento con la política educativa del gobierno.

Cronología

Sábado 27

- Alrededor de 200 efectivos de la Policía Bancaria e Institucional acuden a la marcha convocada por la Comisión Ejecutiva Bancaria de la Asociación Unica y Democrática al Servicio de la Comunidad hacia la Secretaría de Seguridad Pública en reclamo por haber sido excluidos del alcance del decreto por el cual se creaba la Caja de Previsión Social de la Policía Auxiliar y de los beneficios que ésta recibiría del GDF, así como también exigiendo una homologación salarial con sus pares de la Policía Preventiva.

Domingo 28

- En Ciudad Victoria, casi 200 obreros toman la empresa textil Nien Hsing exigiendo el pago del reparto de utilidades y mejores prestaciones y denunciando que los supervisores los acosan y maltratan.

Lunes 29

- Integrantes del CGH impiden el desarrollo de las elecciones para consejeros universitarios al bloquear las urnas.
- En Oaxaca, 50 mil docentes continúan con el paro que mantienen desde hace tres semanas, que afecta a alrededor de 1.150.000 alumnos. En Zacatecas, unos 2.500 maestros disidentes de las secciones 34 y 58 del SNTE cumplen 8 días de concentración y toma del Palacio de Gobierno y el edificio de la Secretaría de Educación y Cultura mientras que los mentores de las medidas, miembros del Comité Central de Lucha Magisterial, marchan por el centro de la capital del estado.

Martes 30

- En Morelia, Michoacán, más de 10 mil personas acuden a la marcha convocada por la sección 18 de la SNTE. En Zacatecas, las secciones 34 y 58 del SNTE desalojan el palacio de gobierno y la Secretaría de Educación y Cultura al aceptar la propuesta estatal de crear un fondo extraordinario de 34 millones de pesos.

Miércoles 31

- Dirigentes del SNTE se reúnen con sus pares de la CNTE, quienes reclaman un reparto más equitativo de los recursos sindicales obtenidos de las cuotas de los salarios de los profesores y prácticas democráticas al interior del gremio.

J u n i o

Jueves 1

- Los 1.449 trabajadores “sobrecargos” de Aerovías de México (AEROMEXICO) inician una huelga, organizada por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) por violaciones al contrato colectivo y en demanda de un aumento salarial del 16 por ciento y del 5 por ciento en prestaciones.
- En Tabasco, el gobierno y la sección 29 del SNTE acuerdan un aumento en las prestaciones de 29 mil profesores.

Domingo 4

- El segundo tribunal unitario en materia penal absuelve de cargos a 21 integrantes del CGH mientras que a otros 57 les ratifica el auto de formal prisión y les suspenden sus derechos políticos.

Martes 6

- Entre 8.500 (según la Secretaría de Seguridad Pública) y 25.000 (según los organizadores) maestros de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, el DF, Tlaxcala y Veracruz, integrantes de la CNTE, marchan de la Secretaría de la Gobernación hasta Los Pinos luego de lo cual tres representantes de los maestros mantienen una reunión con funcionarios de presidencia y de las secretarías de Gobernación y Educación Pública. En Tapachula, maestros de las secciones 7 de la CNTE y 40 del SNTE toman el palacio municipal, la Secretaría de Hacienda

y la unidad administrativa del gobierno del estado ante la falta de respuesta a sus demandas. En Chiapas, unos 70 mil profesores continúan con la huelga que vienen realizando.

- A los seis integrantes del CGH que permanecían presos se les otorga la libertad bajo caución.

Jueves 8

- Los maestros de la CNTE levantan el plantón y vuelven a sus respectivos estados luego de acordar la realización de mesas de negociación con los distintos gobiernos regionales. Los maestros de Oaxaca obtienen un incremento de 139 millones de pesos para infraestructura escolar, los de Michoacán 100 millones para el equipamiento de las aulas y los de Guerrero 90 millones para cubrir las necesidades de las escuelas. También se acuerda la participación de los docentes en la elaboración de la Ley General de Educación Estatal.

Sábado 10

- Miles de maestros tabasqueños marchan por las calles de Villahermosa y realizan una concentración en la plaza de armas luego de haber destituido al secretario general local del SNTE por negociar sin consultar a las bases. En Chiapas, cientos de maestros que se negaban a levantar el paro que venían realizando, deciden suspender las acciones hasta noviembre. En Yucatán, el gremio magisterial realiza otra marcha y un plantón para reclamar al gobierno estatal una partida de 51 millones de pesos para nivelar los salarios docentes. En Michoacán, la Secretaría de Educación de Estado y la sección 18 del SNTE firman un preacuerdo por el cual los maestros levantan el paro y terminan con el plantón que realizaban en Morelia. En Hidalgo, 8 mil maestros continúan con el paro que habían empezado hacía 2 semanas.

Martes 13

- La ASSA firma un acuerdo con AEROMEXICO que establece un incremento salarial directo del 12 por ciento, uno de las prestaciones del 5 por ciento, la construcción de una guardería para los hijos de los trabajadores del gremio, un mes de permiso tras la licencia posnatal y un plan de jubilación y retiro, por lo que finaliza el paro.

Miércoles 14

- Cerca de 30 integrantes de la Asamblea de Padres de Familia y del CGH bloquean los accesos de la rectoría de la UNAM en reclamo por el desprocesamiento de 200 estudiantes.

Lunes 19

- En Pachuca, Hidalgo, más de 20 mil maestros marchan, bloquean los accesos a la ciudad y realizan un plantón por tiempo indefinido en rechazo a los ofrecimientos del gobierno estatal a sus exigencias salariales y de prestaciones. También destituyen al secretario general de la sección 15 del SNTE por haber negociado sin consultar a las bases.

Martes 20

- Policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Pública bloquean calles del DF exigiendo el pago completo de su salario real y se manifiestan en contra del comité técnico de la Asociación de Servicios Sociales de la Policía Auxiliar.

Jueves 22

- Más de 15 mil docentes de Villahermosa, Tabasco, continúan el plantón que realizaban y marchan hacia la residencia oficial para exigir la liberación de los 85 profesores detenidos el miércoles anterior, cuando fueron desalojados de un local de la Secretaría de Educación Pública.
- Cerca de 50 policías auxiliares bloquean avenidas del DF demandando la devolución de sus ahorros, la desaparición de la caja de previsión, un mejoramiento de las prestaciones a jubilados, el establecimiento del horario y sueldo constitucional, la mejoría del equipo, el ascenso por antigüedad y la integración de algunos de ellos en la Secretaría de Seguridad Pública.

Viernes 23

- Unos 500 maestros integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz toman las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura exigiendo un aumento salarial, un aguinaldo de 90 días y rezonificación al 100 por ciento.

Sábado 24

- Se soluciona parcialmente el conflicto que mantienen los policías auxiliares al ser intervenida la Asociación de Servicios Sociales para la Policía Auxiliar en pos de modificar su estatuto de forma que serían los policías de la tropa los encargados de su dirección y no los comandantes.

Viernes 30

- Por una resolución judicial 85 integrantes del CGH son desprocesados.

J u l i o**Domingo 2**

- El candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, se impone en las elecciones presidenciales con un 43 por ciento de los votos, contra un 36 por ciento del segundo, Francisco Labastida, del PRI. El PAN también suma 141 representantes nacionales a la Cámara Baja, donde obtiene la mayoría, seguido por el PRI, que gana 131 bancas, y por la Alianza por México, que obtiene 28. En el Senado el PAN consigue 38 lugares, el PRI 48 y la Alianza por México 11.

Sábado 8

- Taxistas que prestan servicio en las terminales de ómnibus protestan desnudándose frente a las oficinas del GDF en demanda de un aumento tarifario del 20 por ciento.

Lunes 24

- En San Cristóbal de las Casas, medio centenar de campesinos, miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios, bloquea el acceso de la autopista a México en protesta por el incumplimiento de la empresa constructora Tribasa del pago por daños ocasionados a la zona durante la construcción.

Lunes 31

- En el municipio de Ocosingo, ubicado en San Cristóbal de las Casas, unos 200 campesinos de las bases de apoyo al EZLN se concentran en el poblado San Manuel-La Providencia en reclamo por la instalación de alambrado y postes que militantes priístas habían realizado en tierras de su propiedad para el paso de ganado.

A g o s t o**Jueves 3**

- Cerca de 40 hombres armados desalojan y queman las casas de varias familias campesinas del predio El Paraíso, ubicado en el municipio de Yajalón, ubicado en Chiapas en el cual hay un conflicto por la posesión de tierras entre el grupo paramilitar Paz y Justicia y el EZLN.

Sábado 5

- Un grupo de paramilitares vuelve a desalojar e incendiar las chozas de campesinos simpatizantes del zapatismo de Predio Paraíso, en Yajalón, quienes se refugian en las montañas.

Lunes 7

- Integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Consorcio por la Equidad y el Diálogo Parlamentario, Agrupación Política Nacional Diversa, Equidad y Género, Trabajo y Familia, Epikeia, Red por la Salud de las Mujeres del DF, Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población y Milenio Feminista se manifiestan en contra de la reforma del Código Penal de Guanajuato frente a la sede na-

cional del PAN, ubicada en el DF, que impulsa una reforma que prohibiría los abortos en casos de violación. Luego de una reunión con los manifestantes la dirigencia del PAN expresó que la iniciativa impulsada en Guanajuato no respondía a sus lineamientos.

Jueves 10

- Cerca de mil tzotziles y tzeltales de la asociación civil Las Abejas realizan en San Cristóbal de las Casas una marcha para exigir justicia por las 45 personas asesinadas en Acteal en 1997, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y una indemnización para los 1.850 desplazados de Chenalhó, para que puedan regresar a sus comunidades de origen.

Sábado 12

- Zapatistas y priístas de la comunidad de Pavorreal, ubicada en Ocosingo, se enfrentan con machetes y palos en disputas por tierras que ocupan estos últimos, quienes fueron desalojados.

Lunes 14

- Integrantes de la Unión de Productores de Caña de la Confederación Nacional Campesina (CNC) bloquean las instalaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y oficinas de la Secretaría de Hacienda exigiendo al gobierno su intervención ante la deuda que los ingenios azucareros mantienen con ellos.

Miércoles 16

- La Unión de Cañeros de la CNC llega a un acuerdo con el Consorcio Azucarero Escorpión y con el Grupo Machado para el pago de la liquidación de caña de azúcar a 70 mil cañeros, lo que soluciona parcialmente el conflicto.

Jueves 17

- Los líderes del SME, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y los de la Confederación Obrera Revolucionaria acuerdan la realización de una estrategia a fin de realizar un frente nacional de trabajadores para enfrentarse a cualquier intento de privatización en el sector energético.

Viernes 18

- El Consorcio Azucarero Escorpión, el Grupo Azucarero Mexicano, Machado y Seoane se comprometen a pagar las deudas por \$ 980 millones que mantienen con 75 mil cañeros.
- Los 12.586 trabajadores sindicalizados del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (STIAVW) se pliegan al paro organizado contra la empresa automotriz en demanda de un aumento salarial del 35 por ciento y de uno del 7 por ciento en las prestaciones.

Domingo 20

- El candidato de la Alianza por Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, se impone en las elecciones a gobernador del distrito en las cuales el candidato priísta obtiene el segundo lugar.

Martes 22

- La JFCA decreta que la huelga de Volkswagen era ilegal, lo que habilitaba a la empresa a despedir al personal que no abandonara las medidas en 24 hs.

Miércoles 23

- Los trabajadores de Volkswagen retoman sus labores.
- La Confederación de Trabajadores Ferrocarrileros junto con un centenar de trabajadores y jubilados del ramo realiza una manifestación frente a las oficinas del presidente para exigir que se preste atención a la denuncia por el delito de peculado y fraude impulsada contra el líder sindical priísta Victor Flores y para solicitar que no desaparezca la empresa Ferrocarriles Nacionales de México.

Jueves 24

- Alrededor de 11 mil empleados de Volkswagen se movilizan hacia el Palacio de Gobierno para exigir la intervención del gobierno estatal a fin de que la empresa acepte una nueva negociación.

Lunes 28

- En Aguascalientes, medio centenar de integrantes del Movimiento de Orgullo Lésbico Gay, de la Fundación de Aguascalientes de Lucha contra el Sida, de Falcons y de la organización En Busca de los Derechos Gay de los estados de Guanajuato y Querétaro y del municipio local se manifiestan frente a la alcaldía para exigir la destitución del director de Reglamentos del municipio, quien manifestó su rechazo a que los gays entren a la administración pública.

Jueves 31

- Los trabajadores de Volkswagen firman con la empresa un convenio que otorga a los primeros un incremento salarial del 18 por ciento además de un 3 por ciento en prestaciones económicas.

GLOSARIO DE SIGLAS:

AEROMEXICO	Aerovías de México
ASSA	Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CGH	Consejo General de Huelga
CTM	Confederación de Trabajadores de México
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FPFV	Frente Popular Francisco Villa
GDF	Gobernación del Distrito Federal
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
JFCA	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
PAN	Partido Acción Nacional
PFV	Policía Federal Preventiva
PGR	Procuraduría General de la República
PRI	Partido Revolucionario Institucional
SEP	Secretaría de Educación Pública
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STIAVW	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNT	Unión Nacional de Trabajadores

** Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuente: Diario La Jornada.*

Nicaragua*

M a y o

- Lunes 1** • El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) realiza una marcha en Managua en ocasión del Primero de Mayo, donde se reúnen aproximadamente tres mil trabajadores en protesta por la situación del país, la Ley de Pensiones y contra la política del gobierno.
- Martes 2** • Alrededor de cincuenta trabajadores de la empresa textil Chentex, de la zona Franca industrial, inician una huelga en protesta por los despidos de los miembros de la Junta Directiva del sindicato y en demanda de un aumento salarial.
- Jueves 4** • Cerca de dos mil trabajadores de la empresa Chentex se suman a la huelga que se realiza en esa empresa. Pese a las exigencias para que suspendan la medida por parte de la patronal, los obreros advierten que hasta tanto no se contemplen sus exigencias no retornarán a trabajar.
- Viernes 5** • Dirigentes del FNT y empresarios taiwaneses de la fábrica Chentex llegan a un acuerdo verbal tras lo cual se reinician las labores en la fábrica. El acuerdo contempla el reintegro de los dirigentes sindicales despedidos y el compromiso de que la fábrica no cerrará ninguna línea de producción que emplee al menos 120 obreros.
- Viernes 12** • Aproximadamente 130 desmovilizados de la Resistencia vuelven a tomar las armas en los últimos días y se internan en las montañas en protesta por la negativa del gobierno en dar respuesta al problema de la tierra.
- Lunes 22** • Miembros de las cooperativas Julio Buitrago y León, y de las cooperativas de Carazo, Cotra-vo, Cotrasur y Codevo, realizan un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en protesta porque transportistas ilegales están operando en las rutas tradicionales (León-Managua y Carazo-Managua) donde los manifestantes trabajan.
- Domingo 28** • Alrededor de trescientos campesinos que viven en 10 comunidades de Siuna solicitan a Defensa Civil que les faciliten las condiciones para poder abandonar sus lugares de residencia ante la amenaza del accionar de grupos armados, quienes han incrementado las persecuciones.
- Lunes 29** • Ex miembros de la Resistencia Nicaragüense, campesinos, mujeres productoras y retirados del Ejército instaron al Gobierno a respetar los títulos de Reforma Agraria, ante el intento de apropiación de 204 manzanas de tierra que poseen hace más de 15 años. Armados de piedras, garrotes y machetes, los beneficiarios se mantienen en la finca San Luis en Chinandenga, luego del intento fallido de desalojo realizado por fuerzas policiales el pasado fin de semana.

J u n i o

- Martes 6** • Integrantes de distintas organizaciones feministas, como el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Mujeres, y otras trabajadoras de distintos sectores productivos del país,

realizan una consulta nacional sobre los aspectos del Código del Trabajo que deben ser transformados porque no contemplan la existencia de las mujeres que trabajan, y presentarán en los próximos días una serie de artículos para reformar el Código Laboral.

Miércoles 7

- Cerca de veinte organismos que trabajan con los desplazados de la sociedad civil de Siuna, entre otros, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Movimiento de Mujeres Siuneñas, el Instituto para la Democracia, la Iglesia Católica y la Concertación Nacional Programática (CONAPRO), hacen un llamado al Gobierno para que contemple las necesidades reales de la población y de las aproximadamente 1.500 personas que han huido de sus comunidades.

Sábado 10

- Miembros de las comunidades indígenas sumos, ramas y miskitos, en el Atlántico Norte del país, denuncian la actitud parcial de los jueces de Distrito de lo Civil en Puerto Cabezas, que pretende despojarlos de más de 58 mil hectáreas de bosques y tierras cultivables. Distintos miembros de las comunidades afirmaron estar dispuestos a defender las tierras que les pertenecen, como lo expresa la Carta Magna y la Ley de Autonomía del Atlántico. Aproximadamente 12 mil serían los indígenas nicaragüenses que se quedarían sin tierras.

Lunes 12

- Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) paralizan las clases en reclamo de participación en el Consejo Universitario, exigiendo 15 escaños en el Directorio de la institución que les permitan ser parte de la toma de decisiones que les atañen.

Lunes 19

- Aproximadamente 750 estudiantes de la Facultad Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) toman la sede nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) en demanda de representación en los Recintos y Facultades.

Lunes 26

- Sindicalistas pertenecientes a la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) y maestros de todo el país, protestan con carteles y pancartas ante el Gobierno y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) en el acto de celebración del Día del Maestro. Reclaman un aumento de salario y puestos de trabajo, así como también el cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno y el MECD de entregarle a todos los maestros, láminas de zinc para sus viviendas, y el pago de un bono de ayuda de 150 córdobas.

- Diez estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) comienzan una huelga de hambre, exigiendo que se respeten sus espacios en el Consejo Universitario y en protesta ante la amenaza de privatizar la educación realizada por las autoridades de la UNA.

J u l i o

Lunes 3

- Estudiantes comienzan una huelga con el fin de llevar a cabo nuevamente las elecciones, que consideran fraudulentas, realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAN- Managua) el 24 y 27 de junio, en las cuales obtuvo la presidencia la lista "20 de Abril".

Miércoles 5

- Campesinos, provenientes de diferentes grupos armados, de ex Resistencia y Yátama, del Ejército y Gobernación, entre otros, retoman las armas y se adentran en las montañas reclamando el cumplimiento de las promesas realizadas por el Gobierno: entrega de tierras, titulación y financiamiento, entre otras. Por otra parte, suman 80 mil los retirados del ejército y 40 mil de la ex Resistencia que se manifiestan dispuestos a boicotear las elecciones.

Lunes 10

Las autoridades de la UNA y la representación estudiantil, contando con la intervención del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, acuerdan concluir la huelga de hambre y la suspensión de clases en la Universidad Nacional Agraria. La Rectoría de la UNA asume el compromiso de revisar los sistemas de evaluación, el reglamento académico, las prácticas de producción y mejorar las condiciones de los estudiantes becados externos e internos. Asimismo, acepta la propuesta de admitir siete estudiantes en el Consejo Universitario, hasta tanto se reglamente la Ley de Autonomía de las universidades públicas. No se logra un acuerdo definitivo sobre el problema de la representación estudiantil en el Consejo Universitario.

Sábado 15

- Los trabajadores de “Inversión Textilera de Productos Sanitarios” (INTEPSA), ubicada sobre la carretera a Xiloá, toman las instalaciones en reclamo al pago de salarios atrasados y por la paga de renuncia.

Lunes 17

- Más de 1200 obreros de la construcción realizan un paro de labores de medio día en Managua, con marchas en esa Capital, exigiendo mejoras salariales y denunciando la compli- cidad de las autoridades del Ministerio de Trabajo en favor de la representación de los em- pleadores. El acatamiento del paro fue total.

Jueves 20

- Los estudiantes del Bloque Estudiantil Universitario (BEU) de la Universidad Nacional Autónoma de Managua finalizan la huelga, luego de 16 días de ocupación, después de acordar con la rectoría la creación de una comisión que estará a cargo de estudiar y verifi- car los expedientes de los que resultaron electos presidente y vicepresidente por la lista “20 de Abril” en las recientes elecciones. Asimismo, los estudiantes del BEU se comprometen formalmente a no obstaculizar el paso y dejar entrar al personal estudiantil, administrativo y docente para realizar sus actividades.

123

A g o s t o**Lunes 7**

- Alrededor de 1800 trabajadores de la empresa textil PRESITEX, en la zona Franca de Sé- baco, paralizan la empresa en demanda de un aumento salarial, el pago de horas extras, me- jores condiciones laborales y una revisión a las deducciones del Seguro Social, entre otras reivindicaciones.

Jueves 10

- Tres cooperativas de transporte colectivo inician una huelga en Nueva Guinea, con pro- testas frente a las instalaciones del Gobierno Municipal, en demanda de la destitución del secretario de la Comisión de Transporte, y del cumplimiento de los acuerdos con la muni- cipalidad firmados en Julio.

- Los trabajadores de la empresa PRESITEX levantan la huelga luego de que representan- tes de los empleados y de los empleadores se reúnen y firman un acuerdo en el que se ga- rantiza que no habrá despidos, estableciendo un plazo de 48 horas para reintegrarse a las actividades laborales.

Lunes 14

- Cerca de 100 trabajadores de la empresa PRESITEX son despedidos en represalia a su participación en la huelga.

- Los transportistas de las tres cooperativas de colectivos en huelga, levantan la medida, luego de acordar con el Gobierno Municipal la firma de un documento que establece la des- titución del Secretario de la Comisión de Transporte, y el cumplimiento por parte de la mu- nicipalidad de los acuerdos firmados que establecen la conformación de una comisión re-

guladora de transporte, la cancelación de los permisos para nuevos taxis y la suspensión del cobro en las terminales.

Jueves 24

• Alrededor de 200 panaderos de León, Chinandenga, Managua, Ciudad Sandino, y Tipitapa, organizados en la Comisión Nacional de Panificadores (CONAPAN), marchan con sartenes y canastos, en Managua, en protesta por el alto costo de los insumos utilizados para la elaboración del pan, y reclaman la reforma de la Ley de Justicia Tributaria en beneficio de la pequeña industria. Un diputado recibe a los manifestantes.

Miércoles 30

• Productores del Norte del país, respaldados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), toman carreteras, y edificios públicos, en Managua y cerca de 20 municipios del norte, en reclamo de la reestructuración de crédito y la condonación de deudas, y en rechazo al plan de financiamiento y suspensión de las ejecuciones bancarias propuesto por el Gobierno, que no satisface las demandas de muchas familias rurales. Se suman a la protesta el sector transporte, CONAPAN, y el Movimiento Comunal.

Jueves 31

• Miles de personas, junto a la Iglesia Católica, incluido el presidente, marchan en Managua contra el aborto. El Comité Nacional Feminista (CNF), critica la medida, así como también la participación del presidente.

• Más de 500 miembros de la Resistencia y ganaderos de Zelaya Central, Río Blanco y Chontales, demandan al Gobierno los títulos de tierra y aclarar el tema de los endeudados.

• Alrededor de 250 campesinos y productores de comunidades rurales del Departamento de León, realizan un plantón en esa ciudad, para exigir al gobierno y solicitar a la banca privada que les faciliten créditos rurales. Por otra parte, unos 500 productores de San Juan del Río Coco, Telpaneca y Palacagüina, protestan en Estelí, frente a los bancos, ante el posible cierre del Interbank, por la falta de crédito y las alzas en los combustibles.

GLOSARIO DE SIGLAS

ANDEN	Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BEU	Bloque Estudiantil Universitario
CENIDH	Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
CNF	Comité Nacional Feminista
CONAPAN	Comisión Nacional de Panificadores
CONAPRO	Concertación Nacional Programática
FNT	Frente Nacional de los Trabajadores
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
INTEPSA	Inversión Textilera de Productos Sanitarios
MECD	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MTI	Ministerio de Transporte e Infraestructura
UNA	Universidad Nacional Agraria
UNAN	Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN - Managua	Universidad Nacional Autónoma de Managua
UNEN	Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua

** Realizado por: María Chaves, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios La Tribuna y La Prensa.*

Panamá*

M a y o

Lunes 1

• Cientos de trabajadores de diferentes organizaciones (entre ellas la Asociación de Profesores de la República y el Sindicato de la Coca Cola) marchan para conmemorar el primero de mayo. Los obreros exigen durante la medida al gobierno de Mireya Moscoso el aumento del salario mínimo a 500 balboas y reafirman su oposición a la venta de las acciones del Estado en la telefonía (Cable & Wireless) y en las empresas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Martes 2

• Los obreros pertenecientes al SITRAIBAN de Bocas del Toro aprueban por unanimidad la realización de un paro indefinido de labores que aún no tiene fecha de inicio, frente a la negativa de negociación de la empresa Bocas Fruit Company sobre el pliego de peticiones donde los sindicalistas señalan la violación de sus derechos laborales.

Domingo 7

• Dos mil quinientos indígenas de la etnia Ngobe acompañados por el campesinado latino de Tolé, Chiriquí, se concentran para rechazar el proyecto hidroeléctrico Tabasará que pretende inundar sus tierras cultivables.

Jueves 11

• Los ex empleados del Ferrocarril de Panamá cierran la vía de acceso a la entrada y salida de las instalaciones donde se realiza la obra de reconstrucción de las vías férreas en Colón. El objetivo es que la empresa contratista responda a la solicitud de incorporación de sus empleados ya que luego de tres meses de espera están contratando trabajadores de Panamá y de otros puntos del país.

Viernes 12

• El movimiento Fuerzas Vivas de Colón en Cabildo Abierto anuncia el cierre de la Zona Libre de Colón en protesta por que toda la mano de obra y profesional afectada a los trabajos del puerto reside en la ciudad de Panamá.

Viernes 19

• Los gremios docentes suspenden las clases en los colegios públicos de todo el país y marchan a la Presidencia para exigir las Jubilaciones Especiales.

Miércoles 24

• Aproximadamente 30 trabajadores del ferrocarril y del SUNTRACS efectúan una manifestación pacífica en demanda de plazas de trabajo para los habitantes de Colón y son brutalmente reprimidos y encarcelados por unidades antimotines de la Fuerza Pública que siguen instrucciones de la Corregiduría de Cristóbal.

Lunes 29

• Grupos de obreros realizan piquetes en diferentes puntos de la ciudad capital. Los trabajadores se oponen a la privatización de la Caja de Seguro Social, a la utilización del Fondo Fiduciario y a la venta de las acciones que el Estado mantiene en Cable and Wireless como en las empresas eléctricas. También exigen un salario mínimo de 500 balboas y que la comisión negociadora que solicitaron los convoque para negociar.

Martes 30

- En un comunicado oficial informa el gobierno que en adelante no se permitirá el cierre de calles y avenidas, fundamentado en el artículo 17 de la Constitución sobre el derecho a transitar libremente que reclama la ciudadanía. La medida se da en el marco de una serie de demostraciones callejeras protagonizadas por los obreros de la construcción que reclaman aumento de salarios y la utilización de los fondos fiduciarios.

Miércoles 31

- Miembros del Comité Pro Rescate del Transporte protestan en las oficinas centrales del Sindicato de Taxis Pequeños (SINCOTAPE). Solicitan una auditoría de las finanzas debido a que los trabajadores de las estaciones de gasolina no cobran el seguro social y se les difieren los pagos de las quincenas.

J u n i o**Viernes 2**

- La Presidenta de la República, informa que se logró, el jueves 1, un convenio con los dirigentes docentes del país en torno a las jubilaciones especiales y el incremento salarial de este sector. El acuerdo conlleva un plan de jubilaciones anticipadas que establece que los educadores varones se retiren de su labor educativa a los 56 años, mientras las mujeres a los 52 y medio, con un 85% de su salario, con un aporte de 3,50% por parte de los educadores y de 4,40% por el Gobierno, si han cumplido 28 años de servicio.

Miércoles 7

- Estudiantes universitarios y de Artes y Oficios obstaculizan por varias horas la Vía Bolívar a la altura de la Universidad de Panamá en demanda de mayor participación democrática para los alumnos, quienes son reprimidos por los directivos por ordenanza del Ministerio de Educación. El Bloque Popular Universitario se solidariza con los compañeros del Artes y Oficios. También solicitan la reorganización de la Asociación Federada del Artes y Oficio (AFAO). Dos estudiantes de este plantel se encuentran en huelga de hambre como acción de fuerza para que sus demandas sean escuchadas.

- Se reúnen los docentes con la Comisión de Alto Nivel del Gobierno, para firmar los acuerdos pactados, mientras hay una suspensión de clases a nivel nacional.

Jueves 8

- Cientos de obreros marchan hasta la presidencia de la república en demanda de un aumento salarial de 500 balboas y en rechazo a la política económica del ejecutivo. Dicha política económica contempla la venta de las acciones que el Estado mantiene en las empresas de telefonía, de generación y comercialización eléctrica y el uso de los dineros producto de las privatizaciones del antiguo IRHE e INTEL, y de ciertas tierras vendidas y alquiladas de la recién revertida área canalera y que se encuentran depositadas en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. La Federación de Empleados Públicos (FENASEP), informó que apoya la convocatoria del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) en solidaridad con los trabajadores del sector privado. Los servidores públicos se suman a la exigencia de un aumento salarial debido a la constante alza en la canasta básica familiar. Por su parte la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), comentó que el CONATO efectivamente tiene preparado un pliego de peticiones, que será entregado a las autoridades si estas tienen la voluntad de recibir al movimiento sindical. Las propuestas se enmarcan en 4 áreas centrales: la suspensión de los despidos masivos en el sector público, un salario mínimo de 500 balboas, la suspensión de la discusión del proyecto de Ley que modifica el uso del Fondo Fiduciario y el tema de la Caja de Seguro Social. También el Bloque Popular Universitario (BPU), manifestó que ellos le extienden su brazo solidario a los trabajadores, dado que no pueden permitir que la nación sea entregada a las Instituciones Financieras Internacionales.

Martes 13

- Desempleados de MODESCO sabotean el acto en el que estaba prevista la participación de la Presidenta de la República, se apoderan del lugar conocido como “Los Lagos” en Colón donde se enfrentan con unidades antimotines de la Policía Nacional, en medio de gases lacrimógenos. La Presidenta no pudo llegar al lugar debido a las protestas de los colonenses desempleados, que exigen trabajos remunerados con fondos del Estado.

Jueves 15

- La Asociación de Acuicultores de Panamá piquetea las oficinas de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa para dejar sentada su oposición ante la posible importación de camarones con el virus de la Mancha Blanca procedentes del Asia y a la vez presentar una propuesta de Ley para la Sanidad Acuícola.
- Centenares de estudiantes de la estatal Universidad de Panamá, armados con palos y piedras, se enfrentan con la policía antidisturbios tras protagonizar una protesta en solidaridad con los obreros panameños, que reclaman un aumento del salario mínimo de 224 a 500 dólares mensuales. La Policía Nacional informó que hay seis heridos leves y 15 detenidos. Un gran número de estudiantes permanece atrincherado en una casa de estudios, la cual es vigilada por los efectivos antimotines.

J u l i o**Martes 11**

- Un grupo de activistas de la Fundación Ciudadana protesta en las inmediaciones de la presidencia de la República, para pedir a la mandataria que entable negociaciones sobre la base del contrato con la empresa mexicana ICA que permitan algún tipo de compensación a cambio de los rellenos para la construcción de Punta Pacífica.

Miércoles 12

- Miembros del Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO) realizan actos de crucifixión en los predios de la presidencia de la República como una protesta a fin de exigir a la mandataria plazas de trabajo y que sea resuelto el problema del desempleo en el país. Cinco personas se crucifican en la parte frontal de la Iglesia de la Catedral, representando al “hambre, miseria, desempleo, vivienda y pobreza”, mientras que advierten que permanecerán en el lugar hasta que sean atendidos por la presidenta de la República. Unidades del Sistema de Protección Institucional (SPI), acordonaron el área y procedieron a lanzar gas picante a los manifestantes. La seguridad presidencial en arreos de combate procedió a desalojar a los manifestantes sin éxito, por lo que se dispusieron a mantener el orden por los predios de la Presidencia y mantenerse vigilante.

Lunes 31

- Los periodistas realizan La Cruzada Nacional por la Libertad de Expresión y piden públicamente a la Presidenta de la República el indulto para los periodistas panameños amenazados de cárcel por razones relacionadas con el ejercicio de la profesión, por el encarcelamiento del periodista y Director del El Siglo, Carlos Singares.

A g o s t o**Sábado 5**

- El ciudadano Defensor del Pueblo de la República de Panamá, Doctor Italo Isaac Antinori-Bolaños, expresa su preocupación e inquietud, por los hechos que se suscitaron el 18 de julio de 2000, en el Corregimiento de Guabito, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, con los manifestantes que protestaban por la decisión adoptada por la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Economía y Finanzas, por suspender los permisos de cortesía a ciudadanos panameños, para la compra de mercancías en territorio costarricense. Varios miembros del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques (CPRDV) y la Juventud Viequense Unida (JVU) ocupan la oficina de la Secretaría de la Salud, Carmen Feliciano de Melecio, para demandar la información actualizada y completa sobre la situa-

ción de salud en la Isla Nena. La seria preocupación sobre la salud del pueblo viequense, se debe en la actualidad a la amenaza de la Marina respecto a iniciar nuevos bombardeos en el curso de la semana.

Miércoles 9

- La Cruzada Nacional por la Libertad de Expresión toma las principales avenidas de la ciudad de Colón, en protesta por la persecución sistemática de que son objeto los comunicadores de la Costa Atlántica por parte del Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa y la Alcaldesa Matilde Rosales de Ardines. La comunidad apoya la medida.

Jueves 10

- La Confederación de Jubilados y Pensionados del país realiza una demostración pacífica en las oficinas de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicadas en el Edificio Bolívar de la Transístmica en respaldo al director de dicha entidad. La presidenta de la Confederación de Jubilados y Pensionados, Lastenia Canto, manifestó además que reclaman por la no privatización de la Caja de Seguro Social, respeto a la autonomía y que los políticos y los intrusos no realicen manejos turbios de los fondos en la Caja de Seguro Social.

- Un grupo de 26 policías destituidos de la Policía Nacional (PN) denuncia ante el Defensor del Pueblo supuestos actos de abuso de poder y extralimitación de funciones por parte de oficiales y altos miembros de la PN en el trámite de su destitución. Ante la presentación de la queja colectiva la policía asumió una actitud represiva y abusiva al intervenir en la Defensoría.

Domingo 13

- El Director de la PN, tomará severas medidas disciplinarias de comprobarse que las unidades de esa institución que irrumpieron el viernes pasado en la Defensoría del Pueblo lo hicieron de forma inconsulta.

GLOSARIO DE SIGLAS

AFAO	Asociación Federada del Artes y Oficios
BPU	Bloque Popular Universitario
CGTP	Central General de Trabajadores de Panamá
CONATO	Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CPRDV	Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques
CSS	Caja de Seguro Social
FENASEP	Federación de Empleados Públicos
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
JVU	Juventud Viequense Unida
MODESCO	Movimiento de Desempleados de Colón
PN	Policía Nacional
SINCOTAPE	Sindicato de Taxis Pequeños
SITRAIBANA	Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuaria y Empresas Afines
SPI	Sistema de Protección Institucional
SUNTRACS	Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares

** Realizado por: Liliana Demirdjian y Juan Chaves, colaboradores del OSAL.
Fuentes: diario El Siglo.*

Paraguay*

Mayo

Martes 9

- Alrededor de 600 familias de labriegos agrupados en la Federación Nacional Campesina (FNC) invadieron una propiedad de aproximadamente 16.000 hectáreas en la zona de Boquerón (Estancia Kaugueti), departamento de Caazapá, iniciando la serie de ocupaciones que anunciaron ante la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales a sus reclamos. Intervinieron efectivos de la Policía Nacional con gases lacrimógenos y disparos contra los campesinos para que desocupen las tierras.

Jueves 11

- La policía desaloja a los campesinos que ocupan la propiedad en Caazapá. Se producen enfrentamientos entre campesinos y policías que dejan como resultado más de 60 heridos -27 policías- alrededor de 320 detenidos y algunos muertos (fte periodística).

Lunes 15

- Los campesinos de todo el país, agrupados en la FNC, comienzan movilizaciones en reclamo de parcelas para cultivar y producir. Continúa la tensión en el campamento de Arroyo Guazú, Caazapá, donde permanecen entre 250 a 300 labriegos.
- Alrededor de 200 campesinos (versión periodística) que cerraron la ruta VII, a la altura del Km. 36 y la supercarretera de Itaipú, fueron detenidos por agentes antimotines de la Policía Nacional. Los labriegos bloquearon estas vías en solidaridad con los “sin tierra” que fueron reprimidos y desalojados de la propiedad ocupada en el departamento de Caazapá. Los efectivos policiales restablecieron el tráfico de ambas carreteras por medio de la fuerza provocando lesiones a los labriegos.

Miércoles 17

- El Ministro de Agricultura y Ganadería, el titular del Instituto de Bienestar Rural (IBR) y un miembro del Consejo del IBR, ofrecen 2.980 hectáreas de tierras a los labriegos que ocuparon el martes 9 la propiedad en la zona de Boquerón, Caazapá durante una reunión en la Gobernación. Las autoridades se comprometieron a seguir dialogando con los interesados para agotar todos los esfuerzos posibles a través de medios pacíficos de concertación y acuerdo. De aceptarse la propuesta, el IBR procederá al loteamiento y adjudicación de las tierras.

Jueves 18

- Aproximadamente cuatro mil personas (fuente periodística), pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE), la Coordinadora Obrera Campesina (COC) con el apoyo de los sindicatos afiliados a la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y otras organizaciones sociales se manifiestan contra la privatización de empresas estatales, cuya ley marco tiene ya media sanción de la Cámara de Senadores.
- Oficiales -activos y retirados- y civiles seguidores de Lino Oviedo participan en una tentativa de Golpe de Estado para derrocar al gobierno del Presidente González Macchi.

Viernes 19

- El Congreso Nacional declara el Estado de Excepción, (el poder ejecutivo podrá ordenar por decreto la detención de personas, restringir las reuniones públicas y las manifestaciones), en todo el territorio nacional por término de 30 días, de conformidad con lo establecido en el Artículo 288° de la Constitución Nacional - Decreto N° 8.772 del Poder Ejecutivo.

Cronología

- Miércoles 31** • Un grupo de indígenas de la parcialidad Toba Qon, asentados en la localidad de Cerrito, llegan a la sede de la Gobernación departamental de Villa Hayes, para manifestarse en forma pacífica. Reclaman una gestión clara y transparente del área administrativa del gobernador y, en especial, del secretario de asuntos indígenas.

J u n i o

- Jueves 1** • Los funcionarios del Ministerio Público del área penal inician una protesta para cobrar horas extras. No trabajarán fuera del horario establecido debido a la falta de pago de horas extraordinarias y otros beneficios como la remuneración del seguro médico.

- Lunes 5** • Pescadores de diferentes asociaciones y ex obreros de la Empresa Eriday UTE bloquean los accesos a la zona de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, en reclamo de reivindicaciones laborales y el pago de la indemnización por ser familiares de pescadores afectados por la construcción de la central. Los ex empleados del emprendimiento hidroeléctrico se encuentran bloqueando el portón de acceso a las oficinas administrativas del ente binacional; los mismos reclaman a las autoridades binacionales y a la empresa Eriday UTE el pago de la doble indemnización ratificada en derecho por la propia Corte Suprema de Justicia. La medida de fuerza es indefinida y no la levantarán mientras no exista una solución definitiva a sus reclamos. Mientras los pescadores cierran el puente, los familiares bloquean el otro acceso de la zona de obra dejando totalmente aislada a la Central Hidroeléctrica.

- Viernes 9** • Alrededor de 1.500 alumnos cierran varias arterias capitalinas antes de llegar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para exigir el boleto estudiantil. Los jóvenes reclaman al Secretario de Estado la implementación del medio pasaje antes del 20 de junio de este año.

- Miércoles 21** • Sindicatos y trabajadores de empresas estatales como Antelco, INC, Corposana, Correos y Petropar, inician una medida de fuerza contra la política de reforma de las entidades públicas, tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno. Participan de la misma los trabajadores de empresas del Estado.

- Jueves 22** • Cuatro centrales obreras -Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), Central General de Trabajadores (CGT) y Central Sindical de Trabajadores del Estado Paraguayo (Cesitep)-, aglutinadas en el Congreso Popular Permanente (CPP), que concentra a varios sindicatos de las empresas estatales, y a distintas centrales obreras -excepto la CNTy la Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC)- se suman a la huelga general de 48 horas. Reclaman el retiro del proyecto de ley de la Reforma del Estado y la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos de la ANDE.

J u l i o

- Jueves 6** • Sindicalistas y consejeros del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifiestan contra la intervención del Hospital Central e inician una huelga de hambre por tiempo indefinido, hasta que los interventores sean reemplazados.

- Miércoles 19** • Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa marchan pidiendo la suspensión del recorte presupuestario previsto por el Ministerio de Hacienda que pone en peligro la continuidad de la carrera. Se trata de un recorte en el orden de los 143

millones de guaraníes, destinados a la cobertura del viático para el cuerpo docente de la Facultad. El presupuesto de la Facultad de Medicina para el año 2001 contemplaba la suma de unos 3.700 millones de guaraníes, los cuales fueron recortados a 2.026 millones, realizándose posteriormente otro corte de aproximadamente 140 millones.

- Los cañicultores de la localidad de M.J. Troche, Guairá, inician un bloqueo del acceso a la fábrica procesadora de caña dulce de esta ciudad. Piden que el Gobierno pague 50 mil guaraníes por tonelada de caña dulce en vez de los 45 mil que fijó como precio de la caña a ser entregada a la planta de Troche. Los cañicultores aseguran que la resistencia será pacífica y que están abiertos al diálogo.

Martes 25

- Campesinos agremiados a la MCNOC son desalojados con violencia por la policía del frente del local del IBR. Reclaman al Gobierno la concreción del programa para las familias del campo. Los campesinos representantes de las 32 comisiones vecinales que conforman la MCNOC deciden permanecer en la Plaza Uruguaya en un campamento provisorio por tiempo indefinido hasta concretar su pedido y volver para asentarse en sus tierras. Los mismos reclaman al Gobierno el cumplimiento de un acuerdo firmado en marzo pasado que contempla la entrega de aproximadamente 7.000 hectáreas.

Jueves 27

- Funcionarios de la Novena Región Sanitaria, nucleados en el Consejo Descentralizado de Paraguari, inician una huelga general de trabajadores de la salud de la zona. La decisión se tomó debido al incumplimiento del contrato colectivo de condiciones de trabajo. Piden la reposición de dos funcionarias trasladadas y el cese de la persecución sindical.

A g o s t o

131

Jueves 3

- Enfermeras de diferentes hospitales públicos, agremiadas en el Frente Unico de Enfermería, marchan hasta el Parlamento Nacional para presentar un proyecto de ley del ejercicio de la profesión y solicitar la equiparación salarial con profesionales de los centros asistenciales de la red de salud pública. El proyecto de ley contempla la reglamentación de reivindicaciones para el sector como la jubilación, carga horaria, vacaciones, remuneración por ejercicio de la profesión en lugares insalubres, trabajos en horarios nocturnos o extraordinarios y feriados, accidentes en lugares de trabajo y riesgos ocupacionales, que no están reconocidos actualmente.

Viernes 4

- Estudiantes de distintos colegios y escuelas de la capital, que integran el Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil (MOBE), marchan por el microcentro para reclamar la puesta en vigencia de la Ley N° 1.432, que establece el medio pasaje.

Martes 8

- Alrededor de 350 campesinos del departamento de Caazapá, agrupados en la FNC, marchan frente al Congreso Nacional. Reclaman la ubicación de aproximadamente 800 familias sin tierras en el departamento y se manifiestan en contra de la represión policial. Exigen la expropiación de las tierras de una ganadera que impide el desarrollo agrícola de la zona.

Viernes 11

- Docentes marchan hasta el Ministerio de Educación en una movilización nacional convocada por la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP), en reclamo de una educación gratuita y una serie de reivindicaciones laborales, entre ellas, el pago de maestros que trabajan ad honorem y el pago salarial de acuerdo con el escalafón docente, recategorización de honorarios, construcción de aulas y provisión de mobiliarios. La medida cuenta con el apoyo de la FNC.

Cronología

Lunes 21

- Docentes de la Facultad de Ciencias Médicas y el Centro de Estudiantes de la Institución inician paro académico por tiempo indefinido debido a la falta de condiciones adecuadas para el ejercicio de la docencia y la atención a los pacientes.

Jueves 24

- Los médicos del Hospital de Clínicas realizan un paro técnico como consecuencia de la carencia de insumos y drogas. Los médicos y estudiantes marchan hasta el Parlamento en reclamo de una ampliación presupuestaria de por lo menos G 4 mil millones.

GLOSARIO DE SIGLAS

ANDE	Administración Nacional de Electricidad
CESITEP	Central Sindical de Trabajadores del Estado Paraguayo
CGT	Central General de Trabajadores
CNOC	Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
CNT	Central Nacional de Trabajadores
COC	Coordinadora Obrera Campesina
CPT	Confederación Paraguaya de Trabajadores
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
FNC	Federación Nacional Campesina
IBR	Instituto de Bienestar Rural
IPS	Instituto de Previsión Social
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MOPC	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
OTEP	Organización de Trabajadores de la Educación
UNTE	Unión Nacional de Trabajadores del Estado

Perú*

M a y o

Lunes 1

• Aproximadamente 100 mil campesinos y agricultores convocados por el Frente de Defensa de los Agricultores de Apurímac, de las comunidades altas de Abancay paralizan la provincia de Andahuaylas en protesta por el abandono del agro, que representa el 80% de la actividad económica del departamento.

Martes 9

• Integrantes de la Coordinadora Nacional de Jóvenes por la Democracia marchan hasta el Palacio de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones para manifestar su disconformidad por el proceso electoral y demandar el retorno de la democracia.

Miércoles 10

• Campesinos integrantes de la Federación Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco marchan exigiendo solución inmediata al problema de la propiedad de los terrenos de la feria de Huancaro y en reclamo de medidas para el agro.

• Más de 13.500 maestros del departamento de Arequipa acatan un paro de 24 hs. contra el gobierno, la dictadura, el fraude electoral y reclamar respeto a los derechos del magisterio.

Martes 16

• Mujeres de Tacna convocadas por el grupo independiente Mujeres por la Democracia realizan marcha de “ollas vacías” en protesta por las irregularidades de las elecciones del 9 de abril.

Miércoles 17

• Más de 100 pescadores jubilados de Chimbote y anexos marchan hasta Palacio de Gobierno para exigir el pago de las pensiones adeudadas por más de un año.

Jueves 18

• Campesinos y agricultores convocados por la Confederación Nacional Agraria y la Confederación Campesina del Perú en más de siete departamentos inician el Paro Agrario Andino caracterizado por movilizaciones, bloqueo de carreteras, arrojado de toneladas de papa en las principales oficinas gubernamentales y del Ministerio de Agricultura, así como mítines de protesta. Reclaman al gobierno mejores precios para sus productos y medidas de reactivación del agro. En Cusco, más de 5.000 campesinos realizan un paro agrario convocado por la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC). La marcha obliga al gobierno a iniciar negociaciones con la FDCC, a quien reconocieron como interlocutora válida del movimiento campesino.

Lunes 22

• Violenta manifestación contra el gobierno en Arequipa provoca la mayor contramanifestación de la campaña electoral con un saldo de más de 12 heridos y veinte detenidos.

Jueves 25

• Trabajadores, estudiantes, jubilados y organizaciones sociales marchan en todo el país para demandar al gobierno y a la Junta Nacional Electoral (JNE) la postergación de la segunda vuelta participando de la Jornada Cívica Nacional convocada por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP). La Jornada Nacional Antifraude se cumple con paros regionales en Piura, Trujillo, Iquitos, Chiclayo, Huancayo, Arequipa, Puno y Cusco, además de paralizaciones nacionales de campesinos, obreros de la construcción civil, maestros afilia-

dos al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en el Perú (SUTEP), la Central de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CETU) y la Federación de Choferes del Perú (FECHOP). También convoca el Frente Unitario de los Pueblos del Perú (FUPP).

- La JNE ratifica por tres votos contra dos la fecha del 28 de mayo para la segunda vuelta electoral y declara improcedente la abstención presentada por el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, quien debe competir a pesar de haber manifestado su decisión de no concurrir a la elección en esa fecha por falta de garantías.

- Fuerzas policiales reprimen con gases lacrimógenos y golpes una manifestación de trabajadores y estudiantes en Lima y en diversas ciudades del país durante la Jornada Cívica Nacional.

Domingo 28

- Se realizan protestas, marchas y movilizaciones contra el fraude y la ausencia de garantías constitucionales caracterizadas por la violencia en todo el país durante la segunda vuelta electoral.

- Resulta electo Alberto Fujimori del partido PERU 2000 con el 74,33%, mientras que el partido Perú Posible que postulaba a Alberto Toledo obtiene el 25,67% de los votos.

Miércoles 31

- Miles de jóvenes universitarios realizan un mitín en el Parque Universitario y luego ganan las calles del centro de Lima para expresar su rechazo a la continuidad de Fujimori en el poder. Demandan la inmediata libertad de decenas de estudiantes detenidos durante las recientes manifestaciones en el interior del país.

- Ciudadanos y estudiantes universitarios, encabezados por la dirigencia del Frente de Defensa de la Provincia del Santa y el Foro Democrático, se movilizan pacíficamente por las calles de este puerto industrial, para celebrar el repliegue de las tropas de la Marina y efectivos policiales que tomaron el control de la Plaza de Armas. Después de cuatro días de permanecer sitiada, el pueblo recupera el acceso y libre tránsito a la plaza gracias a gestiones de Foro Democrático.

J u n i o

Jueves 1

- Más de 15 mil personas en Chiclayo participan en la movilización que marca el inicio de la resistencia pacífica en esta región del país en protesta por el fraude electoral cometido por el gobierno para perpetuarse en el poder por cinco años más.

- Cientos de estudiantes universitarios de Chimbote toman el campus de la Universidad Nacional del Santa en protesta por la farsa electoral de los comicios y en defensa de la restitución del orden constitucional. La policía irrumpe en el campus violentamente y detiene a 9 universitarios.

Lunes 5

- Profesores, obreros de Construcción Civil y estudiantes universitarios realizan un plantón frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir a esta institución una decisión firme sobre las irregulares elecciones peruanas.

Jueves 8

- Con plantones y movilizaciones en el centro de Lima, diversas organizaciones juveniles exigen la convocatoria de nuevas elecciones. La movilización se efectúa en la ciudad del Cusco, Arequipa, Puno, Huancayo, Huánuco, Pucallpa, Huacho y Chiclayo. En Lima participan estudiantes de diversas universidades e institutos superiores. Los estudiantes son reprimidos por la policía con golpes y bombas lacrimógenas, impidiendo que los manifestantes entren a la Plaza Mayor.

Martes 13

- El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) protesta por las declaraciones que formuló el domingo pasado el arzobispo de Lima, sobre el no reconocimiento de la Iglesia a cualquier otra opción sexual que no sea la masculina o femenina.

Jueves 15

- El Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), que agrupa a diferentes instituciones femeninas, se concentra frente a Palacio de Justicia con el propósito de exigir la nulidad de las elecciones ilegales.

Lunes 19

- Alrededor de 1.500 estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica llegan a la capital y realizan una marcha de protesta hacia la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para exigir a las autoridades educativas la desactivación de la comisión reorganizadora y la adopción de medidas que permitan la institucionalización del centro de estudios superiores.

Jueves 22

- Estudiantes universitarios marchan hasta la sede de la OEA, ubicada en San Isidro, donde solicitaron una audiencia con los miembros de la misión de avanzada para que incluya en la agenda de la misión de alto nivel la realización de nuevas elecciones democráticas sin la participación de Fujimori.

Viernes 23

- Un grupo de estudiantes de la Universidad Católica y la sección peruana de Amnistía Internacional realizan un plantón frente al Palacio de Justicia en contra de la tortura y los malos tratos que afectan a muchos ciudadanos en el país y el mundo.

Sábado 24

- El Frente Cívico de Defensa de Piura y las organizaciones campesinas, gremiales, sindicales y políticas se congregan en esta ciudad y convierten las celebraciones por el Día del Campesino en una jornada de rechazo al régimen de Fujimori por la crisis que afecta al campo durante su mandato. Representantes de organizaciones agrarias de Piura, Castilla, Sullana, Paita, Talara, y el Bajo y Alto Piura se expresan contra las condiciones de miseria y abandono en que se debate la población del sector rural, en una jornada que gana las calles convertida en una gran marcha campesina.

Martes 27

- Cientos de mujeres arequipeñas protagonizan una de las más grandes y organizadas marchas de “ollas vacías” para llamar la atención de la Misión de Alto Nivel de la OEA que llegó ayer a Lima. En la Ciudad Blanca las mujeres salen al frente para defender la democracia y censurar todo tipo de atropellos.

Miércoles 28

- Alrededor de 5 mil personas participan en movilización convocada por el Frente Patriótico de Loreto (FPL) para solicitar a la misión de la OEA que se realicen nuevas elecciones, justas y transparentes.
- Más de un centenar de campesinos afiliados a las Asociaciones de Productores de Algodón de San Lorenzo y de los Valle del Chira y Alto Piura se movilizan y demandan que el programa Pyma incremente los precios del algodón a fin de lograr la capitalización del campo.
- Trabajadores de la unidad minera Uchucchacua, perteneciente a la Compañía Minera Buenaventura, protestan ante la sede de esa empresa para demandar una la solución al pliego de reclamos planteado hace seis meses, exigiendo un incremento diario de 4,90 y mejores condiciones de trabajo.

J u l i o**Martes 4**

- Más de un centenar de pescadores jubilados provenientes de Chimbote protestan frente al local de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador para exigir que les paguen los últimos diez meses de pensión, los beneficios sociales y otros adeudos.

Jueves 6

- Alrededor de 1.000 maestros del SUTEP se movilizan desde el centro de la ciudad de Lima hacia el local de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para denunciar al gobierno por la violación de sus derechos laborales.

- Pobladores del distrito de Samanco, encabezados por dirigentes del Frente de Defensa y Desarrollo, toman por la fuerza el control del desembarcadero artesanal en protesta por que el gobierno central lo ha privatizado, negándoles a los pequeños pescadores el acceso al puerto.

- Ciudadanos de todas las edades forman un cordón humano que rodea el perímetro de la Plaza Mayor de Lima, durante la segunda jornada de la inusual campaña de protesta “Lava la bandera de la mancha de la dictadura”. También en Trujillo, decenas de mujeres del Movimiento por la Resistencia de la Democracia de La Libertad realizan un lavado simbólico para llamar la atención de la ciudadanía frente a los atropellos, la corrupción y el carácter fraudulento del gobierno. En Tacna, jóvenes protagonizan el lavado de banderas en el Paseo Cívico.

Viernes 14

- Decenas de vecinos de distintos distritos de la capital valiéndose de pitos, toques de bocinas, ollas y todo instrumento que produzca sonido, se concentran en el Parque Kennedy de Miraflores para hacer sentir su protesta contra el gobierno de Fujimori.

- Se realiza la protesta cívica “lavado de la bandera” en Lima.

- Más de un centenar de enfermeras de diversos establecimientos de ESSALUD de Lima realizan marchas de protesta y un paro de actividades para exigir a los directivos de esta entidad el aumento de sus sueldos. En Trujillo, el Cuerpo de Enfermeras de ESSALUD de la provincia también paraliza sus labores durante 24 horas, como protesta por los bajos sueldos que perciben.

Miércoles 19

- Maestros de la escuela pública realizan un paro de 24 hs., junto a médicos y enfermeras del sector Salud, demandando un incremento en sus remuneraciones, el reinicio del diálogo con el Estado y el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Los trabajadores de la construcción civil, de Telefónica del Perú y jóvenes de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y de la Coordinadora Estudiantil por la Democracia y los Derechos Humanos, marchan por las principales calles de Lima hasta la Plaza Mayor.

- Trabajadores, estudiantes, agricultores, transportistas, profesores, médicos, enfermeras, personal administrativo, políticos y obreros del sector industrial en Arequipa realizan un paro regional de 24 hs. para exigir la convocatoria a un nuevo proceso electoral en el que se elija al mandatario y parlamentarios para el período 2000-2005.

Jueves 20

- Miles de agricultores arequipeños bloquean diversos tramos de la carretera Panamericana Sur en protesta por el incumplimiento de las promesas del gobierno de Fujimori y para exigir la reactivación del agro y la ganadería.

Miércoles 26

- Cientos de peruanos -desde Chimbote, Lambayeque, Trujillo, Huánuco, Ica, Piura, Cajamarca y Amazonas- marchan a Lima pese al acoso policial, para participar de la Marcha de

los Cuatro Suyos, jornada democrática que se inicia hoy y se prolongará hasta el 28 de julio. Integran estas delegaciones universitarios, docentes, campesinos, dirigentes de organizaciones populares, políticos y del Frente de Defensa de la Democracia.

- Se inicia un paro regional de 48 horas decretado por el FPL. Así mismo, otras organizaciones populares, sindicales y políticas anuncian su adhesión a la medida de fuerza convocada por la Asamblea Regional del Cusco en rechazo a la reelección de Fujimori.

- Miles de mujeres, encabezadas por Eliane Karp, esposa del líder de Perú Posible, Alejandro Toledo marchan por la avenida Arequipa “por la democracia”. Se concentran más de 50 mil personas.

Viernes 28

- Efectivos de la policía reprimen con violencia marchas pacíficas contra el tercer mandato de Fujimori dejando un saldo de seis muertos, seis desaparecidos, 79 heridos y 157 detenidos; lo mismo sucede en manifestaciones llevadas a cabo en Tacna, Cusco, Chiclayo y Piura, entre otras ciudades.

A g o s t o

Jueves 3

- Un grupo de mujeres del MAM realiza plantón y expone un pasacalle artístico frente al Palacio de Justicia para exigir al gobierno una investigación exhaustiva sobre los hechos violentos producidos en la Marcha del 28 de julio, que dejó un saldo de 6 muertos y centenares de heridos.

Domingo 6

- La población de Arequipa protesta pacíficamente para reafirmar su compromiso de lucha por la democracia.

Martes 8

- Alrededor de 500 trabajadores que prestaban servicios a Sedapal realizan un plantón frente a las instalaciones de la planta de La Atarjea en Santa Anita, exigiendo la reincorporación a sus puestos de labores y el pago de sus remuneraciones adeudadas.

Miércoles 9

- La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) presenta 108 mil firmas para impedir la privatización de puertos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Jueves 10

- El Comité Cívico de La Libertad impulsa la resistencia cívica y democrática del pueblo trujillano con el tradicional “Lavado de la Bandera” que se realiza para expresar la indignación y el rechazo a la corrupción en las altas esferas del poder político.

- Jóvenes de la FEP realizan plantón frente al Ministerio de la Mujer para reclamar la inmediata liberación de los más de 150 detenidos y procesados, y la aparición de cuatro estudiantes desaparecidos en los violentos sucesos del 28 de julio.

Viernes 11

- Un grupo de Mujeres por la Democracia de Arequipa se movilizan por las calles céntricas en defensa del derecho a manifestarse públicamente y en rechazo al proyecto de ley de la congressista Carmen Lozada de Gamboa que pretende cortar el derecho de protesta contra la dictadura.

Domingo 13

- Ciudadanos de todas las edades -especialmente jóvenes- de la ciudad de Tacna, salen a las calles y se concentran en el Arco de Tacna para participar de un “Lavado de la Bandera”.

Jueves 17

- Miles de jóvenes universitarios, agrupados en el movimiento Juventud Popular, marchan por las calles de Lima exigiendo la libertad de sus compañeros detenidos el 28 de julio pasado durante los incidentes producidos en la Marcha de los 4 Suyos.
- Cientos de jóvenes de Somos Perú, de la Red Joven por la Democracia y del Movimiento Amplio de Mujeres se congregan frente a las puertas de Palacio de Justicia, exigiendo la libertad de los detenidos y el respeto a la independencia de poderes.

Lunes 21

- Cientos de agricultores y nativos, convocados por la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD) y respaldados por organizaciones regionales como la Federación Nativa del Departamento de Madre de Dios (FENAMAD), entre otras, realizan un paro regional de 72 horas. El principal tema de la Plataforma de Lucha es la aprobación de un presupuesto extraordinario de 200 millones de soles para esta región.
- La población de la capital de la provincia de Azángaro, convocados por el Comité de Lucha de Azángaro, realiza un paro general en defensa de 4 profesores que han sido denunciados falsamente como “terroristas” por el alcalde de esa ciudad.
- Decenas de jubilados de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE) paralizan por una hora la avenida Abancay para reclamar al gobierno que aumente sus pensiones al nivel de la remuneración mínima vital.
- Los pobladores de Puerto Maldonado, con banderas y pancartas, bloquean una de las vías de acceso a la ciudad durante la realización del paro de 72 horas que es acatado en forma masiva.

Miércoles 23

- Cerca de medio centenar de heridos y siete detenidos es el resultado de los violentos enfrentamientos ocurridos entre pobladores de Puerto Maldonado y contingentes policiales traídos desde Lima, al cumplirse el tercer día del Paro Departamental convocado por la FADEMAD.
- Todas las comunidades y centros poblados de la provincia de Tahuamanú acatan el paro de 72 horas convocado por la FADEMAD, en protesta por el abandono del gobierno.

GLOSARIO DE SIGLAS

ANR	Asamblea Nacional de Rectores
CENAJUPE	Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú
CGTP	Central General de Trabajadores del Perú
ESSALUD	Seguro Social de Salud
FDCC	Federación Departamental de Campesinos del Cusco
FECHOP	Federación de Choferes del Perú
FADEMAD	Federación Agraria Departamental de Madre de Dios
FENAMAD	Federación Nativa del Departamento de Madre de Dios
FENTASE	Federación Nacional de Trabajadores Administrativos de la Educación
FENTENAPU	Federación Nacional de Trabajadores Portuarios
FEP	Federación de Estudiantes del Perú
FPL	Frente Patriótico de Loreto
FUPP	Frente Unitario de los Pueblos del Perú
JNE	Junta Nacional Electoral
MAM	Movimiento Amplio de Mujeres
MHOL	Movimiento Homosexual de Lima
OEA	Organización de Estados Americanos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONPE	Oficina Nacional de Procesos Electorales
SEDAPAL	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Lima
SUTEP	Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en el Perú

** Realizado por: Fabiana Werthein y María Chaves, colaboradoras del OSAL.
Fuentes: diario La República.*

Puerto Rico*

M a y o

Jueves 4

- Los dos centenares de desobedientes civiles que desde el 20 de abril de 1999 acampaban en la zona de la isla de Vieques que la Marina de Guerra de Estados Unidos ocupa para realizar maniobras militares (práctica que se remonta a 1941) son desalojados y detenidos durante varias horas por las autoridades federales de Puerto Rico. Luego, el Departamento de Justicia entrega el control de las tierras a las fuerzas navales estadounidenses.

Viernes 5

- Sindicatos, estudiantes, religiosos, empleados federales y del gobierno estatal paralizan sus actividades y realizan manifestaciones en todo Puerto Rico en contra del operativo de desalojo de desobedientes civiles en Vieques.

Lunes 8

- La armada norteamericana reanuda sus entrenamientos en el campo de tiro de Vieques. Las prácticas de tiro se habían suspendido en abril del año pasado, luego de la muerte de un civil viequense durante una jornada de ejercicios militares.
- Miembros del Movimiento Hostosiano del Sur y de la Coordinadora de Profesores Universitarios Pro Vieques protestan en Ponce contra la reanudación de los bombardeos.

Miércoles 10

- El presidente y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Rubén Berríos, y el asesor ecológico del PIP, Jorge Fernández Ríos, son detenidos y dejados en libertad sin fianza, luego de regresar al área restringida de la Marina en Vieques. Tan pronto se hace público que estos han sido arrestados, cientos de militantes organizan una manifestación frente a la Corte Federal, para expresar su apoyo a los independentistas.

Jueves 11

- Militantes de la Organización Socialista Internacional (OSI) protestan frente al Centro de Reclutamiento del Army en San Juan para demandar la salida del país de la Marina estadounidense.
- Una veintena de miembros del Nuevo Movimiento Independentista (NMI) se manifiesta frente a los portones de la Base Naval de Toa Baja, en protesta por el reinicio de las prácticas militares en Vieques.

Viernes 12

- Alrededor de ochenta integrantes del NMI y de algunos sindicatos, junto con los candidatos a la alcaldía por el Partido Popular Democrático (PPD) y por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) marchan en Aguadilla para oponerse a la presencia de la Marina en Vieques.

Domingo 14

- Más de cincuenta personas que intentaban llegar al campo de tiro militar en Vieques son arrestadas; una veintena es liberada sin fianza, por ser la primera vez que cometían infracción, y el resto es encarcelada.

Miércoles 17

- La Unión Independiente Auténtica (UIA) para por 24 hs en todas las dependencias de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se manifiesta frente a sus oficinas en San Juan, Carolina y Trujillo Alto, debido a la suspensión del diálogo por el convenio co-

lectivo. En respaldo a la medida, los miembros de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA anuncian que dejarán de trabajar tiempo extra y de desempeñar las funciones que no estén estipuladas en el contrato de trabajo.

- Miércoles 24**
- Los empleados del Hospital de Auxilio Mutuo paran por 24 hs en protesta por la inexistencia de un convenio colectivo desde hace dos años.
 - Empleados de la Corporación Azucarera (CA) en la central Mercedita de Ponce paralizan sus actividades y protestan frente a las oficinas locales de la empresa para reclamar que se aligere la negociación de su convenio colectivo.

J u n i o

- Jueves 1**
- Veintiseis personas ingresan a la zona restringida de Vieques, son detenidas y, en su mayoría, liberadas horas más tarde.

- Domingo 4**
- La Coalición de Orgullo Arcoiris (COA) que agrupa a organizaciones y activistas de la Comunidad Gay, Lésbica, Bisexual, de Transgéneros y Transexuales (CGLBTT), realiza la Décima Marcha de Orgullo Homosexual, Lésbico, Bisexual, Transgénero y Transexual, y reclama la revisión del Artículo 103° del Código Penal que criminaliza las relaciones consentidas entre las personas del mismo sexo.
 - Alrededor de diez personas penetran a los terrenos de Vieques restringidos por la Marina.

140

- Sábado 17**
- Más de cincuenta personas ingresan al área restringida de Vieques y son arrestadas por las autoridades federales.

- Lunes 19**
- El grupo de desobedientes civiles arrestado dos días atrás en los campos de tiro de Vieques queda en libertad bajo fianza.

- Jueves 22**
- Alrededor de cincuenta personas entran al campo restringido de la Marina y horas más tarde son detenidas.

- Sábado 24**
- Aproximadamente cien personas marchan en San Juan para expresar su oposición al reinicio de los bombardeos en Vieques y dar su apoyo a los desobedientes civiles detenidos.

- Lunes 26**
- Más de cuarenta civiles se internan en el área de tiro de Vieques y son detenidos horas después; un grupo permanece arrestado por no dar su identificación.

- Martes 27**
- Cerca de ciento treinta miembros del PIP, entre los que se encontraban su vicepresidente y veintiocho candidatos a alcaldías, ingresan a la zona restringida de Vieques mientras la Marina realiza ejercicios de guerra.
 - La Marina de Guerra interrumpe los ejercicios militares que estaban planificados hasta el viernes 29.

Viernes 30

- Más de cien integrantes del PIP, entre los que se encuentran el vicepresidente del partido y su candidato a la alcaldía de San Juan, son arrestados y llevados al Centro de Detención de Guaynabo, conocido como la Cárcel Federal, al cumplirse la fecha límite para pagar las fianzas correspondientes al delito de entrada ilegal a terrenos de la Marina en Vieques. Al conocerse la noticia, más de un centenar de independentistas se congregan frente a la cárcel con el propósito de mantenerse allí hasta que los miembros del PIP sean liberados.

J u l i o

Martes 4

- Más de ocho mil personas marchan en Ponce para dar su apoyo a la lucha por la salida de la Marina de Vieques.
- El PIP organiza una manifestación en las inmediaciones de la cárcel federal para dar su apoyo a los militantes independentistas detenidos.
- Dieciseis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico ingresan en terrenos restringidos por la Marina estadounidense en Vieques, son detenidos y liberados horas más tarde.

Miércoles 5

- Alrededor de doscientos empleados municipales de Río Grande se manifiestan frente a la Asamblea Municipal, para reclamar aumentos salariales y la reclasificación de sus plazas.

Lunes 10

- Un centenar de empleados federales realiza una manifestación en la Isla de Vieques pidiendo el cese de los bombardeos.
- Veintisiete miembros del PIP y dos integrantes del grupo Jinetes por la Paz son encarcelados al cumplirse la fecha límite para pagar la fianza por el delito de entrada ilegal a terrenos de la Marina.

Jueves 20

- Religiosos de diferentes denominaciones litúrgicas realizan un acto ecuménico frente a la cárcel de Guaynabo como muestra de solidaridad con los encarcelados por defender la paz en Vieques.

Viernes 21

- Veinticuatro miembros del PIP son enjuiciados por el delito de entrada ilegal a terrenos de la Marina y condenados al tiempo de cárcel desde que fueron arrestados.

Lunes 24

- Empleados del Hospital de Auxilio Mutuo paran por 24 hs. y se manifiestan frente a la institución por aumento salarial y un convenio colectivo.
- Dieciocho miembros del PIP son liberados tras ser encontrados culpables por el delito de entrada ilegal a terrenos de la Marina y ser sentenciados al tiempo de cárcel que llevaban en prisión.

Martes 25

- Diez independentistas son sentenciados a libertad supervisada por un año, tras ser encontrados culpables por el delito de entrada ilegal a los terrenos viequeses restringidos por la Marina.

Domingo 30

- Alrededor de quinientas personas marchan en Vieques en repudio a la presencia de la Marina de Guerra en esta isla. En la manifestación participan la Organización Puertorriqueña de Mujeres Trabajadoras, líderes de distintas iglesias y representantes del PPD y del PIP.

Cronología

Lunes 31

- Diez integrantes del PIP quedan en libertad tras ser sentenciados a 12 meses en probatoria (a efectos de la sentencia no cuenta el tiempo que llevan presos) por el delito de entrada ilegal a terrenos de la Marina en Vieques.
- Los empleados del Hotel Hyatt Regency Cerromar comienzan una huelga por tiempo indefinido para exigir a la gerencia que iguale los salarios entre los trabajadores que realizan similares tareas.

A g o s t o

Jueves 3

- Dos legisladores del PIP, el candidato a alcalde de Trujillo del mismo partido y un reverendo presbiteriano de Mayagüez ingresan a la zona prohibida de Vieques, son detenidos y quedan arrestados por negarse a pagar la fianza que corresponde al delito de entrada ilegal a terrenos restringidos por la Marina.
- La Marina de Guerra reanuda sus ejercicios de entrenamientos en Vieques.

Viernes 4

- Un grupo de empleados de la Hermandad de Empleados de Oficina (HEO) de la Autoridad de Puertos realiza una protesta frente al Centro de Bellas Artes de Aguada, donde se encuentra el gobernador Pedro Roselló, para oponerse a los planes del Gobierno de privatizar el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla.

Domingo 6

- Miles de personas marchan hasta el Fuerte Buchanan en Guaynabo para reclamar el cese inmediato de las prácticas de la Marina estadounidense en Vieques y para manifestar su apoyo a los militantes del PIP encarcelados por ingresar al campo de tiro.

Lunes 7

- Los empleados de la Río Grande Community Health Center realizan un paro por tiempo indefinido para reclamar el pago de sus salarios bimensuales, atrasados desde hace más de un mes.
- Una treintena de mujeres ingresan a la zona restringida de la Marina en Vieques, son detenidas horas después y quedan en libertad bajo fianza.

Martes 8

- Un grupo de once universitarios penetra en la zona de tiro en Vieques, es arrestado y queda en libertad horas más tarde.

Domingo 13

- Centenares de personas forman un cordón humano alrededor de los portones del área de la instalación militar Campamento García para manifestar su oposición a las prácticas bélicas de la Marina en Vieques.

Martes 15

- Más de cien familias invaden un campo privado de Ponce y afirman que permanecerán allí hasta ser reconocidos como los nuevos dueños del campo.

Lunes 21

- Los miembros de la Asociación de Comerciantes Profesionales y Residentes de Caguas (que agrupa a unos quinientos comerciantes) cierran las puertas de sus negocios para protestar por el incumplimiento del Alcalde de la ciudad de evitarles pérdidas económicas en el proceso de remodelación de calles y aceras.
- Los últimos seis militantes del PIP que se encontraban presos por no acceder a pagar fianza

za son liberados luego de ser encontrados culpables del delito de entrada ilegal a terrenos de la Marina y condenados a doce meses en probatoria.

Jueves 24

- La Marina de Guerra estadounidense culmina sus ejercicios bélicos en Vieques.

Viernes 25

- Un grupo de trabajadores de la Asociación de Empleados del ELA (AEELA), asociados a la sindical United Auto Workers, protestan contra la suspensión de dos empleados y el despido de otros siete, argumentando que la administración de la AEELA está fabricando casos contra los empleados que están sindicalizados.

Lunes 28

- Nueve personas penetran en el campo de tiro de la Marina en Vieques y quedan libres sin necesidad de pagar la fianza que les fue fijada.

Martes 29

- Decenas de profesores y estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez realizan una protesta frente a la rectoría de la institución para denunciar que no aceptarán el nombramiento del Dr. Juan Hernández Cruz como director del Departamento de Ciencias Sociales, a raíz de que no fue evaluado para obtener la permanencia, y para exigir la intervención en el Recinto del Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

GLOSARIO DE SIGLAS

AAA	Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
AEELA	Asociación de Empleados del ELA
CA	Corporación Azucarera
CGLBTT	Comunidad Gay, Lésbica, Bisexual, Transexual y Transgénero
COA	Coalición de Orgullo Arcoiris
ELA	Estado Libre Asociado de Puerto Rico
HEO	Hermanidad de Empleados de Oficina
NMI	Nuevo Movimiento Independentista
OSI	Organización Socialista Internacional
PIP	Partido Independentista Puertorriqueño
PPD	Partido Popular Democrático
UIA	Unión Independiente Auténtica

** Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diario electrónico El Nuevo Día Interactivo.*

República Dominicana*

Mayo

- Martes 16**
- Se realizan elecciones presidenciales en las que resulta electo el candidato Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), obteniendo el 49,87% de los votos. Le sigue el Partido de Liberación Dominicana (PLD), que reúne el 24,94% de los sufragios, mientras que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), obtiene el 24,60%.

Junio

- Miércoles 28**
- La Asociación Médica Dominicana (AMD), representantes sindicales, de organizaciones populares y de transporte, encabezan una marcha en Santo Domingo en la que participan cientos de manifestantes, en rechazo a la aprobación del nuevo proyecto de Ley de Seguridad Social que quiere implementar el Gobierno, y en reclamo de su modificación. Este proyecto privatizaría la seguridad social.

Julio

- Lunes 17**
- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) toman el campus de esa universidad en protesta por el aumento de los créditos del curso de verano. La policía realiza un cerco alrededor del campus, impidiendo el acceso de distintos gremialistas, legisladores, profesionales, profesores, representantes de la Iglesia y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Comité de los Derechos Humanos, que intentan intervenir en el conflicto movilizándose hacia el campus.

- Miércoles 19**
- Autoridades de la UASD, profesores y empleados se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo y buscar una salida al conflicto que se desarrolla en esa institución.

- Viernes 28**
- Campesinos de las comunidades de Higüey bloquean calles y queman neumáticos en esa provincia, en rechazo al desalojo de cerca de 400 familias que intentan llevar a cabo las autoridades de la región, y a los maltratos y abusos que reciben de la policía. Se producen enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes.

- Lunes 31**
- Alrededor de 100 damnificados por el huracán Georges, montan un piquete con pancartas, próximo a la residencia particular del Presidente Leonel Fernández, reclamando que les adjudiquen algunas viviendas de las que están siendo construidas por el Gobierno en el sector El Tamarindo, al Este de la Capital. La policía reprime la medida.

- La UASD reinicia las clases sin que se haya alcanzado acuerdo alguno.

Agosto

- Martes 1**
- Comerciantes, personas representativas de grupos comunitarios y usuarios de servicios públicos, obstruyen calles y queman neumáticos en protesta por los continuos apagones que se vienen desarrollando hace días, y por el aumento de las tarifas del servicio, en municipios de las regiones Norte, Sur y Este.

En Puerto Plata, región del Norte, las protestas se desarrollan en cerca de ocho barrios, entre ellos Padre Las Casas, Avenida Colón, Sánchez Dubó, 27 de Febrero, Manolo Tavárez Justo, Gregorio Luperón y Padre Granero. En el sur, los manifestantes protestan en los barrios de San Juan de Managua, Elías Piña, Las Matas del Farfán y El Cercado. Asimismo, en la región del Este, se realizan protestas en El Seibo, La Romana y San Pedro de Macorís.

Lunes 7

• Cientos de usuarios de servicios públicos realizan manifestaciones obstruyendo el tránsito y quemando llantas, en Mao, San Cristóbal, Laguna Salada, Moca y Puerto Plata, en protesta por la deficiencia en la prestación de servicios públicos, especialmente por la falta de agua potable y energía eléctrica. En el sector de Pueblo Nuevo y el Municipio de Laguna Salada, en la provincia de Valverde, región Noroeste, y de Madre Vieja Norte, en la provincia de San Cristóbal, región Sur, reclaman que el servicio de agua potable sea normalizado. La policía interviene produciéndose incidentes que dejan un saldo de más de cien detenidos y algunos heridos.

Viernes 18

• La Federación Nacional de Transportistas Dominicanos (FENATRADO) y el Sindicato de camioneros de Haina occidental, bloquean la entrada al muelle de Haina, en Santo Domingo, en protesta por la utilización de vehículos no afiliados al sindicato por parte de los miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). La policía interviene produciéndose el levantamiento del bloqueo.

GLOSARIO DE SIGLAS

AMD	Asociación Médica de Dominicana
CONEP	Consejo Nacional de la Empresa Privada
FENATRADO	Federación Nacional de Transportistas Dominicanos
UASD	Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

** Realizado por: María Chaves y Florencia Ayala, colaboradoras del OSAL.
Fuentes: diarios El Listín y Última Hora interactiva.*

Uruguay*

M a y o

Lunes 1

- El PIT-CNT (Protesta Intersindical de los Trabajadores – Central Nacional de Trabajadores) conmemora el Día de los Trabajadores con un acto en la plaza Mártires de Chicago de Montevideo. Se pronuncia en contra del proyecto de ley de urgencia que permite a algunas empresas públicas asociarse con capitales privados para conceder servicios y convoca a un paro general de 24 hs. para el 8 de junio contra la política económica del gobierno.

Martes 2

- Trabajadores de la salud realizan una concentración frente a las puertas de la cooperativa médica Israelita del Uruguay (MIDU) en reclamo de soluciones a la crisis del sistema mutual. A su vez, empleados de esta institución ocupan el edificio por 24 hs. para conseguir la reactivación económica de esta mutualista.

Jueves 11

- Personal de la cooperativa médica Cima marcha hasta el Edificio Libertad para protestar por los ciento veinte trabajadores enviados a seguro de paro sin retorno y los treinta que fueron despedidos, exigiendo que el Poder Ejecutivo impulse un diálogo entre la patronal y los trabajadores.

Viernes 12

- La Federación Uruguaya de Salud (FUS) – que nuclea a los trabajadores del sector privado – y la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) paran por 24 hrs. y realizan una marcha hasta el Ministerio de Salud Pública (MSP), en reclamo de soluciones a la crisis del sistema mutual.

Domingo 14

- Se realizan los comicios municipales, en los que el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) vence por amplia mayoría en Montevideo, consolidándose como la fuerza más votada a nivel nacional, con el 38,7% de los votos; el Partido Colorado gana en Canelones, Artigas, Salto, Río Negro y Rivera, ubicándose en el segundo lugar, con el 31%; y el Partido Nacional triunfa en Tacuarembó, Durazno, Flores, San José, Treinta y Tres, Colonia, Lavalleja, Cerro Largo, Rocha, Soriano, Florida, Paysandú y Maldonado, quedando tercero, con el 27,3%.

Viernes 19

- Los funcionarios de Cemeco ocupan las instalaciones de esta cooperativa médica para oponerse al decreto del gobierno que clausura la institución.

Sábado 20

- Alrededor de setenta mil personas marchan en Montevideo para reclamar esclarecimiento y justicia por los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985).

Martes 23

- Los sindicatos de la salud realizan un paro general para que el MSP y el gobierno actúen para evitar el cierre de más instituciones médicas.
- Los trabajadores de la Federación Uruguaya de Salud (FUS) realizan una marcha que recorre la sede del MSP y las mutualistas Uruguay España y Cima, y proclaman un paro nacional para el 30 de mayo.

Martes 30

- La FUS para a nivel nacional con ocupación de centros médicos por 24 hs. y realiza movilizaciones frente a los distintos centros de atención, reclamando que el Ejecutivo aplique medidas para solucionar la deteriorada situación el sector salud.
- Los trabajadores municipales de recolección de residuos comienzan un paro de 24 hs. en rechazo a un decreto de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) que ordena que la tripulación de los camiones esté integrada con dos peones y no con tres como hasta el momento.

J u n i o**Jueves 1**

- ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales), gremio que nuclea a los recolectores de basura, extiende el paro por tiempo indefinido hasta que la IMM permita que la tripulación de los camiones esté integrada por tres peones. La comuna responde contratando camiones y personal privado para contener la acumulación de basura existente en la ciudad.
- Los sindicatos de la construcción se movilizan frente al Palacio Legislativo en demanda de fuentes de trabajo.

Viernes 2

- La FUS realiza una marcha de antorchas que recorre las mutualistas Cemeco, Uruguay-España y Cima.
- Alrededor de cien recolectores de residuos bloquean el acceso principal a la Usina N° 5 con el fin de impedir el ingreso de los camiones privados que, contratados por la IMM, están cubriendo la recolección de basura domiciliaria hasta que la huelga del sector finalice.
- La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) se declara en conflicto y reclama al gobierno que en el próximo presupuesto establezca un porcentaje para la educación no menor al 6% del PBI.

Sábado 3

- Los trabajadores del servicio de limpieza de la IMM deben desbloquear la entrada a la Usina N° 5 para evitar represiones policiales e instalan pancartas frente al predio para difundir sus reivindicaciones laborales.

Lunes 5

- Los trabajadores de Cima instalan un campamento de protesta frente a la institución.

Jueves 8

- El PIT-CNT lleva a cabo el primer paro nacional contra el gobierno de Jorge Batlle para rechazar la política económica, reclamar fuentes laborales y aumentos de sueldo y expresar su desacuerdo con la formación de la Comisión para la Paz ideada por el Presidente para solucionar el tema de los desaparecidos durante la dictadura militar. Durante la jornada se efectúan concentraciones en Montevideo y el interior.
- La IMM y ADEOM alcanzan un principio de acuerdo en el que la comuna deja sin efecto el decreto que disponía que la tripulación de los camiones recolectores estuviera integrada sólo por dos peones, y el gremio desiste de oponerse a que los funcionarios puedan trabajar en ese régimen.

Viernes 9

- Los trabajadores del sector limpieza de la IMM aprueban el acuerdo entre el PIT-CNT y las autoridades comunales y ponen fin al paro que mantuvieron durante diez días.
- Mediadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), trabajadores y empresarios de la mutualista Cima alcanzan un principio de acuerdo para instalar una mesa de ne-

gociación el lunes 12, a raíz de que la empresa deja sin efecto los ciento cincuenta despidos y, en consecuencia, los empleados de Cima aceptan levantar las medidas de lucha.

Jueves 15

- Los trabajadores de la salud pública, de la privada y del gremio del Hospital de Clínicas pararán a nivel nacional reclamando políticas de salud de Estado que solucionen de fondo la crisis del sistema y que asignen presupuesto para el área pública. Asu vez, junto con delegaciones que llegan desde el interior del país, marchan hasta el ministerio de Salud Pública en Montevideo.

Lunes 26

- La Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga (APVC) adelanta que en pocos días dará a conocer la fecha de comienzo de un paro nacional por tiempo indeterminado. La central reclama la unificación de todas las cargas fiscales fijas del sector en un tributo único y variable, incorporado al precio del gasoil, con el fin de eliminar la competencia desleal en el mercado interno de las empresas que no pagan sus aportes y mejorar las condiciones de competitividad con el exterior.

Julio

Lunes 3

- La Mesa Intergremial del Transporte deja en suspenso el anunciado paro nacional, luego de que el presidente Batlle les comunica que tratará de incluir una parte de la carga fiscal del sector en el precio del gasoil.

Martes 4

- La FUS para por 24 hs. en reclamo de soluciones a la crisis en el sistema de salud y anuncia movilizaciones para el 13 y 21 de julio, con concentraciones y paro parcial de actividades.

Jueves 13

- La FUS para de 9 a 11 hs. y realiza concentraciones zonales en todo el país, exigiendo al gobierno soluciones de fondo para la crisis del sistema mutual.
- ADEOM realiza una manifestación durante la asunción del jefe comunal de Montevideo, Mariano Arana, en oposición a la supresión del sábado como día laboral y al recorte de horas extra.

Viernes 14

- El ministro de salud presenta un documento para frenar la crisis del sistema mutualista, en el que propone la realización de auditorías económicas y financieras en todas las instituciones privadas, en base a las cuales cada una deberá realizar un plan de reestructura que, de ser aceptado, dará derecho a cada centro a recibir beneficios.

Sábado 15

- Algunos gremios y las instituciones privadas de salud – entre los que se encuentran el IAMC, la Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación de Mutualistas del Interior (FEMI), entre otros - respaldan la decisión del MSP de asumir el rol de contralor de las políticas de salud y manifiestan su conformidad con las medidas presentadas por el ministro de salud para el fortalecimiento del sector mutual.

Viernes 21

- El Consejo Central de la FUS rechaza el documento de propuestas para frenar la crisis del sistema mutual presentado por el MPS. Afirman que el gobierno no brindan soluciones de fondo ni tampoco impulsa medidas que eviten nuevos cierres de cooperativas médicas.

Martes 25

- Se reúne por primera vez el grupo derivado del documento del MSP que tiene por función instrumentar cambios en el sistema mutual. A la reunión asisten representantes del MTSS,

del ministerio de Economía y Finanzas, de Salud Pública, el IAMC, la UMU, el FEMI, el SMU, la FUS y de la Sociedad anestésico quirúrgica.

Miércoles 26 • Trabajadores de Cima llevan a cabo un paro de 24 hs. en reclamo de una solución definitiva a su situación laboral.

• El Ministerio del Interior ordena el desalojo de la carpa instalada por la Asociación de funcionarios de Cima en la explanada de esa mutualista.

Viernes 28 • Más de mil quinientos habitantes de Empalme Olmos, en Canelones, marchan exigiendo soluciones para la fábrica de cerámica Metzen & Sena, principal fuente de trabajo del pueblo. En esta empresa, en menos de un año fueron despedidos novecientos funcionarios y ciento setenta enviados a seguro de paro.

Lunes 31 • La Asociación de Funcionarios del Casmu para por 24 hs. para oponerse a algunos de los puntos de un plan de reducción de gastos propuesto por el Centro para evitar su cierre.

• Los funcionarios nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) detienen sus tareas desde las 12 hs. en rechazo a la resolución del Banco de Previsión Social (BPS) de pagar todas las pasividades fuera de los locales de la institución, a la vez que entregan cien mil firmas al presidente del establecimiento reclamando que sea rectificada la decisión. Los trabajadores consideran que los locales en donde en el futuro se realizarán todos los pagos de pasividades no son aptos para tal fin. El sindicato cree, además, que esto es parte de un proceso de privatización del BPS.

A g o s t o

149

Miércoles 9 • La Comisión para la Paz, que recabará información sobre el paradero de uruguayos desaparecidos durante los gobiernos militares de la región, queda oficializada por el presidente Batlle. El grupo estará integrado por el arzobispo de Montevideo, representantes del Gobierno, del EP, de los familiares de desaparecidos, el presidente del PIT-CNT y el ex vicepresidente del Codicen, José C. William.

Martes 15 • Los docentes de la enseñanza pública y privada – agrupados en la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo (AFUTU), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP) – realizan un paro nacional de 24hs con movilización, en reclamo, entre otros puntos, de presupuesto justo para la educación pública y aumento sustancial e inmediato del salario básico.

• Las empresas transportistas de cargas resuelven llevar adelante un paro por 72 hs. que anunciarán con un plazo no mayor a las 12 hs., ante la falta de respuestas gubernamentales a sus reclamos de trasladar la mayor parte de la carga fiscal del sector al precio del gasoil.

Sábado 19 • La intersectorial de Bella Unión realiza una caravana de vehículos de aproximadamente 5 km para reclamarle al Gobierno la protección de la agroindustria azucarera; la regulación de impuestos en las áreas productiva, industrial y comercial; y la regulación de las importaciones de hortalizas y protección de los productos uruguayos, entre otros puntos.

Cronología

Martes 22

- Las gremiales del transporte de carga levantan la medida de paro de 72 hs. prevista desde la semana anterior, luego de acordar con el gobierno un compromiso por el cual éste aplicará medidas que evitarán la competencia desleal en el mercado interno y mejorará las condiciones de competitividad de las empresas transportistas con el exterior.

Jueves 24

- Varios centenares de integrantes del PIT-CNT y de grupos de izquierda y derechos humanos, marchan hasta las inmediaciones del hospital Filtro para reclamar por el esclarecimiento de la muerte del joven Fernando Morroni, ocurrida seis años atrás durante los episodios de violencia derivados de la resistencia a la extradición de cuatro ciudadanos vascos acusados de pertenecer a ETA (organización terrorista vasca).

Martes 29

- Alumnos del Liceo Zorrilla ocupan la instalación en demanda de un mejor presupuesto para enseñanza y para apoyar el proyecto consultivo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES).

Jueves 31

- Los pobladores de Yong realizan una marcha de tractores para reclamar medidas proteccionistas para la producción nacional.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADEOM	Asociación de Empleados y Obreros Municipales
ADES	Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
AFUTU	Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo
APVC	Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga
ATSS	Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social
BPS	Banco de Previsión Social
EP-FA	Encuentro Progresista-Frente Amplio
FEMI	Federación de Mutualistas del Interior
FENAPES	Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria
FFSP	Federación de Funcionarios de Salud Pública
FUM	Federación Uruguaya de Magisterio
FUS	Federación Uruguaya de Salud
IMM	Intendencia Municipal de Montevideo
MIDU	Mutualista Israelita del Uruguay
MSP	Ministerio de Salud Pública
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
PIT-CNT	Propuesta Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores
SINTEP	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada
SMU	Sindicato Médico del Uruguay
UMU	Unión de Mutualidad del Uruguay

** Realizado por: Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios El País y El Observador.*

Venezuela*

M a y o

Lunes 1

- La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) realiza una marcha en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en Caracas. El secretario general de la entidad criticó al presidente, Hugo Chávez, por haberse olvidado de los trabajadores del sector privado, de los rurales, domésticos y de los que laboraban en la administración pública descentralizada al excluirlos del incremento salarial del 20 por ciento.

Jueves 4

- Integrantes del Movimiento Quinta República ocupan tres terrenos y una finca del municipio de Baralt, en el estado de Zulia. La acción motivó el accionar policial que desalojó y detuvo a unas 300 familias ocupantes.

Martes 9

- Más de 10 mil trabajadores de los consorcios petroleros Sincor y Cerro Negro, convocados por la Federación Venezolana de Trabajadores Petroleros, paralizan sus actividades en demanda de una revisión definitiva de sus actas de convenio de trabajo y de un aumento salarial de 5.000 bolívares diarios.

Viernes 12

- En Caracas, empleados, obreros, profesionales y técnicos del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación toman la sede de la institución a fin de exigir a las autoridades el pago inmediato del 20 por ciento del aumento decretado por el presidente, del 10 por ciento de los ahorros acumulados desde 1998 y la entrega de los cesta tickets y el bono comedor además de estabilidad laboral.

- Un grupo de 50 médicos pertenecientes a la Federación Médica Venezolana (FMV) corta la autopista del este en reclamo por el vencimiento del contrato colectivo y por un incremento salarial del 108 por ciento.

- Aproximadamente 3.000 estudiantes y profesores del Colegio Universitario de Caracas marchan hasta Chacao para pedir al presidente que solucione los problemas educativos, que desde hace meses impiden el normal funcionamiento de la institución. Por otro lado, exigen al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes la destitución de la junta interventora y denuncian la falta de coordinación en la organización de los horarios, el mal estado de las tres sedes y la eliminación del triple turno para los bachilleres entrantes.

Jueves 18

- Un centenar de maestros, liderados por el Sindicato de Trabajadores de Vargas, corta la avenida Soublette, en protesta contra el gobernador Alfredo Laya a quien responsabilizan de demorar la firma de la nueva convención colectiva, de que haya alrededor de 250 docentes suplentes que no cobraron su dinero y de que no se les paguen sus primas.

- Los trabajadores de las gerencias de administración y mantenimiento del metro y del metrobús de la empresa Cametro, dirigidos por el Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, realizan un paro en protesta por el incumplimiento de algunas cláusulas económicas del contrato colectivo y porque desde 1991 los cálculos de los bonos vacacionales y las prestaciones vienen siendo erróneos.

Jueves 25

- El Consejo Nacional Electoral decide suspender las elecciones generales previstas para el 28 de mayo por estar incapacitado para garantizar su transparencia.

Martes 30

- Los trabajadores de la Gobernación del Distrito Federal (GDF), acompañados del Sindicato de empleados de la GDF, marchan desde la Plaza Bolívar hasta Miraflores, parando en el Palacio Legislativo, para protestar por una amenaza de despidos que afectaría a 42 mil personas que trabajan en esa dependencia.

J u n i o

Martes 6

- Aproximadamente 500 obreros ferroviarios del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado colocan barricadas en el kilómetro 31 de la Autopista Regional del Centro exigiendo el cumplimiento de reivindicaciones contractuales entre otras cosas.
- Alumnos del liceo Andrés Bello y de la Escuela Técnica Industrial José de San Martín protestan en la calle para exigir el mejoramiento de la planta física de sus planteles y la dotación de las aulas.

Lunes 12

- Trabajadores, transportistas y distribuidores de Panamco de Venezuela (Coca Cola), de la región oriental de Caracas y de los Andes realizan un paro como protesta contra la presión a renunciar ejercida por la empresa y por su pretensión de eliminar el funcionamiento en la institución del sindicato nacional.
- En San Antonio del Táchira, cerca de 100 transportistas de carga pesada toman el puente internacional Simón Bolívar que comunica al país con Colombia para manifestarse a favor de la medida oficial de institucionalizar el transbordo de mercancía de frontera a frontera. Por otro lado, los trabajadores exigen al gobierno nacional la eliminación de las excepciones que gozan las unidades extranjeras que transportan mercancías indivisibles, químicos o productos refrigerados.

Miércoles 14

- La CTV encabeza una marcha de 7 mil trabajadores realizada desde Parque Carabobo hasta Miraflores con el fin de presionar al gobierno a fin de reanudar el diálogo necesario para concertar políticas de reactivación económica y de generación de puestos de trabajo y de impulsar la creación de una comisión tripartita para discutir el salario mínimo del sector privado y acelerar las negociaciones de los contratos de trabajo del sector público. La marcha es acompañada por representantes de las federaciones del sector de la construcción, de los empleados públicos y por los trabajadores de la GDF, que se encuentran en conflicto desde el 30 de mayo.
- Alrededor de 400 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de la Universidad del Zulia y de la Universidad de Carabobo acuden a la caravana hacia Miraflores organizada por la Federación de Centros Universitarios a fin de solicitar al Ejecutivo una respuesta sobre la situación de la Fundación de Atención Médica para el Estudiante de Educación Superior (FAMES), cuyo funcionamiento se encuentra paralizado desde hace más de tres meses debido a la deuda de un millón y medio de bolívares que el gobierno tiene con ella.

Lunes 19

- Más de 700 enfermeras del Hospital de Niños J. M. de los Ríos realizan un paro junto al Sindicato de Trabajadores Asistenciales del Distrito Federal contra la gobernación del distrito en protesta por las precarias condiciones en las que trabaja el personal, la falta de pago del aumento decretado por el presidente y el retraso del pago del bono vacacional, los cesta tickets, las prestaciones y los útiles escolares.

- Más de 50 ex-trabajadores despedidos de Avenza y Servivensa, empresas pertenecientes al sector aeronáutico, realizan una protesta contra sus despidos. Los afectados pidieron, sin obtener respuesta, explicaciones a los altos gerentes.

Martes 20

- Estudiantes del estado de Bolívar realizan una manifestación pacífica en el Puente Angostura en protesta por el deficiente servicio que presta la FAMES. La intervención violenta de la Guardia Nacional deja un herido como saldo.

Jueves 22

- El pago de los bonos nocturnos y vacacionales que se les adeudaba a las enfermeras del Hospital de Niños J. M. De los Ríos, luego de la protesta que había sido realizada el lunes anterior, satisface parcialmente las demandas de las manifestantes.

Jueves 29

- La Comisión Tripartita, integrada por representantes de los trabajadores, del sector empresarial y del gobierno acuerda aumentar en un 20 por ciento el salario mínimo para el sector privado.

• Alrededor de 2 mil trabajadores administrativos y obreros del sector educativo liderados por los sindicatos sectoriales toman pacíficamente la sede del Ministerio de Educación en protesta por el incumplimiento del contrato colectivo. La propuesta del director general del ministerio, que consistía en el pago del 50 por ciento del fideicomiso en julio, del bono por útiles escolares en agosto y de los cesta tickets y lo que correspondía por el programa de alimentación en septiembre, dividió las posiciones sindicales. El presidente del Sindicato Unitario de Empleados Públicos del Ministerio de Educación se mostró a favor de la propuesta, aunque manifestó reservas mientras que el titular del Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos de Ministerio de Educación se expresó en contra.

J u l i o

153

Martes 4

- El Colegio de Médicos del Distrito Federal realiza un referéndum por el cual se impuso la propuesta del Ministerio de Salud de elevar el sueldo básico por jornada completa a 729 mil bolívares mediante un bono. En la votación participaron los 3.500 médicos adscritos a los hospitales de la Gobernación del DF, al Instituto Venezolano del Seguro Social y al Ipasme.

• Más de un centenar de estudiantes de la Universidad de Carabobo junto con la Federación de Centros realizan una manifestación pacífica frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en protesta contra una serie de violaciones a la autonomía universitaria y por la derogación del Reglamento Electoral, que les brindaba la posibilidad de escoger a las autoridades universitarias.

Jueves 6

- El Sindicato de Trabajadores Electricistas junto con empleados de la empresa Electricidad de Caracas toman su sede para exigir a la nueva junta directiva una salida satisfactoria a las demandas salariales y sociales del contrato colectivo que negocian las partes desde hace 6 meses.

Sábado 8

- A diferencia de lo ocurrido el 4/7, los médicos adscritos al Ministerio de Salud y Desarrollo Social que trabajaban en centros hospitalarios de todo el país votan en contra de la propuesta realizada por ese despacho. El 88 por ciento de los sufragantes se pronunció, en cambio, a favor de la propuesta de la FMV, que establecía un salario mínimo de 650 mil bolívares para los médicos rurales y una compensación por el vencimiento del contrato colectivo de 3 millones, además de un plan de hospitalización, cirugía y maternidad de 5 millones, un plan de vivienda de 6 millones, un bono nocturno del 50 por ciento del salario diario y un bono rural del 40 por ciento del mismo.

Domingo 9

- Se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores, Supervisores y Operadores Petroleros y sus Similares. Según sus integrantes, la entidad dirigida por Nicasio La Rosa surge como respuesta ante la falta de atención que recibían los trabajadores del sector de parte de los sindicatos tradicionales.

Martes 11

- Los trabajadores de los hospitales adscritos en la Gobernación del DF, movilizados por el Sindicato de Hospitales y Clínicas del área metropolitana de Caracas protestan sobre la avenida principal de San Martín, para solicitar al gobernador la cancelación de la deuda de 15,7 millones de bolívars que el Estado mantenía con ellos.

Miércoles 12

- Alrededor de 800 estudiantes de distintas universidades del país protagonizan en Caracas una manifestación pacífica frente a la Fiscalía contra la agresividad con que los trataban los cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, en el Congresillo, exigen el pago de la deuda que mantenía el Ministerio de Educación con la FAMES y la pronta elaboración del proyecto de ley contra el uso de armas de fuego en las manifestaciones estudiantiles.

Jueves 13

- Cerca de 500 trabajadores de la Central Azucarera de Santo Antonio de Táchira junto con la cámara de comercio regional toman los puentes binacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que comunican al país con Colombia, exigiendo que el gobierno nacional implemente medidas para evitar el cierre de la planta, tales como evitar la restricción de la importación de azúcar, y por la reconstrucción de 10 mil trabajadores que se desempeñaban en Cazta. La medida es apoyada por los transportadores de carga de la zona.

154

Viernes 14

- Tras 35 horas de protesta es levantada la manifestación que se realizaba en San Antonio de Táchira al llegar el Gobierno Nacional y los manifestantes a un acuerdo que otorga a la Central Azucarera de Táchira una licencia de importación de 18 mil toneladas de azúcar crudo, lo que permitiría cumplir con la zafra en lo que restaba del año, y establece la reconstrucción de 10.300 trabajadores.

- En Barcelona, estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, de la escuela de Derecho y de los colegios tecnológicos Sucre y Mariño realizan cortes de calles y avenidas para exigir al Ministerio de Educación y a las autoridades regionales su intervención contra el alza de la matrícula que se registraba en todas las carreras tecnológicas y universitarias.

Lunes 17

- Más de mil desempleados junto con trabajadores del sector de la construcción interrumpen el tránsito de los tres puentes sobre el río Caroni, que comunican a Puerto Ordaz y San Félix en protesta por el incesante aumento del desempleo en dicha zona industrial y para que el gobierno reactive las obras del puente sobre el río Orinoco.

- Por decisión de la asamblea extraordinaria de la FMV, los médicos que trabajan para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social comienzan una huelga indefinida en reclamo de la aceptación de la propuesta de la federación. El personal del DF, que el 4 de julio se pronunció a favor de la proposición del ministerio, no acata la medida.

Martes 18

- Aproximadamente 40 mil docentes de 17 universidades de todo el país, junto con la Federación de Asociaciones de profesores de Venezuela comienzan una huelga a la cual se suma el resto de los empleados de las casas de estudio exigiendo el mantenimiento de la autonomía y de la democracia interna de las universidades que estaban siendo intervenidas.

Jueves 27

- Los médicos de las provincias de Amazonas, Portuguesa, Área Metropolitana y Miranda comienzan a cobrar la primer parte un bono de 1,1 millones acordado con el gobierno. El presidente de la FMV se manifiesta disconforme con el acuerdo por no resolver la contratación colectiva demandada por la federación.

Domingo 30

- El presidente Hugo Chávez es reelecto con el 59,4% de los votos, siendo Arias Cárdenas el segundo con un 35,7%. El Movimiento Quinta República (MVR), del candidato oficial obtuvo 93 lugares en la Asamblea Nacional y Acción Nacional otros 32. Candidatos a gobernador del presidente también triunfaron en 14 estados. En los 9 restantes ganó la oposición.

A g o s t o**Jueves 3**

- La asamblea de delegados de la FMV decide levantar el paro que venía realizando desde el 17 de julio.

Martes 8

- Representantes de diez comunidades indígenas de la Gran Sabana, ubicada en el estado de Bolívar, se movilizan hacia Caracas para manifestarle al presidente su descontento con el acuerdo firmado con la Federación Indígena de Bolívar, que permitía la instalación de un tendido eléctrico en sus tierras a fin de venderle energía al Brasil.

Miércoles 9

- El Sindicato de Trabajadores Electricistas firma con la empresa Electricidad de Caracas una convención colectiva que establece un aumento salarial del 15% sobre el salario básico, tanto para sus trabajadores como para los de las subsidiarias Luz Eléctrica de Venezuela y La Electricidad de Guarenas y Guatire, con una garantía mínima de incremento mensual de 150 mil bolívares.

Miércoles 16

- Alrededor de 600 maestros de la Asociación de Profesores Encargados del Estado de Zulia se manifiestan frente al Palacio de Miraflores exigiendo el reconocimiento de sus prestaciones, de sus utilidades, del atraso en el pago de salarios y de la titularidad de 920 docentes. Una comisión integrada por cuatro profesores, representantes del Ministerio de Educación y dos abogadas de la Defensoría del Pueblo acuerda el pago de los sueldos atrasados de agosto, septiembre y el bono vacacional. Por otro lado, se resuelve dejar en manos de la gobernación estatal la regularización de la situación de los 920 docentes.

Lunes 21

- La FMV y el gobierno acuerdan las bases del contrato colectivo en discusión, el cual establece un bono de 2,2 millones de bolívares para los médicos que trabajan 8 hs., uno de 1,1 millones para los que lo hacen 6 hs., beneficios similares para becarios y jubilados, un incremento salarial a implementar a partir del año próximo y otro después de julio del 2001, bonos nocturnos del 40% para los trabajadores rurales y del 35 para el resto así como también fondos de vivienda y salud.

Martes 22

- Integrantes de la comunidad de Mapaurí impiden el trabajo en la línea de alta tensión del tendido eléctrico que se proyectaba sobre sus tierras.

Jueves 24

- La empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) realiza una consulta en la que el 56% de los trabajadores que votaron (casi el 90% del total) se manifiesta a favor de discutir con los representantes patronales la contratación colectiva.
- El gobierno detiene la construcción del tendido eléctrico Venezuela-Brasil.

Cronología

Sábado 26

- Se amotinan los policías de Nueva Esparta frente a la sede de Inepol y cierran los accesos callejeros exigiendo la destitución del comandante, del subcomandante, el respeto a su moral e integridad física, estabilidad laboral, la dotación de equipo de trabajo, el pago de los pasivos laborales, la pensión y las prestaciones y la reincorporación de los funcionarios dados de baja por evaluación psicológica.

Domingo 27

- Los policías de Nueva Esparta levantan las medidas que venían realizando luego del nombramiento de una comisión evaluadora que investigará el funcionamiento de la institución y atenderá las denuncias realizadas por el personal policial.

Lunes 28

- Más de 5 mil trabajadores de la empresa recolectora de basura FOSPUCA realizan un paro y cortan calles de Caracas exigiendo la reanudación de las discusiones por el contrato colectivo, el pago de 20 por ciento de aumento decretado en mayo y de los cesta tickets, la destitución de los dirigentes del sindicato y un nuevo llamado a elecciones, entre otras cosas.

Jueves 31

- PDVSA y las organizaciones sindicales aprueban la incorporación a la mesa de negociación del proyecto de convención colectiva de FEDEPETROL y FETRAHIDROCARBUROS así como la propuesta de la empresa estatal y de los delegados sindicales independientes.
- Los trabajadores de FOSPUCA llegan a un acuerdo con el alcalde de Libertador que establece la satisfacción de sus reivindicaciones económicas. Por otro lado, destituyen al sindicato y forman una comisión para negociar con la empresa, además de levantar el paro.

GLOSARIO DE SIGLAS

CTV	Confederación de Trabajadores de Venezuela
FAMES	Fundación de Atención Médica para el Estudiante de Educación Superior
FMV	Federación Médica Venezolana
GDF	Gobernación del Distrito Federal
MVR	Movimiento Quinta República
PDVSA	Petróleos de Venezuela S.A.
UCV	Universidad Central de Venezuela

** Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL
Fuentes: Diario El Nacional y El Universal.*

Debates teóricos



a reflexión teórica sobre el conflicto y los movimientos sociales encuentra su estímulo y empuje en las experiencias y problemáticas que los propios movimientos ponen en la escena pública a través de los conflictos que desarrollan. También, como sucede en la propia experiencia de los movimientos sociales, esta exigencia de respuestas que plantea el presente convoca necesariamente a la memoria del pasado. Alrededor de este doble vínculo que vitaliza al pensamiento crítico se articulan los tres textos que se presentan en esta sección.

El primero de ellos es una versión resumida de un artículo recientemente publicado por el sociólogo francés Michel Vakaloulis. El mismo es una muestra de la revitalización por la que atraviesa la producción teórica francesa en torno a la cuestión de la acción colectiva y el conflicto social; y que ya se vio reflejada en estas páginas con la publicación del artículo de Sophie Bérout y René Mouriaux en el número anterior. Estas contribuciones deben situarse en el contexto de creciente protesta social que conoció la sociedad francesa en los últimos años. El conjunto de estos conflictos dinamizaron el debate intelectual francés, luego de varios años en los que la hegemonía de las políticas de desregulación económica implementadas por los gobiernos socialistas, habían producido un amplio consenso en la comunidad académica e intelectual en torno a la inevitabilidad de las mismas. Esperamos que el mismo (y futuras publicaciones) sirvan a difundir entre el público latinoamericano interesado en la temática algunas aristas de este estimulante debate.

El segundo artículo, escrito especialmente para el OSAL por el sociólogo Marcos Roitman Rosenmann, recorre el pensamiento político y social latinoamericano haciendo énfasis en la problemática de las crisis y los conflictos societales. En este recorrido desde los procesos independentistas hasta la década de los noventa, signada por la aparición del zapatismo, el autor da cuenta de la forma en que los procesos socio-históricos condicionaron y a su vez fueron interpretados por el pensamiento de las élites dominantes y por las corrientes de reflexión crítica. Reseñando casi un siglo de crisis y conflictos el texto señala los principales autores y obras que jalaron el pensamiento político y social latinoamericano.

Tal como señala Marcos Roitman Rosenmann en su artículo, la década de los sesenta fue un período rico en producción de conocimientos sociales críticos en América Latina. En este sentido, intentando dar cuenta del diálogo necesario entre el pasado y el presente, publicamos en tercer lugar una versión resumida de un artículo del reconocido sociólogo peruano Aníbal Quijano, editado en 1967, que analiza la problemática de los movimientos campesinos en la región, tema de extrema actualidad como se refleja en este mismo número con el dossier dedicado a la cuestión agraria y el movimiento campesino en el Brasil contemporáneo. En su artículo Quijano aborda las diferentes etapas de constitución de los movimientos campesinos, el proceso de politización de los mismos y realiza un refinado análisis de los patrones de formación y desarrollo de éstos en la década del sesenta con una mirada regional extremadamente valiosa. Una versión electrónica completa del texto puede ser consultada en la Biblioteca CLACSO de Clásicos de las Ciencias Sociales (www.clacso.edu.ar)

Esperamos que estos textos contribuyan a estimular un necesario debate que pueda ser reflejado en esta misma sección, en futuras ediciones del Observatorio Social de América Latina.

Antagonismo social y acción colectiva¹

Por Michel Vakaloulis*

“ Todos juntos unidos en la esperanza” podía leerse en un improvisado cartel durante la manifestación parisina de los estudiantes secundarios del 20 de octubre de 1998. Consigna polisémica si las hay, que expresa a la vez un sentimiento de alegría generado por compartir situaciones sociales de esta índole; la voluntad de producir un cambio en la relación de fuerzas y conquistar objetivos comunes y una exaltación de la acción colectiva como instrumento adecuado para “desfatalizar” la realidad social. Consigna alentadora que contrasta con el sentimiento de impotencia que sienten los individuos frente a la fatalidad cotidiana que se les escurre como agua entre las manos.

En un espacio social donde predomina la precarización de la vida cotidiana, la degradación de las situaciones de trabajo y la pérdida de las garantías colectivas, la crisis durable de las relaciones políticas y el debilitamiento de los “grandes relatos” de emancipación social, los individuos ven reducirse cada vez más la capacidad de control de sus propios destinos al mismo tiempo que aumentan sus deseos de intervenir en el curso de la realidad mundial. Atrapada en una contradicción difícil de resolver, la gente sabe que la situación es “grave”, “alarmante”, “que está más allá de lo tolerable”. Mirada lúcida, sin duda, pero también dubitativa, distanciada, desencantada. Entre una sensación de desposeimiento real y la profunda aspiración de ocuparse de los asuntos comunes que a uno le conciernen, existe una gran tentación de refugiarse en la ciudadela del individualismo. Ciertamente existen deseos y esperanzas que se confunden también a menudo con un cierto pasotismo individual. Precisamente durante las movilizaciones colectivas una postura de este tipo resulta insostenible. Los “figurantes” se transforman en actores del evento y coproducen sentido libremente, allí donde sólo existía la violencia padecida del orden establecido.

* Doctor en Filosofía e Investigador en Sociología Política, enseña en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de París VIII. Sus investigaciones abordan actualmente cuestiones de sociología de los movimientos sociales y del sindicalismo asalariado.

Traducción realizada por Emilio H. Taddei



Pero estas ocasiones son más bien raras, momentos excepcionales. La desunión de los individuos, el desgarramiento mutuo en la lucha competitiva que los opone y los empobrece, son en general la regla. Un encadenamiento “fatal” de obstáculos estructurales les impide pasar de una disposición favorable a la acción colectiva a un compromiso y participación real en la misma. Son permanentemente divididos, ordenados, atomizados por los designios y los dispositivos del capital. Sus existencias están ritmadas por lo incierto, por el temor a la desconexión social, por el espectro de la despersonalización. “Las ontologizaciones espontáneas del pensamiento social cristalizadas fundamentalmente en las categorías económicas” impregnan sus representaciones, limitan su horizonte ideológico, someten su imaginario colectivo al fetichismo de la forma valor.

La dinámica de la acción colectiva sólo puede tener un impacto acotado si tenemos en cuenta los límites externos que dificultan el “trabajo de protesta”. Los efectos desestabilizadores de la desocupación de masas, la exacerbación de la competencia entre los trabajadores, la influencia de las “nuevas” tecnologías de captación de la inteligencia colectiva por parte de las direcciones manageriales dificultan la movilización de las fuerzas del trabajo. A esto hay que agregar una segunda serie de dificultades que son immanentes a la acción y a la reflexión de los grupos movilizadores. Las movilizaciones contemporáneas, casi sin

excepciones, tienen dificultad para inscribirse en una temporalidad más prolongada que la de la conflictividad inmediata. El riesgo evidente consiste en padecer las evoluciones en lugar de poder anticiparlas. La puesta en forma de las perspectivas sociales de la protesta, cuando existe, es muy insuficiente. El gran desafío es entonces poder llevar el “rechazo de lo intolerable” a su “extremo”, cuestionando concretamente el “programa único” de las estrategias y de las reformas liberales. En lo que hace al trabajo de unificación de las experiencias y de los diferentes intereses de los asalariados, éste permanece a menudo prisionero de una categorización limitativa de las relaciones sociales de poder y de dominación que, por un lado, desconoce la nueva realidad social que resulta de la desagregación del fordismo histórico, y por el otro, subestima la gran complejización del espacio de la protesta.

Nuestro estudio apunta a aportar elementos de reflexión sociológica sobre la cuestión del antagonismo social en sus configuraciones contemporáneas. Nuestros argumentos se exponen en tres puntos. En un primer momento examinamos de qué forma el paradigma de “la exclusión social” hoy en boga conduce a los analistas que parten de ópticas diferentes, y aún divergentes, a coincidir en las interpretaciones de las formas actuales de movilización colectiva de los asalariados; devaluándolas e invocando los errores del “movimiento social” para descalificarlo y caracterizarlo como un “movimiento errado”. La temática de los “excluidos/incluidos” sobre la cual reposa un gran número de interpretaciones de las huelgas del otoño de 1995 nos servirá de ejemplo.

La segunda parte de nuestro análisis tiene un alcance teórico y comparativo. Por un lado explicitamos los desplazamientos conceptuales que implica el análisis de la problemática de la movilización colectiva en términos de “exclusión social” en relación al paradigma marxiano del “antagonismo de clase”³. Por otro lado proponemos una deconstrucción de esta problemática partiendo de la necesidad de articular determinantes estructurales y dimensiones fenomenológicas que definen la acción colectiva moderna.

La tercera parte de la reflexión se centra en la dinámica propia del conflicto social. Sindicalismo asalariado, movimientos sociales, micro-resistencias difusas, líneas de fuga individuales: ¿qué tipo de relaciones? ¿Cuál es el sentido y cuáles son los límites de la politización inherente a la movilización de los dominados? Las tesis presentadas en la última parte del estudio no pretenden aportar respuestas definitivas a estas cuestiones. Simplemente subrayan la necesidad de clarificar los términos del debate.

■ Conflicto, movimiento y horizonte de emancipación

“Hay que convencerse que es precisamente porque hay luchas que hablamos de movimiento social”. Esta constatación, expresada con convicción por una militante sindical implicada en el movimiento de desocupados, pone de manifiesto una cuestión relevante: la de la relación entre las conductas de protesta y el conflicto de sentido. Mejor dicho entre las luchas sociales y la posibilidad de designar *en su carácter fenomenológico* el hecho de luchar en forma conjunta. Es verdad que la realidad nacional se presta sin dificultad a tales constataciones. Desde las huelgas del otoño de 1995 las formas de la acción colectiva en la Francia contemporánea no dejaron de ritmar la actualidad política.

Sin augurar o inaugurar una nueva era del antagonismo social, en la medida en que es cierto que la dinámica de la movilización colectiva no obedece necesariamente a una lógica de ascenso, las actuales luchas por el empleo, la defensa de los derechos sociales o de la protección social producen efectos importantes, tangibles o invisibles, directos o diferidos. En su heterogeneidad constitutiva y su dispersión identitaria, estas formas de protesta son, a menudo, entronizadas a un principio de coherencia, sino superior, al menos englobante: el movimiento social que se opone a la modernización liberal de las relaciones de explotación y dominación. La noción de movimiento social indica la persistencia de una interacción antagónica prolongada que va más allá del momento crítico de conflictos puntuales. Hace referencia pues a efectos de expansión y contagio, de repercusión intra e intersectorial, de desplazamiento de escala, de difusión desordenada de las disposiciones de protesta.

El término presenta ambivalencias. Su propia conceptualización plantea el riesgo de vacilar entre dos extremos, *positivista* y *esencialista*, aparentemente irreconciliables pero sustancialmente complementarios. El primer abordaje tiende a yuxtaponer las protestas engendradas por la evolución del sistema social. Hace énfasis en el carácter fortuito, irracional, minimiza su aporte a la acción y a la reflexión política, hace desaparecer la producción simbólica “globalizante” de la cual es su objeto. La diversidad de las motivaciones personales y la singularidad de los modos de compromiso de los individuos en la acción colectiva son considerados “no universalizables”. Así éstas son irreductibles a un denominador común susceptible de funcionar en el plano conceptual como un operador de intelegibilidad como, por ejemplo, el conflicto capital/trabajo, el rechazo al liberalismo o la lucha contra el desempleo.

En su acepción “globalizante” el propio concepto de movimiento social se hace impensable: es el resultado de

una esquematización determinada por el deseo de eliminar la complejidad de los registros de protesta. Sin duda siempre es posible realizar reordenamientos sociológicos a mediana escala, establecer criterios de clasificación que organicen las formas de acción colectiva según las similitudes de orden reivindicativo, simbólico u organizacional. Se puede, por ejemplo, tematizar las movilizaciones “corporativas” de los empleados públicos que no toman en cuenta los fenómenos de “exclusión”, las manifestaciones “morales” en defensa del “derecho a la diferencia”, los movimientos huelguistas conducidos por “coordinadoras” de trabajadores “en búsqueda de reconocimiento social”. Sin embargo el abordaje “positivista” de la acción colectiva rechaza cualquier concepto unificado de movimiento social como una totalización abusiva de las lógicas y prácticas de la protesta. El concepto movimiento social no es capaz de designar aquello que es llamado a representar porque su verdad teórica trasciende la singularidad empírica de las formas de movilización observadas. Paradojalmente un abordaje “no pasional” de los movimientos sociales en el sentido amplio del término presupone la negación del “movimiento social” como tal.

La segunda aproximación a la cuestión consiste en personificar el “movimiento social” para transformarlo en una existencia autónoma, una suerte de entidad antropológica de gran formato que dispone de una voluntad y objetividad propias, independientemente de las relaciones móviles, complejas y contradictorias que debería sintetizar. “El” movimiento social aparece como un actor social a parte entera, junto a otros actores cuya estructuración socio-política los diferencia de forma visible y los predispone a la acción de manera relativamente previsible. Actor *sui generis* que perturba el juego de la simbología política, que desplaza los temas del debate público y modifica el trabajo de la representación democrática. Actor que no necesita para existir de una política creíble, dado que él mismo produce una “plusvalía política” apropiada en parte por el sistema partidario y la maquinaria política legítima. Actor que se sitúa sobre todo por fuera del campo de la política y busca penetrarlo “por efracción”; no para instalarse en este campo sino para hacer visibles sus huellas y sus objetivos. Es portador del “mensaje” de la multitud en dirección al poder, no como mediador sino como un “inoportuno” que se cuelga en el festín de las elites dirigentes ennegrecidas por el propio espectáculo de magnificencia.

La tentación de reificar el movimiento social es real. Este último representa el aspecto noble de una política cada vez más degradada e inadecuada. La política auténtica contra la degradación política. La libre rehabilitación de lo político contra las políticas de la restauración liberal. La radicalización de esta lógica lleva a una actitud anarco-sindicalista que, según Stéphane Rozès, parece caracterizar desde 1982 a los propios movimientos de opinión: el movimiento

social se apropia de lo político directamente, de manera discontinua o episódica, sin mediaciones que correrían el riesgo de afectar la amplitud de las aspiraciones y de las reivindicaciones expresadas, presentando la política legítima como un teatro de sombras. El movimiento social refiere a fin de cuentas a la aparición de una conflictividad esencialmente post-política. El precio a pagar por este desplazamiento conceptual significativo es el siguiente: situar del lado del movimiento toda la política instituyente y desvalorizar la importancia del análisis de las políticas de “puesta en movimiento”. En estas condiciones es difícil no representarse al movimiento como una sustancia cristalizada, compacta y homogénea que evoluciona en la ingravidez de un espacio político espectral.

Existe una tercera posición, que no es intermedia. El movimiento social no es ni un fenómeno carente de control que arbitrariamente daría forma a mecanismos de protesta dispares y no totalizables, ni un actor homogéneo unificado a través de una conciencia común en función de la cual interviene en el campo de la política. El concepto de movimiento social hace más bien referencia a un conjunto cambiante de relaciones sociales de protesta que emergen en el seno del capitalismo contemporáneo. Estas relaciones se desarrollan de forma desigual en sus ritmos, su existencia reivindicativa, su constancia y su proyección en el futuro y, finalmente, en su importancia política e ideológica. Su origen común, si existe uno, reside en el hecho de que ciertos grupos sociales dominados entran en conflicto, de forma directa o indirecta, con la materialidad de las relaciones de poder y de dominación pero también con el imaginario social marcado por la dinámica de la valorización/desvalorización. Sin embargo el “proyecto” que estas movilizaciones encarnan no siempre es explícito. Su formalización es incompleta, su madurez insuficiente y su potencia simbólica débil.

La actividad del movimiento social no constituye un proceso lineal que, según una visión “objetivista” de la lucha de clases, expresaría el carácter “inexorable” de las resistencias a los procesos de explotación y de dominación capitalista. Si las contra-tendencias a estos últimos fenómenos son immanentes a la naturaleza antagónica de la relación social capitalista, lo cual permite reforzar la tesis de una determinación estructural de la conflictividad en la social en su conjunto, no es menos cierto que las movilizaciones colectivas ponen de manifiesto el carácter en parte fortuito de la dialéctica histórica. Esta refiere a lo fenomenológico (los hechos), a la iniciativa de los actores sociales pero también a sus dificultades de controlar los múltiples desafíos que los afectan y que sobre ellos pesan. La dialéctica histórica está marcada tanto por el modo de acción soberano de los actores como por su dificultad para actuar y reflexionar librándose de la fuerza de las costumbres. La dialéctica de la acción colectiva combina pues la posibilidad construida por

los actores movilizados de influir sobre lo político de manera autónoma, forzándolo a ofrecer respuestas, y su reducida capacidad de cuestionar la simbología de lo que es temporariamente señalado como un horizonte infranqueable.

También debemos descartar dos visiones reductoras del conflicto social. El “objetivismo” y el “subjetivismo” tienen como punto en común el hecho de desconocer las polivalencias de la movilización colectiva. La primera interpretación sobrevaloriza el papel de la determinación estructural en las conductas protestatarias. Encarnación de un “principio universal”, esta determinación es a menudo formulada a través de la metáfora de los “campos” o de los “sujetos colectivos” antagonicos. La diversidad de oportunidades políticas de la “puesta en movimiento”, la heterogeneidad social de los actores movilizados, la diferenciación de sus representaciones, su indigencia o profusión en “recursos simbólicos”, la disponibilidad o la deficiencia de las mediaciones organizacionales son subestimadas en la reflexión propia a esta visión. La “objetivación” implacable de los fundamentos de la conflictividad conduce a la desvalorización de sus aspectos “situacionales”. Es decir, producir un movimiento sin crear o hacer un hecho.

La segunda interpretación sobrevaloriza las dimensiones fácticas de la acción colectiva. La “subjetivación” hiperbólica de esta última confina el hecho de protesta a sus aspectos fenomenológicos. Mera “construcción social” de sus propios actores, el acto de protesta aparece desprovisto de fundamento objetivo, de “causa primera”, de dimensión histórica. El análisis del movimiento se diluye en la inmediatez de sus manifestaciones prácticas. Las determinaciones estructurales que pesan en el juego social constituyen el punto débil de esta interpretación. El contenido social de la protesta se asemeja a una mecánica competitiva en la cual se intercambian “golpes” y “contragolpes”. Es decir, producir un hecho sin crear o hacer un movimiento.

Es necesario precisar nuestros argumentos. A lo largo de los últimos años los movimientos sociales ocurridos en Francia presentaron una multiplicidad de formas. Ciertos terrenos de confrontación social fueron objeto de protestas: desde las grandes huelgas contra el plan Juppé en otoño de 1995 hasta la revuelta de los desocupados del invierno de 1997-1998 pasando por una gran cantidad de pequeños conflictos en defensa del empleo, del salario y de la reducción del trabajo, en rechazo a la “exclusión”, por la preservación de los derechos colectivos ligados a la condición salarial, sin olvidar las luchas de las mujeres, las movilizaciones antiracistas y antifascistas, los movimientos por el derecho a la vivienda o contra el sida y la discriminación sexual. La lista es muy larga.

Una simple enumeración de esta diversa, sino dispersa, conflictividad alcanza para convencerse de que el conflicto

social contemporáneo desborda ampliamente la esfera del trabajo *stricto sensu* abarcando el conjunto de las realidades transformadas por las políticas de inspiración liberal y, en consecuencia, produce polarizaciones que trascienden la esfera laboral. Si admitimos que la tendencia dominante del capital en la era posmoderna es la de la acumulación flexible, podemos decir esquemáticamente que el conjunto del espacio social de acumulación, que trasciende los límites de la cooperación productiva circunscripta a los límites de la empresa, se transforma, efectiva o virtualmente, en terreno de enfrentamiento estratégico.

Sin embargo el conflicto laboral “tradicional”, centrado en torno al trabajo asalariado (salarios, empleo, tiempo de trabajo, etc.) está lejos de haber desaparecido. Constituye un polo de conflictividad fuerte en torno al cual se establece una trama de confrontaciones recurrentes, a veces nacionales pero fundamentalmente locales, pequeñas “guerras” de posición, estrategias de demostración de fuerzas e intimidación, guerrillas incesantes que oponen las fuerzas sindicales y las direcciones manageriales. Esta micro-conflictividad ininterrumpida no siempre traspasa el nivel de visibilidad más allá de los actores implicados en el conflicto y en la resolución del mismo. A menudo no deja rastros estadísticos, lo que no es sorprendente si tenemos en cuenta los métodos utilizados por el INSEE⁴ para medir el “clima social” en la empresa.

A pesar de la crisis por la que atraviesa desde hace dos décadas, el movimiento obrero no es una fuerza histórica en extinción. Sin duda perdió la centralidad sociológica y simbólica característica de la época fordista. Su “brillo”, ligado al imaginario heroico del proletariado industrial, ha desaparecido. No es ni el único actor del conflicto social ni la vanguardia de la lucha por la auto-emancipación de los dominados. En todo caso la cuestión de la “hegemonía obrera” no se plantea más en esos términos. Este actor mantiene no solamente una capacidad de perturbación anticapitalista sino también la capacidad de reivindicación y de positivación de sus propios objetivos, como lo manifiesta la relativa renovación sindical en curso a la largo del último período. Sabiendo que estamos lejos de asistir al agotamiento de los grandes movimientos reivindicativos del trabajo, conviene pues examinar atentamente las condiciones de posibilidad de su realización.

Las movilizaciones colectivas suscitadas por las políticas públicas constituyen un segundo eje de la conflictividad contemporánea. Conciernen, entre otras cuestiones, a la modernización del Estado, de la escuela, de la salud, la gestión de los flujos migratorios, la producción y la aplicación de las disposiciones de seguridad. Estas movilizaciones se producen principalmente porque la confrontación y el debate públicos, cuando existen, no tienen incidencia mayor sobre las políticas públicas. En general el poder político se limita a

tratar los problemas sociales de forma limitada, separada y parcial. La interiorización por parte del personal político que se encuentra en el gobierno de los límites “infranqueables” de la economía transforma la política en gestión, al margen de los efectos desestabilizadores del liberalismo.

De esta forma se privilegian el corto plazo y las reformas contables sin una visión societal de conjunto. En vez de comprometerse, por ejemplo, a promover un verdadero debate público sobre la cuestión de la salud o de la apropiación democrática de los servicios públicos, la discusión se limita al “saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social” o a la “necesidad de las privatizaciones en el marco de una economía competitiva”. No es para nada asombroso constatar que, en estas condiciones, se produzcan decisiones autoritarias, retrógradas, que no contemplan las aspiraciones y exigencias de las grandes mayorías.

Estos dos polos de protesta que podemos distinguir analíticamente están en realidad estrechamente ligados. Las movilizaciones laborales tienden a ligarse con los grandes temas de la sociedad en función de una doble evolución. Por un lado, y como sostiene Yves Clot, la actividad productiva significa para el trabajador poder obtener en ésta sus móviles vitales, los valores y capacidades subjetivas que obtiene de todos los ámbitos de la vida donde está implicada su existencia. Por otra parte la esfera del trabajo se extiende más allá de las fronteras de la empresa en el sentido estricto del término. La irrupción societal en el trabajo asalariado (proceso de individualización, balance de las competencias, exigencia de calidad, etc.) y la impregnación fuera del trabajo por el proceso de valorización del capital constituyen dos aspectos complementarios de una “centralidad” del trabajo al menos paradójal.

Las luchas por la defensa del empleo, por ejemplo, cuestionan abiertamente la tendencia actual a la precarización de la sociedad, aún si el vínculo entre asalariados activos y desocupados es débil. Por otro lado el movimiento de desocupados no se limita a reivindicar derechos colectivos y medidas inmediatas susceptibles de contrarrestar en parte las situaciones de privación que padecen cotidianamente los sectores más fragilizados de la población. Este movimiento cuestiona también la cristalización de un modelo asalariado caracterizado por la precarización y la flexibilización. El rechazo a las políticas públicas que se limitan a gestionar los fenómenos de “exclusión social”, a riesgo de entronizarlos o de agravarlos, encuentra su continuidad lógica en la lucha contra los efectos perversos de la flexibilización laboral. Esta lucha permite plantear la cuestión de los “mínimos sociales” no como una reivindicación de “baja categoría” reducida a su materialidad financiera, sino como un objetivo político susceptible de subvertir la configuración contemporánea del orden laboral; objetivo que se inscribe en un pro-

yecto de transformación social más global.

Sin necesariamente constituir una realidad totalmente nueva en su manifestación histórica, algunos rasgos de los movimientos sociales de los últimos años se afirman con una fuerza inédita. Primera característica: la fragmentación de las formas de protesta, si bien no constituye un dato ontológico inmodificable, indica la dificultad para imaginar un “Todos juntos”⁵ en el cual cada uno/a tendría su propio lugar. Señala que la construcción de nuevas perspectivas de emancipación social aún es muy tenue. El aspecto positivo de esta fragmentación es que ésta marca el fin de un cierto vanguardismo de clase que caracterizó históricamente al movimiento obrero. Su aspecto negativo refiere a los obstáculos que impiden discernir los lineamientos de un movimiento de conjunto en el seno de la conflictividad contemporánea.

Segunda característica de la situación presente: la contradicción entre las fuertes aspiraciones de cambio social y un horizonte histórico limitado que parece no tener salida. Luego del desastre histórico del “socialismo real”, las aspiraciones por construir un orden social más justo e igualitario no han desaparecido. Los deseos de construcción de un mundo mejor guardan actualidad. La formulación de lo que podría representar un proyecto histórico de transformación no es sin embargo una tarea simple. La fuerza del economicismo, que se reproduce como una ideología espontánea y que aparece como un límite insuperable del imaginario social; la percepción casi mitológica del poder absoluto de los mercados; el atraso existente en el análisis y comprensión de los fenómenos de la globalización influyen en la posibilidad de que el conflicto social sirva a la formulación de un proyecto. Este desfase limita el impacto político del movimiento social e inscribe su empirismo reivindicativo en una temporalidad corta.

La última característica de la acción colectiva refiere a la cuestión de la articulación entre lo individual y lo colectivo. Si bien los individuos participan en movilizaciones y protestas en función de objetivos compartidos, no es menos cierto que las personas manifiestan preocupaciones personales de autonomía y de participación directa. No son muy proclives a ponerse al servicio de algo que trasciende sus posibilidades de control, pero también es cierto que participan en una causa que permite expresar su descontento y hace valer sus legítimas aspiraciones. Esto explica, sobre todo entre las jóvenes generaciones, los compromisos militantes intermitentes o discontinuos. Este tipo de conducta refleja la resistencia a un compromiso de tipo “cheque en blanco” que es reemplazado por una participación política o sindical “a la carta”. Este cuidado de sí mismo no es contradictorio con una fuerte percepción de necesidad de comunidad y de solidaridad. Traduce, por el contrario, el deseo de relaciones sociales simétricas y reversibles establecidas entre mujeres y hombres libres.

En suma, el individualismo en el seno de los movi-

mientos sociales (incluido el movimiento sindical) lejos de ser “posesivo”, es más bien un individualismo *igualitario*. Si su objetivo continúa siendo el libre uso de la voluntad individual, debe expresarse en la realización de la libertad de todos y de cada uno. Esta es una tendencia fundamental de la acción colectiva contemporánea. Esto explica la profunda animadversión respecto a los comportamientos de “vedettismo”, el rechazo al encuadramiento partidario, la sospecha respecto a los “voceros”, la voluntad de preservar hasta el final la dinámica *colectiva* de la lucha.

Estas tres características son componentes de la cambiante morfología de la acción colectiva. Lo que está en juego frente a la modernización neoliberal de la relación capitalista es el proyecto de conjunto de las luchas sociales. Respecto a este asunto existen cuatro orientaciones centrales. Su puesta en marcha requiere sinergias y convergencias más allá del Estado-nación, que deben inscribirse prácticamente en esta “mundialización de las resistencias y de las luchas” de las cuales habla Christophe Aguiton.

La primera orientación implica la lucha por la homogeneización de las condiciones de acceso al empleo, del uso de la fuerza de trabajo, de la “reproducción” de los trabajadores en tanto productores de la riqueza social.

La segunda hace referencia al desarrollo de las solidaridades salariales en el seno de la empresa que trasciendan los clivajes de la división capitalista del trabajo; solidaridades que es conveniente desplegar también en dirección de los movimientos de protesta que se manifiestan por fuera del espacio del trabajo.

La tercera característica refiere al trabajo de la modelización reivindicativa de las aspiraciones y exigencias de los asalariados, de los desocupados, de los grupos sociales dominados. Sin una elaboración programática colectiva de lo que los individuos “de abajo” quieren y reclaman, las conquistas populares deseadas se verán comprometidas.

La cuarta orientación se aplica al posicionamiento político del movimiento social. Ser autónomo en relación al sistema partidario y a los gobiernos no significa transformarse en una especie de recambio anti-institucional del descontento social. Significa sobre todo cuestionar una concepción antidemocrática de la gobernabilidad que transforma todo en una cuestión técnica, prácticamente fuera de control, en perjuicio de los principales interesados...

“A pesar de lo que pueda suceder el mundo de mañana nos pertenece”, podía leerse en una de las pancartas de las manifestaciones de secundarios ya mencionadas. A decir verdad el mundo de mañana pertenece a aquellas y aquellos

que lo contruyen desde hoy cuestionando las fatalidades del orden dominante. Esta iniciativa histórica es la que constituye el fundamento de la libertad humana.

Notas

1 Artículo extraído de VAKALOULIS, Michel (sous la direction) *Travail salarié et conflit social*. Actuel Marx Confrontation – PUF, París, 1999, 250 págs. La presente versión traducida del francés es un extracto del artículo *Antagonisme social et action collective*, op. cit., págs. 221 a 248. La traducción que publicamos reproduce la parte introductoria del artículo (págs. 221 a 223 en la versión integral en francés) y la última parte del mismo (págs. 241 a 248 en la versión integral en francés). La primera y segunda parte del artículo original, que por una cuestión de extensión no se presentan en la presente versión en español, llevan por subtítulo respectivamente “*La grève à l’outrance: lignes de fracture et lignes de résistance*” y *Figures du déplacement: “exclus” ou dépossédés?*

2 Jean Marie Vincent, *Max Weber ou la démocratie inachevée*, Paris, Editions du Félin, 1998, página 170.

3 En relación a las reflexiones del autor en torno al paradigma de la exclusión y el paradigma del antagonismo social que desarrolla en la segunda parte (no reproducida) de su artículo, ver el cuadro que se presenta en el anexo de esta versión en el cual el autor presenta de forma esquematizada las variables teóricas de los dos paradigmas.

4 N. del T.: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

5 N. del T.: Traducción de “Tous ensemble”. Esta fue la consigna central del movimiento huelguístico en el sector público francés en otoño de 1995. La legitimidad del “movimiento social” de empleados públicos y la simpatía despertada por este, entre otras categorías sociales que no participaron en el movimiento huelguístico en forma directa residió, en gran parte, en la capacidad de generalizar el sentido de la protesta y la defensa de los derechos sociales, que implicaba al conjunto de los asalariados. La consigna “Tous ensemble” funcionó como catalizador y síntesis de un descontento social generalizado producido por una serie de medidas que atacaban a todos. “Todo el mundo” estaba implicado por el proyecto de reforma de la Seguridad Social impulsado por el gobierno de Alain Juppé (derecha), y en su inicio sostenido por el Partido Socialista en la Asamblea Nacional. Aún si no todas las medidas del Plan Juppé implicaban al conjunto de la población, la amenaza implicaba a la mayoría de ella. Frente a una situación en que los trabajadores del sector privado eran reticentes a parar en solidaridad con el sector público (por temor a los despidos en masa) la consigna “Tous ensemble” permitió a los trabajadores del privado sentirse identificados y representados en una demanda cuyos principios compartían mayoritariamente. Esta actitud de solidaridad se manifestó a lo largo de todo el conflicto a través de encuestas de opinión y de actos de solidaridad concretos como por ejemplo la predisposición de un gran sector de la población a llevar en auto a otros trabajadores, para que no prosperaran los intentos gubernamentales de romper la huelga de transportes, enfrentando a trabajadores y usuarios. Este movimiento de solidaridad de los trabajadores del sector privado con los del sector público fue designado como “*huelga por procuración*”. Frente a las dificultades de hacer paro en el sector privado los trabajadores de este sector depositaron la tarea de reivindicación de sus propios derechos ciudadanos en los trabajadores del sector público. Esto explica, en parte, la persistencia del movimiento huelguístico que se extendió durante un mes paralizando la casi totalidad del transporte público francés. Para una mayor comprensión de este fenómeno ver ROZES, Stéphane. La “grève par procuration de l’opinion à l’égard des mouvements sociaux révèle un nouveau cycle idéologique en VAKALOULIS, Michel (sous la direction) *Travail salarié et conflit social*. Actuel Marx Confrontation – PUF, París, 1999, págs 121 a 134 y BEROUD, Sophie y MOURIAUX, René (coordinadores) *Le souffle de décembre. Le mouvement de décembre 1995: continuités, singularités*.

ANEXO
Exclusión y antagonismo social:
Espacio teórico comparativo de dos paradigmas

Características específicas	Paradigma de la exclusión	Paradigma del antagonismo social
Registro de referencia	Temática del empleo	Temática del trabajo asalariado
Figura social de diferenciación	Incluido/excluido	Explotador/explotado Dominador/dominado
Tipo de clivaje	Horizontal Adentro/afuera	Vertical Alto/bajo
Expresión del conflicto	Protesta moral Indignación	Conflictividad de clase estructurada de forma desigual
Objetivos del conflicto	Integración Regulación de la sociedad “post-salarial”	Conquistas sociales Emancipación colectiva de los asalariados
Lógica situacional	Auto-culpabilización Atomización asistencialista de los individuos	Desprivatización Agudización de la polarización de clase
Simbología predominante	Desorden a controlar	Conflicto estructurante con dimensión política
Relaciones con la movilización colectiva	Desmovilización Gestión estatal de la desagregación social	Puesta en movimiento Actores sociales en vía de constitución
Relaciones con la política	Despolitización de lo social Humanitarismo	Politización tendencial de la conflictividad social
Proyecto histórico	Retroceso de la dualización de la sociedad salarial	Dimensión anticapitalista

Conflicto y crisis en el pensamiento social latinoamericano

Por Marcos Roitman Rosenmann*

El pensamiento político y social latinoamericano ha sido muy fructífero en la producción de un conocimiento concreto en torno a la naturaleza de las crisis y los conflictos sociales. El hecho de haber sido un continente sometido al orden colonial y sus elites políticas haber luchado por la independencia, destaca aún más las concepciones del cambio social y el tipo de sociedad que se pretende construir. Federalismo versus Unitarismo, Monarquía versus República.

El proceso de independencia facilitó la consolidación de un pensamiento político y social donde las tradiciones liberales y conservadoras se disputaron, en el marco de las doctrinas, la hegemonía teórica.

Revoluciones, reformas, conflictos y crisis fueron analizadas bajo el tamiz del pensamiento ilustrado. La gran revolución del siglo XVIII en Europa encontró su respaldo en la naciente idea de progreso. Y el pensamiento económico social y político utilitarista-contractual movilizó a la naciente burguesía en su lucha por instaurar un orden burgués fundado en el progreso científico-técnico.

El pensamiento social y político de la emancipación, está empapado de la idea ilustrada de orden y progreso. Desde fines del siglo XVIII las concepciones de una sociedad fundada en la igualdad y la libertad de los individuos abrió la crisis del orden colonial. Criollos y peninsulares. Diferenciados por status en función de su nacimiento en América fueron inhabilitados para ejercer los cargos más relevantes del orden colonial. Por ello, los criollos defendieron las teorías del contrato social, la voluntad general y la división de poderes desarrolladas por Rousseau y Montesquieu. La influencia de la revolución francesa y la revolución norteamericana jugaron un papel decisivo a la hora de definir las estrategias y delimitar los contenidos ideológico-políticos de los procesos independentistas.

* Sociólogo. Profesor Titular de Sociología y Estructura Social de América Latina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid.



Tras la independencia, el positivismo había empapado todo el debate teórico acerca de la naturaleza de los conflictos y las crisis sociales. Curiosamente la democracia fue el pretexto que sirvió para negarla en su esencia. Considerada no apta para las emergentes sociedades políticas post-independencia se la concebía causante de caos y anarquía. Palabras claves durante todo el siglo XIX y principios de XX. Orden y progreso; la libertad de los modernos. El llamado a la lucha por la democracia como orden social y político será causante de los primeros enfrentamientos sociales y de la posterior crisis del orden oligárquico.

El nacimiento de los partidos demócratas y socialistas, unido a la influencia de la Comuna de París, al igual que las doctrinas socialistas y comunistas, transforman el “tranquilo mundo” del orden oligárquico de fines del siglo XIX.

Sin embargo, la fuerza del positivismo y el debate liberal-conservador siguió siendo el eje central de debate. La sociedad, se dirá, debe generar un orden estable y permanente, jerárquicamente estratificado y políticamente asentado en el gobierno de los buenos y mejores.

Los discursos y escritos políticos de los gobernantes y ensayistas de América Latina de mediados del siglo XIX son exponentes de este pensamiento político hegemónico. José María Mora, Justo Sierra y Benito Juárez en México, Justo Arosema en Panamá, Juan Bautista Alberdi, Domingo F. Sarmiento y José Ingenieros en Argentina, Miguel Lemos

en Brasil, José V. Lastarria, Francisco Bilbao, en Chile, Jose Bustillo en Bolivia, Javier Prado en Perú, Enrique Varona en Cuba, Eugenio María Hostos en Puerto Rico, Floro Costa en Uruguay, son nombres que destacan en este entramado de ensayistas y políticos centrados en demostrar cuál era el mejor camino para evitar caer en el caos y la inestabilidad.¹

La relación entre positivismo y orden social se estrecha. La discusión queda acotada por la pregunta: ¿qué tipo de orden social se concibe como apropiado para el desarrollo de la industria y el progreso? Todas las interpretaciones estuvieron destinadas a dar respuesta a dicho interrogante.

La sociedad, pensada como un cuerpo biológico-social y formado de partes insolubles, conduce a las primeras interpretaciones organicistas de los conflictos y las crisis sociales. Sirvieron de excusa a los gobiernos oligárquicos para reprimir y excluir a la disidencia política en cualquier circunstancia. Si en principio fueron las disidencias liberales y progresistas las más afectadas por dicha concepción, tras las reformas liberales de fines del siglo XIX, los destinatarios de dichas visiones organicistas fueron los demócratas, socialistas, anarquistas y comunistas. La cuestión social emergió. Los conflictos y las crisis adquirieron otra dimensión y una nueva interpretación.

El problema se situaba en el interior de una sociedad cuya elite política se sentía amenazada. La lucha por la democracia, las demandas sociales y de participación por parte de un proletariado urbano, minero y portuario, produjeron las primeras matanzas y represión generalizada del movimiento obrero y sindical en toda América Latina.

La sociedad tomaba cuerpo y también se definían sus contornos, sus actores, los sujetos y los horizontes de futuro. La dirección del cambio social se convierte en objeto de estudio. Con ello se analizan la cuestión social, las movilizaciones políticas y las alternativas de sociedad. Si el primer debate fue definir la sociedad, ahora se piensa: ¿qué tipo de sociedad se quiere? Y esta pregunta acaba afectando necesariamente a la propia concepción de sociedad.

El fin del siglo XIX y los comienzos del XX fueron determinantes. Imperios en lucha y un imperialismo en expansión mostraban un mundo distinto. La discusión se torna clara. Las clases sociales y sus proyectos transforman lo social y lo político en un campo de fuerzas. La naturaleza de la sociedad dejaba de ser orgánica-biológica para ser social y política. Sin embargo, un nuevo organicismo hizo su aparición. La sociología cobraba carta de ciudadanía. Durkheim y Simmel aportaron los elementos comprensivos de un pensamiento global sobre el contenido y alcance de las crisis y los conflictos sociales.

Solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. El uso de un concepto acuñado por Durkheim, anomia, se hace frecuente para identificar un comportamiento social disfuncional. “Pero puesto que no hay nada en el individuo que pueda fijarle un límite, éste debe venirle necesariamente de alguna fuerza exterior a él. Es preciso que un poder regulador desempeñe para las necesidades morales el mismo papel que el organismo para las necesidades físicas. Es decir, que este poder no puede ser más que moral. La sociedad sola, sea directamente y en su conjunto, sea por medio de sus órganos, está en situación de desempeñar este papel moderador; porque ella es el único poder moral superior al individuo, y cuya superioridad acepta éste”.² Una sociedad concebida de manera orgánica funcional y solidaria era el referente para interpretar la dinámica de los conflictos y las crisis sociales y políticas.

Mientras, otra corriente de pensamiento, nacida en el siglo XIX y vinculada a la concepción marxiana, criticó y mantuvo una postura enfrentada a dicha visión orgánica funcional. Su lógica fue establecer como paradigma la inherente existencia de conflictos y crisis en cualquier orden social producido por el *zoum politokoun*. No cabía entender y explicar el origen y causa de los conflictos por comportamientos anómicos o por desviación social. Los conflictos y las crisis eran con-naturales a un orden social fundado en relaciones sociales de explotación.

Los conflictos y las crisis no son concebidos ni analizados catastróficamente; menos aún interpretados como actos disolventes y antisociales. Su fin no consiste en provocar un caos societal. Por el contrario, los conflictos y las crisis sociales son espacios articulados, dependientes de intereses concretos de clases y grupos sociales cuyos proyectos son antagónicos y complementarios. La crisis y los conflictos se transforman en una contradicción dialéctica y lógica. Sobre este suelo se levantan los estudios de los comportamientos políticos, las demandas y las negociaciones sobre los cuales debía transitar la sociedad. Así, surge en Marx un concepto de crisis definido como un tipo concreto de conflicto no resuelto.

“Estas diversas influencias se hacen sentir, ora de manera yuxtapuesta en el espacio, ora de manera yuxtapuesta en el tiempo; el conflicto entre las fuerzas impulsoras antagónicas se desahoga periódicamente mediante crisis. Estas siempre son sólo soluciones violentas momentáneas de las contradicciones existentes, erupciones violentas que restablecen por el momento el equilibrio perturbado”.³

Dos tipos de sociedad, dos concepciones de sus conflictos y las crisis. El pensamiento social latinoamericano está atravesado por este debate. De un lado el pensamiento libe-

ral-conservador asume la visión orgánica-solidaria y funcional. La sociedad es un todo armónico en la cual la solidaridad entre sus partes es necesaria para el normal y buen funcionamiento del sistema. Pensar en el antagonismo y la lucha de clases es pensar en el caos, la anarquía y por ello plantearse la disolución de la sociedad. De otro, el pensamiento socialista y democrático. Para éste, las relaciones sociales de explotación son las causas de la injusticia y falta de derechos sociales y políticos de las clases populares y subalternas. Reivindicar por la fuerza sus derechos es producto de una sociedad antagonica, con clases sociales cuyos intereses son contrapuestos y sus cosmovisiones encontradas. Lo natural-social del orden social es el conflicto y la crisis.

Las primeras décadas del siglo XX, en América Latina, estarán marcadas por esta dualidad a la hora de concebir la sociedad y su funcionamiento. En la primera corriente liberal-conservadora podemos poner como representantes a Laureano Vallenilla Lanz con su obra *El cesarismo democrático* (1919) y al chileno Alberto Edwards con *La fronda aristocrática en Chile* (1928). En la segunda corriente de pensamiento, los peruanos José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre y el brasileño Gilberto Freyre, entre otros.

El siglo XX se inicia con grandes confrontaciones. La revolución mexicana despierta al mundo. El fin del porfiriato y la instauración de un orden social revolucionario en México provoca un gran terremoto político en la región. Los regímenes oligárquicos se ven amenazados por la expansión de las demandas sociales de tierra y libertad y sufragio efectivo y no reelección. La democracia era al mismo tiempo un debate teórico y un proyecto político y social. Su influencia en América Latina afectó a toda una generación de líderes políticos e intelectuales.

La primera guerra mundial, el consiguiente desarrollo del imperialismo y el triunfo de la revolución rusa son acontecimientos que, unidos a la revolución mexicana, dan un giro en los análisis del cambio social en la región. La concepción orgánico-funcional y solidaria de la sociedad va perdiendo su fuerza. Una sociedad en permanente conflicto va ganando espacio, introduciéndose en el conjunto de estudios sobre el carácter social de las estructuras de dominio y explotación en América Latina.

Surgen nuevas interpretaciones sobre la realidad social del continente. Desde la poesía, hasta los ensayos político-filosóficos, todo está imbuido de esta noción de cambio social y de lucha anti-oligárquica. Argentina da el pistoletazo de salida. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba en marzo de 1918 se declaran en huelga. Su proclama va dirigida a: "La juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América".

"Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana"⁴.

Es este llamado a la juventud y hombres libres de Sudamérica lo que sienta las bases para un pensamiento social latinoamericano de carácter anti-imperialista y democrático. La nación latinoamericana cobra carta de identidad. Un argentino, Manuel Ugarte, expresa dicha dimensión continental en su ensayo *La nación latinoamericana* y un mexicano José Vasconcelos propone su *La raza Cósmica*. Haya de la Torre, Mariátegui, Julio Antonio Mella, Alfredo Palacios, José Arciniegas o Gabriela Mistral, entre otros, son nombres asociados con la emergencia de un pensamiento antiimperialista y democrático. La invasión de Estados Unidos a Nicaragua y la lucha de Augusto Sandino son un punto álgido en la concepción teórica y política en el devenir del pensamiento propio latinoamericano.

Una generación formada en las luchas anti-oligárquicas y reformadoras va copando los espacios políticos. Los regímenes oligárquicos sufren rupturas, cambios y reveses. En ocasiones logran sobrevivir y con ello los procesos de cambio se ven truncados. Sin embargo, los ensayos sobre los conflictos y las crisis en la sociedad latinoamericana ya no serán los mismos. La idea de ruptura y cambio social es relevante. La necesidad de reconocimiento político y ampliación de la ciudadanía a las clases obreras y los sectores medios arrinconan las concepciones orgánico-anómicas.

Los años cuarenta se muestran fructíferos en el desarrollo de pensamiento propio latinoamericano. Y a partir de los años cincuenta, las ciencias sociales cobran un gran protagonismo. Sus concepciones teóricas y sus propuestas de análisis terminan por cubrir el espacio del debate y las interpretaciones del cambio social.

Desarrollo y democracia. Modernización y cambio social. Racionalidad política y reformas sociales. Todos estos conceptos copan el espacio teórico y el debate político. Las viejas concepciones organicistas y las visiones más reduccionistas de un marxismo vulgar, ceden paso a interpretaciones más elaboradas de los conflictos y las crisis sociales.

Tras la segunda guerra mundial, la recepción del cuadro teórico metódico de la sociología es ya completa. Definida por Max Weber como una ciencia que pretende compren-

der interpretando la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su conexión de sentido, se convierte en el referente para el estudio de las estructuras sociales y de poder en América Latina.

Los conflictos y las crisis pasan a formar parte de los tipos de dominación, de las formas de racionalidad y de los mecanismos de legitimidad del poder. Una sociología del poder emerge con fuerza. Las teorías de la modernización herederas de la tradición weberiana se alzan triunfantes. Gino Germani y José Medina Echavarría serán los exponentes de esta postura. Para Germani, los años cincuenta del siglo XX están inmersos en un proceso de transición. Definido como un cambio generalizado de estructuras, altera el tipo de acción social, institucionaliza el cambio y facilita un mayor grado de especialización de las instituciones.⁵

Pensar la institucionalización del cambio es pensar la dinámica de los conflictos y las crisis. Ya no son aspectos negativos, anti-sociales. Su existencia puede ser considerada un factor de modernización de las estructuras oligárquicas y tradicionales. Sin embargo, en América Latina, la transición está sometida a vaivenes donde las fuerzas contrarias al cambio social provocan resistencias, generando un fenómeno asincrónico que dificulta la modernización política, económica y social.

El conflicto se adjetiva: institucionalizado o desintegrador. "Si bien es cierto que en ciertas orientaciones el análisis funcional ha olvidado frecuentemente el papel del conflicto, ya sea como parte del funcionamiento normal de la sociedad, ya sea como expresión inevitable o difícilmente evitable del cambio, debe reconocerse que no hay ninguna incompatibilidad intrínseca. Desde nuestro punto de vista debemos reconocer dos tipos de conflictos: a) en primer lugar el conflicto institucionalizado, es decir, el que se halla 'previsto' dentro del marco normativo de la sociedad y que a la vez constituye una expresión de su funcionamiento 'normal' y esperado... b) en segundo lugar, el conflicto que surge en relación a un proceso de cambio. En este sentido el conflicto expresa la existencia de un 'desajuste': desajuste entre normas y circunstancias reales, entre grupos. En todos estos casos el conflicto expresa la típica asincronía con la que suelen verificarse los cambios de estructura y ya sea que se le consideran como una 'consecuencia' del cambio o como una 'causa' del mismo o -más correctamente- como ambas a la vez, el conflicto 'no institucionalizado' supone, por definición, la existencia de desintegración".⁶

Surge un arsenal teórico tendiente a mostrar la necesidad del cambio social y de articular una sociedad en torno a objetivos como la democracia plena y el desarrollo económico y social. Es un período rico en producción de conocimientos sociales acerca de la configuración de las estructuras económicas, políticas, culturales y sociales de América Latina.

La institucionalización del debate producto de la expansión de las ciencias sociales generaliza una concepción no catastrofista de los conflictos y las crisis. Sin embargo, en la esfera de la política contingente, el conflicto internacional postsegunda guerra mundial, entra en ebullición. El triunfo de la revolución cubana y la crisis de los misiles o cohetes a principios de los sesenta agudizan la guerra fría. Las ciencias sociales se ven afectadas por esta situación. La división entre proposiciones de cambio se concreta en alternativas de sociedad. El mundo no sólo se divide en bloques ideológico-políticos enfrentados. Las ciencias sociales, producto de una realidad histórica se ven inmersas en dicha confrontación.

En relación a nuestro interés, la dimensión del análisis teórico de los conflictos y crisis queda delimitada por la dualidad socialismo o capitalismo. El posicionamiento es total. Las ciencias sociales son un campo de conflicto y de crisis permanente. No podría ser de otro modo, forman parte de una realidad social conflictiva y en constante cambio.

Esta circunstancia hizo que en América Latina, a diferencia de Europa, África o Asia, el pensamiento social se encuadrara en dos tendencias teóricas. La sociología de la modernización y la sociología crítica. Ambas crearán escuela. Nombres como Raúl Prebisch, Pablo González Casanova, Celso Furtado, Florestan Fernandes, María da Conceição Tavares, Costa Pinto, Orlando Caputo, Darcy Ribeyro, Leopoldo Zea, Gino Germani, Medina Echavarría, Sergio Bagú, Juan Bosch, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Weffort, Agustín Silva Michelena, Ludovico Silva Michelena, Theotonio do Santos, Tomas A. Vasconi, Aníbal Quijano, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel, Pedro Paz, Carlos Quijano, Gregorio Selser, Pedro Vuskovic Bravo, Hugo Zemelman, Torcuato di Tella, Edelberto Torres Rivas, Carmen Miro, Daniel Camacho, Octavio Ianni, Antonio García, Orlando Fals Borda, René Zabaleta, Agustín Cueva, Ruy Mauro Marini, Ernest Feder, Aldo Ferrer, Suzy Castor, Bania Vambirra, Jorge Graciarena, José Aricó, Matos Mar, Julio Cotler, Amílcar Herrera o Rodolfo Stavenhagen son algunos de los nombres asociados a dichas tendencias.

Las ciencias sociales viven en los años sesenta una época dorada. La teoría de la dependencia y el imperialismo se despliega en múltiples vertientes: estructural, económica-política o ideológica-cultural. Sociología de la explotación, estudios de marginalidad social, colonialismo interno, concepción centro-periferia, desarrollo desigual o subimperialismo son propuestas y categorías de análisis emergentes durante este período para explicar el desarrollo histórico de América Latina.

El triunfo de la Unidad Popular en Chile (1970) abre el campo a nuevas concepciones del cambio social; pero sobretodo a los análisis de transición política del capitalismo al socialismo. Si hasta ahora la vía armada y la revolución eran los ejemplos históricos presentes, la victoria en las ur-

nas de Salvador Allende introducía en la discusión la vía pacífica de transición al socialismo.

Los estudios sobre el conflicto social y las crisis son ya el resultado de enfrentamientos teóricos entre defensores de una modernización capitalista y racionalización política y quienes plantean la superación y la transformación de las estructuras sociales de explotación y dominio capitalista.

El debate encontró dos corrientes de pensamiento armadas teóricamente y cuya fuerza se hizo sentir en los proyectos políticos y sociales del momento. En plena guerra fría, el conflicto político tendió a ser expresión de esa relación directa y antagónica entre clases sociales que pugnan por direccionar el futuro. El golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973 es la primera pieza de dominó que cae. Le siguen Argentina y Uruguay. El Cono Sur se transforma en un conjunto de países dominados por regímenes militares anti-comunistas asentados en la doctrina de la seguridad nacional. Brasil en 1964 inauguró esta etapa, Paraguay con Stroessner era una realidad en 1955. Bolivia con Hugo Banzer y el proceso de involución peruano tras la muerte de Velasco Alvarado completan el cuadro.

Las concepciones organicistas son revividas para fundamentar el nuevo orden social. Una sociedad integrada, sin luchas de clases y solidaria se impone como proyecto político de refundación del orden societal. El carácter diluyente de ideologías consideradas subversivas y foráneas al entorno latinoamericano justifican la persecución y el aniquilamiento de personas. Satanizar el pensamiento crítico y considerarlo causante de violencia es el argumento más sólido de las dictaduras para imponer su nuevo ordenamiento político. En él, el conflicto estaba superado o mejor dicho no estaba permitido.

Un período de impasse en los análisis, motivado por la represión, el cierre de universidades, la muerte y el asesinato caracteriza el fin de los años setenta. El neoliberalismo se impone en estas circunstancias. La lucha por la defensa de los derechos humanos centra la mayoría de los esfuerzos. En esta dinámica, el estudio de los conflictos y las crisis busca comprender cómo fue posible el surgimiento de estos regímenes de excepción de violencia inusitada y con la barbarie como insignia. El debate sobre regímenes burocrático-autoritarios y la caracterización de las dictaduras es el resultado de dicho proceso de reflexión.⁸ Igualmente se profundizan los análisis de clases y sus comportamientos políticos. La obra de Raúl Benítez Zenteno publicada en dos volúmenes por Siglo XXI México *Las Clases sociales en América Latina y Las crisis políticas en América Latina*, después del golpe militar en Chile, es muestra de lo anotado.

A fines de los años setenta, una nueva generación de científicos sociales emerge en esta discusión generando una

dinámica de cambio. La revolución en Nicaragua ayuda a recuperar cierto optimismo perdido. Los años ochenta cuentan con nuevos nombres propios en el debate teórico. Los estudios sobre conflicto y crisis se subentienden como parte de una discusión centrada en señalar los condicionantes necesarios para “transitar” de las dictaduras a las democracias. Nombres como los de Atilio Borón, Luis Maira, Carlos Vilas, Manuel Antonio Garretón, Tomás Moulián, Norbert Lechner, Carlos Portales, Augusto Varas, Fernando Fanzyber, Fernando Calderón, José Joaquín Brunner, Juan Carlos Portantiero, Alejandro Foxley, Lorenzo Meyer, Nestor García Canclini, Ariel Dorfman, Héctor Díaz Polanco, Orlando Núñez, Juan Arancibia, Angel Quinteros, Gerónimo de Sierra o Carlos Delgado son algunos de ellos. Formados a la luz del debate teórico de los años setenta, en los ochenta ocupan un lugar destacado en la literatura sobre conflicto, crisis y transición política en América Latina.

El mantenimiento de las dictaduras y la crisis centroamericana obligó a realizar un esfuerzo de comprensión mayor acerca del tipo y las formas de relación entre Estados Unidos y América Latina. El análisis de las relaciones internacionales, sus conflictos y las crisis en que se ven inmersas las relaciones entre los Estados latinoamericanos y Estados Unidos, son motivo de reflexión y estudio. A fines de los años setenta ya hay una producción importante sobre el sentido y forma de los conflictos y crisis en las relaciones Estados Unidos-América Latina. Una publicación destaca sobre todas. Editada por el Centro de Investigación y Docencia Económica C.I.D.E. en México ve la luz *Cuadernos Semestrales. Estados Unidos: perspectiva latinoamericana*.

Los años ochenta dejan un balance crítico. En el ámbito internacional, la caída de los regímenes políticos en la Europa del Este, el fin de la guerra fría y la profundización de las reformas afincadas en las doctrinas neoliberales. En América Latina se viven las guerras de baja intensidad, además de una invasión y una Guerra. Estados Unidos en Panamá y Gran Bretaña en las Islas Malvinas. En los '90 entrarán en Haití.

Los análisis teóricos sobre conflictos y crisis adquieren un rango destacado. Sin embargo forman parte de estudios específicos sobre transición y cambio social. Y aquí está el gran debate de fines de los años ochenta y principio de los años noventa. Resquebrajadas las dictaduras y cuestionados sus regímenes. El cambio político se entiende como la salida del orden dictatorial. Lo que antes era una visión crítica y enfrentada a las formas políticas del capitalismo en cualquiera de sus formas, ahora se reducía a una crítica parcial a las formas dictatoriales de ejercicio del poder. Su máxima expresión teórica se encuentra en la obra colectiva coordinada por Guillermo O. Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead (compiladores) cuyo título es significati-

vo: *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Editorial Paidós, Buenos Aires, IV volúmenes.

Lo que en los años setenta había constituido un cuerpo más o menos homogéneo de discusión, donde las concepciones teóricas de análisis social coinciden con proyectos de sociedad alternativos, entra en crisis. El llamado a los proyectos anti-capitalistas y democráticos ya no es un referente. Tampoco lo es mayoritariamente la crítica a las relaciones sociales de explotación.

En los años ochenta y profundizada en los noventa, se produce una diáspora en el pensamiento crítico latinoamericano. La visión organicista y funcional sobre el carácter de los conflictos y las crisis societales es asumida como un referente válido. Nuevamente orden y progreso. Gobernabilidad y paz social. Los llamados a mantener las reformas neoliberales del Estado, los procesos de privatización, así como los programas económicos sobre pactos de exclusión fundamentados en el mito del progreso nos hacen pensar en la refundación del poder. Una refundación totalitaria y neo-oligárquica, en la cual plantear un proyecto alternativo puede ser considerado subversivo y desarticulador del cuerpo social.

La llamada a evitar el riesgo de ingobernabilidad y la incertidumbre, se impone como expresión teórica de este pensamiento neo-positivista afincado en los mitos del orden y el progreso. Los conflictos y las crisis deben ser reguladores de un sistema solidario y orgánico, cuyas partes cooperan entre sí para un mismo fin común.

La entrada en el siglo XXI representa por ello un desafío en el ámbito de las ciencias sociales a nivel mundial y desde luego regional. En América Latina su desarrollo hace albergar un proceso de reversión de esta tendencia monista en el análisis social de los conflictos y las crisis societales.

Un nuevo pensamiento crítico, desligado de las viejas polémicas que acompañaron los debates políticos en tiempos de guerra fría, se abre paso. Las nuevas generaciones no sometidas a los dogmatismos teóricos y centradas en demostrar cómo funciona y se reproduce la economía mundo en el marco del actual proceso de internacionalización del capital, es el aliciente para revertir la situación.

La incorporación de elementos como la destrucción ecológica, el medio ambiente, los problemas de género, étnicos y los derivados de las actuales condiciones de colonialismo global y explotación global cambian completamente el estudio y la forma que asumen los conflictos y las crisis societales. También altera la configuración de los proyectos democráticos y de cambio social en la región. Por ello, terminaría señalando que la acción de recuperar la democracia emprendida por el Ejército Zapatista de Libera-

ción Nacional en México expresa como lo indica Pablo González Casanova, no la última revolución del siglo XX, sino el camino que han de seguir las revoluciones latinoamericanas en el siglo XXI.

“La contribución del EZLN quiere ser muy modesta y es también muy ambiciosa: defender por las armas, en la Selva Lacandona y en los Montes Azules, la tierra, la libertad y la dignidad que los alzados no pudieron defender de otra manera, e iniciar un cambio de conciencia del pueblo de Chiapas y de México para que con la democracia y la paz se logren objetivos de libertad y justicia no sólo en las nubes, ni sólo en la Selva, ni sólo en Chiapas, sino en el país. El EZLN recuerda la bella imagen de la mariposa que desata una tormenta, y la más exacta de los grandes movimientos que parecen empezar desde cero y que se vuelven universales. Implica una negociación que no sea ‘tranza’ y una revolución que ponga un alto a la violencia contra los pueblos indios, para abrir el paso a una democracia con libertad y justicia, con dignidad y autonomía. El proyecto se formula en dialectos particulares que se universalizan y en lenguajes universales que florecen entre mexicanos, tzeltales, tzotziles, choles, zoques y tojobales. Tal vez se realice. Pero en todo caso, sería una tragedia para la humanidad que no se realizara”.⁹

Notas

1 La mejor síntesis se encuentra en las publicaciones de la Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela. Entre sus títulos destacamos cuatro: *El pensamiento conservador (1815-1898)*; *El pensamiento positivista* (Volúmenes I y II); *El pensamiento político de la emancipación* (Volúmenes I y II) y *Pensamiento de la Ilustración*.

2 DURKHEIM, Emilio. *El suicidio*. Editorial AKAL, Madrid 1976, pág. 265.

3 MARX, Karl. *El Capital. Libro Tercero*, Volumen 6. Editorial Siglo XXI, España, 1976, pág. 320.

4 CUNEO, Dardo. *La reforma universitaria. (1918-1930)*. Editorial Ayacucho, Venezuela, 1978, pág. 3.

5 Consúltese las obras de Gino Germani: *Sociología de la Modernización*. Editorial PAIDOS, Buenos Aires 1971; y *Política y Sociedad en una época de transición*. Editorial PAIDOS, Buenos Aires, 1979. Igualmente de José Medina Echavarría: *Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico en América Latina*. Editorial EDUCA, San José, Costa Rica, 1980.

6 GERMANI, Gino. *Política y Sociedad en una época de transición*. Editorial PAIDOS, Buenos Aires, 1979, p. 59.

7 Esta selección de nombres desde luego es ilustrativa, no es sistemática y tiene como objetivo mostrar el gran desarrollo de las ciencias sociales, así como de sus escuelas de pensamiento. Existen múltiples antologías de pensamiento social latinoamericano donde se recoge de manera general autores y debates. Sin embargo para nuestros fines recomendamos la lectura del texto de SOLARI, Aldo, FRANCO, Rolando y JUTKOWITZ, Joel: *Teoría, acción social y desarrollo en América Latina*. Editorial Siglo XXI, México.

8 Este debate se puede seguir en los siguientes textos: CAVALLAROJAS, Antonio (Comp). *Geopolítica y seguridad nacional en América*. UNAM, México, 1979. Autores Varios. *El control político en el cono sur*. Textos de ILDIS. Editorial Siglo XXI, México, 1978. MATTELART, Armand y Michèle; *Comunicación e ideologías de la seguridad*. Cuadernos Anagrama, Barcelona, 1978. También el texto promisorio de O'DONNELL, Guillermo. *Modernización y autoritarismo*. Editorial PAIDOS, Buenos Aires, 1972, (existen múltiples trabajos en la década de los años ochenta. Pero se trata de visualizar el sentido histórico de los debates y su línea argumental. Los estudios compilados por Augusto Varas, destacan en los años ochenta).

9 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. *Causas de la rebelión en Chiapas*. Revista Política y Sociedad No. 16-17, Madrid, 1995, págs. 83-93.

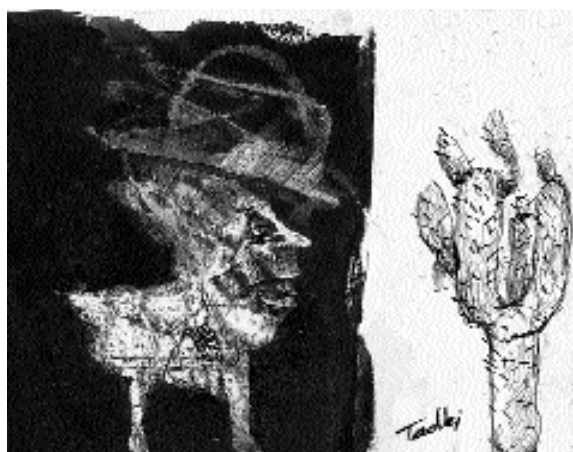
Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina¹

Por Anibal Quijano*

Entre los elementos que caracterizan el actual proceso de cambio de las sociedades latinoamericanas, uno de los más importantes, por sus repercusiones inmediatas y por sus implicaciones a más largo plazo, es la tendencia del campesinado de algunos países a diferenciarse y a organizarse como un sector específico de intereses sociales, que se manifiesta en la emergencia de vigorosos movimientos político-sociales, varios de los cuales han logrado alcanzar un nivel considerable de desarrollo y han ejercido una profunda influencia sobre sus respectivas sociedades.

Este fenómeno configura un cuadro nuevo de los conflictos sociales en Latinoamérica, los cuales ingresan, de esa manera, en una nueva fase que se caracteriza ya por su extrema agudización. En la medida en que, en sus niveles desarrollados, estos movimientos campesinos se vinculan, en creciente amplitud, a movimientos políticos e ideológicos de carácter revolucionario, se va produciendo una aceleración violenta del ritmo del proceso de cambio global y, lo que es todavía más significativo, el fortalecimiento de alternativas y soluciones para el problema del cambio de estas sociedades, distintas de la mera “modernización” de las actuales estructuras.

Mientras el campesinado de estos países era una masa dispersa y aislada, atomizada en lealtades localistas, a pesar de sus ocasionales y precarios intentos de rebelión, podía ser movilizad solamente para fines distintos de los suyos y aún en aras de intereses directamente enemigos. En la actualidad, por el contrario, una gran parte del campesinado parece estar desarrollando la capacidad de identificar sus propios intereses, de construir estructuras organizativas para la defensa de ellos, de distinguir los factores fundamen-



tales incorporados a su situación social y, consecuentemente, los elementos de orientación que le permiten distinguir entre los intereses sociales y políticos directamente enemigos y aquellos con los que se puede establecer un frente común de lucha para objetivos inmediatos. Aparecen así, a través de organizaciones y movimientos independientes, o dependientes de movimientos políticos más amplios en cuyos programas se recogen algunos de los objetivos más inmediatos del campesinado, participando en la presión por reformas y cambios y aún en la disputa por el poder global de la sociedad.

Es cierto que todo esto no ocurre en todos los países latinoamericanos donde existe una vasta población campesina, y que los movimientos existentes divergen mucho entre sí, en términos de sus objetivos, de sus patrones de organización, de sus métodos de acción, de su liderazgo, de sus modelos de interpretación de su situación, y de sus niveles y formas de participación política. Todo eso, no obstante, no contradice mayormente la naturaleza y la dirección de la tendencia en sus más vastos alcances.

Las movilizaciones campesinas no son, desde luego, un fenómeno nuevo en Latinoamérica. En muchos de nuestros países, particularmente en aquellos donde la población indígena formaba la capa más numerosa del campesinado, se

* Actualmente Director del Centro de Investigaciones Sociales (CEIS) de Lima, Perú y Profesor en el departamento de Sociología de la Universidad de Bringhamton. Dirige la revista “Anuario Mariáteghiano” publicada en Lima.

han registrado revueltas más o menos importantes en todos los períodos de la historia poscolonial. Sin embargo, descontado el temprano ejemplo mexicano², tales revueltas fueron siempre esporádicas, efímeras, inorgánicas, localmente aisladas, y, en general, fueron conducidas por modelos de interpretación que no permitían asir los factores reales de la situación social, y se revistieron, por lo mismo, de formas tradicionales, persiguiendo finalidades que sólo indirectamente expresaban las necesidades y los intereses campesinos.

Es solamente en los últimos veinte años que se asiste al desarrollo de movimientos campesinos generalizados, duraderos, con tendencias a una coordinación que sobrepasa las lealtades localistas, desarrollando normas de conciencia social más adecuadas para interpretar la naturaleza real de su situación social, canalizándose a través de formas organizativas modernas o utilizando formas tradicionales para objetivos distintos. En este sentido, los actuales movimientos campesinos son un fenómeno nuevo en la historia social latinoamericana, y es desde esta perspectiva, por lo tanto, como deben ser enfocados.

■ Dos etapas históricas de los movimientos campesinos en Latinoamérica

172

No se conocen todavía suficientes y adecuados estudios de las luchas sociales de los campesinos latinoamericanos, como para tener una idea clara y válida de sus distintas manifestaciones, y que pudieran servir de base a una periodificación de sus secuencias históricas más importantes.²

El material disponible no permite ninguna generalización definitiva acerca de la naturaleza y alcance de los objetivos manifestados de cada uno de los movimientos. Parece, sin embargo, posible señalar en primer término la división relativamente clara de las luchas sociales campesinas en Latinoamérica, en dos períodos mayores:

1. El período prepolítico.
2. El período de la politización.

Los movimientos prepolíticos no se propusieron de manera directa la modificación de la estructura profunda de poder en la sociedad en que participaban, por la eliminación o modificación de los factores económicos, sociales y políticos básicos que determinaban la situación social del campesinado. En su generalidad, persiguieron propósitos difusamente discernibles o finalidades concretas vinculados con la situación real sólo de manera completamente segmentaria, tangencial, o indirectamente y por implicación.

■ Formas concretas de los movimientos prepolíticos

Las numerosas formas concretas que adoptaron estos movimientos del campesinado, que se registran en la literatura histórica y narrativa, especialmente, pueden ser agrupadas en las siguientes categorías principales:

1. Movimientos mesiánicos.
2. Bandolerismo social.
3. Movimientos racistas.
4. Movimientos agraristas tradicionales o incipientes.

Por movimientos mesiánicos se entiende aquí aquellos que persiguen una modificación de las relaciones entre el hombre y la divinidad o lo sagrado en general, que se guían, por lo mismo, según modelos religiosos de percepción de la realidad social, se expresan en símbolos religiosos, aparejan una conducta externamente mística, se organizan en forma de secta o de iglesia aunque de manera poco estructurada, y legitiman su liderazgo por la santificación o la divinización.

El bandolerismo social, en cambio, persigue predominantemente finalidades punitivas. Apesar de tener un claro sentido de protesta social por la injusticia de los poderosos, no llega a tener una "ideología" amplia, salvo la primaria de rebelión contra el abuso y la opresión exacerbada. Excepcionalmente llega a tener formas rudimentarias de organización para pequeños grupos, y su método de acción es la violencia física abierta, por medio de acciones individuales o de pequeños grupos. Su liderazgo se legitima, por lo tanto, por la capacidad de cumplir con éxito esta clase de acciones en un grado mayor que los demás. No se propone, pues, la modificación del orden de cosas sino en una escala individual. Se diferencia de las formas comunes de bandolerismo, porque su acción va dirigida predominantemente contra los poderosos, se apoya en la adhesión de la masa campesina, y las acciones punitivas tienen el sentido de la defensa de los campesinos³.

Los movimientos racistas se definen como movimientos de rebelión contra la dominación de grupos de origen étnico diferente. La finalidad perseguida supone, por eso, no un cambio de la naturaleza de la relación social (la dominación), sino la eliminación de un grupo determinado de dominadores, no en tanto que dominadores sino en tanto que dominadores de un grupo étnico distinto. Más que en ninguno de los otros movimientos campesinos, la estructura organizativa y de liderazgo se rige por los patrones que mandan la estructura tradicional del parentesco y de la "casta".

Finalmente, los movimientos agraristas tradicionales o incipientes se caracterizan por perseguir finalidades de reforma social, pero circunscritas a aspectos muy limitados y

no fundamentales. No se propone un cambio de la situación social del campesinado, sino su mejoramiento en ciertos aspectos superficiales, cuya condición concreta puede variar en cada caso concreto. Entre estos movimientos aparecen en forma rudimentaria elementos de conciencia social que permiten distinguir -aún en su forma primaria- la naturaleza real de los factores en juego, pero estos elementos no llegan a ser predominantes, no son consistentes con los demás elementos de la conciencia social, que en su contexto se guía por modelos feudales de interpretación de la situación.

El bandolerismo social, no obstante su carencia de un modelo organizado de percepción de la realidad social, su inorganicidad y su aislamiento, contiene ya un germen de abandono de las ideologías feudal-religiosas. En un nivel totalmente primario, supone un comienzo de secularización de la acción social. El bandolerismo latinoamericano del campesinado ha estado siempre enderezado contra la dominación y el abuso de los terratenientes, y eso podría mostrar un incipiente proceso de identificación del enemigo social más importante.

Con el agrarismo tradicional o incipiente, las luchas campesinas han sobrepasado de manera significativa el nivel de los movimientos anteriores en lo que se refiere al desarrollo de una conciencia social realista. Colocada en un contexto global enteramente tradicional, esta forma no podía desarrollarse, salvo circunstancias excepcionales, en la vida política nacional. Sin embargo, es a partir de esta forma que se desarrollan los movimientos agraristas modernos.

Las formas prepolíticas de la movilización campesina parecen haber sido las predominantes en América Latina, hasta aproximadamente los años 30 de este siglo, época en que se inicia el desarrollo de un nuevo tipo de conciencia social entre los campesinos y, en consecuencia, nuevas formas de movilización⁵.

■ La politización de los movimientos campesinos

A partir de los años 30 de este siglo, las movilizaciones campesinas en Latinoamérica difieren notablemente de las anteriores, respecto de cada uno de los criterios analíticos propuestos. La configuración resultante permite señalar la politización como la tendencia dominante.

La noción de "politización" se usa aquí para caracterizar la tendencia de todo movimiento social cuyos objetivos manifiestos, modelos ideológicos, sistemas de organización y liderazgo y métodos de acción están enderezados a la modificación parcial o total de los aspectos básicos de la estructura de poder social en la cual emergen, por la modificación de los factores económicos, sociales y políticos fun-

damentales que están implicados en la situación. Desde este punto de vista, no hay mucho margen para dudar de que la tendencia principal que se ha venido desarrollando entre los movimientos campesinos a partir de los años 30, es la politización.

■ Formas predominantes de la politización de los movimientos campesinos

La información disponible, por el momento, permite agrupar a los movimientos campesinos de este período en tres tipos principales:

1. Agrarismo reformista.
2. Bandolerismo político
3. Agrarismo revolucionario.

Esta clasificación, desafortunadamente, ha sido elaborada contando con material empírico que no es, sino en muy pequeña parte, el resultado de investigaciones sistemáticas con propósitos comparativos y, por lo mismo, se ofrece aquí con finalidades principalmente heurísticas.

El agrarismo reformista. Es, probablemente, la tendencia más ampliamente generalizada entre el campesinado que toma parte en las movilizaciones campesinas, a partir de los años 30.

Bajo esta denominación se incluye a todos los movimientos campesinos de Latinoamérica que se proponen, como objetivo de mayor alcance, la modificación de algunos aspectos parciales de la situación social en que participa el campesinado y la eliminación de algunos de los efectos más opresivos de la estructura de poder imperante en la subsociedad campesina, sin poner en cuestión la naturaleza más profunda del sistema de dominación social. En diferentes momentos y en diferentes países, esta tendencia se ha desarrollado siguiendo dos *variantes principales*. La primera, probablemente anterior en el proceso de desarrollo de la tendencia, consistía en la movilización del campesinado con la finalidad específica de modificar algunos aspectos, muy negativos para los trabajadores campesinos, de las relaciones de trabajo. La forma organizativa característica de esta variante fue tomada de la organización de los trabajadores urbanos: el sindicato. Congruentemente, el método de acción predominante es la huelga.

Esta parece haber sido la variante más extendida del agrarismo reformista hasta antes de los años 50. Sus principales manifestaciones se registraron en Venezuela, Bolivia, Perú y, en forma algo menos desarrollada, en Chile, Colombia, Brasil y los países centroamericanos, particularmente El Salvador y Guatemala⁶. Notablemente en su generalidad,

estos movimientos campesinos se desarrollaron por la sistemática acción agitadora de los partidos políticos reformistas que se desarrollaron en la misma época, y debido a eso, fundamentalmente, se convirtieron posteriormente en efectivos sostenes políticos de la acción de estos partidos. Los casos más notables, sin duda, son los del Perú y Venezuela, donde partidos políticos reformistas de similares características, como el Apra y Acción Democrática, llevaron a cabo lo sustancial del trabajo de agitación y de orientación de la sindicalización campesina y, posteriormente, obtuvieron el apoyo político constante de las organizaciones campesinas que contribuyeron a desarrollar.

La segunda variante del agrarismo reformista, aunque en algunos países se produjo ya coetáneamente con la anterior, parece ser más característica de los años recientes. Es decir, ya no se presenta como un elemento relativamente aislado entre los elementos de la variante anterior, y pasa a ser la tendencia más pronunciada del agrarismo reformista actual y, por lo tanto, parece ser la tendencia más generalizada en los movimientos campesinos de hoy. Consiste esta variante en una ampliación de los alcances de los objetivos anteriores y en una profundización de la naturaleza de los cambios implicados en esos objetivos. En la nueva situación, el campesinado ya no se contiene en la consecución de mejoramientos en el régimen de trabajo, el alza de salarios y otros beneficios sociales que levanten el nivel general de la vida del trabajador campesino; mucho más característicamente se propone la modificación de los sistemas de tenencia de la tierra, aunque, en la mayoría de los casos, los otros aspectos fundamentales de la estructura más profunda de poder en la subsociedad campesina no son puestos en cuestión. Estrictamente, ésta es la manifestación más característica del agrarismo reformista contemporáneo. Este es el caso característico de las “comunidades indígenas” en el Perú⁷, de las “ligas camponesas” en el Brasil⁸ o de los sindicatos campesinos emergidos en el movimiento campesino peruano, a partir de los acontecimientos del Valle de la Convención en el Cuzco⁹.

Mientras que en la variante anterior las capas sociales del campesinado que participaban se reclutaban principal o casi exclusivamente del proletariado rural, en la nueva variante las capas participantes son mucho más heterogéneas y provienen de la práctica totalidad de los sectores sociales que forman la población rural latinoamericana, incluyendo grupos que tienen actividades y roles no-agrícolas, como pequeños comerciantes, artesanos, estudiantes, etcétera.

En sus niveles más desarrollados, esta variante tiende a confundirse con la tendencia revolucionaria de los movimientos campesinos, no solamente porque sus métodos de acción, su tipo de organización y sus finalidades de cambio pueden eventualmente conducirla a eso, sino, especialmen-

te, porque comienza a participar en un modelo ideológico totalizador para interpretar la situación social del campesino. Este tipo de agrarismo reformista ha sido, y todavía es, el característico de la mayor parte de las movilizaciones campesinas recientes, en el Brasil, en el Perú, y de manera todavía incipiente y ambigua, en Chile en el curso de los dos últimos años.

El agrarismo revolucionario. El agrarismo revolucionario es, según todos los indicios, una tendencia relativamente última en el desarrollo de los movimientos campesinos, que, en la mayor parte de los casos, no se diferencia aún con toda nitidez del agrarismo reformista más radical, y se presenta más bien como una profundización y una ampliación de la naturaleza y de los alcances de los cambios implicados en las finalidades de la movilización campesina.

En lo fundamental, esta tendencia puede ser caracterizada por los siguientes elementos.

1. Los propósitos y objetivos perseguidos ya no se limitan a la modificación de las formas de la tenencia de la tierra que caracterizan al agrarismo reformista de la variante más radical, sino que se amplían hasta la modificación sustantiva de la entera estructura de poder imperante en la subsociedad campesina. No es solamente la redistribución de la propiedad de la tierra lo que se persigue, sino la redistribución de la autoridad y del prestigio social.
2. Ello implica que la concepción del problema de la situación del campesinado, el modelo de interpretación de la situación social, incorpora la totalidad de los factores económicos, sociales y políticos fundamentales, como responsables de la situación campesina.
3. Los métodos de organización y de liderazgo tienden a ser *sui generis*, arreglados a las necesidades de la acción en un contexto social y político concreto, o una reinterpretación de los modelos organizativos tradicionales.
4. Los métodos de acción son en todos los casos directos e ilegales. Incluyen la toma de la tierra y la eliminación social o física de los terratenientes, la sustitución del aparato político local o el levantamiento de un poder paralelo y, finalmente, la acción armada de defensa o de represalia contra la reacción terrateniente o estatal.

Esta tendencia parece haber aparecido aisladamente al mismo tiempo que el desarrollo del agrarismo reformista tradicional, en algunos países. En Colombia el experimento de las “Repúblicas Rojas”, de las cuales Viotá es el caso más significativo, puede ser incluido en esta categoría, a pe-

sar de su posterior rutinización y degeneración. Lo mismo, según algunos autores, parece haber ocurrido en la misma época en El Salvador, aunque los datos acerca de este caso no son suficientemente precisos¹⁰.

Sin embargo, es en los años recientes cuando esta tendencia aparece de manera más caracterizada y en mayor grado de generalización. El caso más desarrollado es el del movimiento sindical y miliciano del campesinado boliviano después de la revolución de 1952, en un contexto político largamente favorable a su desarrollo y, sobre todo al comienzo, en dependencia del partido político que asumió el poder con la revolución¹¹. En situaciones diferentes, los casos más notables son los del movimiento campesino de los valles de la Convención y de Lares, en el Cuzco, Perú, durante la época del liderazgo de Hugo Blanco, las actuales “repúblicas rojas” de Colombia, como desarrollo y modificación del bandolerismo político campesino en ese país. De manera menos clara y diferenciada, los alcances mayores de las acciones de las “ligas camponesas” brasileñas podrían también incluirse, aunque en nivel inferior e incipiente, en esta tendencia¹¹.

El bandolerismo político. Hasta el momento, la única tendencia caracterizable bajo esta denominación ha aparecido en un solo país, Colombia, a partir de 1948.

La lucha armada en el campo colombiano no aparece por primera vez en esa fecha. Es un fenómeno de muy larga trayectoria. En ese país existieron, mucho antes, guerrillas campesinas conducidas principalmente por el Partido Liberal, y en algunos sectores por el Partido Comunista. Pero es solamente a partir de aquel año cuando sucesos políticos bien conocidos llevaron la lucha armada en el campo a un nivel de violencia inigualado antes.

El estudio de este movimiento tropieza con una dificultad muy importante. Una prolongada y sistemática propaganda oficial ha logrado fijar en la percepción general de dentro y de fuera del país, la idea de que el carácter único de la rebeldía campesina colombiana es el bandolerismo despojado de todo propósito social o político, y cuya única finalidad es la violencia por la violencia misma. Aún los estudios llevados a cabo por hombres de ciencias sociales han perseguido principalmente información sobre las formas, el grado y el costo de la violencia, la determinación de las responsabilidades originales sobre su desencadenamiento, con un afán más bien ético.

Es muy interesante que el término mismo usado por la propaganda oficial y los analistas colombianos para denominar la lucha campesina, es el de “violencia” sin más calificativos. Término equívoco e intencionado, que sólo resalta uno de los elementos del problema, escamotea el conte-

nido y las implicaciones sociales y políticas de la lucha, que rezuma un vago efluvio metafísico y que retrata mucho de la condición tradicional de la conciencia social dominante.

Sin embargo, existen algunos indicios que obligan a desconfiar de la veracidad de esta única caracterización de la conducta campesina colombiana. De una parte, ya mucho antes, junto a las guerrillas liberales que reclutaban al campesinado en la lucha contra los sectores más reaccionarios de la clase terrateniente colombiana, se habían producido intentos aislados de elevar el contenido social y político de la lucha campesina, independizarla políticamente de la influencia del liberalismo terrateniente y de la hegemonía de modelos feudal-religiosos de interpretación de la situación social del campesinado. Los elementos de agrarismo revolucionario que se desarrollaron de esa manera culminaron con efímero éxito en la organización de las “repúblicas rojas”, de las cuales el caso más destacado es el de Viotá.

La fase posterior a 1948 ha sido explicada por la generalidad de sus estudiosos como originada en las rivalidades políticas de los dos partidos tradicionales de Colombia, y, por lo tanto, toda su primera época debe ser correctamente caracterizada como una guerra civil entre conservadores y liberales, en la cual el contingente de población campesina colocado en ambos bandos participaba al margen de sus propios intereses, puesto que las direcciones políticas de ambos bandos correspondían a dos fracciones de la misma clase dominante, enemiga en su conjunto de los intereses del grueso de la población campesina¹³. Posteriormente, sin embargo, la participación campesina en la lucha sobrepasa las finalidades perseguidas por las direcciones políticas enfrentadas en la guerra civil hasta alcanzar a afectar los propios intereses de la clase terrateniente como tal, al margen de sus ocasionales rivalidades políticas. El nivel de violencia de la lucha termina afectando por igual a los terratenientes de ambos bandos, de manera que es la estructura misma de poder social en el campo que se ve amenazada, independientemente de si el campesinado reclutado en cualquiera de los bandos se diera cuenta o no, o persiguiera o no consciente o intuitivamente esta finalidad.

A partir de entonces, es el ejército colombiano que se hace cargo de la situación, en su gran parte. El carácter de la guerra civil se modifica en forma notable, aunque no aún radicalmente. En adelante, la guerra civil se lleva a cabo cada vez más entre las bandas campesinas armadas, de ambos bandos políticos por igual, contra la represalia del ejército. Es en este momento que comienza un nuevo proceso, lento e irregular. El campesinado militante de ambos bandos se encuentra cada vez más empujado a una necesidad común: la defensa contra el enemigo común, el ejército. No desaparece, no obstante, la rivalidad política entre los campesinos sino de manera gradual e incoherente, a medida que las cir-

cunstancias de la lucha contra el ejército y su sistema increíblemente cruel de represalia obligan a los campesinos de ambos bandos a reconocer una situación común y un interés común de defensa.

Al presente, este nuevo nivel del proceso parece ser ya el predominante. Las bandas armadas de campesinos o se van disolviendo o se van convirtiendo en bandas guerrilleras con finalidades político-sociales bien definidas, que sobrepasan ya el marco de la subsociedad campesina colombiana: la transformación radical del orden social nacional, comenzando por su sector rural.

De este modo, el proceso de la participación campesina en la “violencia” colombiana parece haber atravesado tres momentos principales:

1. Participación dependiente, al margen de sus intereses sociales y en servicio de intereses enemigos.
2. Bandolerismo político-social, en defensa contra la represalia militar y terrateniente, con progresivo abandono de la dependencia política tradicional.
3. Guerrillerismo revolucionario, en defensa de sus propios intereses y en conexión con movimientos político-ideológicos revolucionarios¹⁴.

La caracterización precedente no implica tampoco negar que, en efecto, uno de los rasgos más difundidos de la movilización campesina en Colombia, sea el bandolerismo puro y simple, la violencia por la violencia misma. No hay ninguna razón para liberar a los terratenientes colombianos, o a los miembros de las tropas punitivas del ejército colombiano, de la misma acusación de bandolerismo, si es que por tal se entiende -como parece, en la propaganda oficial- la participación en actos de violencia de extrema perversión. La crueldad y la perversidad no son, de ninguna manera, patrimonio de los rebeldes campesinos, y parece mucho más que en el segundo caso, que la exacerbación de la violencia es la respuesta a la violencia represiva del ejército y de los terratenientes, y, en todo caso, resultado de la condición básica de la situación social tradicional del campesinado colombiano.

■ Patrones generales de formación y desarrollo de los movimientos campesinos actuales

A pesar de que para cada forma concreta de la movilización campesina actual en Latinoamérica existen formas y patrones privativos de emergencia y desarrollo, es posible abstraer algunos patrones generales a todos ellos.

Parece, en primer término, que se puede establecer tres fases principales en el proceso de desarrollo de estos movimientos:

1. La agitación y la dependencia urbana.
2. La generalización y la relativa autonomización de lo urbano.
3. La coordinación y la centralización de las organizaciones.

La agitación urbana: Mientras que la práctica totalidad de las movilizaciones campesinas tradicionales fue el resultado de la propia iniciativa y la acción campesina en todo momento, los movimientos modernos de este siglo se originan por la acción de agentes urbanos o urbanizados, de agitación y de organización.

La generalización y la autonomización relativa: La segunda fase en el desarrollo de los movimientos campesinos se caracteriza por la extensión geográfica y social de la participación de la población campesina en la movilización y el desarrollo de una esfera relativamente autónoma de iniciativa y de acción campesina, y, consecuentemente, la emergencia de un liderazgo, en gran parte independiente, de afiliación y de vinculación político-partidaria.

La coordinación y la centralización de las organizaciones: De hecho, los intentos de coordinación y de centralización están presentes desde los primeros momentos de la emergencia de la movilización campesina. Sin embargo, la plena actuación de la tendencia se manifiesta realmente sólo a partir de la fase de generalización del movimiento.

Como resultado de esta tendencia a la coordinación y a la centralización de las organizaciones campesinas, han surgido en los países donde existen movimientos de muy alto desarrollo, como Colombia, Bolivia, Brasil y el Perú, diversas formas organizativas de centralización: federaciones sindicales, federaciones de comunidades campesinas, consejos de “ligas camponesas”, comandos milicianos y comandos guerrilleros.

De esta manera, la antes atomizada y dispersa masa campesina de nuestras sociedades ha ingresado plenamente en una época de cohesión organizada, es capaz de mantener una activa red de organizaciones locales que se coordinan y se centralizan en una estructura nacional o regionalmente jerarquizada, y hace su ingreso en la participación diferenciada en el cuadro de conflictos sociales latinoamericanos.

Así, la organicidad, la modernización de las organizaciones y de las formas de lucha, la generalización a escala nacional, la coordinación y la centralización, su carácter no-espontáneo, la ruptura creciente con ideologías de tipo feudal-religioso, la politización creciente de sus niveles más desarrollados y la institucionalización de una nueva estructura de poder que compite con la estructura tradicional de poder en el campo,

pueden ser destacados como los elementos y patrones dominantes de los movimientos campesinos contemporáneos en Latinoamérica.

■ El significado sociológico de la movilización campesina contemporánea

La movilización campesina contemporánea no ocurre de manera difusa, dispersa e inorgánica, como era el caso de las esporádicas revueltas locales contra los terratenientes o las autoridades locales, en que una masa desorganizada se enfrentaba en la lucha. Ahora se asiste a la proliferación de diversas formas organizativas, cuya más importante característica es la tendencia a la modernización y a la estructuración más formalizada.

Esta emergencia del campesinado como un sector específico de intereses sociales, diferenciado y organizado, dentro del conjunto de sectores diferenciados de interés en las sociedades latinoamericanas, implica un problema de gran interés en la teoría sociológica. Bajo las presentes condiciones de las sociedades nacionales latinoamericanas donde se desarrolla este proceso, no parece correcto pensar en la posibilidad de emergencia de estamentos o castas, ni sería apropiado considerar como un grupo de *status* el conjunto de la población campesina, con su diversa composición socioeconómica, cultural, étnica, que participa en el proceso.

Desde este punto de vista, el marco de referencia más apropiado para dar cuenta de la significación sociológica de este proceso es la teoría de las clases sociales y de la lucha de clases, derivada de Marx.

Con arreglo a este enfoque, puede decirse que el actual proceso que atraviesa el campesinado de algunos de los países latinoamericanos consiste en un proceso de “clasificación” del campesinado, esto es, su diferenciación y organización como clase social entre las demás. En términos de Marx, este proceso consiste en el pasaje de las poblaciones campesinas de una situación de clase en sí a una clase para sí. Los elementos característicos de este pasaje son la diferenciación y la organización de intereses, o, en otros términos, el desarrollo de una conciencia social de grupo, fundada en modelos de interpretación de la realidad social sobre la base de factores efectivos que controlan la situación, y la generación de una estructura organizada de expresión y de instrumentación de los intereses sociales del grupo en la sociedad.

La verificación de esta tendencia sobrepasa en interés y significación las finalidades concretas de análisis de los movimientos campesinos. Sus implicaciones de mayor alcance recaen sobre la teoría misma de las clases sociales y sobre la teoría del cambio social vinculada a ella.

De una parte, es bien sabido que para el propio Marx¹⁵ no eran claras las posibilidades del campesinado, de desarrollarse hasta el nivel de una clase social, teniendo en cuenta su forma de producción o su forma de participación en el proceso de producción, su aislamiento social y cultural, su dispersión en lealtades localistas, la carencia de un sistema de comunicaciones que permitiera generalizar a todas las capas y subgrupos locales los elementos básicos de una conciencia social de grupo, sobre cuya base pudiera desarrollarse un sistema organizado de expresión e instrumentación de los intereses del campesinado.

Por eso mismo, resulta de gran interés tratar de sacar a luz los factores y circunstancias nuevas que han permitido al campesinado sobrepasar estas limitaciones e ingresar en una tendencia de *clasificación*.

Lo que da a un sector determinado de la población de una sociedad su carácter de clase, no es solamente su situación frente a los medios de producción, un tipo de participación en el proceso productivo, a través de ciertos roles genéricos y de ciertos roles específicos, su mayor o menor participación en el acceso a los bienes de todo orden que la sociedad produce y obtiene. Esto configura únicamente una situación social que contiene un conjunto de elementos que se denominan intereses de clase. Sólo cuando la población sometida a esta situación ha desarrollado la capacidad de percibirse como grupo sometido a una situación común y, por lo tanto, con una comunidad de intereses sociales, y ha aprendido a generar sistemas de coordinación y organización de tales intereses generales de grupo, y a subordinar en los enfrentamientos de grupo los intereses de cada uno de sus múltiples y heterogéneos subgrupos, puede hablarse del proceso de una clase como tal.

Es decir, cuando se ha desarrollado entre una población sometida a una determinada situación en la sociedad la conciencia de que constituye un grupo distinto de los demás por su situación social, de que ciertos intereses que tienen sus miembros son intereses comunes a todo el grupo, y cuando surge una instrumentación organizada para estos intereses y los objetivos que de ellos se derivan, existe un proceso de clase. El desarrollo de este proceso está en íntima relación con el enfrentamiento entre el grupo y los demás, en la lucha por sus propios objetivos de grupo. Es en la lucha donde el grupo aprende a distinguir cuáles son los otros grupos de interés en la sociedad, cuáles de ellos son los enemigos más inmediatos y directos, cuáles los intereses cuya alianza puede ser posible o deseable para la finalidad del grupo. Es en ese proceso que aprende a percibirse como grupo, a diferenciar sus intereses y a generar sistemas de organización y coordinación de sus intereses, a desarrollar sistemas de comunicación y de interacción, instituciones normativas de esta interacción de grupo, símbolos comunes

e instituciones culturales. El nivel final de su desarrollo como clase es su participación diferenciada en la lucha por el poder total de la sociedad.

Desde luego, el campesinado latinoamericano que participa en estos movimientos es una población tremendamente heterogénea económico-social, cultural, étnica, regional y nacionalmente. Sin embargo, esta condición no altera el fenómeno. Los miembros de una población sometida a una situación social común forman una clase solamente en relación a otros sectores de intereses sociales definidos, con los cuales mantienen una relación conflictiva. Los miembros del campesinado de estos países constituyen una clase frente a un enemigo común, que es la clase terrateniente, por encima de la heterogeneidad de los menores intereses sociales de sus diversos subgrupos en relación a esta lucha.

Por lo demás, es bueno recordar que lo que aquí se sostiene es la existencia de una tendencia, un proceso que gravita en una dirección posible, sin que por el momento se haga ninguna anticipación de sus resultados y de sus posibilidades de desarrollo a largo plazo.

■ Algunas reflexiones sobre las perspectivas futuras del movimiento campesino

Cualquier postulación acerca del futuro de estos movimientos es todavía demasiado venturosa frente a la enmarañada escena político-social que se va desplegando en Latinoamérica, y cuyas perspectivas globales no se perciben hasta ahora con claridad. La experiencia hasta aquí no indica, necesariamente, que las tendencias antes observadas prevalecerán, o que llenarán la misma función y tendrán el mismo significado en un contexto histórico largamente diferente.

Las experiencias históricas anteriores, en las cuales el campesinado emergió como una fuerza decisiva en la lucha por el poder político global de la sociedad, de las cuales la mexicana es el mayor ejemplo, muestran plenamente que al borde mismo del poder, el campesinado fue tempranamente eliminado como fuerza política importante y que su proceso de grupalización se diluyó en la atomización subsiguiente a la cancelación de la tradicional estructura de poder en el campo y el surgimiento de una burguesía dueña del poder nacional.

Desde otro punto de vista, las propias características del complejo proceso global de cambio de la sociedad, que dan lugar a las actuales movilizaciones campesinas, con sus tendencias de politización, de grupalización del campesinado como un sector específico de intereses sociales, que in-

gresas como tal a participar en el cuadro de los conflictos sociales, hacen pensar también que las posibilidades a largo plazo de consolidación de estas tendencias no son, en realidad, muchas.

En primer término la aparición de las tendencias actuales en el seno de la población campesina de ciertos países es, como se ha visto, en buena parte el resultado de la progresiva liquidación del aislamiento campesino. De allí se deriva que el desarrollo de una nueva conciencia social a través de los movimientos campesinos se produzca bajo la influencia y, más aún, bajo el liderazgo de elementos de directa procedencia urbana o de elementos campesinos expuestos a esta influencia.

A ello contribuye un factor cuya importancia se ha verificado en las últimas revoluciones, la condición abstracta y racionalista de los esquemas que manejan los movimientos revolucionarios, su tendencia industrialista y urbanista del desarrollo económico, que son todos elementos que llevan a una dirección radicalmente opuesta a la que podría ser determinada si la revolución fuera llevada a cabo por el campesinado como tal, por su propia cuenta y en nombre no solamente de sus más inmediatos intereses económico-sociales, sino en nombre de su particular percepción del universo y de la historia, sobre todo en las regiones donde la cultura indígena tiene aún una densidad y una vitalidad probadas.

Es decir, al mismo tiempo que el contenido ideológico general de los movimientos a los cuales está ligado el campesinado tiene una definición urbana, el propio campesinado está siendo constantemente trabajado por las mismas fuerzas sociales, su actitud y su conducta actuales son empujadas por aquéllas, y aparece, de esa manera, como cogido entre dos fuegos. De allí, en consecuencia, que sea más viable hasta aquí la dilución del proceso de desarrollo de una conciencia social genuinamente campesina en el curso de la lucha política a medida que ésta se resuelva en una perspectiva revolucionaria urbana, o que, sin ella, las más concretas e inmediatas reivindicaciones campesinas puedan ser satisfechas en la modernización de las mismas estructuras actuales.

Esto último podría ser bastante bien ilustrado por el ejemplo boliviano reciente. Aquí, el gobierno surgido de la revolución de 1952 no tuvo otra alternativa que legalizar las conquistas logradas por el campesinado, al amparo de la coyuntura revolucionaria, y tratar de reglamentar y canalizar bajo su dirección la fase final del proceso. Pero precisamente sobre esta base, el gobierno tuvo la posibilidad de conseguir la división entre las milicias obreras conducidas por revolucionarios de extrema izquierda, y las milicias y sindicatos, campesinos en su mayor parte, y de obtener el apoyo de

éstos contra todo intento de profundización de la revolución.

Esta experiencia boliviana sugiere, en consecuencia, que, bajo ciertas condiciones, una parcial y momentánea satisfacción de las más inmediatas demandas campesinas, que son sin duda el más poderoso factor de motivación para la gran masa, podría tener un éxito importante en reducir la amplitud y la conflictividad del movimiento campesino, y más todavía, la utilización de las organizaciones surgidas en la lucha campesina, contra más amplias y más profundas transformaciones revolucionarias de la sociedad.

La experiencia cubana, como las experiencias china e indochina, de otra parte, muestran con toda claridad que, bajo una dirección revolucionaria ideológicamente muy coherente o bajo circunstancias globales que no permiten ninguna otra salida efectiva que la profundización de la revolución iniciada para otros efectos, el campesinado puede convertirse en el más genuino aliado y en el más vigoroso sostén de una revolución profunda y total.

De todos modos, lo que parece claro es que la suerte futura de los actuales movimientos campesinos depende enteramente de la suerte que corra la sociedad en su conjunto y que, por sus propios medios, no son capaces de tentar una modificación de la situación global, y difícilmente hacer valer sus intereses a corto plazo.



■ Notas

1 Presentamos aquí una versión resumida del artículo "Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina" de Aníbal Quijano Obregón extraído del libro S.M.Lipset y A.E. Solari (Comp.), *Elites y desarrollo en América Latina*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1967. El texto completo del mismo se puede consultar en la Biblioteca Virtual de CLACSO. El presente resumen fue realizado por Atilio A. Borón.

2 El movimiento campesino que motorizó la revolución mexicana no ha sido incluido en este estudio, porque es ya suficientemente conocido y porque nuestro interés fundamental está referido a los movimientos actuales. Dentro de este esquema, el movimiento mexicano, en un contexto histórico diferente, podría caer bajo la denominación de "agrarismo revolucionario".

3 El término "campesinado" en este trabajo se refiere a la población de las áreas rurales que pertenece a las capas económica y socialmente dominadas, cualquiera que sea su rol específico: jornaleros, colonos, minifundarios, pequeños comerciantes, artesanos, estudiantes, etc., dentro de estos límites.

4 Esta caracterización del "bandolerismo social" sigue la proporcionada por Hobsbawm, Eric J. en *Primitive Rebels, Studies in Archaic Forms of Social Movements in the 19th and 20th Centuries*; Manchester, University Press, 1959, p. 5.

5 Sobre el mayor movimiento mesiánico, ocurrido en Brasil en el siglo XIX, véase el magistral relato de Euclides Da Cunha, *Os Sertões*, 17a. ed., Río de Janeiro, Librería Francisco Alves, 1944.

Sobre un movimiento racista en el Perú, a fines del siglo XIX, véase Ernesto Reyna, *El Amauta Atusparia*, Lima 1932.

Sobre el bandolerismo campesino, la única fuente accesible es la literatura narrativa. Véase, principalmente, Ciro Alegría, *El mundo es ancho y ajeno* (cap. El Fiero Vásquez); Rómulo Gallegos: *Cantaclaro*; Enrique López Albújar, *Cuentos Andinos*, (Lima 1920) y *Nuevos Cuentos Andinos* (Santiago, 1937). En la poesía épica, el *Martín Fierro* de José Hernández (Argentina) presenta un característico ejemplo.

Sobre el agrarismo primario prepolítico, la narrativa social sigue siendo también la más rica fuente. Referencias sobre los movimientos indígenas en el sur del Perú, en esa época, pueden verse también en Raúl Galdo Pagaza, *El indígena y el mestizo en Vilquechico*, Ministerio de Trabajo, Serie Monográfica N° 3 (Mimeo), Lima 1962.

6 Acerca del agrarismo reformista tradicional en Venezuela, véase John Powell, *Preliminary Report on the Federación Campesina de Venezuela. Origins, Leadership and the Role in the Agrarian Reform Programme*, Wisconsin, Land Tenure Center, 1964.

Sobre Bolivia, véase principalmente Richard Patch, *Bolivia: United State's Assistance in a revolutionary setting*, en Gillin et. al., *Social change in Latin America today*, N. York, Vintage Books, 1961. También Leonard Olen: *Bolivia, Land, People and Institutions*, Washington, D. C. Scarecrow Press, 1952.

Sobre Chile, principalmente Gerrit Huizer, *Peasant Union. Community Development and Land Reform in Chile* (mecanog.) Santiago, Chile, abril 1966; Orlando Caputto, *Las organizaciones campesinas* (tesis no publicada), Universidad de Chile, 1965; Henry Landsberger y Fernando Canitrot, *Iglesia. Clase*

media y el Movimiento Sindical Campesino (Mimeo.), Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Económicas, Insora, Santiago; H. Landsberger, *Obstáculos en el camino de un movimiento sindical agrícola*, en *Memorias del VII Congreso Latinoamericano de Sociología*, Bogotá, 1965, vol. 1, p. 386 y ss. Sobre Colombia, G. Huizer, *Peasant Organizations. Community Development and Agrarian Reform* (mecanog.), Santiago, 1966. (Contiene referencias a movimientos de otros países). Sobre Brasil, existe una nutrida bibliografía reciente. Principalmente: Robert Price, *Rural Unionization in Brazil*, Land Tenure Center, 1964; Balden Paulson, *Local Political Patterns in Northeast Brazil*, L. T. C., 1964; Diana Doumolin, *Rural Labor Movement in Brazil*, L. T. C. 1964; Marie Willkie, *A Report on Rural Syndicats in Pernambuco*. CLAPCS, Río de Janeiro, 1964 (Mimeo).

7 Las “comunidades indígenas” del Perú han sido objeto de más de veinte años de estudio. Una bibliografía comprensiva puede verse en Henry Dobyns, *The Social Matrix of Peruvian Indigenous Communities*, Ithaca, Cornell Univ. 1964. Sobre su participación en el actual movimiento campesino peruano, véase Aníbal Quijano, *El movimiento campesino del Perú y sus líderes en América Latina*, Año VIII, N° 4, octubre-diciembre 1965.

8 Sobre la organización de las “ligas camponesas” véase Francisco Juliao, *Que sao as Ligas Camponesas*, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 1962. Francisco Juliao, *¡Campesinos a mí!*, Buenos Aires, Cía. Argentina de Editores, 1963, particularmente la historia de la formación de las ligas, p. 52 y ss. También B. Paulson *Difficulties and Prospects for Community Development in Northeast Brazil*, L. T. C., 1964, pág. 42.

9 Sobre los sindicatos campesinos organizados por Hugo Blanco, véase Adolfo Gilly, “Los sindicatos guerrilleros del Perú”, en *Marcha*, Montevideo, septiembre de 1963. Luis de la Puente Uceda, “Revolución Peruana”, en *Monthly Review*, octubre-noviembre 1965; Hugo Neyra, *Cuzco, tierra y muerte*, Lima, 1963; A. Quijano, *op. cit.* (particularmente la distinción entre el sindicato urbano o rural tradicional, y el sindicato campesino actual); R. Patch, *The indian emergency in Cuzco*, A. S. F. S. Letter, Nov. 14, 1958; CIDA: *Informe sobre Tendencia de la tierra en el Perú*, 1965.

10 Sobre Salvador, véase Daniel James, *Red Design for the Americas*, N. York, 1954.

11 Sobre el agrarismo revolucionario y las milicias campesinas bolivianas, véase R. Patch, *op. cit.* Sobre los sindicatos campesinos de Bolivia, Johan Vellard, *Civilisations des Andes*, París, Gallimard, 1963, pág. 224 y sigs. Dwight Heath, *Agrarian Reform and Social Revolution*, (mimeo) febrero 1963, Marie Willkie, *Report on Bolivia: on the social structure of rural areas*, La Paz, 1964.

12 Sobre el agrarismo revolucionario en el Perú, Neyra, *op. cit.*, Gilly *op. cit.* De la Puente, *op. cit.*; A. Quijano, *op. cit.* y Hugo Blanco, *Tierra o muerte, venceremos*, Lima 1964. Sobre las “repúblicas rojas”, véase A. Gilly “Guerrillas y Repúblicas Campesinas en Colombia” *Monthly Review*, Dic. 1965. Sobre Viotá, véase José Gutiérrez, *La rebeldía colombiana*, Bogotá, Ed. Tercer Mundo, pág. 86. Sobre agrarismo revolucionario en las “ligas camponesas” y la conducta diferente de los sindicatos rurales, véase B. Paulson, *Difficulties and Prospects...*, *op. cit.*: “It is difficult to un-

derstand the orientation of the Leagues, but basically they want change in the *land tenure and political structure* so the mass on the land is more favored” (subrayado de A. Quijano), pág. 42-43. También Lida Barreto, *Juliao Nordeste, Revolução*, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 1963.

13 Acerca de los orígenes de la “violencia”, véase principalmente Guzmán, Fals-Borda y Umaña, *La violencia en Colombia*, Bogotá, Ed. Tercer Mundo, 1962, T.I.

14 Guzmán-Fals-Umaña, *op. cit.*, especialmente pág. 287 y sigs.; también Jorge Gutiérrez Ansola, *violencia y justicia*, Bogotá Ed. Tercer Mundo, 1962.

15 K. Marx, *Guerra de clases en Francia*, y *El 18 Brumario de Luis Napoleón*. Véase también, sobre las limitaciones de la conciencia social campesina, F. Engels, *Guerras de campesinos en Alemania*.